SENADO DE PUERTO RICO

DIARIO DE SESIONES

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA VIGÉSIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA

PRIMERA SESION ORDINARIA

AÑO 2025

VOL. LXXIII San Juan, Puerto Rico Lunes, 7 de abril de 2025 Núm. 19

A la una y catorce minutos de la tarde (1:14 p.m.) de este día lunes, 7 de abril de 2025, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Carmelo J. Ríos Santiago, Primer Vicepresidente.

ASISTENCIA

Senadores:

Ada M. Álvarez Conde, Jamie Barlucea Rodríguez, Luis Daniel Colón La Santa, José Luis Dalmau Santiago, Adrián González Costa, Marially González Huertas, Héctor Gabriel González López, Luis Javier Hernández Ortiz, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Eliezer Molina Pérez, Juan Oscar Morales Rodríguez, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Brenda Pérez Soto, Wilmer Reyes Berríos, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Karen Michelle Román Rodríguez, Jeison Rosa Ramos, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, María de L. Santiago Negrón, José A. Santiago Rivera, Rafael Santos Ortiz, Roxanna I. Soto Aguilú, Wanda M. Soto Tolentino, Ángel Toledo López y Carmelo J. Ríos Santiago, Primer Vicepresidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Buenos días. Se da comienzo a los trabajos del Senado de Puerto Rico hoy, 7 de abril del 2025, a la una y catorce de la tarde (1:14 p.m.).

Señor Portavoz.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, solicitamos dar comienzo al Orden de los Asuntos.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Adelante.

SR. MATÍAS ROSARIO: La Invocación estará hecha por el pastor Jimmy Vázquez de la Iglesia Refugio Eterno del pueblo de Corozal.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Bienvenido, Pastor.

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN

El pastor Jimmy Vázquez, de la Iglesia Refugio Eterno del pueblo de Corozal, procede con la Invocación.

PASTOR VÁZQUEZ: Buenos días. La paz y la gracia del Señor sea con ustedes.

Les invito a inclinar sus corazones en un momento de Invocación, no sin antes recurrir a lo que dice la Palabra del Señor en Miqueas, Capítulo 6, el versículo número 8: "Oh hombre, Él que han

declarado las cosas buenas: ¿qué exige el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amor, misericordia y humillarte ante tu Dios".

En esta tarde le pedimos la guía al Altísimo, sobre todo a esta honorable Asamblea, que cada senador, cada ayudante y cada servidor público aquí presente pueda actuar con integridad y escuchar con sabiduría y decidir con compasión. Que el espíritu de Dios llene este lugar de su discernimiento, de su paz y de su propósito. Y que todo lo que se haga aquí contribuya al bienestar de nuestro pueblo y a la edificación de la sociedad justa, sólida y en armonía.

Señor, dirige los pensamientos de este honorable pueblo. Y te pido en el nombre de Jesús que Tú bendigas a esta Asamblea. Y declaro por el poder de tu Palabra que tu bendición permanece con nosotros.

En el nombre de Jesús. Amén y amén.

- - - -

PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para relevar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano de considerar el Proyecto del Senado 478 y remitirlo a la Comisión de Gobierno.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. MATÍAS ROSARIO: Para que se autorice a la Comisión de Planificación, Permiso, Infraestructura y Urbanismo a continuar con la Reunión Ejecutiva mientras transcurre la sesión, a atender el Proyecto del Senado 81.

PRIMER VICEPRESIDENTE: A la solicitud del portavoz Matías, adelante.

SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Próximo asunto, señor Portavoz.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para que se posponga la aprobación del Acta de la sesión anterior.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, se pospone.

(Queda pendiente de aprobación las Actas correspondientes al lunes, 31 de marzo, y al lunes, 3 de abril de 2025).

SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE

(Las señoras Santiago Negrón, Álvarez Conde; los señores Santiago Rivera, González López; la señora Soto Aguilú; y los señores Rosa Ramos y Matías Rosario solicitan Turnos Iniciales al Primer Vicepresidente).

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Compañera María de Lourdes Santiago.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Compañera Ada **[Rivera Conde]** Álvarez Conde.

SR. SANTIAGO RIVERA: Señor Presidente.

SR. GONZÁLEZ LÓPEZ: Señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Déjeme apuntarlo por aquí, espérese un momentito.

Compañero Josean Santiago.

SR. GONZÁLEZ LÓPEZ: Señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Compañero Gabriel Guzmán, ¿verdad? ¿Hernández? González López, González López, perdone.

SRA. SOTO AGUILÚ: Señor Presidente. Soto Aguilú.

PRIMER VICEPRESIDENTE: No se preocupe, de aquí… Soto Aguilú. Se me quedaron los espejuelos, pero de aquí la veo.

SR. ROSA RAMOS: Señor Presidente.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente.

SR. ROSA RAMOS: Señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Voy con el compañero Jeison Rosa y luego con el compañero Matías, que cierra entonces los Turnos Iniciales.

SR. MATÍAS ROSARIO: No. Vamos a pasar al turno de Lectura.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Déjeme de terminar entonces de reconocer el compañero Jeison Rosa.

Señor Portavoz, ¿usted va a tomar un turno?

SR. MATÍAS ROSARIO: Correcto.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Okay. Y ahí cerramos los Turnos Iniciales.

Compañero Matías, adelante.

SR. MATÍAS ROSARIO: Vamos a pasar al turno de Lectura.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Turno de Lectura y después comenzamos con los Turnos Iniciales.

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta e informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de Ley y Resoluciones Conjuntas:

PROYECTOS DE LA CÁMARA

P. de la C. 334
Por la representante Pérez Ramírez:

"Para añadir un subinciso (69), al inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a fin de ordenar al Secretario de Educación el desarrollo de un proyecto piloto para establecer catorce (14) escuelas con un modelo curricular STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) a nivel elemental, intermedio y superior; disponer de la creación de un grupo de trabajo interdisciplinario encargado del fortalecimiento y estructuración de su currículo; y para otros fines relacionados."
(EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA)

P. de la C. 375
Por el representante Hernández Concepción:

"Para enmendar los Artículos 1.111-A, 2.14, 5.06, 10.15, 10.16 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico" a los fines de actualizar las normativas relacionadas con el uso de vehículos todo terreno, modificar el procedimiento de renovación de marbete de las motocicletas, y la prohibición de actividades peligrosas como las carreras y maniobras en las vías públicas, y para otros fines relacionados."
(TRANSPORTACIÓN, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR)

P. de la C. 396
Por el representante Méndez Núñez, la representante Lebrón Rodríguez, los representantes Peña Ramírez, Torres Zamora, Román López, Aponte Hernández, Carlo Acosta, Charbonier Chinea, Colón Rodríguez, la representante del Valle Correa, los representantes Estévez Vélez, Franqui Atiles, las representantes González Aguayo, González González, los representantes Hernández Concepción, Jiménez Torres, las representantes Martínez Vázquez, Medina Calderón, los representantes Morey Noble, Muriel Sánchez, Navarro Suárez, Nieves, Rosario, Ocasio Ramos, Pacheco Burgos, Parés Otero, la representante Peña Dávila, los representantes Pérez Cordero, Pérez Ortiz, las representantes Pérez Ramírez, Ramos Rivera, los representantes Robles Rivera, Rodríguez Aguiló, Rodríguez Torres, Roque Gracia, Sanabria Colón y Santiago Guzmán:

"Para enmendar los Artículos 2, 4, 5 y 6, y añadir un nuevo Artículo 13, y reenumerar los siguientes artículos de la Ley 168-2018, según enmendada, conocida como la "Ley para el Uso de la Telemedicina y la Telesalud en Puerto Rico"; para enmendar los Artículos 2, 4 y 5 de la Ley 48-2020, según enmendada, conocida como la "Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico"; a los fines de establecer que cualquier médico o profesional de la salud con licencia vigente en Puerto Rico no requerirá una certificación para ejercer la Telemedicina, la Telesalud ni las profesiones afines a la Ciberterapia; para ordenar al Departamento de Salud y demás organismos rectores, la enmienda de los reglamentos correspondientes; y para otros fines relacionados."
(SALUD)

P. de la C. 397
Por los representantes Peña Ramírez y Méndez Núñez, la representante Lebrón Rodríguez, los representantes Torres Zamora, Román López, Aponte Hernández, Carlo Acosta, Charbonier Chinea, Colón Rodríguez, la representante del Valle Correa, los representantes Estévez Vélez, Franqui Atiles, las representantes González Aguayo, González González, los representantes Hernández Concepción, Jiménez Torres, las representantes Martínez Vázquez, Medina Calderón, los representantes Morey Noble, Muriel Sánchez, Navarro Suárez, Nieves Rosario, Ocasio Ramos, Pacheco Burgos, Parés Otero; la representante Peña Dávila, los representantes Pérez Cordero, Pérez Ortiz, las representantes Pérez Ramírez, Ramos Rivera, los representantes Robles Rivera, Rodríguez Aguiló, Rodríguez Torres, Roque Gracia, Sanabria Colón y Santiago Guzmán:

"Para establecer la "Ley de la Oficina Enlace para el Apoyo y Registro de las Personas con Enfermedades Raras", adscrita al Departamento de Salud, a los fines de recopilar, mantener y

actualizar un registro oficial de las personas con enfermedades raras en la Isla; disponer su funcionamiento; determinar sus deberes, facultades y responsabilidades; y para otros fines relacionados."
(SALUD)

P. de la C. 419
Por el representante Méndez Núñez, la representante Lebrón Rodríguez, los representantes Peña Ramírez, Torres Zamora, Román López, Aponte Hernández, Carlo Acosta, Charbonier Chinea, Colón Rodríguez, la representante del Valle Correa, los representantes Estévez Vélez, Franqui Atiles, las representantes González Aguayo, González González, los representantes Hernández Concepción, Jiménez Torres, las representantes Martínez Vázquez, Medina Calderón, los representantes Morey Noble, Muriel Sánchez, Navarro Suárez, Nieves, Rosario, Ocasio Ramos, Pacheco Burgos, Parés Otero, la representante Peña Dávila, los representantes Pérez Cordero, Pérez Ortiz, las representantes Pérez Ramírez, Ramos Rivera, los representantes Robles Rivera, Rodríguez Aguiló, Rodríguez Torres, Roque Gracia, Sanabria Colón y Santiago Guzmán:

"Para crear la "Ley para la Orientación sobre los Beneficios del Ácido Fólico", a los fines de que el Departamento de Salud en colaboración con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, implementen una campaña educativa sobre la importancia del consumo de ácido fólico, elaboren material informativo y lo distribuyan en consultorios de ginecología y obstetricia en todo Puerto Rico, dirigido a mujeres embarazadas o en edad reproductiva; ordenar la facultad de reglamentación; establecer sanciones por incumplimiento; y para otros fines relacionados."
(SALUD)

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA

R. C. de la C. 5
Por el representante Méndez Núñez:

"Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y a la Junta de Planificación de acuerdo con lo establecido a liberar de las restricciones y condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas según dispuesto en la Ley 107 del 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado con el Número 28 en el Plano de Subdivisión de la finca Martineau, sita en el barrio Florida del término municipal de Vieques, Puerto Rico; compuesta de trece cuerdas con doscientos noventa y dos diez milésimas de otra (13.0292), equivalentes a cincuenta y un mil doscientos nueve metros Cuadrados con nueve mil ciento siete diezmilésimas (51,209.9107). Colinda al Norte, con finca individual número 27; por el Sur, con finca individual-número 29; por el Este, con camino que los separa de las fincas individuales números 34 y 33 y por Oeste, con finca individual número 22."
(GOBIERNO)

R. C. de la C. 7
Por el representante Méndez Núñez:

"Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y a la Junta de Planificación de acuerdo con lo establecido a liberar de las restricciones y condiciones sobre preservación e indivisión previamente

impuestas y anotadas según dispuesto en la Ley 107 del 3 de julio de 1974, según enmendada, de la parcela de terreno con el número seis (6) en el plano de subdivisión de la finca La Salvación, sita en el barrio Rio Prieto de Yauco, Puerto Rico, compuesta de 12.6810 cuerdas. Con lindes por el Norte, con camino que la separa de las fincas número 4 y número 5; por el Sur, con terrenos de Rafael López; por el Este, con acueducto y finca número 7; y por el Oeste, con la finca número."
(GOBIERNO)

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para que se dé por leída y aprobada la Primera Lectura del día hoy, 7 de abril del 2025.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, que se dé por leída.

SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Vamos a los Turnos Iniciales.

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE

(Las señoras Santiago Negrón, Álvarez Conde; los señores Santiago Rivera, González López; la señora Soto Aguilú; y los señores Rosa Ramos y Matías Rosario solicitan Turnos Iniciales al Primer Vicepresidente).

PRIMER VICEPRESIDENTE: Compañera María de Lourdes Santiago.

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Muchas gracias, señor Presidente.

Cuando el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales emitió aquella Orden Administrativa que, para todo efecto práctico, permitía que allegados a la Gobernadora escaparan de la aplicación de la ley y que otras personas pudieran aspirar a tener titularidad sobre bienes de dominio público o privado, se dijo que ese era el principio de muchas cosas similares por venir.

Y en efecto, con la autorización de la consulta de ubicación sometida por el Grupo Normandie a la Junta Adjudicativa de OGPe, se confirma que el régimen González Colón es incapaz de cumplir con las cosas que dirigieron su campaña, con los reclamos del país, como la eliminación de LUMA o la renovación de las estructuras gubernamentales con gente que no cargara la tara de administraciones anteriores. Con eso no van a cumplir, pero con las amenazas, como la que se hizo en aquel momento, sí están cumpliendo con gran entusiasmo.

A la entrada de Puerta de Tierra, por donde venimos obligados y obligadas a pasar cada vez que llegamos al Capitolio, hay unos espacios de extraordinario valor. La zona recreativa del Escambrón, rebautizada en un momento como el Parque del Tercer Milenio, que conecta a su vez con el Parque Luis Muñoz Rivera, una de las playas más hermosas de la zona metropolitana, y el histórico Hotel Normandie, que colinda con el también histórico Parque Sixto Escobar, cuyo destino ya conocemos.

La Resolución aprobada por OGPe va a tener el efecto de entregarle al mercado, igual que en La Parguera, la posibilidad de desarrollar estructuras de estricto beneficio económico individual, espacios que le pertenecen a todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. No se trata únicamente de la renovación de la estructura del Normandie, sino de una propuesta que incluiría nuevas construcciones, como una piscina infinita, una terraza de grandes proporciones, un pabellón de eventos, y la inclusión de espacios habitacionales permanentes de residencias, no de estructuras únicamente turística, que es algo que se había sospechado desde el principio.

La determinación que ha tomado OGPe está plagada de irregularidades. Para comenzar, desconoce la normativa establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial y utiliza el controversial

Reglamento conjunto, cuya propia validez está en duda. Realiza cambios de zonificación, de dotacional recreación y deportes a dotacional general, sin justificación para ello, solamente para privilegiar a la corporación propietaria de ese espacio. Y contiene, además, discrepancias que no es posible reconciliar a partir de los documentos que constan en el expediente, se declara en la Resolución, que se cuenta con el apoyo del Instituto de Cultura.

Sin embargo, existe en el expediente la preocupación que hace constar la división de patrimonio edificado que tiene jurisdicción sobre ese espacio. Lo que no sabemos si es un simple error administrativo o, muy probablemente, una tergiversación a propósito, para convertir un espacio que le pertenece al pueblo de Puerto Rico en un espacio de enriquecimiento individual.

Lo que está ocurriendo no debería estar ocurriendo en un país que realmente cumpla con las disposiciones que conocemos. Con un país que consciente del valor que tiene la Zona Marítimo Terrestre se dedique a protegerla. De hecho, la propuesta de construcción del Grupo Normandie y sus asociados desconoce también las advertencias que ha hecho la agencia federal conocida por sus siglas como NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), de que, ante los efectos ya visibles en todo nuestro litoral del cambio climático y el aumento en el nivel del mar, ese tipo de construcción es absolutamente inseguro. Resulta aún, desde el punto de vista económico a largo plazo, una grave insensatez.

Pero lo que priva es el interés económico inmediato y una voluntad descarnada, aparentemente imposible de detener con el derecho y la razón, de entregar lo que nos pertenece a todos y a todas a los privilegiados de este régimen.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Muchas gracias a la compañera María de Lourdes Santiago.

Le corresponde el turno a la compañera Ada Álvarez Conde.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Muchas gracias, señor Presidente.

Hoy quiero traer un tema -¿verdad?- que quizás aquí no hemos discutido, pero para llamar la atención esta semana, y es los niños que enfrentan enfermedades, especialmente condiciones graves como el cáncer, que requieren una atención integral que va más allá del tratamiento médico. Es fundamental comprender sus emociones, fragilidad y necesidad de apoyo constante. Y esta población infantil vive procesos difíciles que alteran su infancia, rutina y entorno familiar, por la cual la empatía y acompañamiento son pilares esenciales.

Hoy quiero traer esta discusión porque hemos traído muchos proyectos y casi siempre hablamos del envejecimiento de nuestra población, que es una realidad, pero pocas veces hablamos no solamente de nuestra niñez, sino de algo que pasa desapercibido, que son los niños que están pasando enfermedades a veces -¿verdad?-, como dicen, catastróficas o tan triste como lo es el cáncer.

Hay que apoyar a sus familias, quienes muchas veces deben enfrentar desafíos económicos, laborales y emocionales. Y en Puerto Rico, según datos del Registro Central de Cáncer, anualmente se diagnostican alrededor setenta (70) casos nuevos de cáncer infantil y, aunque esa cifra es baja comparada con otros grupos, el impacto en su vida es fundamental.

Hoy vengo hacer básicamente un llamado y un anuncio y un reconocimiento a una fundación, que es la Fundación CAP, que está desde el 1989. Este miércoles van a hacer su evento masivo anual para mejorar la calidad de vida de los niños pacientes del Hospital Pediátrico de Puerto Rico.

Una de sus iniciativas más emblemáticas es el evento de recorte de cabello. Así que, varones, que no sea ni Toledo ni Matías ni Josean, pueden ir, o las mujeres -¿verdad?- que donen su cabello, que en este caso me voy a integrar yo a donar el pelo o el recorte para los niños o niñas, en este caso, con cáncer.

Con el lema de que "todos podemos ser capitanes", la Fundación ha logrado unir al país en torno a una causa noble, apoyando con equipo médico, servicios y mejorando áreas del hospital para hacer la experiencia más humana y llevadera para los pequeños pacientes.

Así que, en el día de hoy simplemente quería tomar este turno para que nos unamos. Este Senado se unió en la compra de ciertos artículos para levantar fondos, pero ya que lo vamos a tener tan cerca en el Coca Cola Music Hall este gran evento, aquellos que se puedan unir, como les dije, ya yo hice mi compromiso de donar el pelo el miércoles por lo niños.

Pero hablemos -¿verdad?- de ese Hospital Pediátrico Universitario, hablemos del acceso a la salud y garanticemos de ahora en adelante que veamos la salud como lo que es, un derecho y no un negocio, una inversión y la realidad de que tenemos -¿verdad?- que tener presentes a todos los niños las niñas de Puerto Rico que tienen condiciones y enfermedades, así como los padres, que son sus cuidadores principales.

Esas son mis palabras.

Los invito a que el miércoles nos unamos en ese evento, ya que hemos apoyado de otra forma. Y mi reconocimiento a la Fundación de el CAP y otras fundaciones, ese tercer sector que tanto hace por Puerto Rico.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Muchas gracias a la compañera Ada Álvarez Conde.

Le corresponde el turno al compañero Jeison, perdón, Josean Santiago Rivera.

SR. SANTIAGO RIVERA: Muchas gracias.

Compañeras y compañeros, estamos comenzando la semana en que se cumplen los primeros cien (100) días de este Gobierno y yo quisiera preguntarle a la Mayoría de este Senado, ¿en verdad piensas ustedes que hay algún motivo para celebrar? ¿Piensan ustedes que hay algún motivo para celebrar? ¿Acaso no se han dado cuenta que entre sus propios partidarios lo que impera es la desilusión con este Gobierno?

Cuando hoy la Gobernadora de Puerto Rico retó entonces a don Pedro Pierluisi y anunció su candidatura dijo una frase que quedó grabada, que Puerto Rico no iba por buen camino. Pues ahora, queridas compañeras y compañeros, ahora ni camino tenemos.

Llevamos cien (100) días sin rumbo. Ustedes, que aquí proclaman con tanta insistencia que cuando el PNP gobierna el país progresa, llevan ya más de ocho (8) años consecutivos en el poder, ¿y dónde está la reconstrucción del sistema eléctrico, por ejemplo? Desde el huracán María en el año 2017 cuentan con más de sesenta (60) mil millones de dólares para levantar a Puerto Rico bajo Gobiernos PNP y ahora en el 2025 la propuesta que nos hacen y que aprobaron aquí es seguir quemando carbón y traer barcaza con plantas de emergencia para tratar de reducir los más de noventa (90) apagones que ya admiten LUMA y Genera para el próximo verano.

No saben ustedes -y se lo pregunto en este momento-, ¿saben ustedes que prácticamente en todas las agencias del Gobierno la guerra entre los propios penepés está peor que en las primarias? Luchas que tienen prácticamente paralizadas toda la gestión de gobierno. ¿Creen ustedes que no tuvo efecto que más de siete (7) mil buenos puertorriqueños sometieran su resumé para luego ver que solo se nombran a los más allegados al poder, a ese pequeño círculo de allegados al poder?

Un Gobierno PNP que en medio de la crisis que enfrentan los municipios y que estamos tratando de dar una lucha por ellos presionan a los alcaldes a aprobar ordenanzas para gastar el poco dinero que tienen, que tanta falta le hace para dar viajes a Washington, por una Estadidad que está más lejos que nunca, que lo admite la propia Gobernadora que no hay ambiente en el Congreso, que sabemos cuál es la posición del Presidente Donald Trump.

No hay manera de pedirle a los puertorriqueños que celebren cien (100) días en que la Fortaleza parece convertirse en una trama de "la casa de los famosos". Y que la Gobernadora dedique toda una

semana, como la vimos la pasada semana en un *reality show* por todos los programas y medios de prensa, que aquí en este Hemiciclo se critican por ser izquierdoso, populetes, amarillistas, pues a esos les dedicó una semana la señora Gobernadora.

Como me dijo un buen jíbaro de mis montañas allá en el campo, no podemos decir que este Gobierno es más de lo mismo. Él me decía que la gente lo que hoy siente y expresa es que este Gobierno es peor que lo que había.

De parte de la Delegación Popular ustedes han visto que hemos presentado propuestas y que hemos votado a favor de la gran mayoría de los nominados por la Gobernadora. Así que ahora en esta semana de los cien (100) días quiero terminar pidiéndole con mucho respeto a la Mayoría en este Senado, ayuden a que cambie el rumbo de este Gobierno y tracen ustedes un nuevo mapa de ruta por el bien de Puerto Rico.

Muchas gracias.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Muchas gracias al compañero Josean Santiago Rivera.

Señor Portavoz.

SR. MATÍAS ROSARIO: Antes de continuar los trabajos, para autorizar a la Comisión de Salud a realizar una Reunión Ejecutiva en el Salón de Mujeres Ilustres sobre los Proyectos de la Cámara 396 y 419, a las dos (2:00.) p.m.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Todos los miembros de la Comisión de Salud quedan anunciados y aprobado por la Presidencia para que se lleve a cabo la Comisión Ejecutiva en Mujeres Ilustres ahora, a las dos de la tarde (2:00 p.m.), de los proyectos que ha presentado a su haber el compañero portavoz Matías Rosario.

Continuamos con los Turnos Iniciales. Le corresponde el turno al compañero Gaby González López.

SR. GONZÁLEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos los compañeros.

Me trae en la tarde de hoy dos (2) temas importantes en este turno. Primero, durante la mañana de hoy tuvimos un reconocimiento a la Liga Atlética Policiaca, específicamente los Capítulos de Hatillo y Camuy, dirigido por el agente Eliezer Vega Barreto y el agente Andrés Nieves Jiménez. Dentro de ese reconocimiento estuvieron presentes los niños y jóvenes Davis Nieves Santiago, Camila Santiago Rivera, Jean Camacho Crespo, Dinnesh López Crespo, Keymarie Vega Vélez, Mia Collazo Ramos, Alejandrina Berríos Jiménez, Kaleb Mercado Cruz, Christopher Acevedo Bonilla, Evangeline Mercado Cruz, Sebastián Berríos Jiménez, Ayden Vega Román, Ángel Rodríguez Martínez, Dwayn Miranda Román, Harris Areizaga Pérez, Yainnet Acevedo Bonilla.

También estuvieron presente Oswald Romero Deida, Jorel Miranda López, Micheliz Medina Vélez, Kamila Verdejo Rodríguez, Amohr Candelaria Espinoza, Julio Padín, Diego Padín, Gabriela Padín Cade, Yvanuel Miranda López, Chrisdiel Rivera Ramos, Jadier Rivera Ramos, Jetssanin Betancourt Delgado, Jesús Moya Moya, Yomar Sánchez Moya, Christian Méndez Ruiz, Onix Crespo Espinosa y Rafael Vázquez Torres.

Ellos estuvieron aquí en la Casa de las Leyes recibiendo el reconocimiento en preámbulo de la Semana de la Liga Atlética Policiaca. Así que los felicitamos a todos.

Y de igual forma, señor Presidente, estuvieron con nosotros los jóvenes Yan Andrés Rosado Nieves. Este joven con Síndrome Down, saben que la semana pasada estuvimos un reconocimiento para ellos, teníamos que escoger uno (1), pero yo tenía dos (2) que quería reconocer. Así que en aquel momento reconocimos a Sebastián, pero dejamos a Yan Andrés para reconocerlo hoy y tuvo la oportunidad de estar con nosotros aquí en El Capitolio.

Y de igual forma reconocimos a Marcos Pérez Dorta, este joven de 12 años de edad, ha sido reconocido por su capacidad de recaudo, junto a su familia, para la Sociedad Americana del Cáncer, con un corazón gigante, señor Presidente.

De igual forma quería invitarlos a todos a que este próximo miércoles, este servidor, como Senador del Distrito de Arecibo, junto a nuestro Presidente Thomas Rivera Schatz y la Oficina del Departamento para el Desarrollo Económico y Comercio, vamos a estar celebrando una actividad que se titula "Emprendiendo Tu Negocio", donde vamos a estar con los comerciantes, específicamente los que tienen PyMEs en Puerto Rico y en nuestro Distrito Senatorial, y tendremos los siguientes temas: Oportunidades de Incentivos para impulsar las PyMEs; Incentivos para las PyMEs Nuevas y Existentes; Desarrollo y Empleo; Conectando Talento como Oportunidades; Explicación sobre los Procedimientos y Requisitos para Obtener Permisos en Puerto Rico; Información sobre los Programas de Energía Disponibles; Incentivos, Proyectos para Negocios en Puerto Rico; Conquista del Mercado Público; Estrategias para Proveedores; Maximiza tus Beneficios; Incentivos Gubernamentales para las Empresas; Impulsa tu Negocio; Oportunidades para Jóvenes Empresarios, Financiamiento para Negocios.

Señor Presidente, con el compromiso de este servidor y del Senado de Puerto Rico con impulsar el desarrollo económico; especialmente ayudarle a nuestros pequeños y medianos comerciantes, vamos a tener esta actividad el próximo miércoles y ya tenemos confirmados alrededor de doscientos (200) comerciantes que ya van a estar allí con nosotros en la Cooperativa Manuel Zeno Gandía de Arecibo. Están todos invitados.

Son mis palabras, señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Muchas gracias al compañero González López.

De hecho, aprovecho para felicitar a todos los compañeros y compañeras de todas la Delegaciones, he visto que muchos han estado haciendo lo que tienen que hacer en diferentes actividades en contacto con la comunidad, y hablo de todas las Delegaciones, así que eso es parte de lo que es el proceso. Y en menos de cien (100) días hemos visto compañeros y compañeras bien activos en la Casa de las Leyes abriendo las puertas para que reconozcan lo que se hace aquí de día a día, es mucho más las cosas que nos unen, que las que nos dividen. Así que, los felicito.

Le corresponde el turno a la compañera Roxanna Soto Aguilú.

SRA. SOTO AGUILÚ: Gracias señor Presidente.

Hoy yo voy a dedicar mis palabras a lo que es ser conveniente.

Decía el líder cívico Martin Luther King que: "Los hombres se miden no donde se encuentran en sus momentos de comodidad y conveniencia -como es la Minoría en este momento, que están en un lugar de comodidad y conveniencia-, a diferencia de medir a los hombres cuando nos encontramos en momentos de desafío y de controversia".

La primera "casa de los famosos" que yo recuerdo, que ocurrió en Fortaleza, siguiendo la línea de mi compañero ex – alcalde del Municipio quebrado de Comerío, Josean Santiago, fue cuando una Gobernadora decidió celebrar no sé cuál de sus matrimonios a *vox populi*, con ese gran beso y todas esas fotografías, para decir y quizás traer un poco más de turismo interno a lo que es el Palacio de Santa Catalina. Pero tener a dos bebés que se fotografíen con sus padres, eso es hablar de "la casa de los famosos". No las segundas oportunidades de regeneración de amor fútil, que sabemos cuál fue el resultado en menos de dos (2) cuatrienios.

Pero siguiendo con "la casa de los famosos", también tengo que seguir hablando entonces sobre el Presidente del Partido Popular Democrático, el flamante y ausente Comisionado Residente de Puerto Rico, donde dentro de sus promesas de campaña decía: "Yo promoveré vivienda asequible para los pobres".

Compañero de la Minoría, vamos pa' cien (100) días y todavía no vemos el crédito de vivienda por parte del Comisionado Residente a nivel federal, de esos veinticinco mil (25,000) dólares que le prometieron a los pobres de Puerto Rico para poder dar su primer *down payment* para vivienda interés social.

Pero voy a entrar no en la crítica y la comodidad, sino en el momento difícil de que es hablar de paridad y de igualdad.

El Partido Popular Democrático todo el tiempo habla de paridad. Quieren paridad en fondos federales para salud, quieren paridad de oportunidades educativas, quieren paridad para fondos de vivienda, pero nunca te hablan de igualdad. Algo que nunca va a tener. Y miren que por mal camino va el Partido Popular que cree en la unión permanente con los Estados Unidos, pero nos niegan la lucha del voto presidencial. Nadie del Partido Popular se atrevería a decir, ¡yo renuncio hoy mismo a mi ciudadanía norteamericana! Pero, ninguno da un tajo por luchar por el voto presidencial.

Todos los populares quieren decir, tenemos paridad de fondos federales, pero ninguno da la lucha en la estrechura de la crisis de seguir diciendo que necesitamos mejores condiciones sociales y políticas en nuestra relación con los Estados Unidos.

Por eso es que es tan importante cuando yo les traigo a ustedes en el día de hoy la cita de Martin Luther King de cómo es que se miden los hombres, que también incluyen las mujeres. Que es muy fácil medir la altura de una persona cuando está en momentos de comodidad y *confort*, como es ser Minoría. Lo difícil es ser Mayoría, tener que dar la cara por Puerto Rico y hablar de cosas difíciles en momentos difíciles.

Pero voy a ir más allá. También me llama la atención que quien establece el *time table* político en Puerto Rico son las Minorías. Si antes de los cien (100) días tú no tienes a Puerto Rico según como tú lo quieres corriendo a la velocidad en tus ojos, entonces el Gobierno está paralizado. Pues yo voy a refrescar la memoria.

Aquí se habla de que Jenniffer González retó a Pedro Pierluisi, y que como eso nunca se había visto antes, que era que un contendiente retara a un incumbente, que eso todavía tiene rencillas puestas. Pues yo me voy a remontar para allá, para el penúltimo cuatrienio de Luis Muñoz Marín. Ese sí era un cacique en Puerto Rico y nadie se atrevía de forma dictatorial retar a Luis Muñoz Marín, nadie, nadie, nadie. Lo que pasa es que Luis Muñoz Marín llegó en un momento a decir, a mí me parece que es hora de pasar el batón y permitir que nuevas generaciones entonces promuevan la Presidencia del Partido Popular. Así es como único se dio la transición.

Me parece muy conveniente que las Minorías disfruten de lo que es hablar de que no estamos haciendo nada con Puerto Rico, cuando realmente la primera babilla la presentó Jenniffer González retando a Pedro Pierluisi. Y ya ven cuál es el resultado.

Nosotros no somos ni dictadores ni somos caciques, nosotros somos bravos de verdad y nosotros sí estamos echando a Puerto Rico pa'alante.

Esas son mis palabras, señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Muchas gracias a la compañera Soto Aguilú.

Le corresponde el turno al compañero Jeison Rosa Ramos.

SR. ROSA RAMOS: Buenos días a todos los compañeros senadores, a todos los que nos ven a través de los medios.

Hablamos de cien (100) días, pero este Senado se llevó a cabo la Resolución del Senado 37, presentada por mi compañera Karen Román, donde se hizo una investigación y se llevó una vista ocular en las facilidades del Departamento de Salud de Mayagüez, dando resultados positivos y hoy se mudan a unas mejores oficinas donde verdaderamente se le pueda dar calidad de servicio a los pacientes y a nuestra gente, así como tener a todos los servidores públicos que laboran allí.

También este Senado aprobó la Resolución del Senado 50, presentada por este servidor, que va a llevar a cabo una investigación el 23 de abril para verificar las facilidades del CDT de Rincón, donde se encuentra en totalmente abandono un edificio prácticamente nuevo, y de igual forma sé que va a dar resultados positivos para nuestra gente.

El Distrito de Mayagüez enfrenta grandes retos, pero sobre todo en el área de salud, y hoy se llevará a cabo la votación para la Resolución del Senado 82, presentada por este servidor, donde llevará a cabo una investigación sobre el Centro de Trauma de Mayagüez, Centro que se ha hablado constantemente, año tras año, cuatrienio tras cuatrienio, y no se le habla de frente y con la verdad a la gente del Distrito.

Por eso hemos presentado esta Resolución y esperamos que sea aprobada y que venga con resultados positivos, que verdaderamente se atiendan las necesidades de nuestra gente del Distrito de Mayagüez.

Esas son mis palabras, señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Muchas gracias al compañero Jeison Rosa Ramos.

Le corresponde el cierre de los Turnos Iniciales al compañero portavoz Matías Rosario.

SR. MATÍAS ROSARIO: Dios lo bendiga señor Presidente y así bendiga a mis hermanos senadores.

Escuchaba a uno de los senadores decir que si teníamos algo que celebrar. Esa pregunta… Pero lo primero que tenemos que celebrar es que barrimos a los populares, lo sacamos de aquí. El pueblo se dio cuenta que teniendo una Mayoría Popular en el Senado y en la Legislatura estaba llevando a Puerto Rico al precipicio. Pues claro que tenemos que celebrar.

Aquí hay una nueva Mayoría, conjunto con la Gobernadora. Tenemos… Sabes, en el momento que la Mayoría Popular dirigía este Senado solamente le aprobaron los primeros cien (100) días cuatro (4) nombramientos al Gobernador Pedro Pierluisi. O sea, si Puerto Rico no pudo lograr ciertas cosas fue por culpa de esta Legislatura.

Pues, ¡claro que estamos celebrando! Ahora estamos encaminados a trabajar por Puerto Rico. Estamos haciendo proyectos conscientes. La Gobernadora ha mandado unos proyectos desde Fortaleza que son para el bien del pueblo puertorriqueño. Lo que sucede es que como nosotros no gobernamos a lo loco, como gobernaban aquí las dos Cámaras el cuatrienio pasado, que había una guerra entre populares, Tatito y José Luis, esto era una guerra bestial, no había qué proyecto saliera, porque a veces estábamos a favor acá, pero allá en la Cámara de Representantes no pasaba. Era una guerra que nos mantuvo el Partido Popular y el pueblo se dio cuenta. Por eso es que tenemos Mayoría absoluta aquí y en la Cámara.

¡Claro que tenemos que celebrar! Que salimos de esa Legislatura que aguantó a Puerto Rico, que aguantó al Gobernador y no lo dejaba progresar, no dejaba progresar a Puerto Rico. Ahora no está igual.

Pues claro que han cogido a tratar ahora de hablar de los cien (100) días, ¡pero qué cosa, verdad!

Hablaba de que Jenniffer dijo en un momento dado unas palabras. Jenniffer se enfrentó porque entendía que ella podía ser la Gobernadora para echar a Puerto Rico hacia adelante.

Pero eso de los cien (100) días no es que algunos legisladores populares quieran hablarlo, no es que los Portavoces de Cámara y Senado del Partido Popular quieran hablarlo. Es que el flamante Pablo José no tiene la fuerza moral para hablar de cien (100) días porque él lo que ha hecho es figurear, peliculear y no hacer nada. Y manda a estos honorables Senadores y Representantes para él no hacer el ridículo. Porque hablar de cien (100) días, este señor ha llegado allá al Congreso y no ha hecho nada por Puerto Rico.

Cómo es posible que se le esté cuestionando a la Gobernadora, al Presidente del Senado, a los Senadores, que qué pasa con Trump. Oye, aunque a mí no me guste, el representante de Puerto Rico allá en el Congreso es Pablo José y nadie se le ocurre decir, ¿qué tú has hecho con los Congresistas para ayudar a Puerto Rico? Oye, hay aranceles, ¿en qué nos perjudica eso? No, Pablo José lo que está es mandando a los honorables para que ellos pasen la vergüenza porque él no tiene fuerza de cara para pararse al pueblo puertorriqueño a decirle, no he hecho nada.

Mientras el alega que aquí la Gobernadora no ha hecho nada. Pues, mire, hay un problema apremiante para estas personas por estas viviendas que ahora son caras, donde no consiguen cómo comprar una casa, el alquiler iba a pagar unas contribuciones, la Gobernadora y este Senado se ha puesto para ayudar al pueblo. ¡Eso es trabajar por el pueblo!

Sin embargo, el flamante Comisionado Residente no tiene nada que decir, por eso manda a otro a hablar de que qué celebramos; salimos de los populares, alante, para celebrar, tengo que decirlo nuevamente.

Esta Asamblea, Legislativo, esta Asamblea el cuatrienio pasado era un circo donde no se ponían a favor o no encontraban como una, como lograr un proyecto en beneficio para Puerto Rico. Eso fue la pasada Administración. Ahora estamos encaminando a Puerto Rico.

Y les tengo que decir a ellos, claro que por tradición se habla de cien (100) días, pero aquí se nos va a juzgar a nosotros por un cuatrienio. Lo que le tocó al pueblo puertorriqueño juzgar, seguimos siendo Gobierno y recuperamos la Mayoría.

Así que para los que se preguntan que celebramos, estamos celebrando que el pueblo puertorriqueño se dio cuenta que a los populares no se le puede poner a cargo a nada porque cuando son Minoría critican y cuando son Mayoría destruyen.

Esas son mis palabras, señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Muchas gracias al compañero Matías Rosario.

Proseguimos con el Orden de los Asuntos del Senado de Puerto Rico.

SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Adelante.

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas:

De las Comisiones de Gobierno; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional, un informe conjunto proponiendo la aprobación del P. del S. 17, con enmiendas según el entirillado que lo acompaña.

De la Comisión de Gobierno, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 372, con enmiendas según el entirillado que lo acompaña.

De las Comisiones de Gobierno; y de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, un informe conjunto proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 14, con enmiendas según el entirillado que lo acompaña.

De la Comisión de Educación, Arte y Cultura, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 90, sin enmiendas.

De la Comisión de Educación, Arte y Cultura, dos informes proponiendo la aprobación de los P. del S. 196 y 207, con enmiendas según los entirillados que los acompañan.

De la Comisión de Educación, Arte y Cultura, el primer informe parcial sobre la investigación requerida por la R. del S. 22.

De la Comisión de Educación, Arte y Cultura, el informe final sobre la investigación requerida por la R. del S. 40.

De las Comisiones de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional; y de lo Jurídico, un informe conjunto proponiendo la aprobación del P. del S. 305, con enmiendas según el entirillado que lo acompaña.

De la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales, dos informes proponiendo la aprobación de los P. del S. 74 y 178, sin enmiendas.

De la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 79, con enmiendas según el entirillado que lo acompaña.

De la Comisión de Vivienda y Bienestar Social, tres informes proponiendo la aprobación de los P. del S. 149 y 277; y de la R. C. del S. 32, con enmiendas según los entirillados que los acompañan.

De la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 164, con enmiendas según el entirillado que lo acompaña.

De la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, el primer informe parcial sobre la investigación requerida por la R. del S. 17.

De la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Asamblea Legislativa, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 430, con enmiendas según el entirillado que lo acompaña.

SR. MATÍAS ROSARIO: Para que se reciban.
PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, que se reciban.
SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.
PRIMER VICEPRESIDENTE: Adelante.

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyectos de Ley, Resolución Conjunta y Resoluciones del Senado, radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Gregorio Matías Rosario:

PROYECTOS DEL SENADO

P. del S. 480
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para designar el cuarto jueves del mes de abril de cada año como el "Día Oficial de las Niñas y Mujeres en STEM" en Puerto Rico, reconociendo el valor del mérito, el potencial individual y la importancia de fomentar la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas como base para el progreso socioeconómico de Puerto Rico; y para otros fines relacionados."
(GOBIERNO)

P. del S. 481
Por el señor Santos Ortiz:

"Para añadir un nuevo inciso (n), reenumerar los actuales incisos (n) y (o) como los incisos (o) y (p) del Artículo 5, añadir un nuevo Artículo 24, renumerar los actuales Artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 como los Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, para crear el "Programa de Promoción del Deporte Femenino", con el fin de promocionar, implementar y desarrollar el deporte femenino; y para otros fines."
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES)

P. del S. 482
Por la señora Álvarez Conde:

"Para enmendar el Artículo 5.07 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a los fines de priorizar el traspaso de planteles escolares en desuso a organizaciones sin fines de lucro y gobiernos municipales que los soliciten para el desarrollo de vivienda asequible."
(GOBIERNO)

P. del S. 483
Por la señora Álvarez Conde:

"Para crear la "Ley para la Transformación de Bienes en Desuso en Vivienda Asequible"; disponer sobre los procesos de evaluación y transferencia de propiedades en desuso para habilitarlas como unidades de vivienda; disponer sobre la identificación de recursos y fondos que viabilicen la transformación de bienes inmuebles en vivienda; y para otros fines relacionados."
(VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL)

P. del S. 484
Por el señor Rosa Ramos:

"Para designar el 9 de marzo de cada año como el "Día de la Mujer Líder en la Industria Agrícola" en Puerto Rico, en reconocimiento a la contribución de las mujeres en la agricultura, la agroindustria y la seguridad alimentaria del país; y para otros fines relacionados."
(GOBIERNO)

P. del S. 485
Por el señor Rosa Ramos:

"Para añadir un nuevo Artículo 11, y reenumerar los actuales artículos del 11 al 21, como los artículos del 12 al 22, respectivamente, en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", a los fines de instituir como la política pública del Gobierno de Puerto Rico, ofrecer un servicio de calidad, ágil y eficiente a todos nuestros ciudadanos, mediante la inclusión de disposiciones específicas

dirigidas a lograr la consecución de este objetivo; derogar la Ley 15-2001, según enmendada, la Ley 16-2001, la Ley 33-2008, según enmendada, y la Ley 204-2010; y para otros fines relacionados."
(GOBIERNO)

P. del S. 486
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para añadir una nueva Sección 1081.07 a la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011" con el fin de crear las cuentas de ahorro para personas con discapacidades ("*ABLE Accounts*") y para otros fines relacionados."
(HACIENDA, PRESUPUESTO Y PROMESA)

P. del S. 487
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para enmendar la Secciones 1033.15, y 1081.05 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 y conceder un aumento en la deducción de aportaciones a Cuentas de Ahorro para Educación; y para otros fines relacionados."
(HACIENDA, PRESUPUESTO Y PROMESA)

P. del S. 488
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para añadir la Sección 1023.26 a la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011" con el fin de establecer una contribución especial a ingresos de intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo; y para otros fines relacionados."
(HACIENDA, PRESUPUESTO Y PROMESA)

P. del S. 489
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para enmendar las Secciones 1020.02(a)(4), 2022.01, 2022.02 y 6020.03 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico", a los fines de ajustar la tasa contributiva aplicable a futuros Individuos Residentes Inversionistas, establecer requisitos de residencia previa, y extender la vigencia del programa hasta el año 2055; y para otros fines relacionados."
(DESARROLLO ECONÓMICO, PEQUEÑOS NEGOCIOS, BANCA, COMERCIO, SEGUROS Y COOPERATIVISMO)

P. del S. 490
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para enmendar la Sección 6080.14, de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011" con el fin de establecer el marco conceptual para el acuerdo colaborativo entre el Departamento de Hacienda y los municipios con el fin de uniformar el cobro del impuesto sobre ventas y uso y simplificar el cumplimiento a los contribuyentes mediante la consolidación de la radicación y pago en el Sistema Unificado de Rentas Internas ("SURI"); y para otros fines relacionados."
(HACIENDA, PRESUPUESTO Y PROMESA)

P. del S. 491
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para enmendar la Sección 1101.01, de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 con el fin de flexibilizar y agilizar la aprobación de solicitudes de exención contributiva de entidades sin fines de lucro a nivel estatal y las asociaciones de propietarios, atemperar dicho proceso con las disposiciones de la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas Federal; y para otros fines relacionados."
(HACIENDA, PRESUPUESTO Y PROMESA)

*P. del S. 492
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para añadir un inciso (ii) al Artículo 7.092 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el "Código Municipal de Puerto Rico" con el fin de eximir del pago de contribución sobre propiedad mueble las medicinas recetadas; y para otros fines relacionados.'
(ASUNTOS MUNICIPALES)

P. del S. 493
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para enmendar la Sección 6060.05 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico" con el fin de aclarar las disposiciones sobre la exención de contribución sobre ingresos de la ganancia realizada en la venta de propiedad inmueble localizada en Puerto Rico que constituya la residencia principal del vendedor; y para otros fines relacionados."
(DESARROLLO ECONÓMICO, PEQUEÑOS NEGOCIOS, BANCA, COMERCIO, SEGUROS Y COOPERATIVISMO)

P. del S. 494
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para enmendar la Sección 1033.15, de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 para añadir un nuevo párrafo (7) al inciso (H) con el fin de conceder un aumento en la deducción de aportaciones a Cuentas de Retiro Individual; y para otros fines relacionados."
(HACIENDA, PRESUPUESTO Y PROMESA)

P. del S. 495
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para enmendar la Secciones 1020.08, 2082.02, 2082.03, 2082.04, 2082.05, y 2083.01, Ley 60-2019, según enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico", con el fin de aclarar las disposiciones relacionadas a los agricultores bona fide a quienes le aplicarán los beneficios de los incentivos, simplificar los requisitos de cumplimiento; y para otros fines relacionados."
(DESARROLLO ECONÓMICO, PEQUEÑOS NEGOCIOS, BANCA, COMERCIO, SEGUROS Y COOPERATIVISMO)

P. del S. 496
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para enmendar la Sección 2 de la Ley 132-2010, según enmendada, conocida como la "Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles" para extender la exención de contribución sobre ingresos en los ingresos de arrendamiento de propiedad residencial localizada en Puerto Rico."
(ASUNTOS MUNICIPALES)

P. del S. 497
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para enmendar las Secciones 1010.01, 1010.05, 1021.02, 1022.04, 1022.07, 1034.04, 1035.08, 1040.02, 1061.03, 1061.04, 1061.09, 1061.16, 1061.17, 1061.25, 1063.05, 1063.15, 1063.16, 1078.02, 4010.01, 6041.10, 6051.21, 6055.03, y 6055.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011"; enmendar los Artículos 15.01, 15.03 y 17.01 de la Ley 164-2009, según enmendada, conocida como la "Ley General de Corporaciones para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; enmendar los Artículos 7.135 y 7.207 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico de 2011"; enmendar las Secciones 6011.05, 6020.09, 6020.10, 6060.05 y 6070.66 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico"; con el fin de simplificar y uniformar fechas de radicación de las distintas planillas requeridas a los negocios, reducir el cumplimiento contributivo en Puerto Rico estableciendo el marco conceptual para un Acuerdo Colaborativo entre el Departamento de Hacienda y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con el Propósito de Consolidar la Presentación de las Planillas Presentadas por los Patronos sobre los Impuestos de Nómina relacionados a los Salarios Pagados a los Empleados; mejorar la fiscalización facilitando se transfiera información de algunas agencias del Gobierno con el Departamento de Hacienda referente a propiedades de personas; y para otros fines relacionados."
(DESARROLLO ECONÓMICO, PEQUEÑOS NEGOCIOS, BANCA, COMERCIO, SEGUROS Y COOPERATIVISMO: Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y PROMESA)

P. del S. 498
Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, la señora Jiménez Santoni, los señores Matías Rosario, Morales Rodríguez, la señora Barlucea Rodríguez, los señores Colón La Santa, González López, las señoras Padilla Alvelo, Moran Trinidad, Pérez Soto, el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez, los señores Rosa Ramos, Sánchez Álvarez, Santos Ortiz, las señoras Soto Aguilú, Soto Tolentino, y el señor Toledo López:

"Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales"; y conceder una extensión de los beneficios e incentivos que ofrece esta ley a las unidades hospitalarias en Puerto Rico; y para otros fines relacionados."
(HACIENDA, PRESUPUESTO Y PROMESA)
*Administración

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO

R. C. del S. 40
Por la señora Álvarez Conde:

"Para ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio priorizar la promoción y el desarrollo de las industrias de reciclaje de neumáticos usados; identificar terrenos pertenecientes al gobierno donde se puedan establecer plantas para la creación de asfalto a base de neumáticos reciclados; identificar aquellos programas y fondos, estatales o federales, necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados."
(TURISMO, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES)

RESOLUCIÓN DEL SENADO

R. del S. 128
Por el señor Molina Pérez:

"Para ordenar a la *Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA* del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a solicitar al Departamento de Turismo, al Departamento de Hacienda y al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales a entregar las planillas de impuestos (mensuales, trimestrales y anuales) y cualquier otro documento relacionado a las rentas a corto plazo en el municipio de Lajas de los últimos cinco (5) años."
(ASUNTOS INTERNOS)

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para que se dé por leída y aprobada la Segunda Lectura del día de hoy 7 de abril del 2025.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Próximo asunto.

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO

La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo:

De la secretaria del Senado, quince comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el Senado ha aprobado los P. del S. 1, 4, 12, 30, 130, 186, 233, 350, 354, 356, 386, 457, 459 y 465; y la R. C. del S. 37.

Del secretario de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones informando que dicho cuerpo legislativo ha aprobado los P. de la C. 334, 375, 396, 397 y 419; y las R. C. de la C. 5 y 7, y solicita igual resolución por parte del Senado.

De la secretaria del Senado, dos comunicaciones informando a la Cámara de Representantes que el Senado ha aprobado el P. de la C. 229 y la R. C. de la C. 8, sin enmiendas.

Del secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que la Cámara de Representantes ha aprobado la R. C. del S. 18, sin enmiendas.

Del secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones remitiendo el P. de la C. 229; y la R. C. de la C. 8, debidamente firmados por el presidente de dicho cuerpo legislativo y solicitando que sean firmados por el presidente del Senado

Del secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones devolviendo firmados por el presidente de dicho cuerpo legislativo los P. del S. 31 y 215.

De la secretaria del Senado, dos comunicaciones a la Gobernadora de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 31 y 215, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa.

Del señor Carlos E. Rivera Justiniano, asesor en asuntos legislativos, Oficina de la Gobernadora, una comunicación informando que la gobernadora de Puerto Rico ha aprobado y firmado la siguiente Resolución Conjunta:

Resolución Conjunta 1-2025
Aprobada el 31 de marzo de 2025.-

(R. C. de la C. 20) "Para enmendar el Título, la Exposición de Motivos y la Sección 1 de la Resolución Conjunta 70-2024, a los efectos de presentar enmiendas técnicas."

De la licenciada Thais M. Reyes Serrano, asesora auxiliar en asuntos legislativos, Oficina de la Gobernadora, una comunicación informando que la gobernadora de Puerto Rico ha aprobado y firmado la siguiente Resolución Conjunta:

Resolución Conjunta 2-2025
Aprobada el 1 de abril de 2025.-

(R. C. de la C. 34) "Para designar la Carretera PR-863 ubicada en el Municipio de Toa Baja con el nombre de "José 'Manrique' Rivera Torres", en reconocimiento a su destacada trayectoria educativa, comunitaria, espiritual y familiar, así como a su impacto perdurable en el Barrio Pájaros-Candelaria y el Municipio de Toa Baja, Puerto Rico, y para otros fines relacionados."

Del señor Jean Peña Payano, asesor auxiliar en asuntos legislativos, Oficina de la Gobernadora, una comunicación informando que la gobernadora de Puerto Rico ha aprobado y firmado la siguiente Resolución Conjunta:

Resolución Conjunta 3-2025
Aprobada el 1 de abril de 2025.-

(R. C. de la C. 35) "Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado mediante la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y su Reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, por parte del Programa de Parques Nacionales adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al Municipio de San Juan, del Parque Luis Muñoz Rivera, localizado en Puerta de Tierra en el Municipio de San Juan, incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones; establecer condiciones suspensivas para cualquier transferencia de título; y para otros fines relacionados."

Los senadores Matías Rosario y Rosa Ramos y la senadora Padilla Alvelo han presentado los formularios de coautoría para los P. del S. 1 y 4; la senadora Román Rodríguez ha presentado los formularios de coautoría para los P. del S. 17, 83, 87 y 88; la senadora Padilla Alvelo y el senador Rosa Ramos han presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 76; la senadora Álvarez Conde ha presentado los formularios de coautoría para los P. del S. 78 y 93; el senador Rosa Ramos ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 350; y las senadoras Padilla Alvelo, González Huertas y Álvarez Conde, y los senadores Hernández Ortiz, Dalmau Santiago y Santiago Rivera han presentado el formulario de coautoría para la R. del S. 127, con la autorización del senador Rivera Schatz, autor de las medidas.

El senador Rosa Ramos ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 107, con la autorización del senador Ríos Santiago, autor de la medida.

Las senadoras Padilla Alvelo y Pérez Soto, y los senadores Matías Rosario, Rosa Ramos y Sánchez Álvarez han presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 186, con la autorización del senador Toledo López, autor de la medida.

La senadora Álvarez Conde ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 229, con la autorización de la senadora Santiago Negrón, autora de la medida.

Las senadoras Pérez Soto y Román Rodríguez y los senadores Matías Rosario, Colón La Santa, Rosa Ramos y Sánchez Álvarez han presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 233, con la autorización de la senadora Padilla Alvelo, autora de la medida.

La senadora Román Rodríguez ha presentado los formularios de coautoría para los P. del S. 348 y 374, con la autorización de la senadora Pérez Soto, autora de las medidas.

La senadora Padilla Alvelo ha presentado el formulario de coautoría para la R. del S. 69, con la autorización del senador González López, autor de la medida.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para que se reciban los Mensajes y Comunicaciones.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, que se reciban los Mensajes y Comunicaciones.

SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Adelante.

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES

La Secretaría da cuenta de las siguientes Peticiones y Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y Otras Comunicaciones:

De la secretaria del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes notificando que conforme al Artículo 3, Sección 13 de la Constitución de Puerto Rico, en su sesión del jueves, 3 de abril de 2025, el Senado acordó conceder su consentimiento para que dicho cuerpo legislativo pueda recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde el jueves, 20 de marzo de 2025, hasta el martes, 25 de marzo de 2025.

Del presidente del Senado, un Informe sobre la Primera Comisión Total Especial celebrada el miércoles, 26 de marzo de 2025.

Del senador Reyes Berríos, una comunicación solicitando se le excuse de los trabajos legislativos del 17 al 23 de abril de 2025, por motivos personales.

De la señora Nadja O. Acevedo Ramírez, Oficina del senador Rosa Ramos, una comunicación solicitando se excuse al senador Rosa Ramos de los trabajos legislativos del 24 al 27 de abril de 2025, por estar fuera de Puerto Rico en un viaje oficial.

El senador Hernández Ortiz ha radicado la Petición de Información 2025-44:

"Recientemente, ha trascendido que el Gobierno Federal ha impuesto un nuevo proceso de revisión para el desembolso de fondos de emergencia asignados a Puerto Rico. Si bien, esta información fue pública a principios del mes de abril, los cambios fueron anunciados al gobierno de Puerto Rico desde finales de febrero.

Desde los fenómenos atmosféricos del 2017, la Oficina Central de recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3 por sus siglas en inglés), es el enlace entre la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y distintas entidades públicas y privadas. Ha trascendido públicamente que las nuevas políticas administrativas en los Estados Unidos establecerían nuevas capas burocráticas que harían complicado el panorama para acceder a los fondos federales. Esto puede desembocar en una falta de acceso a recursos económicos de distintas agencias, entidades y principalmente los municipios. Recordemos que, en enero de 2024, se logró mediante el Programa *Working Capital Advance (WCA)* que los municipios, agencias y entidades sin fines de lucro solicitaran y tuvieran acceso hasta un 50% de los fondos de FEMA para los proyectos de recuperación. Lo anterior, como un adelanto y siempre que cumplieran con distintas regulaciones estatales y federales.

El senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le requiera a la Oficina Central de recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3 por sus siglas en inglés), por conducto de su director, Eduardo Rivera Soria, que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, en un término de diez (10) días laborables luego de la aprobación de esta Petición.

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL DIRECTOR DE LA OFICINA CENTRAL DE RECUPERACION, RECONSTRUCCION Y RESILIENCIA (COR3, POR SUS SIGLAS EN INGLES):

La siguiente información detallada:

1. Provea un narrativo donde informe cómo se prepara COR3 para trabajar con las nuevas políticas administrativas del Gobierno Federal que exigen una revisión de toda solicitud de fondos y para cuyo periodo la agencia federal tiene treinta (30) días.
2. Informe y provea cualquier análisis que haya realizado el COR3 en relación al impacto fiscal en los proyectos gubernamentales y municipales que tienen estas nuevas políticas.
3. Informe de toda gestión -si alguna- que haya realizado el COR3 para informar a las agencias gubernamentales, municipios, o recipientes de los fondos que el COR3 administra, sobre las nuevas políticas administrativas impuestas por la Administración Federal. De no haber realizado ninguna gestión, emita una Certificación que acredite lo anterior.
4. Provea copia de cualquier documento, carta normativa, memorando y orden que se le haya dirigido a las agencias gubernamentales, municipios, o recipientes de los fondos que el COR3 administra, donde se les informe sobre las nuevas políticas del gobierno federal y los pasos que se tienen que seguir para ser beneficiarios del desembolso de los fondos.
5. Provea un desglose de los fondos actualmente asignados al Gobierno de Puerto Rico, incluyendo la cantidad de dinero que se ha desembolsado y cuánto dinero hay sin utilizar. Que dicho desglose incluya el dinero que ya se ha obligado y el que aun aguarda por ello.
6. Provea copia del Plan de Acción que el Gobierno de Puerto Rico se ha trazado para el uso ágil de los fondos que han sido asignados.

Se solicita que se le remita copia de esta petición al director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3 por sus siglas en inglés), a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo."

Del honorable Héctor Vázquez Muñiz, secretario, Departamento de Recreación y Deportes, una comunicación remitiendo respuesta parcial y solicitando prórroga de 10 días para completar la respuesta a la Petición de Información 2025-0040, presentada por el senador Ríos Santiago y aprobada por el Senado el 31 de marzo de 2025.

De la señora Yesmín M. Valdivieso, contralora, Oficina del Contralor de Puerto Rico, una comunicación remitiendo el Informe de Auditoría OC-25-69 del Municipio de Bayamón.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, el inciso c. hay una comunicación del senador Reyes Berríos solicitando que se excuse de los trabajos legislativos desde el día 17 al 23 de abril de 2025 por motivos personales.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Que se excuse al compañero.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, en el inciso d. hay una comunicación de la señora Nadja O. Acevedo Ramírez, oficina del senador Ramos Rosa, una solicitud de excusa al senador Rosa Ramos de los trabajos legislativos del 24 al 27 de abril del 2025 por estar fuera de Puerto Rico en un viaje oficial.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Que se excuse al compañero durante sus gestiones oficiales.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, en el inciso e. hay una Petición del senador Hernández Ortiz, para que se le apruebe.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, en el inciso f. hay una comunicación del honorable Héctor Vázquez Muñiz, Secretario del Departamento de Recreación Pública y Deporte, remitiendo respuesta parcial solicitando una prórroga de diez (10) días para que se complete la respuesta a la Petición del Informe 2025-0040, presentada por el senador Ríos Santiago y aprobada en el Senado el 31 de marzo del 2025.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz, se le deniega solicitud del compañero Héctor Vázquez Muñiz. Que cumpla dentro del término establecido.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Compañero Hernández Ortiz.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Es para que se nos remita copia del inciso b., que es el Informe de la Primera Comisión Total Especial celebrada el 26 de marzo del 2025.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, se le dé curso a la solicitud del compañero Hernández Ortiz.

Señor Portavoz, para que quede en récord y quede claro el inciso f., que es una comunicación del Secretario de Recreación y Deportes, remitiendo respuesta parcial, quiero dejarlo para el récord vertido que solicitó una prórroga de diez (10) días, se le niega la prórroga de diez (10) días, se le otorgan cinco (5) días al compañero Secretario de Recreación y Deportes para que cumpla con la solicitud del Senado de Puerto Rico.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para que se reciban los restantes Peticiones y Notificaciones.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben.

SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Adelante.

MOCIONES

Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame

Anejo A

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame:

Moción 2025-453
Por el senador Santos Ortiz:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Doris Negrón Pérez, por su compromiso con la niñez de Puerto Rico.

Moción 2025-454
Por el senador Santos Ortiz:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Pastora Rodríguez Rivera, por su compromiso con el servicio público, y en celebración de su centésimo cumpleaños.

Moción 2025-455
Por el senador Santos Ortiz:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Dorelys N. Martínez Rosado, Edriam Matos Soto, Adlenix Rivera Figueroa y Anyeriel J. Rotger López, estudiantes de la Escuela Segunda Unidad Federico Degetau en Barranquitas, por su selección al Cuadro de Honor.

Moción 2025-456
Por el senador Santos Ortiz:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a Dylan Torres Negrón, Kaleb González Aponte, Jexiel Fontán Rosado, Zabdeil Fontán Rosado, Jenniel Valentín Díaz, Jezabel Torres Ríos, José Miranda Rivas, Ian Z. Matos Pagán y Julián Ortiz Morales, del equipo de baloncesto infantil; y a Karina Torres Ramos, Sebastián Pérez Morales y Gedriel O. Pagán Burgos, del equipo de atletismo, del Colegio San Juan Bautista de Orocovis, con motivo de la celebración de la Semana de los Deportes.

Moción 2025-457
Por el senador González López:

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a Bryan A. González González, por su compromiso con la educación y el desarrollo cívico.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para que se apruebe el Anejo A del Orden de los Asuntos.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba.

SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Compañero Hernández Ortiz.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Sí, breve. Es una Cuestión de Orden.

PRIMER VICEPRESIDENTE: ¿En qué consiste su Cuestión de Orden, compañero?

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Sí. La Sección 36.2 del Reglamento del Senado dispone lo siguiente: "El Calendario de Órdenes Especiales del Día se enviará de forma electrónica a los senadores con no menos de un (1) día calendario de antelación a la fecha de que va a hacer considerado".

Esa disposición, señor Presidente, solo se suspende cuando estamos en los últimos cinco (5) días de consideración de medidas o durante los cinco (5) días finales al trámite legislativo.

¿Porque estamos planteando esto? Porque es que en la mañana de hoy a las diez y veintiocho de la mañana (10:28 a.m.) se distribuyó el Segundo Calendario con trece (13) medidas legislativas, un total de ciento ochenta y cinco (185) páginas, señor Presidente.

Nosotros no tenemos objeción a que se vean dos (2), tres (3), cuatro (4), todos los Calendarios que ustedes quieran, pero, en honor a la verdad, hay que cumplir con el Reglamento del Senado. Pues, pedimos -¿verdad?- que de ahora en adelante todos los Calendarios se remitan no menos de un (1) día de anticipación, conforme al Reglamento, señor Presidente.

SR. MATÍAS ROSARIO: Breve receso.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Es nuestra petición.

SR. MATÍAS ROSARIO: Breve receso en Sala.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Estamos listos para contestarle a la solicitud del compañero portavoz Hernández. ¿Usted insiste en el receso, señor Portavoz? ¿Sí?

SR. MATÍAS ROSARIO: Sí.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Okay, muy bien.

Receso en Sala.

RECESO

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz, estamos listos para, ante…

SR. MATÍAS ROSARIO: Adelante.

PRIMER VICEPRESIDENTE: …el planteamiento que hace el compañero Hernández Ortiz, hemos hablado fuera de récord, pero quiero verter para récord lo que es el *ruling* y establecer, y sé que está la compañera Marially González que estuvo de Vicepresidenta en el Senado anterior, donde estuvo el Secretario "Payopi", como le conocemos de una manera muy amigable. El Primer Calendario que se estableció, se estableció y se recibió y se cumplió con la 36.2, el Segundo Calendario que, como bien plantea el compañero Hernández Ortiz, se notifica dentro del proceso del trámite legislativo.

Obviamente, el Reglamento establece no menos de un (1) día calendario de antelación al primer planteamiento de Órdenes Especiales del Día. El Segundo Calendario vendría siendo como una enmienda a ese Primer Calendario, que es el *ruling* que estamos estableciendo. El Reglamento no establece la diferencia, después de la notificación del primero, de lo que sería un segunda o tercera o cuarta etapa.

Hago referencia a la compañera Vicepresidenta -que está de pie- porque, dentro del proceso de la buena práctica legislativa, nosotros no descargamos la medida, que pudiéramos hacerlo dentro del primer Calendario.

Así que, como un acto de transparencia, estamos estableciendo el Calendario para que tengan la oportunidad de verlo. Así lo hizo el compañero "Payopi" como Secretario, y se ha hecho históricamente en el Senado de Puerto Rico.

No es una práctica común y, dentro de lo posible, vamos a intentar de que tengamos con mucha anticipación. Pero estos son proyectos que van a estar abiertos a la discusión y quería plantearlo para el récord legislativo.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Sí, Presidente, si me permite. Y estamos -¿verdad?- en ánimo de adelantar los trámites procesales y estamos claros de que la gestión de ustedes no es en ánimo de mala fe, todo lo contrario, pero hacemos el planteamiento -¿verdad?- porque tenemos que hacerlo.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Claro.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Y obviamente, estamos claros de que no estamos planteándolo como un acto de mala fe por parte de la Presidencia.

PRIMER VICEPRESIDENTE: No. Lo entendemos así y solamente queremos clarificar para los que no tuvieron la… el beneficio de la conversación que tuvimos aquí…

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Cómo no.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Y los compañeros…

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Le agradezco la aclaración.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Muy bien. Pues, siendo así, ¿compañera González, usted tiene algo que decir?

SRA. GONZÁLEZ HUERTAS: Señor Presidente, es que, pues, me parece curioso que dice Segundo Calendario, no -¿verdad?-, no vemos que sea una enmienda, pero pues al parecer, parece que eso está en la Regla 19 de este Senado.

PRIMER VICEPRESIDENTE: No, no, está en la Regla 19.

Compañera, mire, se llama Segundo Calendario porque para poderlo tramitar versus un descargue, en un Segundo Calendario ustedes tienen la oportunidad de verlo, versus un descargue, que es un elemento que legislativamente se trabaja, pues se trae la medida y ustedes verían el informe de inmediato.

Así que dentro del proceso la Secretaría, de la manera correcta, entiendo yo, y es el *ruling* de Presidencia, es una buena práctica que tengamos de antemano no tan solamente el proyecto, que una vez se radica electrónicamente ustedes lo tienen, sino que también dentro del proceso legislativo les da la oportunidad de ver informes o de ver observaciones dentro del proceso. Creo que es una mucha mejor práctica que un descargue.

Así que por eso planteamos de esa manera y cualquier duda siempre estamos abiertos para sugerencias.

Así que muchas gracias al compañero Hernández Ortiz.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Muchas gracias, señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Continuamos con el Orden de los Asuntos, señor Portavoz.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, antes de continuar, para autorizar a la Comisión de Gobierno a realizar una Reunión Ejecutiva para atender varios asuntos en el Salón de Mujeres Ilustres a las dos de la tarde (2:00 p.m.).

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para que se proceda con la lectura.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Adelante.

CALENDARIO DE LECTURA

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 59, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para enmendar el Artículo 58, derogar el actual Artículo 59 y sustituirlo por uno nuevo, y enmendar el Artículo 60 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", a los fines de establecer la obligación de los notarios de informar los testimonios en el índice mensual, eliminando así el requisito de la inscripción en el Registro de Testimonios; enmendar los Artículos 2 y 4 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, a los fines de eliminar el Registro de Testimonios; establecer disposiciones transitorias; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestra jurisdicción, la función notarial requiere el ejercicio de diversos actos jurídicos ~~requieren~~ *que exigen* testimonios juramentados o affidávits para su perfección, los cuales sirven como documentos dinámicos con un propósito específico. Estos testimonios son esenciales para evidenciar

formalmente un acto o acuerdo, y los notarios que los autorizan suelen numerarlos secuencialmente, según lo requiere la Ley, y están obligados a registrarlos manualmente en un Registro de Testimonios.

El objetivo original de este registro era mantener un control detallado de los testimonios autorizados y garantizar la correcta recaudación de los derechos establecidos por la Ley. Sin embargo, con el tiempo, se introdujo la obligación para los notarios de presentar un informe mensual ante la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), el cual incluye la misma información contenida en el Registro de Testimonios, como el número, la fecha, el otorgante y una breve descripción del objeto del testimonio.

De otra parte, la promulgación de la Ley 8-2012, que enmendó la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, incorporó una disposición relevante: el sello de la Sociedad para la Asistencia Legal deberá constar de dos estampillas con numeración idéntica. El recibo se coloca en el testimonio o *affidávit* ~~affidáv it~~, mientras que el original se fija en el margen del Registro de Testimonios, asegurando que el affidávit cuente con el sello de Asistencia Legal en su cara, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales.

En este contexto, resulta innecesario y obsoleto mantener un Registro de Testimonios manuscrito, dado que los notarios ya deben presentar informes mensuales a la ODIN con la misma información, y los derechos legales se recaudan a través del sello que aparece en el propio documento. Esta duplicación de esfuerzos genera una carga administrativa que no tiene justificación.

Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa considera pertinente enmendar la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", así como la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, para eliminar la obligación de los notarios de mantener un Registro de Testimonios manuscrito, estableciendo en su lugar la obligación de informar los testimonios en un índice mensual. Esta modificación modernizaría los procedimientos notariales y eliminaría una carga innecesaria en el sistema.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. – Se enmienda el Artículo 58 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artículo 58.- Numeración

Los testimonios llevarán una numeración sucesiva y continua y serán encabezados por el número que les corresponda, que será correlativo al **[de la inscripción en el Registro que más adelante se establece]** *número que se establezca en el índice mensual requerido por el Artículo 12 de esta Ley."*

Sección 2. – Se deroga el actual Artículo 59 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Artículo 59, para que lea como sigue:

"Artículo 59.- Testimonios- Obligación de informar

Los notarios notificarán mensualmente a la Oficina de Inspección de Notarías, ya sea en formato electrónico o en papel, aquellos testimonios en que intervengan al remitir el índice mensual requerido por el Artículo 12 de esta Ley. En dicho índice, se incluirá el número del testimonio, la fecha, nombre de los otorgantes y una breve descripción del objeto del testimonio, así como una certificación de haber cancelado los correspondientes sellos para la Sociedad para la Asistencia Legal, que incluirá la numeración de éstos.

El notario podrá efectuar el pago de los derechos correspondientes al sello de la Sociedad para la Asistencia Legal por vía electrónica, de conformidad con el procedimiento que establezca el Secretario de Hacienda en coordinación con el Juez Presidente del Tribunal

Supremo o la persona en quien éste delegue. El Secretario de Hacienda establecerá los mecanismos alternos a la obligación de adherir y cancelar sellos, de conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley 85-2009, según enmendada, conocida como "Ley de Certificados y Comprobantes Electrónicos"."

Sección 3. – Se enmienda el Artículo 60 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artículo 60.- Nulidad

Será nulo el testimonio no incluido en el índice, o el que no lleve la firma del notario autorizante, o que no se haya **[inscrito en el Registro de Testimonios]** *informado en el índice mensual requerido en el Artículo 12 de esta Ley, o el que no lleve cancelado el sello a favor de la Sociedad para la Asistencia Legal, según requerido en la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada*."

Sección 4. – Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 2.- Sello de la Sociedad para la Asistencia Legal – Fijación y Cancelación, obligación del notario

"El sello de la Sociedad para Asistencia Legal constará de dos estampillas con enumeración idéntica*, siendo una de éstas el recibo*. El notario adherirá **[una de las estampillas al margen de la nota correspondiente a cada testimonio o affidávit incluida en su Registro y cancelará la misma con su sello notarial o con una marca clara y visible. Además, adherirá]** en el affidávit o testimonio *el original de* la **[otra]** estampilla de la Sociedad para Asistencia Legal y cancelará la misma con su sello notarial o con una marca clara y visible. *El notario podrá conservar el sello identificado como recibo en sus archivos.* El notario podrá realizar el pago de los derechos correspondientes al sello por la vía electrónica, según el procedimiento que apruebe por reglamento el Secretario de Hacienda en consulta con la Sociedad para la Asistencia Legal.

El notario podrá utilizar el sello de la Sociedad para la Asistencia Legal adquirido por vía electrónica, de conformidad con el procedimiento que establezca el Secretario de Hacienda en coordinación con el Juez Presidente del Tribunal Supremo o la persona en quien éste delegue. El Secretario de Hacienda establecerá los mecanismos alternos a la obligación de adherir y cancelar sellos, conforme a las disposiciones de la Ley 85-2009, según enmendada, conocida como "Ley de Certificados y Comprobantes Electrónicos"."

Sección 5. – Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4.- Venta y Administración

(a) …

(b) …

Disponiéndose, además que será obligación de la Sociedad tener disponible las estampillas de la Sociedad que los notarios cancelarán **[simultáneamente en su Registro de Testimonios]** *en el testimonio o affidávit que autoricen*. El Departamento de Hacienda rendirá trimestralmente un informe a la Sociedad donde reflejará de forma fiel y exacta el movimiento de estampillas vendidas y aquellas disponibles para la venta, a los fines de que éstos mantengan constancia de la cantidad y disponibilidad de las estampillas de la Sociedad que los notarios cancelarán **[simultáneamente en su Registro de Testimonios]** *en los testimonios o affidávits que autoricen*.

(c) …

(d) …"

Sección 6.- Los testimonios autorizados antes de la vigencia de esta Ley deberán ingresarse en el Registro de Testimonios, según ordenado por Ley. Todo testimonio autorizado luego de la vigencia de esta Ley, será incluido en el informe mensual radicado por los notarios ante la ODIN. Será responsabilidad de los notarios mantener copia de este informe, de manera que pueda corroborar la autorización de cualquier testimonio. De igual forma, se reafirma que cualquier testimonio que no tenga cancelado en su faz el original del sello a favor de la Sociedad para la Asistencia Legal carecerá de toda validez jurídica.

La Oficina de Inspección de Notarías establecerá un procedimiento ordenado para recibir y custodiar los Registros de Testimonios que se elimina en esta Ley.

Sección 7.- El Tribunal Supremo de Puerto Rico, a través de la Oficina de Inspección de Notarías, atemperará los reglamentos, instrucciones generales y cualquier otro documento a las disposiciones de esta Ley, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación de esta Ley, y orientará a los notarios sobre las disposiciones de la misma.

Sección 8. -Esta Ley comenzará a regir el 1 de enero de 2026."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **P. del S. 59**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 59 tiene como propósito enmendar el Artículo 58, derogar el actual Artículo 59 y sustituirlo por uno nuevo, y enmendar el Artículo 60 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", a los fines de establecer la obligación de los notarios de informar los testimonios en el índice mensual, eliminando así el requisito de la inscripción en el Registro de Testimonios; enmendar los Artículos 2 y 4 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, a los fines de eliminar el Registro de Testimonios; establecer disposiciones transitorias; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como, "Ley Notarial de Puerto Rico", requiere actualmente que los notarios anoten cada testimonio en un Registro de Testimonios. El objetivo original de este registro era mantener un control detallado de los testimonios autorizados y garantizar la correcta recaudación de los derechos establecidos por la Ley. Sin embargo, con el tiempo, se estableció la obligación de rendir un índice mensual a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), el cual contiene la misma información que el registro manuscrito.

Como muy bien expone la parte expositiva, resulta innecesario y obsoleto mantener un Registro de Testimonios manuscrito, dado que los notarios deben presentar informes mensuales con la misma información a la ODIN. Así como, los derechos legales que se recaudan a través del sello de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), que aparece en el propio documento conforme establece la Ley 8-2012. La duplicidad de estos procedimientos ha generado una carga administrativa innecesaria para los notarios sin aportar beneficios adicionales al sistema notarial.

Así las cosas, el P. del S. 59 propone:

- Eliminar el Registro de Testimonios y establecer la obligación de incluir los testimonios en el índice mensual.
- Permitir la notificación electrónica de los testimonios por parte de los notarios.
- Modificar el proceso de cancelación del sello de la Sociedad para la Asistencia Legal, permitiendo su pago electrónico conforme a los procedimientos que establezca el Secretario de Hacienda en coordinación con la Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico o quien esta delegue.

En fin, estas enmiendas buscan agilizar y modernizar el sistema notarial en Puerto Rico, eliminando redundancias y facilitando el cumplimiento de las obligaciones notariales mediante herramientas digitales.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 59, solicitó comentarios a las siguientes entidades, Oficina de Inspección de Notarías, Asociación de Abogados de Puerto Rico, Colegio de Abogados de Puerto Rico y las diversas escuelas de derecho. Al momento de la redacción de este Informe solo se ha recibido el Memorial Explicativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en conjunto al Instituto del Notariado Puertorriqueño, el cual se expone a continuación.

Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y del Instituto del Notariado Puertorriqueño

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y el Instituto del Notariado Puertorriqueño respaldan la aprobación del P. del S. 59, al considerar que la eliminación del Registro de Testimonios y su sustitución por el índice mensual de SIGNO moderniza la práctica notarial. No obstante, señalaron que la medida debe garantizar que el nuevo sistema cumpla con los requisitos de la Ley Notarial y su Reglamento.

En este sentido, señalaron que:

> La medida presentada es una que, positivamente, atempera la práctica notarial a los tiempos modernos de la digitalización de procesos, así como la simplificación de los procesos y ejecutorias personalísimas de los notarios y notarias en Puerto Rico. Sin embargo, el proyecto debe asegurar que los cambios en SIGNO sean suficientes para que realmente el índice mensual sustituya el Registro de Testimonios, y se pueda dar cumplimiento a la Ley Notarial y su Reglamento en cuanto a la información que deba entrarse al firmar un testimonio o affidavit. Hay que tener en cuenta que no se trata de una simple lista de testimonios, sino del registro de acciones legales recogidas en documentos auténticos que hacen fé pública. *Building Maintenance Services v. Hato Rey Executive Building*, 109 DPR 656 (1980).[1]

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.0007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como, "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, certifica que el P. del S. 1, no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

[1] Véase, memorial del Colegio de Abogados de Puerto Rico del 7 de marzo de 2025

CONCLUSIÓN

La aprobación del P. del S. 59 responde a la necesidad de modernizar la práctica notarial en Puerto Rico, eliminando procesos redundantes y facilitando la fiscalización electrónica de los testimonios sin menoscabo de la transparencia y legalidad del sistema.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobación del **P. del S. 59, con las enmiendas** incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Thomas Rivera Schatz
Presidente de la Comisión de
Innovación, Reforma y Nombramientos
del Senado de Puerto Rico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 60, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 75-1987 *de 2 de julio de 1987*, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico," a los fines de rectificar la información que debe contener la Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con lo establecido en la Sección 17 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico, ningún proyecto de ley puede abordar más de un asunto y este debe estar claramente reflejado en su título. Esta disposición constitucional busca evitar que se incluyan en las leyes asuntos irrelevantes o no relacionados con el propósito principal de la legislación.

La Ley 52-2022, conocida como la "Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico,"entre otros asuntos,~~dispuso~~ *dispuso* un nuevo marco regulatorio en nuestro sistema contributivo para las empresas multinacionales reguladas por la Ley 154-2010, las cuales son clave para el desarrollo económico del país. No obstante, dicha legislación incluyó enmiendas a la Ley Núm. 75-1987 *de 2 de julio de 1987*, conocida como la "Ley Notarial de Puerto Rico," las cuales no guardan relación con las reformas esenciales realizados al sistema contributivo local, en lo referente a las empresas foráneas.

En este contexto, ~~nuestro Tribunal Supremo~~ *el tribunal de Primera Instancia de San Juan en el caso Asociación de Abogados de Puerto Rico v. el Gobierno de Puerto Rico, Civil Núm. SJ2022CV05905* interpretó la Ley 52-2022 y, como resultado, declaró nulo el Artículo 86 de dicha ley, el cual intentaba modificar la Ley Núm. 75-1987 *de 2 de julio de 1987*, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico." ~~Véase, *Asociación de Abogados de Puerto Rico v. Gobierno de Puerto Rico*, Civil Núm. SJ2022CV05905~~.

En atención a este hecho, esta pieza legislativa rectifica la información que debe contener la planilla informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles contenida en el Artículo 11 de la Ley Núm. 75-1987 *de 2 de julio de 1987*, restituyéndose al lenguaje vigente previo a la aprobación de la Ley 52-2022.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. – Se enmienda el Artículo 11 de la Ley *Núm.* 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 11.- Deberes del notario - Planilla informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles y solicitud de exención contributiva.

En el otorgamiento de escrituras de segregación, agrupación o traslación de dominio será obligación del transmitente o de quien segregue o agrupe cumplimentar y depositar en la oficina del notario autorizante la planilla informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles.

Dicha planilla incluirá la siguiente información:

1. Número, fecha de la escritura y negocio jurídico efectuado.
2. Nombre de los comparecientes, con especificación del carácter de su comparecencia y su número de seguro social.
3. Número de propiedad o catastro.

   El número catastral de la propiedad se tomará de la última notificación o recibo contributivo disponible expedido por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.

   [Se dispone que el] *El* Centro de Recaudación de Ingresos Municipales ofrecerá el número catastral o de codificación dentro de los próximos siete (7) días siguientes de ser solicitado. De no ser posible, deberá expedir una certificación negativa en la que se hagan constar las razones por las cuales no puede ofrecer el número solicitado. Esta certificación deberá remitirse al Secretario de Hacienda y al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales en unión a la planilla informativa.
4. Datos registrales del inmueble, incluyendo folio, **[toma,]** *tomo,* número de finca y pueblo.
5. Precio de *la tasación.* **[tasación, acompañado de la tasación realizada por un Evaluador Profesional Autorizado (EPA) con licencia vigente en Puerto Rico.]**
6. Tipo de escritura*,* de ser aplicable.
7. Tipo de propiedad **[y]**, su localización y dirección.
8. **[Plano de mensura (plot plan).]**
9. **[Estudio de Título de la propiedad que se trate.]**

… "

Sección 2.- Incompatibilidad.

Por la presente se deroga, o se entenderá enmendada, cualquier disposición de ley, artículo o sección de ley, órdenes administrativas, políticas, cartas circulares, reglamentos, reglas, cartas normativas, determinaciones administrativas y/o disposiciones aplicables que vayan en contra de las disposiciones de esta Ley.

Sección 3. –Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **P. del S. 60**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 60 tiene como objetivo enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico" con el fin de rectificar la información que debe contener la Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles. Además, la medida restituye el lenguaje previo a las enmiendas realizadas en la Ley 52-2022.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 regula los deberes de los notarios en relación con la segregación, agrupación y traslado de bienes inmuebles. En el Artículo 11 de esta ley, se establece la obligación del transmitente o quien segregue o agrupe propiedades de cumplir con la entrega de una planilla informativa en la oficina del notario autorizante.

Conforme surge de la Exposición de Motivos de la medida, la Ley 52-2022, conocida como "Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico, incluyó enmiendas que modificaron varios aspectos de la Ley 75 de 2 de julio de 1987, incluyendo requisitos relacionados con las planillas informativas sobre bienes inmuebles, los cuales no guardan relación con las reformas esenciales realizadas al sistema contributivo local, en lo referente a las empresas foráneas. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia, al interpretar dicha ley, declaró nulas las enmiendas al Artículo 86 de la Ley 52-2022, que intentaban modificar la Ley Notarial de Puerto Rico. Este fallo evidenció la desconexión entre las reformas fiscales y las disposiciones notarialmente relevantes.

Por lo tanto, el P. del S. 60 propone la rectificación de estas enmiendas al restituir el lenguaje original del Artículo 11 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", especificando la información requerida en la planilla informativa.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 59, solicitó comentarios a las siguientes entidades, Oficina de Inspección de Notarías, Asociación de Abogados de Puerto Rico, Colegio de Abogados de Puerto Rico y las diversas escuelas de derecho. Al momento de la redacción de este Informe solo se ha recibido el Memorial Explicativo de la Oficina de Administración de los Tribunales, el cual se expone a continuación.

Oficina de Administración de los Tribunales

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) expresó que no tiene objeción al Proyecto del Senado 60, el cual restituye el lenguaje del Artículo 11 de la Ley Notarial de Puerto Rico a su versión anterior a la Ley 52-2022. Explicaron que la medida responde a la decisión del Tribunal de Primera Instancia, que declaró inconstitucional y nula la enmienda hecha por la Ley 52-2022 en el caso *Asociación de Abogados de Puerto Rico v. Gobierno de Puerto Rico*, Civil Núm. SJ20220V05905.

En este sentido, señalaron que:

"No tenemos objeción a las enmiendas propuestas al Artículo 11 de la Ley Notarial, tal y como están redactadas."[2]

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.0007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como, "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, certifica que el P. del S. 1, no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La aprobación del P. del S. 60 responde a la necesidad de corregir las enmiendas que fueron introducidas por la Ley 52-2022, y restituir el marco normativo original para las planillas informativas sobre la segregación, agrupación y traslado de bienes inmuebles. Esta medida asegura que los notarios puedan cumplir con sus obligaciones de forma coherente con las disposiciones legales vigentes y sin los obstáculos impuestos por las modificaciones no relacionadas con el sistema notarial.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobación del **P. del S. 60, con las enmiendas** incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Thomas Rivera Schatz
Presidente de la Comisión de Innovación
Reforma y Nombramientos
del Senado de Puerto Rico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 68, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para crear "la Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico", crear la figura del Oficial de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico adscrito al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y establecer sus deberes; crear el ~~Consejo~~ *Comité* de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico y establecer sus deberes; ordenar al Puerto Rico Innovations and Technology Services (PRITS) crear y desarrollar la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en relación con la implementación de la Inteligencia Artificial a través de las agencias e instrumentalidades gubernamentales; y para otros fines relacionados.

[2] Véase, memorial de la Oficina de Administración de los Tribunales del 10 de marzo de 2025

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 11 de febrero de 2019, el Presidente de Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva 13859,[3] la cual busca mantener a los Estados Unidos como el líder en el desarrollo, uso e investigación de la Inteligencia Artificial. Para ello, dicha orden ejecutiva estableció unos principios, en los cuales se procura que el gobierno de los Estados Unidos debe:

a) guiar los avances tecnológicos en Inteligencia Artificial a través del gobierno federal, la industria y la academia para promover el descubrimiento científico, la competitividad económica y la seguridad nacional;
b) impulsar el desarrollo de estándares apropiados y reducir los obstáculos para el despliegue seguro de tecnología de Inteligencia Artificial a fin de permitir la creación de nuevas industrias relacionadas con esto;
c) capacitar a las generaciones presentes y futuras de trabajadores con las habilidades necesarias para desarrollar y aplicar tecnologías de inteligencia artificial que los ayude a comprender la economía actual y los trabajos del futuro;
d) fomentar la confianza del pueblo en la Inteligencia Artificial, protegiendo los derechos civiles y la privacidad en su aplicación, para de esta manera poder aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial.[4]

Además, la Orden Ejecutiva 13960,[5] busca promover el uso de la Inteligencia Artificial confiable a través de las agencias del gobierno federal. Esta establece los principios para el uso de la Inteligencia Artificial en el gobierno federal, promulga una política pública para implementarla, ordena a las agencias que registren el uso de la Inteligencia Artificial y pide a la Administración de Servicios Generales (GSA) y a la Oficina de Administración de Personal que mejoren la experiencia en implementación de Inteligencia Artificial en las agencias.[6]

Como consecuencia de estas Órdenes Ejecutivas, en enero del 2021, mediante una legislación bipartita, el congreso de los Estados Unidos aprobó el "National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020,[7] el cual establece un programa coordinado en todo el gobierno federal para acelerar la investigación y aplicación de la Inteligencia Artificial con el objetivo de promover la prosperidad económica y la seguridad nacional. La misión del "National Artificial Intelligence Initiative" es garantizar el liderazgo de Estados Unidos en la investigación y desarrollo de esta tecnología, así como preparar a la fuerza laboral presente y futura para la integración de la misma.

La "National Artificial Intelligence Initiative", brinda un marco general para fortalecer y coordinar las actividades de investigación, desarrollo, demostración y educación de Inteligencia Artificial en todas las instrumentalidades del gobierno de los Estados Unidos, en cooperación con organizaciones académicas, industriales, sin fines de lucro y de la sociedad civil. El trabajo de esta iniciativa se organiza en seis (6) pilares estratégicos: innovación, avance de la Inteligencia Artificial confiable, educación, capacitación, infraestructura y cooperación internacional.

Ante ello, diversos estados, como California, Connecticut e Ilinois, han presentado iniciativas legislativas para promover el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial, así como para limitar su alcance. Por ello, esta Asamblea Legislativa considera necesario que el Gobierno de Puerto Rico se ajuste a los tiempos que vivimos. Para tal fin, se crea la figura del Oficial de Inteligencia Artificial del

[3] Véase, Executive Order 13859
[4] Id.
[5] Véase, Executive Order 13960 del 3 de diciembre de 2020
[6] Véase, https://www.ai.gov/legislation-and-executive-orders/
[7] Véase, National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020

Gobierno de Puerto Rico, el Comité Asesor de Inteligencia Artificial y se ordena al PRITS junto al Oficial de Inteligencia Artificial el establecer, recomendar y desarrollar la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico sobre este tipo de tecnología.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1. Título

Se crea la Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico

Artículo 2.- Definiciones

Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

(1) Agencia - significará cualquier departamento, oficina, negociado, comisión, junta, administración, autoridad, corporación pública, incluyendo sus afiliadas y subsidiarias, o cualquier otro organismo de la Rama Ejecutiva;

(2) ~~Consejo~~ *Comité* significará ~~el Consejo~~ *Comité* Asesor de Inteligencia Artificial establecido en *el* ~~Artículo 4~~ *Artículo 5* de esta Ley;

(5) Oficial de Inteligencia Artificial - significará la persona designada por el Principal Ejecutivo de Innovación e Informática del Gobierno de Puerto Rico, según dispone el Artículo 2 de esta Ley;

(6) PRITS – significara el Puerto Rico Innovations Technologies and Services;

(7) Procedimientos de sistemas automatizados - significará los procedimientos desarrollados y adoptados de conformidad con esta Ley;

(8) Sistema automatizado de toma de decisiones- significará cualquier proceso computarizado que recopile data, analice data o use inteligencia artificial para tomar, modificar o ser factor en la toma de decisiones con o sin intervención humana.

Artículo 3.- Se crea la figura del Oficial de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico adscrito al Puerto Rico Technology and Innovation Services.

El Principal Ejecutivo de Innovación e Informática del Gobierno de Puerto Rico (PRITS) nombrará a un Oficial de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico, no más tarde de noventa (90) días luego de la aprobación de esta Ley; que posea los siguientes requisitos mínimos:

1) conocimiento en tendencias, tecnología, desarrollo y terminología de sistemas automatizados de toma de decisiones y análisis de Inteligencia Artificial; y

2) experiencia en administración, planificación, desarrollo de políticas públicas, manejo de proyectos y coordinación de servicios.

Este tendrá a su cargo el desarrollo de la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en relación con el uso, estudio y desarrollo de la Inteligencia Artificial a través de las agencias e instrumentalidades gubernamentales.

A no más tardar del 1 de julio de 2025 y cada dos (2) años a partir de entonces, el Oficial de Inteligencia Artificial deberá, en consulta con el Principal Ejecutivo de Innovación e Informática del Gobierno, ~~y los jefes de agencias,~~ desarrollar y adoptar procedimientos para sistemas automatizados que guíen el uso de las agencias en el desarrollo, adquisición y utilización de sistemas automatizados de decisiones.

Artículo 4.- Deberes del Oficial de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico.

En el desarrollo de los procedimientos de sistemas automatizados de toma de decisiones establecidos en el Artículo anterior, el Oficial de Inteligencia Artificial deberá imponer las siguientes salvaguardas, para mitigar el riesgo:

(1) asegurarse que las agencias estatales desarrollan, adquieren y utilizan sistemas automatizados de una manera consistente con los estándares nacionales e internacionales;

(2) asegurarse que las agencias desarrollan, adquieren y utilizan sistemas automatizados que cumplen con la constitución, y las leyes estatales y federales;

(3) asegurarse que el sistema automatizado no discrimina a cualquier individuo o grupo de individuos por edad, color, raza, credo, religión, origen, ascendencia, sexo, estado civil, embarazo, estado de veterano, discapacidad, fuente de ingresos, o cualquier otra causa establecida por ley;

(4) asegurarse que cualquier beneficio que reciba una agencia al utilizar un sistema automatizado supera cualquier riesgo inherente a la utilización de dicho sistema;

(5) asegurarse que cada sistema automatizado se aplique y utilice de manera consistente para el propósito para el cual fue creado, y de esta manera garantizar la precisión, fiabilidad y eficacia de dicho sistema;

(6) asegurarse que cada sistema automatizado es seguro, protegido y resistente a circunstancias en las que dicho sistema automatizado se enfrente a cualquier vulnerabilidad sistemática, manipulación o explotación maliciosa;

(7) garantizar que las operaciones y los resultados generados por un sistema automatizado son lo suficientemente comprensibles por expertos en la materia y usuarios;

~~(8) asegurarse que el desarrollo, adquisición y utilización de un sistema automatizado son, documentados y trazables;~~ *documentar su uso e implementación*

~~(9)~~ *(8)* asegurarse que el diseño, desarrollo, adquisición y el seguimiento de un sistema automatizado son, apropiadamente transparentes para el público, bajo protocolos uniformes y

~~(10) asegurarse de establecer los requisitos de acceso público para la publicación de información apropiada por parte de cada agencia estatal que utiliza el sistema automatizado;~~

~~(11)~~ *(9)* asegurarse que cada entidad gubernamental que utiliza un sistema automatizado:

(a) examine el sistema automatizado, al menos una vez cada dos (2) años, para garantizar el cumplimiento con los procedimientos de dichos sistemas automatizados,

(b) reemplazar, desconectar y desactivar cualquier aplicación del sistema automatizado que demuestre que el desempeño es inconsistente con lo dispuesto en esta Ley;

~~(c) es apropiadamente transparente en la divulgación de cualquier información que sea relevante para dicho sistema automatizado por parte de la agencia,~~

~~(d)~~ *(c)* implementa salvaguardas para garantizar que el sistema automatizado se aplica y utiliza correctamente; y

~~(e)~~ *(d)* proporciona la formación adecuada a todo el personal responsable de desarrollar, adquirir o utilizar el sistema automatizado;

(13) desarrollar y adoptar procedimientos para sistemas automatizados para el uso por las agencias e instrumentalidades del Gobierno;

(14) a partir del 30 de junio de 2026, rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa de los avances, hallazgos, estudios y recomendaciones acerca del uso de la Inteligencia Artificial en las diversas entidades gubernamentales.

Artículo 5.- Se crea el ~~Consejo~~ *Comité* Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico

El ~~Consejo~~ *Comité* Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico se compondrá de:

1) el Principal Ejecutivo de Innovación e Informática el Gobierno de Puerto Rico (PRITS) o un representante que no podrá ser el Oficial de Inteligencia Artificial;

~~2) el Secretario de Estado o un representante;~~

~~3)~~ *(2)* el Director Ejecutivo de Administración de Servicios Generales o un representante;

~~4)~~ *(3)* el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico o un representante;

~~5)~~ *(4)* el Director Ejecutivo de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos o un representante; ~~y~~

~~6) dos (2) miembros del interés público, a ser nombrados por el Gobernador. Estos miembros designados por el Gobernador deberán tener experiencia profesional o títulos académicos en materia de sistemas automatizados, inteligencia artificial, ingeniería u otros campos relacionados.~~

Artículo 6.- Deberes del Comité

El comité deberá asesorar al Gobernador de Puerto Rico, y al Oficial de Inteligencia Artificial de Puerto Rico en asuntos relacionados al uso de Inteligencia Artificial, incluyendo recomendaciones sobre:

(1) las mejores prácticas para el uso de inteligencia artificial y sistemas automatizados en las agencias;

~~(2) hacer recomendaciones a la Asamblea Legislativa sobre políticas públicas de inteligencia artificial y sistemas automatizados;~~

~~(3) establecer estatutos que rijan los procedimientos del comité;~~

~~(4)~~ *(2)* el estado actual de Puerto Rico en relación con la competitividad en inteligencia artificial, incluyendo el alcance y escala de las inversiones de Puerto Rico en investigación y desarrollo de inteligencia artificial;

~~(5) el progreso realizado en la implementación de la Inteligencia Artificial en el Gobierno;~~

~~(6)~~ *(3)* los avances científicos en torno a la inteligencia artificial;

~~(7)~~ *(4)* asuntos relacionados con la utilización de inteligencia artificial para mejorar la mano de obra en Puerto Rico, incluyendo el utilizar este tipo de tecnología para capacitar la fuerza laboral en posiciones que conduzcan a la autosuficiencia económica; *la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos presentará informes sobre personal y contratación cada vez que una agencia estatal haga alguna transición de servicios a Inteligencia Artificial, según la ley para La Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico; ley 8 del 2017 según enmendada.*

~~(8)~~ *(5)* cómo aprovechar los recursos para optimizar y mejorar las operaciones en diversas áreas de las operaciones gubernamentales, incluyendo los servicios médicos, la seguridad cibernética, la infraestructura, y la recuperación ante desastres naturales;

~~(9)~~ *(6)* ~~si las propuestas abordan adecuadamente las cuestiones éticas, legales y de seguridad;~~ *si las propuestas están alineadas a los mejores estándares y prácticas de la industria.*

~~(10)~~ *(6)* oportunidades de cooperación internacional en actividades de investigación de inteligencia artificial, desarrollo de estándares y regulaciones.

Artículo 7.- Mandato

No más tarde del 1 de julio de 2025, y cada dos (2) años a partir de entonces, el Oficial de Inteligencia Artificial deberá presentar un anteproyecto de procedimientos de sistemas automatizados para la Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico ante el Comité.

El Comité, no más tarde de 30 días luego de haber recibido dicho anteproyecto deberá someter al Oficial de Inteligencia Artificial sus sugerencias o recomendaciones en relación con el mismo.

Luego de haber recibido las sugerencias o recomendaciones, el Oficial de Inteligencia Artificial, finalizará los procedimientos de los sistemas automatizados y someterá dichos procedimientos finales al Comité. ~~Además, el Oficial de Inteligencia Artificial enviará una copia de la versión final a todos los oficiales de datos de las agencias, y el PRITS publicará dichos procesos de sistemas automatizados final en el sitio web de dicha agencia.~~

~~No más tarde del 1 de enero de 2026, y cada dos años a partir de entonces, cada agencia estatal deberá:~~

~~(1) llevar a cabo un inventario de los sistemas que están en uso por dicha agencia~~, *Llevar a cabo un registro interno de las agencias con acceso exclusivo de PRITS y miembros del comité.*

~~(2) presentar dicho inventario al oficial de Inteligencia Artificial y al Consejo Asesor. El PRITS deberá publicar dicho inventario en el sitio web de su agencia.~~

Nada de lo dispuesto en esta sección se interpretará como que se:

(1) requiere la divulgación de cualquier secreto comercial;

(2) anular cualquier protección del producto del trabajo; o

(3) restringir el acceso del Oficial de Inteligencia Artificial o de cualquier agencia estatal para:

(a) realizar cualquier investigación interna que se dirija a desarrollar, mejorar o reparar cualquier producto, servicio o tecnología,

(b) prevenir, detectar, proteger, responder, investigar, denunciar a cualquier persona responsable de cualquier incidente de seguridad, robo de identidad, fraude, acoso, actividad maliciosa o engañosa o actividad ilegal, o

(c) preservar la integridad o seguridad de cualquier sistema.

Artículo 8.- Orden

Se ordena al Puerto Rico Innovations and Technology Services (PRITS), junto al Oficial de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico ~~y el Comité Asesor~~ desarrollar la Política Pública del Gobierno con relación al uso de Inteligencia Artificial por parte de las agencias del Gobierno de Puerto Rico, para promover el uso y desarrollo de Inteligencia Artificial a través de las Agencias del Gobierno de Puerto Rico de manera segura y eficaz.

Para el desarrollo de la Política Pública sobre Inteligencia Artificial, el PRITS junto al Oficial de Inteligencia Artificial, deberán buscar la cooperación de organizaciones académicas, industriales, sin fines de lucro y de la sociedad civil que estudien o desarrollen la Inteligencia Artificial.

Artículo 9.- Prohibiciones

~~Ninguna agencia desarrollará, adquirirá o utilizará un sistema automatizado a partir del 1 de enero de 2026, a menos que dicho sistema automatizado cumpla con los requisitos establecidos en los procedimientos de sistemas automatizados de esta Ley y hayan sido aprobados de manera final por el Comité Asesor de Inteligencia Artificial.~~ *Ninguna Agencia podrá usar o desarrollar lenguajes y códigos de Inteligencia Artificial sin antes someter su propuesta a PRITS y al Oficial de Inteligencia Artificial para evaluación y aprobación.*

Artículo 10.- Cláusula de Separabilidad

Si cualquier cláusula, párrafo, sección o parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción y competencia, la sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará el resto de las disposiciones de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, sección o parte de la Ley que hubiere sido declarada inconstitucional.

Artículo 11.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la **Proyecto del Senado 68**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con **las enmiendas** contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para crear "la Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico", crear la figura del Oficial de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico adscrito al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y establecer sus deberes; crear el Consejo de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico y establecer sus deberes; ordenar al Puerto Rico Innovations and Technology Services (PRITS) crear y desarrollar la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en relación con la implementación de la Inteligencia Artificial a través de las agencias e instrumentalidades gubernamentales; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una de las tecnologías más transformadoras de nuestro tiempo, con el potencial de revolucionar sectores clave como la economía, la educación, la seguridad y la gobernanza. Reconociendo su impacto y la necesidad de establecer un marco de desarrollo responsable, el gobierno de los Estados Unidos ha adoptado medidas significativas para fomentar su avance y garantizar su aplicación ética y efectiva. La emisión de la Orden Ejecutiva 13859 en 2019, seguida por la Orden Ejecutiva 13960, refleja el compromiso federal con el liderazgo en IA, promoviendo su investigación, implementación y regulación dentro de la administración pública y el sector privado.

Alineado con estos esfuerzos, en enero de 2021, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el *National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020*, legislación bipartita que establece un programa coordinado en todo el gobierno federal para acelerar la investigación y aplicación de la inteligencia artificial. Esta iniciativa busca garantizar el liderazgo de la nación en el desarrollo de IA, fortaleciendo la cooperación entre entidades gubernamentales, la academia, la industria y la sociedad civil. Se fundamenta en seis pilares estratégicos: innovación, avance de la inteligencia artificial confiable, educación, capacitación, infraestructura y cooperación internacional. Además, diversos estados han comenzado a legislar para adaptar sus regulaciones a esta nueva realidad tecnológica, explorando tanto su potencial como sus riesgos.

Puerto Rico no puede quedar rezagado en este proceso de transformación. La adopción y regulación de la inteligencia artificial en la isla debe responder a las tendencias globales y a la necesidad de establecer un equilibrio entre innovación, seguridad, transparencia y desarrollo económico. Por ello, esta Asamblea Legislativa propone la creación de la figura del Oficial de

Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico, el establecimiento del Comité Asesor de Inteligencia Artificial, y la encomienda al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), en colaboración con estas nuevas entidades, de desarrollar y recomendar la política pública sobre IA en la isla.

Esta iniciativa posiciona a Puerto Rico como un territorio alineado con los estándares internacionales de gobernanza tecnológica, asegurando que el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial se realice de manera responsable, ética y estratégica. La regulación de esta tecnología no solo fomentará la competitividad y la innovación, sino que también garantizará que su aplicación respete los derechos ciudadanos y contribuya al bienestar social y económico de la isla. Con esta medida, Puerto Rico avanza hacia un futuro donde la inteligencia artificial se convierte en una herramienta de progreso, respaldada por una gobernanza sólida y una visión clara de su impacto y beneficios.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del presente Proyecto, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico analizó los memoriales explicativos recibidos por parte de la Puerto Rico Innovation and Technology Service, Marc Maceira, TechNet y Administración de Servicios Generales. A continuación, se desprende la posición expuesta por cada una de las instrumentalidades consultadas.

Puerto Rico Innovation and Technology Service

El Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) ha presentado su posición respecto al Proyecto del Senado 68 (PS68), respaldando la creación de la figura del Oficial de Inteligencia Artificial (IA) adscrito a PRITS como una medida esencial para fortalecer la capacidad del gobierno en la adaptación a las demandas y oportunidades de la era digital. Consideran que la designación de este funcionario permitirá una mejor coordinación de esfuerzos, promoviendo una implementación estratégica y efectiva de la inteligencia artificial en el Gobierno de Puerto Rico.

Sin embargo, PRITS ha expresado su oposición a la creación del Consejo Asesor de IA, argumentando que la inclusión de este organismo añadiría burocracia innecesaria, lo que afectaría negativamente la agilidad con la que se requiere desarrollar y manejar esta tecnología. Según PRITS, los consejos y comités, aunque pueden ofrecer espacios de discusión, tienden a retrasar la toma de decisiones, agregar complejidades administrativas y fragmentar la ejecución de la política pública, lo que va en detrimento de la eficiencia gubernamental.

PRITS ha enfatizado que su propia estructura ya está diseñada para asumir el liderazgo en asuntos tecnológicos, incluyendo la capacidad de asesorar y coordinar esfuerzos en inteligencia artificial. Destacan que su marco legal les otorga las herramientas necesarias para integrar expertos y establecer estrategias tecnológicas sin necesidad de un Consejo adicional. Desde su perspectiva, la creación de este órgano consultivo podría ralentizar la implementación efectiva de la inteligencia artificial, afectando la capacidad del gobierno para responder con la rapidez que esta tecnología exige.

En lugar de establecer un Consejo Asesor, PRITS recomienda que se dote al Oficial de IA con el personal de apoyo necesario para que la nueva unidad o área especializada en IA dentro de PRITS pueda operar de manera eficiente. Consideran que una estructura interna fortalecida y ágil garantizará una implementación más efectiva de la política pública en materia de IA, permitiendo que el gobierno de Puerto Rico aproveche al máximo el potencial de esta tecnología sin las trabas que una estructura burocrática adicional podría representar.

En resumen, PRITS apoya firmemente la creación del Oficial de IA dentro de su estructura, pero se opone a la creación del Consejo Asesor, ya que lo considera un obstáculo para la eficiencia y la rapidez en la ejecución de estrategias en inteligencia artificial. En su lugar, abogan por fortalecer el equipo de trabajo del Oficial de IA, asegurando así una respuesta ágil e integrada a los desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial representa para el gobierno y la sociedad puertorriqueña.

Marc Maceira

El Sr. Maceira establece que la medida esta legislación es crucial para modernizar y optimizar los servicios gubernamentales, alineando a Puerto Rico con las tendencias internacionales en la regulación de esta tecnología. Tras un análisis exhaustivo del proyecto, se recomienda su implementación con enmiendas que fortalezcan su efectividad y mitiguen posibles riesgos.

Uno de los aspectos que requiere revisión es la definición de IA dentro del proyecto. La formulación actual de "sistemas automatizados de toma de decisiones" es demasiado amplia y podría incluir software tradicional no basado en inteligencia artificial o machine learning, lo que crearía obligaciones de cumplimiento innecesarias. Para evitar esta sobrecarga, se recomienda adoptar una definición más precisa, centrada en el uso de machine learning y tecnologías relacionadas. Una opción adecuada sería definir IA como: *"El uso de machine learning y tecnologías afines que emplean datos para entrenar modelos estadísticos con el fin de permitir que los sistemas informáticos realicen tareas normalmente asociadas con la inteligencia o percepción humana."* Esta definición reflejaría mejor el verdadero alcance de la inteligencia artificial y evitaría regulaciones excesivas sobre tecnologías que no lo ameritan.

Otro punto que se debe reconsiderar es el requisito de aprobación previa del Comité Asesor para todos los sistemas de IA, establecido en el Artículo 9. Esta disposición podría crear un cuello de botella burocrático, ralentizando la innovación y la implementación de soluciones basadas en IA dentro del gobierno. Para garantizar un equilibrio entre regulación y agilidad, se recomienda eliminar completamente el Artículo 9 o, en su defecto, limitar este requisito exclusivamente a sistemas de IA de alto riesgo, previamente definidos de manera clara en la legislación.

Además, se ha identificado una protección insuficiente de la propiedad intelectual en el texto del proyecto. Diversas disposiciones sobre transparencia y documentación, particularmente los Artículos 4(8), 4(9), 4(10) y 4(11)(c), podrían forzar la divulgación de información propietaria y secretos comerciales. Para corregir esto, se recomienda consolidar los requisitos de transparencia en una sola disposición, enfocada en sistemas de alto riesgo, asegurando que los secretos comerciales y la propiedad intelectual estén protegidos de divulgaciones no autorizadas.

El enfoque regulatorio del PS68 también debe ajustarse según el nivel de riesgo de los sistemas de IA. Actualmente, el proyecto impone requisitos uniformes a todas las aplicaciones de IA sin distinguir entre usos de alto y bajo riesgo. Para mejorar la efectividad de la regulación, se recomienda adoptar un enfoque basado en el riesgo, estableciendo requisitos más estrictos únicamente para sistemas que tengan un impacto significativo en la vida de los ciudadanos, como aquellos utilizados en salud, justicia, seguridad pública o decisiones financieras gubernamentales.

En cuanto a aspectos administrativos, el Artículo 3 establece que todos los jefes de agencias deben ser consultados en la toma de decisiones sobre IA. Esto podría generar retrasos significativos, dificultando la ejecución eficiente de políticas tecnológicas. Se recomienda modificar este artículo para que la consulta obligatoria se limite al Principal Ejecutivo de Innovación e Informática del Gobierno, permitiendo que los jefes de agencias presenten comentarios en un periodo definido antes de la adopción de nuevas regulaciones.

Otro aspecto que genera preocupación es el requisito de inventario y publicación en línea de los sistemas de IA gubernamentales, establecido en el Artículo 7. Si bien la transparencia es clave, la divulgación pública de inventarios detallados podría exponer información sensible y crear vulnerabilidades de seguridad. Se recomienda limitar este requisito únicamente a sistemas de alto riesgo y eliminar la obligación de publicación pública en línea, garantizando que solo las entidades gubernamentales pertinentes tengan acceso a dicha información.

El Artículo 4(8) exige que los sistemas de IA sean "documentados y trazables", pero el lenguaje utilizado es vago y podría ser interpretado de manera excesivamente amplia, resultando en cargas de cumplimiento innecesarias. Se recomienda reformular esta disposición para que los requisitos de documentación sean más específicos, limitándolos a información operativa esencial y protegiendo los secretos comerciales de las empresas que desarrollan estos sistemas.

Adicionalmente, se presentan recomendaciones clave para mejorar el proyecto. En primer lugar, se sugiere añadir un proceso formal de comentarios públicos en el Artículo 7, permitiendo que desarrolladores de IA y otras partes interesadas puedan opinar sobre los procedimientos antes de su implementación. También se recomienda fortalecer el Artículo 6, asegurando que el Consejo Asesor promueva activamente la adopción de IA en agencias gubernamentales, identifique y elimine barreras administrativas para la contratación de IA, y garantice que las regulaciones no obstaculicen innecesariamente la innovación.

Otra recomendación relevante es incorporar disposiciones sobre interoperabilidad con estándares internacionales, asegurando que las regulaciones de Puerto Rico sean compatibles con los marcos regulatorios reconocidos a nivel global, como los establecidos por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (*NIST*). Finalmente, se sugiere estandarizar el uso de la terminología en el texto del proyecto, asegurando coherencia entre los términos "Consejo" y "Comité" para evitar ambigüedades en la interpretación de la ley.

En conclusión, el Proyecto del Senado 68 es una iniciativa fundamental para modernizar el gobierno de Puerto Rico y fortalecer su capacidad para regular la inteligencia artificial de manera responsable y efectiva. Sin embargo, su éxito dependerá de ajustes clave que permitan que la legislación sea precisa, eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales. La adopción de un enfoque basado en el riesgo, la protección de la propiedad intelectual, la eliminación de burocracia innecesaria y el fortalecimiento de la transparencia sin comprometer la seguridad son aspectos esenciales para garantizar que esta legislación impulse la innovación en Puerto Rico sin frenar su desarrollo. Con estas enmiendas, la Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico podrá servir como un modelo efectivo para la integración de IA en la administración pública, asegurando beneficios tangibles para el gobierno y los ciudadanos.

TECHNET

La empresa TECHNET ha presentado sus comentarios sobre el Proyecto del Senado 68 (PS68), expresando preocupaciones significativas sobre el alcance excesivamente amplio de la legislación y el impacto negativo que esta podría tener en el uso y desarrollo de tecnologías existentes en Puerto Rico. Según TECHNET, los requisitos establecidos en la medida podrían, en lugar de fomentar la innovación y la regulación efectiva de la inteligencia artificial (IA), restringir el uso de tecnologías ya implementadas y generar barreras innecesarias para la adopción de nuevas herramientas.

Uno de los principales problemas identificados en el proyecto es la amplia definición de "sistema de toma de decisiones automatizado", la cual, según TECHNET, podría abarcar prácticamente cualquier software, programa o sistema que recopile datos y que pueda ser utilizado

con fines de toma de decisiones. Esto incluiría herramientas de uso común como hojas de cálculo, calculadoras y programas básicos de análisis de datos, que en muchos casos no constituyen verdaderos sistemas de IA. TECHNET enfatiza que la manera en que está redactada la medida no distingue entre sistemas con influencia real en la toma de decisiones y aquellos que simplemente generan datos sin un impacto determinante en el proceso final.

Otro aspecto crítico que TECHNET destacó es que la definición del proyecto abarca de manera general cualquier recopilación de datos, incluso cuando la información procesada no tiene relación alguna con datos personales o información sensible. Esta falta de diferenciación podría llevar a una regulación innecesaria sobre sistemas que simplemente operan con datos en formato legible por máquina sin tener implicaciones directas en la privacidad de los ciudadanos o en decisiones críticas.

Para abordar estas preocupaciones, recomiendan que el proyecto establezca una diferenciación clara entre los sistemas en los que hay intervención humana en el proceso de toma de decisiones y aquellos que operan de manera completamente autónoma. Consideran que las tecnologías en las que un ser humano tiene la última palabra sobre una decisión deben ser tratadas de manera distinta a los sistemas totalmente automatizados que no cuentan con revisión o intervención humana. La falta de esta distinción en la legislación actual podría dar lugar a interpretaciones erróneas que dificulten la implementación de IA en el gobierno y en el sector privado.

Como alternativa a la definición propuesta en el PS68, sugieren una redacción más precisa para el concepto de "sistema de toma de decisiones automatizado". Recomiendan que el término se limite exclusivamente a tecnologías totalmente automatizadas que procesan información personal y que utilizan computación con el propósito principal de tomar una decisión final sin revisión o intervención humana. Esta definición garantizaría que la regulación se enfoque en sistemas que realmente requieren supervisión y control, sin generar cargas regulatorias innecesarias sobre herramientas tecnológicas que no presentan los mismos riesgos.

En conclusión, TECHNET recomienda acotar la definición de los sistemas de toma de decisiones automatizados, asegurando que la regulación se limite a aquellos que operan sin supervisión humana y que procesan información personal de manera autónoma. Con estas modificaciones, la legislación podría lograr un balance entre la protección de los ciudadanos y la promoción del desarrollo tecnológico, asegurando que Puerto Rico se mantenga competitivo en la era de la inteligencia artificial,

Administración de Servicios Generales

La Administración de Servicios Generales ha expresado su conformidad con el Proyecto del Senado 68 (PS68) y respalda su propósito de establecer la Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico. Consideran que esta medida es un paso importante para modernizar la administración pública y garantizar un uso eficiente y responsable de la inteligencia artificial en las agencias gubernamentales.

Sin embargo, han señalado una corrección necesaria en la redacción del Artículo 5, inciso (3), donde se menciona que el Director Ejecutivo de la Administración de Servicios Generales (ASG) formará parte del Comité Asesor. La entidad enfatiza que el título oficial del puesto es Administrador de ASG y Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico, por lo que recomiendan que se haga la modificación correspondiente en el texto del proyecto.

Esta corrección es importante para asegurar precisión en la legislación y evitar cualquier ambigüedad sobre la designación de los funcionarios gubernamentales en el Comité Asesor. Con este ajuste, el Proyecto del Senado 68 podrá reflejar correctamente la estructura organizativa del gobierno y facilitar la implementación efectiva de sus disposiciones.

Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos

La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) presentó su ponencia en torno al Proyecto del Senado 68, el cual propone la creación de la "Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico". Esta medida establece la figura del Oficial de Inteligencia Artificial (OIA), la creación de un Consejo de Inteligencia Artificial y encarga al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) el desarrollo de la política pública sobre IA en la administración pública.

La OATRH reconoce que el Proyecto está alineado con la política pública vigente sobre innovación tecnológica, particularmente la establecida en la Ley 75-2019, y que responde al rápido desarrollo de la IA y su impacto en la gestión pública. Destaca que el contenido del Proyecto refleja iniciativas similares a nivel federal en Estados Unidos, como las órdenes ejecutivas 13859 y 13960, y la "National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020", que buscan fomentar la investigación, uso y regulación de la IA para garantizar el liderazgo tecnológico, la seguridad nacional y la prosperidad económica.

La OATRH subraya que el Proyecto es cónsono con los principios de eficiencia, transparencia, integración y modernización gubernamental. Asimismo, valora positivamente que el Proyecto incluya la participación de la OATRH como parte del Comité Asesor de Inteligencia Artificial, e identifique a PRITS como la agencia nominadora del OIA, quien deberá ser una persona altamente cualificada. También reconoce que el Proyecto requiere que PRITS, junto con el OIA y el Comité Asesor, desarrollen las guías que dirigirán la implementación de la IA en todas las agencias del Ejecutivo.

En cuanto a la implementación, la OATRH observa que el Proyecto establece un término de 90 días para nombrar al OIA y define criterios rigurosos sobre su cualificación profesional. Además, advierte que es fundamental que la Comisión consulte la posición de PRITS, ya que será la autoridad responsable de aplicar esta legislación. Finalmente, la OATRH respalda el propósito general de la medida y recomienda que se consulte también a entidades como la OGP, la AAFAF y el Departamento de Hacienda para evaluar su viabilidad fiscal y gerencial.

IMPACTO FISCAL

La presente medida no contiene ningún tipo de impacto a las arcas fiscales del Gobierno de Puerto Rico.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 68**, recomendando su aprobación con **las enmiendas** contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Wilmer Reyes Berríos
Presidente
Comisión de Ciencia, Tecnología
e Inteligencia Artificial"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 82, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas:

"LEY

Para añadir un sub-inciso (d) al Inciso (13) del Artículo 1.4 de la Ley 82-2010, según enmendada, conocida como "Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico," con el objetivo de incorporar en la definición de Energía Renovable Alterna el uso de tecnologías a base de hidrógeno, en consonancia con el plan estratégico adoptado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico es un territorio vulnerable a los efectos inminentes del cambio climático. Nuestra región experimenta una variedad de eventos climáticos que pueden provocar períodos de sequía, alternados con intensas y prolongadas lluvias, así como eventos extremos como huracanes, inundaciones, deslizamientos y enfermedades transmitidas por vectores. El sector energético es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que ha generado la necesidad de un cambio en la política pública energética de nuestro gobierno.

Con ese objetivo, se instauró una nueva política energética para Puerto Rico que definió los lineamientos para la creación de un sistema energético resiliente y confiable, con tarifas justas y accesibles para todo tipo de consumidores, mediante la Ley 17-2019, conocida como la "Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico." Esta legislación, de amplio alcance, modificó la Ley 82-2010, también conocida como la "Ley de Política Pública de Diversificación Energética a través de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico," con el fin de establecer una nueva y ambiciosa Cartera de Energía Renovable, con la meta de alcanzar un 100% de energía proveniente de fuentes renovables para el año 2050, fomentando la integración de energía limpia.

A su vez, con la Ley 33-2019, según enmendada, conocida como la "Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico," se definió la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al cambio climático y las estrategias de mitigación, adaptación y resiliencia en distintos sectores. Dado que el sector energético es uno de los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, esta legislación reflejó un firme compromiso con la transición hacia un sistema energético menos dependiente del petróleo, la eliminación de la generación de energía a base de carbón, el fomentar fuentes de energía renovable o alternativas más eficientes, y alcanzar la eficiencia energética. Mediante esta legislación, la Ley 82-2010 fue enmendada para alinearse con la mencionada nueva política pública energética.

Actualmente, la Ley 82-2010, define como energía renovable alterna la energía derivada de las siguientes fuentes: 1) combustión de gas derivado de un sistema de relleno sanitario; 2) digestión anaeróbica; y 3) pilas de combustible ("fuel cells", en inglés). No obstante, un gran sector apunta a que el hidrógeno puede ser considerado como una fuente de energía renovable alterna. Este es el elemento más básico que conocemos y uno de los más comunes en el universo. El hidrógeno puede ser utilizado como fuente alterna de energía para: la generación de energía eléctrica; los sectores industriales y en la transportación. La utilización del hidrogeno como fuente alterna de energía promete contrarrestar algunos de los efectos nefastos que han tenido los combustibles fósiles en el medioambiente mediante la reducción de la emisión de gases con efecto de invernadero, cumpliendo así con la política pública de cambio climático.

El hidrógeno es un protagonista clave en la estrategia de investigación y desarrollo relacionada con la lucha contra el cambio climático. Una política pública que incluya el hidrógeno como fuente alterna de energía hará posible una integración a gran escala de energía renovable eficiente en la red energética. Un sinnúmero de países como Estados Unidos, naciones de Europa, Asia y Oceanía han anunciado políticas públicas relacionadas a la promoción del hidrógeno como fuente alterna de energía, ante el consenso que existe sobre la necesidad de combatir el cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases con efecto de invernadero.

El Gobierno de Puerto Rico ha promovido políticas públicas innovadoras destinadas a proteger y preservar los recursos naturales de Puerto Rico. Tras el paso de los huracanes Irma y María, el Gobierno de los Estados Unidos asignó una cantidad significativa de fondos federales para, entre otros asuntos, modernizar nuestro sistema eléctrico. Resulta fundamental explorar alternativas que permitan generar energía más limpia sin comprometer la estabilidad, calidad y suministro del servicio eléctrico en el país.

Puerto Rico debe asumir su responsabilidad en la lucha global contra el cambio climático. En este contexto, la Asamblea Legislativa considera pertinente y necesario incluir el hidrógeno como una fuente alternativa de energía en la Ley 82-2010, para reforzar la política pública establecida en dicha legislación. Este enfoque no solo contribuye a la causa mundial contra el cambio climático, sino que también busca estabilizar los costos energéticos en Puerto Rico. La aprobación de esta Ley representa un paso significativo hacia el cumplimiento de nuestra responsabilidad de actuar frente a una amenaza que pone en riesgo la sostenibilidad y viabilidad del planeta que habitamos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. - Se añade un sub-inciso (d) al Inciso (13) del Artículo 1.4 de la Ley 82-2010, según enmendada, conocida como "Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico," para que se lea como sigue:

"Artículo 1.4.—Definiciones.

Para los fines de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el significado que a continuación se expresa**[n]**, excepto donde claramente indique lo contrario, y los términos utilizados en singular incluirán el plural y viceversa:

1) …

. . .

13) "Energía Renovable Alterna". — significa la energía derivada de las siguientes fuentes:

a. combustión de gas de derivado de un sistema de relleno sanitario;

b. digestión anaeróbica;

c. pilas de combustible ("fuel cells", en inglés);

d. combustión de hidrógeno no derivado de combustibles fósiles.

…

31) …"

Sección 2. - Vigencia

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio, análisis y consideración del Proyecto del Senado 82, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente informe positivo sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 82, tiene el propósito de añadir un sub-inciso (d) al Inciso (13) del Artículo 1.4 de la Ley 82-2010, según enmendada, conocida como "Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico", con el objetivo de incorporar en la definición de Energía Renovable Alterna el uso de tecnologías a base de hidrógeno, en consonancia con el plan estratégico adoptado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos.

INTRODUCCIÓN

El P. del S. 82 pretende incorporar una enmienda a la Ley 82-2010, según enmendada, conocida como "Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico" (en adelante, Ley 82-2010), a los fines de incluir el hidrógeno como fuente de energía renovable alterna, permitiendo su uso en generación eléctrica, industria y transporte. Su inclusión está alineada con la Ley 17-2019, conocida como la "Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico", que establece la meta de un 100% de energía renovable para 2050.

En armonía con los propósitos de la Ley 17-2019 en torno al objetivo de alcanzar el 100 % de energía renovable para 2050, la Ley 33-2019, según enmendada, conocida como la "Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico," refuerza la adaptación y mitigación del cambio climático, promoviendo la reducción de la dependencia del petróleo y eliminando la generación a base de carbón. Actualmente, la Ley 82-2010 reconoce algunas fuentes de energía renovable alterna, pero no incluye el hidrógeno. Dado su potencial para generar energía limpia y reducir las emisiones contaminantes, se propone su incorporación en esta ley.

En la Exposición de Motivos de la medida se sostiene que Puerto Rico enfrenta graves riesgos por el cambio climático, como sequías, lluvias intensas, huracanes e inundaciones. Tras el paso por Puerto Rico de los huracanes Irma y María, el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América asignó fondos para modernizar el sistema eléctrico, lo que impulsó la búsqueda de alternativas más limpias. El sector energético es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que ha llevado a implementar nuevas políticas para transformar el sistema eléctrico hacia fuentes renovables y sostenibles.

El hidrógeno se posiciona como una fuente de energía renovable con un potencial significativo para la descarbonización y la diversificación del sistema energético. Su producción a través de electrólisis alimentada por fuentes renovables (hidrógeno verde) permite generar un combustible limpio, eficiente y libre de emisiones de carbono, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y transición energética global.

Además de su capacidad para almacenar y distribuir energía, el hidrógeno ofrece ventajas estratégicas en sectores de alto consumo energético, tales como el transporte, la industria y la generación de electricidad, contribuyendo a la estabilidad de la red y la reducción de la dependencia

de combustibles fósiles. Sin embargo, su adopción a gran escala requiere desarrollos tecnológicos, inversiones en infraestructura y un marco regulatorio sólido que garantice su viabilidad y seguridad dentro del ecosistema energético.

La Asamblea Legislativa considera esencial integrar el hidrógeno como fuente de energía para fortalecer la política ambiental y estabilizar los costos energéticos, alineándose con los esfuerzos globales contra el cambio climático. Está, por tanto, comprometida con la implementación de estrategias dirigidas a fomentar fuentes de generación de energía más limpias y costo-eficientes que contribuyan con la causa mundial del cambio climático.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

En aras de analizar y evaluar la medida, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tuvo ante su consideración los comentarios presentados a dos medidas con iguales propósitos presentadas ante la Decimonovena Asamblea Legislativa, pero que ni una ni la otra culminó su trámite legislativo. A saber, el Proyecto de la Cámara 1077 y el Proyecto del Senado 675.

En cuanto al P. de la C. 1077, consideramos los comentarios presentados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Por el P. del S. 675, evaluamos los comentarios presentados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y por el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (Negociado de Energía).

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)

La AEE presentó su memorial explicativo para el P. de la C. 1077 por conducto de su Director Ejecutivo, Josué A. Colón Díaz, quienes se expresaron a favor de su aprobación, argumentando que:

(1) El hidrógeno se ajusta a la política pública energética de Puerto Rico;
(2) puede ayudar a reducir la dependencia de combustibles fósiles; y
(3) su inclusión facilitaría la participación de proyectos de hidrógeno en los procesos de adquisición de energía renovable.

Además, se expresaron a favor argumentando que la inclusión del hidrógeno verde aceleraría la transición a energía renovable. Así como el hecho de que el hidrógeno puede usarse para almacenamiento de energía, generación eléctrica y descarbonización industrial y del transporte. La AEE ve la inclusión del hidrógeno como una oportunidad estratégica, ya que permitiría desarrollar proyectos innovadores y atraer inversiones en energía limpia.

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)

Por su parte, el DRNA presentó comentarios por escrito para el Proyecto de la Cámara 1077 suscrito por su Secretaria Interina, Anaís Rodríguez Vega,en la cual se expresaron a favor de la aprobación del mismo resaltando que:

- El hidrógeno puede reducir la contaminación ambiental;
- es clave para la transición energética y la lucha contra el cambio climático; y
- su implementación a gran escala aún enfrenta desafíos tecnológicos y financieros.

El DRNA, por tanto, apoya la introducción del hidrógeno como una solución ambientalmente sostenible, aunque reconoce la necesidad de desarrollar infraestructura y regulación adecuada.

Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora del Servicio Público

El Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora del Servicio Público presentó su memorial explicativo a favor de la aprobación del Proyecto del Senado 675, por conducto de su Presidente, Edison Avilés Deliz.

El Negociado de Energía no objeta la medida, pero recalca que la definición de "energía renovable" es una prerrogativa del legislador. Reconoce los beneficios del hidrógeno en la reducción de emisiones y la diversificación energética. Señala que aún hay retos económicos y tecnológicos, pues el hidrógeno verde todavía no es competitivo a gran escala.

En síntesis, el Negociado de Energía valida la intención de la medida como parte de la transición energética, pero entiende meritorio advertir sobre los costos y la viabilidad a corto plazo.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobierno, certifica que la aprobación del P. del S. 82, no conlleva un impacto fiscal que genere obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tuvo a su bien revisar los planteamientos expuestos por las agencias antes mencionadas para las medidas radicadas durante la Décimonovena Asamblea Legislativa.

Analizada la intención de la medida en consideración, la Comisión entiende que la misma está alineada con los objetivos plasmados en los proyectos radicados anteriormente, entiéndase, Proyecto del Senado 675 y Proyecto de la Cámara 1077. Ambas medidas radicadas el cuatrienio anterior promovían el hidrógeno como una alternativa renovable. Los memoriales obtenidos por la Comisión de Gobierno reflejan el respaldo de las agencias, en particular, la AEE y el Negociado de Energía respaldan la intención con precaución sobre la viabilidad económica y el DRNA respalda dicho propósito desde una perspectiva ambiental.

En consideración de lo anterior, hacemos énfasis en que el propósito del proyecto ante nuestra consideración es cónsono con la política pública energética existente. A modo de ejemplo, por su parte, la Ley 17-2019, *supra*, ya establece metas específicas dirigidas a la descarbonización y cambio a energía renovable donde el hidrógeno podría ser una pieza clave en el camino hacia un sistema 100% renovable.

El P. del S. 82 está en plena sintonía con la política energética vigente, impulsando la transición hacia fuentes de energía limpia como una estrategia clave para mitigar los efectos del cambio climático, una responsabilidad que nos compete a todos. Esta Comisión reafirma su compromiso de atender con prioridad los asuntos que afectan a nuestro Pueblo. Por ello, respaldamos toda iniciativa que fortalezca la resiliencia de Puerto Rico y garantice el acceso equitativo y sostenible a uno de los servicios esenciales más preciados: la energía eléctrica.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 82,** recomendando su aprobación sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Sen. Ángel Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno del
Senado de Puerto Rico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 88, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para enmendar el Artículo 1.03, añadir un nuevo Artículo 10.08, y reenumerar los actuales Artículos 10.08 al 10.13 como los Artículos 10.09 al 10.14, respectivamente, de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico"; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 170-2002, según enmendada; y derogar la Ley Núm. 240-2002, según enmendada, a los fines de consolidar las disposiciones relativas a la alfabetización en Braille de estudiantes ciegos y parcialmente ciegos, promoviendo su evaluación individual y asegurando la igualdad de oportunidades educativas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación inclusiva constituye un derecho fundamental que garantiza el acceso equitativo a una enseñanza de calidad para todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas o intelectuales. En particular, los estudiantes con discapacidades visuales enfrentan retos significativos que exigen herramientas, programas y servicios especializados para alcanzar su máximo potencial académico, social y personal. En este contexto, el método Braille se destaca como una herramienta esencial para la alfabetización de los estudiantes ciegos y parcialmente ciegos, permitiéndoles acceder al conocimiento de manera autónoma y fomentar su integración y participación activa en el entorno educativo y social. Sin embargo, la efectividad de este método depende de un marco normativo que promueva su enseñanza, uso y manejo adecuado, así como la evaluación individualizada de los estudiantes que lo utilizan.

A pesar de los esfuerzos de la legislación vigente por abordar estas necesidades a través de iniciativas como la Ley 240-2002, la fragmentación de las disposiciones legales y la existencia de estructuras redundantes han dificultado su implementación efectiva. La descentralización de responsabilidades entre diferentes organismos ha generado barreras burocráticas que dificultan los procesos, incrementan los costos y, en algunos casos, limitan el acceso a los recursos necesarios. Por ello, se hace imprescindible consolidar las disposiciones relacionadas con la alfabetización en Braille bajo un solo marco normativo, reorganizando las funciones y responsabilidades en una estructura más eficiente y efectiva.

Esta medida responde a esa necesidad al agrupar todas las disposiciones relacionadas con la enseñanza del método Braille en el Departamento de Educación, eliminando redundancias y fortaleciendo la capacidad del sistema educativo para atender a los estudiantes ciegos y parcialmente ciegos de manera integral. Con esta legislación se asegura la disponibilidad del método Braille para estos estudiantes, estableciendo además procesos claros para su evaluación individualizada con el fin

de determinar las estrategias educativas más efectivas. También se promueve la capacitación de maestros mediante estándares específicos para su certificación, garantizando que posean las competencias necesarias para impartir una enseñanza de calidad. Asimismo, se establece que las editoras de libros suministren materiales en formatos accesibles, facilitando la producción de textos en Braille para todas las materias del currículo escolar.

Adicionalmente, la legislación dispone que los fondos excedentes de programas de ayudas económicas sean redirigidos exclusivamente hacia la implementación de los procesos relacionados con la alfabetización en el sistema Braille, maximizando el impacto de estos recursos y promoviendo la equidad educativa. Con la derogación de la Ley 240-2002, se eliminan estructuras organizacionales innecesarias, concentrando las responsabilidades en el Departamento de Educación, lo que permitirá una gestión más eficiente de los recursos y un servicio más efectivo a los estudiantes.

Esta medida busca garantizar la alfabetización en el método Braille, además de promover la equidad educativa, la inclusión plena y el empoderamiento de los estudiantes ciegos y parcialmente ciegos. Al proporcionarles herramientas para comunicarse y aprender de manera efectiva, se fomenta su independencia y se amplían sus oportunidades futuras en la sociedad. En este sentido, la legislación reafirma el compromiso del Gobierno de Puerto Rico con el derecho de todos los estudiantes a recibir una educación de calidad que les permita desarrollar al máximo su potencial, estableciendo un modelo educativo que prioriza la eficiencia, la equidad y la accesibilidad. Con este esfuerzo, se sientan las bases para un sistema educativo inclusivo que responde de manera integral a las necesidades de toda su población estudiantil.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1.03 de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 1.03.- Definiciones

A efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:

1…

…

6. Braille: Sistema para leer y escribir mediante el tacto<u>, diseñado para personas ciegas o con discapacidad visual</u>. Conocido en español como "Signos Básicos de la Escritura Española", y en inglés como "Standard English Braille".

[6] *7*…

[7] *8*…

[8] *9*…

[9] *10*…

[10] *11*…

[11] *12*…

[12] *13*…

[13] *14*…

[14] *15*…

[15] *16*…

[16] *17*…

[17] *18*…

[18] *19*…

[19] *20*…

[20] *21…*
[21] *22…*
[22] *23…*
[23] *24…*
[24] *25…*
[25] *26...*

27. Estudiante ciego: Es aquella persona que requiere servicios de educación especial y que cumpla con alguno de los siguientes: (a) aunque utilice espejuelos, tiene una visión funcional de 20/200 o menor en su mejor ojo que limita el diámetro de su campo visual a una distancia angular de no más de 20 grados; (b) tiene un diagnóstico con una condición visual de deterioro progresivo; (c) aunque posea una visión funcional que le permita leer, pero cuyo diagnóstico de deterioro visual progresivo sea de tal grado que sea previsible que en un futuro cercano sea incapaz de leer textos impresos en tinta.

[26] *28…*
[27] *29…*
[28] *30…*
[29] *31…*
[30] *32…*
[31] *33…*
[32] *34…*
[33] *35…*
[34] *36…*
[35] *37…*
[36] *38…*
[37] *39…*
[38] *40…*
[39] *41…*
[40] *42…*
[41] *43…*
[42] *44…*
[43] *45…*
[44] *46…*
[45] *47…*
[46] *48…*
[47] *49…*
[48] *50…*
[49] *51…*
[50] *52…*
[51] *53…*
[52] *54…*
[53] *55…*
[54] *56…*
[55] *57…*
[56] *58…*"

Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 10.08 en la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, que leerá como sigue:

"Artículo 10.08.- Alfabetización de los estudiantes ciegos en las escuelas públicas

A. Propósitos

Son los propósitos de este Artículo, los siguientes:

(a) Garantizar la disponibilidad y el acceso a la enseñanza del método Braille para los estudiantes ciegos y parcialmente ciegos, así como una evaluación individual de su conocimiento, uso y manejo del mismo, asegurando la igualdad de oportunidades educativas;

(b) Proveer las bases legales para que se establezcan los niveles de competencia e instrucción en el sistema de lectura y escritura en Braille;

(c) Proveer material en formato computarizado que pueda ser reproducido en Braille; y

(d) Establecer unos requisitos mínimos para la certificación de maestros en educación en Braille.

B. Evaluación y planificación del Programa Educativo Individualizado (PEI)

Una vez que se establezca y certifique que un estudiante es ciego o parcialmente ciego, su educación se llevará a cabo principalmente mediante el Sistema Braille, a menos que el Comité de Ubicación y Planificación (COMPU) certifique, basándose en la evaluación del estudiante, que el Braille no es el método más adecuado para su educación. El estudiante deberá tener acceso y podrá beneficiarse, si así lo desea, de servicios o dispositivos de asistencia tecnológica.

La certificación deberá justificar, en términos del aprovechamiento académico a largo plazo del estudiante, que el Sistema Braille no es el método adecuado para su educación. Los padres o custodios del estudiante tendrán la potestad de solicitar que la enseñanza del estudiante se imparta fundamentalmente en Braille.

El documento del PEI deberá incluir:

(a) Certificación médica del estado visual del estudiante;

(b) Cómo se implementará la educación del estudiante mediante el Sistema Braille;

(c) Período de tiempo en el cual se impartirá el Braille; y

(d) Establecer el nivel de comprensión de lectura y escritura que proponga lograr durante dicho período y los parámetros utilizados para su medición.

C. Estándares de competencia e instrucción

La enseñanza, uso y manejo del sistema que se brinde a un niño ciego deberá ser tal que le permita comunicarse de manera efectiva y eficiente con otros estudiantes de su mismo nivel o grado. El PEI de cada estudiante deberá incluir:

(a) El resultado de la evaluación señalada en el inciso B;

(b) La forma en que habrá de integrarse el Braille como método de enseñanza a las demás actividades curriculares;

(c) La fecha de inicio de la educación en Braille;

(d) El período que cubrirá dicha enseñanza, cantidad y duración de cada clase; y

(e) El nivel de comprensión de lectura y escritura que se proponga lograr durante dicho período y los parámetros utilizados para su medición.

D. Material educativo

El Departamento de Educación de Puerto Rico requerirá a toda casa editora que publique libros para ser utilizados como parte del currículo del Departamento que supla una copia de dicho material en un disco de computadoras en el formato de "American Standard Code for Information Interchange" (ASCII). Además de temas literarios, la editora suplirá, bajo este mismo formato, materiales de otras materias, tales como, ciencias, matemáticas, música, etc.

E. Desarrollo y Producción de Materiales.

En el desarrollo y producción de los materiales educativos de los estudiantes ciegos, el Departamento de Educación prestará su colaboración a las casas editoras, en los siguientes asuntos:

(a) Para que los libros de texto sean traducidos al lenguaje ASCII, de manera que se puedan reproducir en Braille;

(b) Propender a mejorar la conversión de materiales al lenguaje ASCII;

(c) Colaborar en el diseño y preparación de nuevos programas.

F. Certificación de Maestros; Requisitos

Todo maestro certificado como maestro de estudiantes ciegos o visualmente discapacitado, deberá, como parte del proceso de certificación, demostrar una destreza y competencia adecuadas en la escritura y lectura en el Sistema Braille.

El Departamento de Educación evaluará dichos maestros de acuerdo con los estándares establecidos por el "National Library Service for The Blind and Physically Handicaped" de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica.

G. Disposiciones Generales

El Secretario establecerá el presupuesto, la planificación, las normas y reglamentos, así como las estrategias de enseñanza que mejor entienda para implantar las disposiciones de este Artículo.

Se dispone, además, que todo fondo sobrante del programa de ayudas educativas y asistencia a la familia, creado en virtud de la Ley Núm. 170-2002, según enmendada, el Departamento de Educación será redirigido, exclusivamente, para ser utilizado en la implantación de las disposiciones de este Artículo."

Sección 3.- Se reenumeran los actuales Artículos del 10.08 al 10.13 de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, como los artículos 10.09 al 10.14, respectivamente.

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 170-2002, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 6.- Fondos para becas y ayudas educativas

…

…

Los fondos asignados al Departamento de Educación de Puerto Rico serán para otorgar ayudas educativas y asistencia a las familias. De estos fondos, se debe incluir una beca escolar especial otorgada a estudiantes con discapacidades o condiciones especiales, que reciben servicios a través de la alternativa de Salón Contenido del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, una vez demuestren talento o habilidades especiales en disciplinas, tales como música, artes plásticas, baile, teatro, deportes o algún área de estudios particular. De igual manera, el quince por ciento (15%) del presupuesto actual de becas asignadas al Departamento de Educación se destinará para becas a favor de estudiantes dotados

o con alto potencial intelectual con el objetivo que puedan tomar cursos a nivel universitario de mayor complejidad. El Departamento de Educación de Puerto Rico establecerá criterios uniformes de elegibilidad para estudiantes de nivel elemental y secundario. Dichos criterios estarán estrictamente basados en el desempeño académico de los estudiantes de ambos niveles, sin consideración de su ingreso familiar. En el caso de las becas escolares especiales del Programa de Educación Especial, no se tomará en consideración el desempeño académico. *Se establece, además, que todo fondo sobrante del programa de ayudas educativas y asistencia a la familia, conforme a lo dispuesto en este párrafo, el Departamento de Educación lo redirigirá, exclusivamente, para ser utilizado en la implantación de las disposiciones contenidas en el Artículo 10.08 de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa", referente a la alfabetización de los estudiantes ciegos en las escuelas públicas.*"

Sección 5.- Se deroga la Ley Núm. 240-2002, conocida como "Ley Para Garantizar El Derecho de Alfabetización de Los Niños Ciegos en las escuelas públicas de Puerto Rico", así como cualquier otra ley, regla de procedimiento o norma que se encuentre en conflicto con las disposiciones aquí contenidas.

Sección 6.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.

Sección 7.- Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.

Sección 8.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 88, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Positivo de la presente medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 88, tiene el propósito de enmendar el Artículo 1.03, añadir un nuevo Artículo 10.08, y reenumerar los actuales Artículos 10.08 al 10.13 como los Artículos 10.09 al 10.14, respectivamente, de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico"; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 170-2002, según enmendada; y derogar la Ley Núm. 240-2002, según enmendada, a los fines de consolidar las disposiciones relativas a la alfabetización en Braille de estudiantes ciegos y parcialmente ciegos, promoviendo su evaluación individual y asegurando la igualdad de oportunidades educativas.

INTRODUCCIÓN

La alfabetización en Braille es una herramienta esencial para la formación académica, social y personal de los estudiantes con discapacidad visual. Aunque existen leyes previas que abordan esta temática, su fragmentación ha dificultado la aplicación efectiva de servicios. El Proyecto del Senado 88 responde a esa necesidad de reorganizar y fortalecer el marco legal mediante la incorporación de estas disposiciones en la Ley de Reforma Educativa. Además, se busca canalizar recursos de manera

más eficiente al redirigir fondos sobrantes del programa de ayudas educativas hacia la alfabetización en Braille.

De igual manera, el P. del S. 88 establece procesos claros para la enseñanza del Braille, la evaluación individualizada del estudiante, y la certificación docente en esta destreza. También exige a las casas editoras la entrega de materiales educativos en formatos accesibles, y al Departamento de Educación (DE) la producción y colaboración en la traducción de contenidos al formato Braille.

El proyecto representa una iniciativa de consolidación legal que fortalece el cumplimiento de derechos educativos para estudiantes con discapacidad visual, promoviendo su autonomía, equidad y participación plena. A su vez, propone el uso eficiente de fondos existentes sin requerir asignaciones nuevas inmediatas, lo cual contribuye a su viabilidad fiscal.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis del P. del S. 88, solicitó memoriales explicativos a las siguientes organizaciones y/o agencias: Departamento de Educación; Asociación de Maestros de Puerto Rico; Asociación Nacional de Ciegos de Puerto Rico, el Centro Educativo para Ciegos e Impedidos de Puerto Rico y el National Federation Blind of Puerto Rico.

Departamento de Educación

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), expresó su aval al Proyecto del Senado 88, destacando que representa un avance hacia la consolidación normativa y la mejora en la prestación de servicios para estudiantes ciegos. Informaron que ya proveen servicios especializados como alfabetización en Braille, orientación y movilidad, uso del ábaco y el código Nemeth, así como colaboraciones con la UPR y la American Printing House.

El Departamento consideró que la medida facilitará el cumplimiento con el mandato constitucional de educación inclusiva y equitativa. Como única recomendación, propusieron que las definiciones de "Braille" y "estudiante ciego" se alineen con los estándares federales para asegurar cumplimiento normativo. Reiteraron su disposición a colaborar en la implementación de esta ley.

Esta comisión acogió la recomendación del Departamento de Educación de ampliar la definición de “Braille” en la medida para atemperarla a la definición de la reglamentación federal existente.

Asociación de Maestros De Puerto Rico

La Asociación de Maestros de Puerto Rico, en adelante, AMPR; apoyó firmemente el Proyecto del Senado 88, resaltando su valor como una medida de justicia educativa para los estudiantes ciegos y parcialmente ciegos. La organización consideró que la consolidación normativa propuesta permite superar omisiones significativas en la Ley de Reforma Educativa y garantiza el acceso equitativo a los servicios de alfabetización en Braille.

Destacaron que el Braille sigue siendo una herramienta esencial, aun con los avances tecnológicos, y que su enseñanza fomenta la autonomía y el éxito académico de los estudiantes. A nivel simbólico, subrayaron el legado histórico de la AMPR en la educación de personas ciegas. Recomendaron aprobar el proyecto en su versión propuesta y avanzar hacia un Código Educativo que compile leyes dispersas para mayor coherencia normativa.

National Federation of the Blind of Puerto Rico (NFB-PR)

La National Federation of the Blind of Puerto Rico reconoció la buena intención del P. del S. 88, pero manifestó su oposición a la derogación de la Ley 240-2002. En su lugar, propusieron que dicha ley sea enmendada y fortalecida. Consideran que centralizar todas las disposiciones en la Ley de Reforma Educativa podría debilitar protecciones específicas existentes.

Estos indicaron que es necesario evaluar la competencia de los instructores de Braille, pero también es fundamental crear programas de formación y certificación accesibles. De igual manera mencionaron, que se debe garantizar que haya suficiente personal capacitado para enseñar Braille a todos los estudiantes ciegos que lo necesiten. Entienden que la ley debe fomentar la creación de programas de desarrollo profesional para maestros y otros profesionales de la educación especial.

A su vez proponen que se establezca un programa formal de formación y certificación de instructores de Braille, con oportunidades de adiestramiento continuo, en lugar de simplemente evaluar y remover a los actuales instructores sin ofrecer alternativas para mejorar sus habilidades.

Destacaron la importancia de mantener y ampliar la enseñanza del Braille, complementada por tecnologías digitales. También solicitaron que todos los materiales digitales sean accesibles para lectores de pantalla y dispositivos Braille, y que se establezcan programas de certificación y capacitación continua para instructores. Recalcaron la necesidad de que cualquier reforma se haga en consulta con la comunidad ciega y expertos en accesibilidad.

Centro Educativo para Ciegos e Impedidos de Puerto Rico

El Centro Educativo para Ciegos e Impedidos de Puerto Rico establece que un aspecto importante es el método de enseñanza a utilizarse para enseñar matemáticas e inglés, ya que ambos métodos nunca han existido en Puerto Rico. Expresa que ambos métodos tienen dos versiones cada uno: matemáticas: Nemeth Code y matemáticas regulares en Braille; inglés: Contracted Braille y United English Braile (UEB). Por lo que entienden que debe analizarse cual método sería el más fácil para los estudiantes ciegos.

De igual manera expresan que es necesario se adiestre a los maestros en el sistema Braille, ya que en Puerto Rico no hay ninguna universidad que ofrezca cursos para maestros de estudiantes ciegos o parcialmente ciegos. No obstante, expresan que el Municipio de San Juan tiene una universidad acreditada en sistema Braille, con la cual el Departamento de Educación podría establecer alianzas. Estos dijeron estar en la mejor disposición de colaborar para coordinar los cursos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 88, no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

El Proyecto del Senado 88 es una medida necesaria y pertinente para garantizar el derecho a una educación accesible, equitativa e inclusiva para los estudiantes con discapacidad visual. El proyecto corrige deficiencias estructurales del marco normativo actual, fortalece la coordinación institucional, y promueve la eficiencia en el uso de recursos.

A tenor con lo antes expuesto, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico previo al estudio y consideración del **Proyecto del Senado 88**, recomienda la aprobación de la medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Hon. Brenda Pérez Soto
Presidenta
Comisión de Educación, Arte y Cultura"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 211, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para enmendar los artículos 8.030 y 8.070 de la Ley 194-2011, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", con el propósito de reducir los periodos de espera que deben transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado o a los patronos de PYMES o a los miembros de asociaciones bona fides, antes de que puedan ser elegibles a recibir ciertos beneficios bajo los términos del plan médico; disponer para que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico promulgue o enmiende las cartas normativas o los reglamentos que sean necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la aprobación de la Ley 194-2011, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", el Gobierno de Puerto Rico adoptó como política pública el garantizar una regulación y reglamentación más efectiva de la industria de los seguros de salud, incluyendo la regulación de aquellas entidades que ofrecen planes médicos grupales e individuales. Como parte de esa política pública, se entendió vital hacer cumplir las normas promovidas por la Reforma de Salud Federal implantada a través del "Patient Protection and Affordable Care Act" y el "Health Care and Education Reconciliation Act".

De igual forma, a nivel estatal se entendió necesario recoger y uniformar, en lo posible, en un nuevo cuerpo legal conocido como el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico, las normas legales aplicables a esta importante industria, la cual ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los pasados años.

La política pública adoptada en virtud de la antes citada Ley 194, tiene como fin primordial lograr que todos los puertorriqueños tengan acceso a más y mejores servicios de salud y promover un mayor crecimiento y desarrollo de esta industria. En adición, se reconoció como política pública que la salud es un asunto de naturaleza ética, de justicia social y de derechos humanos sobre el ánimo de lucro. Por tanto, esta ley contempla que, en caso de necesitar ser interpretada o en caso de surgir algún conflicto entre lo establecido en este Código de Seguros de Salud y cualquier otra legislación, la interpretación que prevalecerá será aquella que resulte más favorable para el paciente.

A tenor con lo anterior, ninguna póliza, contrato, certificado o acuerdo ofrecido o emitido en Puerto Rico por una organización de seguros de salud o asegurador para proveer, entregar, tramitar,

pagar o reembolsar el costo de servicios de hospitalización dispondrá que la interpretación final de los términos del contrato estará sujeta a la discreción por parte de la organización de seguros de salud o asegurador, ni contendrán normas de interpretación o revisión que contravengan las disposiciones del Código de Seguros de Salud o Código de Seguros de Puerto Rico.

Hay que señalar que, la Ley define a un "asegurador" como una entidad sujeta a las leyes y reglamentos de seguros de Puerto Rico o sujeta a la jurisdicción del Comisionado, que contrata o se ofrece a contratar para proveer, suministrar, tramitar o pagar los costos de servicios de cuidado de salud o reembolsar los mismos, incluyendo cualquier corporación con o sin fines de lucro de servicios hospitalarios y de salud, las organizaciones de servicios de salud u otra entidad que provea planes de beneficios, servicios o cuidado de la salud. Por su parte, el "asegurado" es definido como el tenedor de una póliza o certificado, suscriptor, u otra persona que participe de los beneficios de un plan médico.

En lo que respecta a la presente legislación, esta persigue enmendar el "Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", con el propósito de reducir los periodos de espera que deben transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado o a los patronos de PYMES o a los miembros de asociaciones bona fides, antes de que puedan ser elegibles a recibir ciertos beneficios bajo los términos del plan médico. Asimismo, disponer para que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico promulgue o enmiende las cartas normativas o los reglamentos que sean necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esta Ley.

Sobre lo antes expuesto, hoy día, todo asegurado de un plan médico tiene que esperar un término de tiempo que puede llegar a ser de hasta noventa (90) días, previo a poder recibir la totalidad de los servicios que se definen en la póliza que suscribió. A este término de tiempo se le ~~llamara~~ *llama* "periodo de espera", y el Código de Seguros de Salud lo define como el periodo que *"...debe transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado antes de que pueda ser elegible a recibir ciertos beneficios bajo los términos del plan médico. El periodo de espera en ningún caso podrá exceder de noventa (90) días. No obstante, los servicios de sala de emergencias no tendrán periodo de espera y el periodo de espera para los servicios preventivos no podrá exceder los treinta (30) días"*. Este periodo de espera le es igualmente aplicable a los planes médicos de patronos de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a grupos pequeños de las asociaciones bona fides.

No obstante, entendemos que no hace ningún sentido permitir por Ley que un plan médico les aplique a sus suscriptores "periodos de espera" de hasta tres meses, cuando ya esa póliza fue firmada por las partes y el asegurado paga por la misma. ~~Sabemos que los pacientes~~ *Las personas* no escogen cuando enfermarse, y si suscribieron una póliza con un plan médico, el servicio debe hacerse disponible sin dilación alguna.

En estos momentos, el inciso (c) del Artículo 8 de la Ley 194-2000, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente", claramente señala que:

> **[t]odo plan de cuidado de salud en Puerto Rico proveerá beneficios de servicios de emergencia, sin período de espera.** Dichos servicios de emergencia serán provistos sin la necesidad de autorización previa por parte de la entidad aseguradora; serán provistos, además, independientemente de que el proveedor de tales servicios de emergencia sea un proveedor participante con respecto a los mismos. En caso de que los servicios de emergencia sean provistos a un paciente por un proveedor no contratado por la entidad aseguradora, el paciente no será responsable de un pago por los servicios que exceda la cantidad aplicable, si hubiese recibido dichos servicios de un proveedor contratado por la entidad aseguradora. La entidad aseguradora compensará al proveedor que ofrezca los servicios, y éste vendrá obligado a aceptar dicha compensación por una cantidad que no será menor a la contratada con los

proveedores a su vez contratados por la entidad aseguradora para ofrecer los mismos servicios. Además, bajo estas circunstancias, tales servicios de emergencia serán provistos independientemente de las condiciones del plan de cuidado de salud correspondiente. (Énfasis nuestro)

Así las cosas, y tomando en cuenta que una persona puede necesitar recibir un servicio de salud que, no necesariamente constituya una emergencia, estimamos justo, prudente y razonable, enmendar el "Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", con el propósito de reducir los periodos de espera que deben transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado o a los patronos de PYMES o a los miembros de asociaciones bona fides, antes de que puedan ser elegibles a recibir ciertos beneficios bajo los términos del plan médico.

Ciertamente, con esta Ley, proveemos ~~el~~ *un* marco legal apropiado para propiciar que un mayor número de personas tengan acceso a las cubiertas de los planes médicos privados cuando las necesiten. De igual manera, se fomenta el acceso a programas de servicios preventivos e inmunizaciones casi inmediatamente.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el inciso (O) del Artículo 8.030 de la Ley 194-2011, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 8.030.- Definiciones

Para los fines de este Capítulo:

A …

…

O. "Periodo de espera" significa el periodo que debe transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado antes de que pueda ser elegible a recibir ciertos beneficios bajo los términos del plan médico. El periodo de espera en ningún caso podrá exceder de **[noventa (90)]** *treinta (30)* días. No obstante, los servicios de sala de emergencias no tendrán periodo de espera y el periodo de espera para los servicios preventivos no podrá exceder los **[treinta (30)]** *quince (15)* días.

…

Sección 2.- Se enmienda el subinciso (3) del inciso (C) del Artículo 8.070 de la Ley 194-2011, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 8.070. — Disponibilidad del Plan Médico

A …

…

C. Los planes médicos que cubren a los patronos de PYMES y a las asociaciones bona fides deben cumplir con las siguientes disposiciones:

(1) …

…

(3) Los planes médicos de patronos PYMES o grupos pequeños de las asociaciones bona fides no podrán tener un periodo de espera que exceda los **[noventa (90)]** *treinta (30)* días. No obstante, los servicios de sala de emergencias no tendrán periodo de espera y el periodo de espera para los servicios preventivos no podrá exceder los **[treinta (30)]** *quince (15)* días. En el caso de un plan médico que contenga un periodo de espera, el asegurador deberá reducir el mismo si el asegurado tiene una cubierta acreditable, y esta haya terminado en una fecha no anterior a los noventa (90) días previos a la fecha de suscripción al nuevo plan

médico. La reducción dispuesta en este inciso será por la totalidad del período de cubierta acreditable.

…"

Sección 3.- El Comisionado de Seguros de Puerto Rico promulgará o enmendará las cartas normativas o los reglamentos que sean necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esta Ley, dentro de los noventa (90) días siguientes a su aprobación.

Sección 4.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.

Sección 5.- Si cualquier palabra, inciso, sección, artículo o parte de esta Ley fuese declarado inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaración no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones y partes de esta Ley, sino que su efecto se limitará a la palabra, inciso, oración, artículo o parte específica y se entenderá que no afecta o perjudica en sentido alguno su aplicación o validez en el remanente de sus disposiciones.

Sección 6.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 211, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 211 tiene como propósito *"…enmendar los artículos 8.030 y 8.070 de la Ley 194-2011, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", con el propósito de reducir los periodos de espera que deben transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado o a los patronos de PYMES o a los miembros de asociaciones bona fides, antes de que puedan ser elegibles a recibir ciertos beneficios bajo los términos del plan médico; disponer para que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico promulgue o enmiende las cartas normativas o los reglamentos que sean necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados"*.

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste al proyecto de autos. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al señalarnos que

> [c]on la aprobación de la Ley 194-2011, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", el Gobierno de Puerto Rico adoptó como política pública el garantizar una regulación y reglamentación más efectiva de la industria de los seguros de salud, incluyendo la regulación de aquellas entidades que ofrecen planes médicos grupales e individuales. Como parte de esa política pública, se entendió vital hacer cumplir las normas promovidas por la Reforma de Salud Federal implantada a través del "Patient Protection and Affordable Care Act" y el "Health Care and Education Reconciliation Act".
>
> De igual forma, a nivel estatal se entendió necesario recoger y uniformar, en lo posible, en un nuevo cuerpo legal conocido como el Código de Seguros de Salud de

Puerto Rico, las normas legales aplicables a esta importante industria, la cual ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los pasados años.

La política pública adoptada en virtud de la antes citada Ley 194, tiene como fin primordial lograr que todos los puertorriqueños tengan acceso a más y mejores servicios de salud y promover un mayor crecimiento y desarrollo de esta industria. En adición, se reconoció como política pública que la salud es un asunto de naturaleza ética, de justicia social y de derechos humanos sobre el ánimo de lucro. Por tanto, esta ley contempla que, en caso de necesitar ser interpretada o en caso de surgir algún conflicto entre lo establecido en este Código de Seguros de Salud y cualquier otra legislación, la interpretación que prevalecerá será aquella que resulte más favorable para el paciente.

A tenor con lo anterior, ninguna póliza, contrato, certificado o acuerdo ofrecido o emitido en Puerto Rico por una organización de seguros de salud o asegurador para proveer, entregar, tramitar, pagar o reembolsar el costo de servicios de hospitalización dispondrá que la interpretación final de los términos del contrato estará sujeta a la discreción por parte de la organización de seguros de salud o asegurador, ni contendrán normas de interpretación o revisión que contravengan las disposiciones del Código de Seguros de Salud o Código de Seguros de Puerto Rico.

Hay que señalar que, la Ley define a un "asegurador" como una entidad sujeta a las leyes y reglamentos de seguros de Puerto Rico o sujeta a la jurisdicción del Comisionado, que contrata o se ofrece a contratar para proveer, suministrar, tramitar o pagar los costos de servicios de cuidado de salud o reembolsar los mismos, incluyendo cualquier corporación con o sin fines de lucro de servicios hospitalarios y de salud, las organizaciones de servicios de salud u otra entidad que provea planes de beneficios, servicios o cuidado de la salud. Por su parte, el "asegurado" es definido como el tenedor de una póliza o certificado, suscriptor, u otra persona que participe de los beneficios de un plan médico.

En lo que respecta a la presente legislación, esta persigue enmendar el "Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", con el propósito de reducir los periodos de espera que deben transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado o a los patronos de PYMES o a los miembros de asociaciones bona fides, antes de que puedan ser elegibles a recibir ciertos beneficios bajo los términos del plan médico. Asimismo, disponer para que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico promulgue o enmiende las cartas normativas o los reglamentos que sean necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esta Ley.

Sobre lo antes expuesto, hoy día, todo asegurado de un plan médico tiene que esperar un término de tiempo que puede llegar a ser de hasta noventa (90) días, previo a poder recibir la totalidad de los servicios que se definen en la póliza que suscribió. A este término de tiempo se le llama "periodo de espera", y el Código de Seguros de Salud lo define como el periodo que "…debe transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado antes de que pueda ser elegible a recibir ciertos beneficios bajo los términos del plan médico. El periodo de espera en ningún caso podrá exceder de noventa (90) días. No obstante, los servicios de sala de emergencias no tendrán periodo de espera y el periodo de espera para los servicios preventivos no podrá exceder los treinta (30) días". Este periodo de espera le es igualmente aplicable a los planes

médicos de patronos de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a grupos pequeños de las asociaciones bona fides.

No obstante, entendemos que no hace ningún sentido permitir por Ley que un plan médico les aplique a sus suscriptores "periodos de espera" de hasta tres meses, cuando ya esa póliza fue firmada por las partes y el asegurado paga por la misma. Las personas no escogen cuando enfermarse, y si suscribieron una póliza con un plan médico, el servicio debe hacerse disponible sin dilación alguna.

En estos momentos, el inciso (c) del Artículo 8 de la Ley 194-2000, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente", claramente señala que:

[t]odo plan de cuidado de salud en Puerto Rico proveerá beneficios de servicios de emergencia, sin período de espera. Dichos servicios de emergencia serán provistos sin la necesidad de autorización previa por parte de la entidad aseguradora; serán provistos, además, independientemente de que el proveedor de tales servicios de emergencia sea un proveedor participante con respecto a los mismos. En caso de que los servicios de emergencia sean provistos a un paciente por un proveedor no contratado por la entidad aseguradora, el paciente no será responsable de un pago por los servicios que exceda la cantidad aplicable, si hubiese recibido dichos servicios de un proveedor contratado por la entidad aseguradora. La entidad aseguradora compensará al proveedor que ofrezca los servicios, y éste vendrá obligado a aceptar dicha compensación por una cantidad que no será menor a la contratada con los proveedores a su vez contratados por la entidad aseguradora para ofrecer los mismos servicios. Además, bajo estas circunstancias, tales servicios de emergencia serán provistos independientemente de las condiciones del plan de cuidado de salud correspondiente.

Así las cosas, y tomando en cuenta que una persona puede necesitar recibir un servicio de salud que, no necesariamente constituya una emergencia, estimamos justo, prudente y razonable, enmendar el "Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", con el propósito de reducir los periodos de espera que deben transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado o a los patronos de PYMES o a los miembros de asociaciones bona fides, antes de que puedan ser elegibles a recibir ciertos beneficios bajo los términos del plan médico.

Ciertamente, con esta Ley, proveemos un marco legal apropiado para propiciar que un mayor número de personas tengan acceso a las cubiertas de los planes médicos privados cuando las necesiten. De igual manera, se fomenta el acceso a programas de servicios preventivos e inmunizaciones casi inmediatamente.

Así pues, se propone enmendar el "Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", con el objetivo de reducir los periodos de espera que deben transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado o a los patronos de PYMES o a los miembros de asociaciones bona fides, antes de que puedan ser elegibles a recibir ciertos beneficios bajo los términos del plan médico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la debida evaluación del proyecto de marras, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico contó con los comentarios de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), de Triple-S Management Corporation, de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico y del

Departamento de Justicia. Las entidades privadas antes mencionadas se expresaron en contra, mientras las públicas lo hicieron a favor del proyecto. Valga indicar que, se le solicitó memorial explicativo al Centro Unido de Detallistas, pero al momento de la redacción de este informe, aun dicho documento no se nos había sido remitido. Presumiremos no objetan la medida, tal cual fuera presentada.

En la ponencia sometida por ACODESE, estos basaron su oposición en el supuesto de que

> [e]l periodo de espera es aquel término de tiempo que debe esperar el asegurado, desde el momento en que contrata su póliza de seguros de salud, hasta el momento en que puede utilizar y beneficiarse completamente de todos los servicios cubiertos bajo su plan médico. Bajo nuestro de estado de derecho actual, este periodo de espera no debe superar los noventa (90) días, de acuerdo con del (sic) Patient Protection and Affordable Care Act (comúnmente conocido como Obamacare) y del Código de Seguros de Salud. Este periodo de espera sirve como amortiguador para evitar la selección adversa o compra de reclamaciones al seguro de salud, lo que abona a la distribución adecuada del riesgo actuarial y permite que los aseguradores u organizaciones de servicios de salud puedan ofrecer seguros de salud por una prima asequible a los consumidores.
>
> En ese sentido, el no contemplar un periodo de espera resultaría en que una persona que no cuenta con un plan médico y de un momento a otro se enferma o le surge alguna condición de salud, que no es una situación de emergencia, contrate con un plan médico para atender esa situación en ese momento particular y de forma inmediata, lo que aumentaría el riesgo y utilización del plan médico. De la misma manera, reducir el periodo de espera de noventa (90) días, a uno de treinta (30) días, también representa un aumento en el riesgo y utilización de los servicios médicos brindados a los aseguradores, lo que, a su vez, se traduciría en un aumento en primas para sufragar los costos por servicios médicos brindados a estos asegurados.

Añadieron que

> …el periodo de espera para servicios preventivos como, por ejemplo, el asesoramiento o evaluación anual con algún profesional de la salud, con el propósito de que el paciente mantenga un estilo de vida saludable, es de treinta (30) días, lo que equivale a un término de tiempo sustancialmente menor que el máximo de 90 días provisto en el Código de Seguros de Salud actualmente. Aun así, el P. del S. 211 propone reducir este plazo a quince (15) días. Además, reconociéndose que hay situaciones de salud que no pueden esperar a ser atendidas, por el riesgo que representan a la vida o salud del paciente, en aquellos casos que el paciente requiere de servicios de sala de emergencia, no se les aplica el término de periodo de espera.
>
> Finalmente, es importante recordar que, la prima de los planes médicos considera, entre otros aspectos, el riesgo y la utilización de los servicios de salud. Dentro de este análisis influyen varios factores, incluyendo el termino de tiempo que constituye el periodo de espera para que los asegurados puedan beneficiarse de la totalidad de los servicios que cubre su seguro de salud, toda vez que este periodo permite una amortiguación en el riesgo y utilización del plan médico. En la medida en que este periodo de espera se vea reducido, aumentará el riesgo y la utilización del seguro, lo que redundará en un aumento de primas para los asegurados, dificultando el

acceso que puedan tener estos a un seguro de salud, una consecuencia incompatible con la política pública esbozada.

Finalmente, acotaron que *"...de aprobarse las enmiendas propuestas, el efecto práctico e inevitable será el aumento en las primas de los planes médicos"*. Por tanto, no endosaron *"...la aprobación del Proyecto del Senado 211"*.

En el caso de Triple-S Management Corporation, estos se expresaron en términos similares a ACODESE. Sostuvieron que

> [s]egún la teoría económica, la demanda por los seguros de salud depende de las actitudes del asegurado hacia el riesgo, la variabilidad de los gastos médicos, la eficacia del cuidado médico cubierto por el seguro, los ingresos y el nivel de las primas. De igual manera, el precio promedio de la atención médica puede depender de la complejidad de los servicios coma también de las dinámicas en la negociación entre los proveedores y los aseguradores. La cantidad promedio dependerá de la demanda de atención médica de los asegurados, la disposición de los proveedores a ofrecer servicios conforme con las tarifas vigentes y las controles de sobre los servicios de salud.
>
> Uno de los conceptos de asimetría más estudiados por los analistas de seguros se conoce come la selección adversa, un fenómeno económico que se provoca cuando se produce un desequilibrio de información entre compradores y vendedores en un mercado. En el contexto de los seguros de salud, la selección adversa surge cuando las personas con mayores riesgos tienen más probabilidades de contratar un seguro mientras que las personas más sanas optan por no hacerlo. Esto provoca un aumento en los costos para los aseguradores y, consecuentemente, aumenta el costo de las primas para todo asegurado, enfermos y saludables por igual.
>
> Como resultado de esta reducción en la capacidad de los aseguradores de ofrecer mejores cubiertas, habría menos competencia en el mercado, aumentado todavía mas los costos y dejaría a los consumidores con opciones de seguro con más costos y menos beneficios.

Culminaron esbozando que *"[r]educir los periodos de espera sin abordar los riesgos que conlleva la selección adversa conducirá en última instancia a un aumento en las primas y a un impacto financiero significativo para los patronos de PyMEs y asociaciones bona fide, asegurados y aseguradores. Asimismo, disminuirá la oferta de productos de seguro para todos"*.

Luego de analizar los planteamientos traídos ante nuestra atención por ACODESE y Triple-S Management Corporation, esta Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo no comparte los mismos. Veamos.

Actualmente, la Ley Núm. 194-2011, según enmendada, conocida como el "Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", adoptó como política pública del Gobierno de Puerto Rico la regulación de los seguros de salud, incluyendo planes médicos grupales e individuales. Por medio del Código de Seguros de Salud se procura garantizar el cumplimiento de los aseguradores y organizaciones de servicios de salud con las normas de la Reforma de Salud Federal implantada a través del Patient Protection and Affordable Care Act"y el "Health Care and Education Reconciliation Act"" y uniformar así la legislación aplicable o la industria de seguros de salud en Puerto Rico. Cónsono con ello, en los artículos 8.030 y 8.070 del Código de Seguros de Salud aplicables a los planes médicos para PYMES y grupos pequeños de asociaciones bona fide, se dispuso de un "periodo

de espera" que puede llegar a ser de hasta noventa (90) días, previo a que un asegurado pueda acceder a la totalidad de los servicios que se definen en la póliza de seguros de salud que adquirió.

El periodo de espera de un plan médico no puede exceder los 90 días, excepto para emergencias que no tienen periodo de espera y servicios preventivos cuyo periodo de espera no puede exceder las treinta (30) días. Según expuesto en el proyecto objeto de análisis, con este se busca reducir los periodos de espera aplicable a los planes médicos para PYMES y de asociaciones bona fide para garantizarle a los pacientes que se acojan a alguno de estos que reciban todos los servicios de salud contratados con un asegurador u organización de servicios de salud, más allá de emergencias, sin demoras. Añade que, una persona puede necesitar recibir un servicio de salud que no necesariamente constituya una emergencia por motivo de una enfermedad que le puede sobrevenir en cualquier momento. Por tanto, queda más que justificado enmendar el Código de Seguros de Salud con el propósito de reducir el máximo permitido para el periodo de espera que deben transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado o a los patronos de PYMES o a los miembros de asociaciones bona fides, de 90 a 30 días para que puedan ser elegibles a recibir ciertos beneficios bajo los términos del plan médico.

Destaca el hecho de que la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico concurre con nuestro análisis y con los propósitos del proyecto. En ese sentido, manifestaron que

> [m]ediante la aprobación del Patient Protection and Affordable Care Act ("Affordable Care Act" o "ACA"), Public Law 111-148, 2 U.S.C. 55, se introdujo la sección 2708 al Public Health Service Act (PHS Act) 42 USC Ch. 6A, mediante la cual se establece que un plan de salud grupal o un asegurador de seguros de salud grupal no aplicará ningún periodo de espera que exceda los 90 días. Esta limitación federal se introdujo para restringir los periodos de espera para acceder los servicios de un seguro de salud patrocinado por el patrono a un máximo de 90 días. Esta directriz se aplica de manera uniforme en todos los estados, lo que garantiza que ningún estado tenga un periodo de espera superior a 90 días para los planes patrocinados por un patrono. El ACA también incorporó lo dispuesto en la sección 2704(b)(4) del PHS Act, en la sección 701(b)(4) del Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA) y en la sección 980l(b)(4) del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, 26 U.S.C. sec. 9801(b)(4), para definir un "periodo de espera" como el periodo que debe transcurrir con respecto a un individuo antes de que este sea elegible para ser cubierto por los beneficios contratados dentro de un plan de salud. Por medio de esta legislación, se dispuso que un plan de salud grupal de un asegurador de seguros de salud que ofrece cobertura grupal no puede contener un periodo de espera que exceda de los 90 días.
>
> Puerto Rico se hizo eco de esta limitación al periodo de espera y, por medio del Artículo 8.010 del Código de Seguros de Salud, incorporó la restricción a este para que no exceda de los 90 días en el caso de los planes médicos para PYMES, eliminando el mismo cuando se trate de una emergencia y reduciéndolo a 30 en el caso de los servicios preventivos. En el caso específico de los seguros de salud para las asociaciones bona fide, el Artículo 8.070 del Código de Seguros de Salud dispone al momento de igual restricción.

Por tanto, son de la opinión que

> [e]n atención a que el único requisito dispuesto tanto por la ley federal como por la estatal es que el término de espera no sea mayor de 90 días, y a que las circunstancias por las que atraviesa nuestra población amerita (sic) contar con

> cobertura rápida para acceder servicios de salud, **no vemos impedimento para que se reduzca el periodo de espera a 30 días como propone el Proyecto**. De igual forma **no vemos impedimento para que, en el caso de los servicios preventivos, el término se reduzca a quince (15) días como propone el Proyecto. El término propuesto atiende las necesidades de acceder a servicios de salud a través de las PYMES y de las asociaciones bona fide y (sic) además, concede el tiempo necesario al asegurador para velar por el buen uso del plan médico que se contrate.** También, promueve el uso preventivo del mismo lo que redunda en conseguir una mejor salud y la eventual reducción en los costos para el sistema de salud de un paciente gravemente enfermo. (Énfasis nuestro)

Terminaron su ponencia acotando que *"[e]n vista de lo antes expresado, **favorecemos la aprobación del presente Proyecto**"*. (Énfasis nuestro)

De hecho, es imprescindible mencionar que, el Departamento de Justicia también validó la posición de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, así como la de nosotros. En su memorial, expusieron que

> [h]abiendo **examinado la materia atendida en el P. del S. 211, entendemos que se trata de un ejercicio válido de la Asamblea Legislativa de aprobar legislación en beneficio de la ciudadanía**. Es nuestra interpretación que la intención legislativa del Proyecto de reducir el tiempo de espera que dispone el ordenamiento es cónsona con la política pública del Código de Seguros de Salud, toda vez que se procura mayor acceso a servicios de salud, reconociendo que la salud es un asunto de naturaleza ética y de justicia social. (…)

Coligieron no identificar *"...**impedimento legal a la aprobación de esta medida"***. (Énfasis nuestro).

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Del análisis realizado por esta Comisión, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Analizado el proyecto en sus méritos, entendemos que el mismo requiere ser aprobado con prontitud. Sabemos que, la duración de los periodos de espera para el seguro de salud puede variar según el tipo de seguro y las pólizas específicas provistas por los aseguradores, pero no pueden exceder de 90 días conforme con la legislación federal y estatal. De acuerdo a información provista por la Oficina del Comisionado de Seguros, el estado de Nueva York, a partir del l de octubre de 2023, redujo el periodo de espera inicial para la cubierta de beneficios para los empleados recién elegibles a 28 días. Este cambio solo se aplicó al Programa de Seguro de Salud del Estado de Nueva York (NYSHIP, por sus siglas en inglés) e incluyó el Empire Plan, NYSHIP HMOs, el NYSHIP Vision Care Program, y el NYSHIP Dental Program[8]. En el caso del estado de Idaho, por ejemplo, un empleado o dependiente elegible que solicita la inscripción en un plan de beneficios de salud de un patrono grande (grupo grande) después del periodo de inscripción inicial, durante el cual la persona tiene derecho a inscribirse bajo los términos del plan de beneficios de salud, se le provee un periodo de inscripción

[8] https://bsc.ogs.ny.gov/system/files/documents/2023/09/bsc-announcement-new-28-day-benefit-waiting-period.pdf

inicial de al menos 30 días[9]. En fin, hay día, tanto la legislación federal, así como la estatal lo que requieren es que el periodo de espera no exceda los 90 días. Nada impide que sea menor.

Por todo lo anterior, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 211, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Hon. Nitza Moran Trinidad
Presidenta
Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios,
Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 329, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para establecer el marco regulatorio sobre el uso, desarrollo, adquisición y propiedad de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) en el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, con el propósito de garantizar la soberanía tecnológica, la interoperabilidad entre agencias, la protección de la información del gobierno y los contribuyentes, evitar la dependencia de proveedores externos, y crear un sistema único de identidad digital para los contribuyentes con el fin de eliminar la duplicidad de gestiones y uniformar los servicios gubernamentales mediante el uso de APIs; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El avance tecnológico exige que el Gobierno de Puerto Rico implemente soluciones modernas y eficientes para mejorar el flujo de información entre sus agencias y los contribuyentes. Las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) permiten la comunicación segura y efectiva entre sistemas, optimizando los servicios públicos. Sin embargo, la dependencia de proveedores externos ("vendors") para el desarrollo y mantenimiento de APIs ha generado preocupaciones sobre la soberanía tecnológica, la privacidad de los datos y el uso apropiado de recursos públicos.

Esta ley asegura que, una vez el Gobierno de Puerto Rico invierta en APIs, estas sean consideradas propiedad exclusiva del Estado y sus instrumentalidades, eliminando barreras para cambios de proveedores y promoviendo la transparencia en la gestión tecnológica. Además, las APIs deben cumplir con normativas de seguridad y privacidad, alineadas con leyes existentes como la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como Ley de Gobierno Electrónico de Gobierno de Puerto Rico y la Ley 141-2019, según enmendada. Conocida como la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se establece la creación de un sistema de identidad digital único para los

[9] Idaho statutes, Tltle.41, Chapter 22, Section 2221(2)(c): "_"Late enrollee" means an eligible employee or dependent who requests-enrollment in a health benefit plan of a large employer following the initial enrollment period during which the individual is entitled to enroll under the terms of the health benefit plan, provided that the initial enrollment period is a period of at least thirty (30) days. _ •

contribuyentes, el cual permitirá la interconexión entre todas las agencias gubernamentales mediante APIs, eliminando la redundancia de datos, reduciendo la burocracia y facilitando la gestión de servicios públicos. Esto contribuirá a una administración más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título

Esta Ley se conocerá como la "Ley de Uniformidad de Servicios mediante Interface de Programación de Aplicaciones en el Gobierno de Puerto Rico".

Artículo 2 - Definiciones

Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se indica a continuación:

(a) API (Interface de Programación de Aplicaciones): Un conjunto de reglas y protocolos que permite la comunicación entre diferentes sistemas y aplicaciones, facilitando la interoperabilidad entre agencias gubernamentales.

(b) PRITS Oficina de Innovación y Tecnología de Puerto Rico, creada por la Ley 75 del 2019. Agencia responsable de establecer y supervisar las políticas tecnológicas del Gobierno.

(c) Vendor: Persona natural o jurídica contratada para desarrollar, implementar o mantener APIs para el Gobierno de Puerto Rico.

(d) Interoperabilidad: Capacidad de diferentes sistemas y aplicaciones de comunicarse y compartir información de manera efectiva, siguiendo estándares de accesibilidad y transparencia.

(e) Titularidad Tecnológica: Control y propiedad estatal sobre tecnologías desarrolladas o adquiridas con fondos públicos, evitando dependencias innecesarias.

(f) Identidad Digital Única: Plataforma tecnológica que permite a un contribuyente acceder a múltiples servicios gubernamentales con un solo perfil de usuario autenticado, ~~eliminando la redundancia en la gestión de datos.~~ *crear un sistema electrónico de credenciales verificables y autenticables que permite a una persona ser reconocida de manera inequívoca en entornos digitales, funcionando como representación oficial de su identidad en el ámbito virtual, validada por una autoridad competente, y que facilita el acceso seguro a múltiples servicios públicos y privados sin necesidad de autenticaciones repetidas o documentación redundante.*

Artículo 3 - Alcance de la Ley

Esta Ley aplicará a todas las agencias, departamentos, corporaciones públicas y otras instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico.

Artículo 4 - Propiedad de las APIs

(a) Toda API desarrollada ~~o adquirida~~ con fondos públicos será propiedad exclusiva del Gobierno de Puerto Rico.

(b) Ningún vendor podrá reclamar derechos de propiedad intelectual o restricciones sobre el uso, modificación o transferencia de APIs financiadas por el Gobierno.

(c) Las APIs desarrolladas para el Gobierno de Puerto Rico deberán ser diseñadas para ser completamente operadas y mantenibles por terceros.

Artículo 5 - Interoperabilidad e Identidad Digital Única

(a) = Las APIs se implementarán con el propósito de mejorar la comunicación y el flujo de información entre agencias gubernamentales y los contribuyentes.

(b) = PRITS será responsable de establecer estándares de interoperabilidad para garantizar que las APIs puedan integrarse con sistemas existentes y futuros.

(c) = Se adoptarán estándares abiertos para evitar la dependencia de soluciones propietarias que limiten la accesibilidad de los servicios.

(d) = Se creará una plataforma de Identidad Digital Única para que cada contribuyente pueda realizar trámites gubernamentales sin duplicidad de registros.

Artículo 6 - Protección de Datos y Seguridad

(a) = Las APIs deberán cumplir con los más altos estándares de seguridad para proteger la información de los ciudadanos y del gobierno.

(b) = Los vendors contratados estarán obligados a firmar acuerdos de confidencialidad y proteger la información a la que tengan acceso durante el desarrollo y mantenimiento de las APIs.

(c) = Se implementará cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactor para prevenir accesos no autorizados.

Artículo 7 - Prohibición de Penalizaciones por Cambio de Vendor

(a) = Ningún contrato con un vendor podrá incluir cláusulas que penalicen al Gobierno de Puerto Rico por decidir cambiar de proveedor.

(b) = Todos los vendors deberán garantizar la entrega completa de ~~ códigos fuente~~, documentación y credenciales necesarias para la operación continua de las APIs.

Artículo 8 - Responsabilidades de PRITS

(a) PRITS será responsable de:

1. Supervisar la implementación de esta Ley.
2. Auditar las APIs desarrolladas para el gobierno.
3. Crear APIs y entrelazar todos los servicios bajo la Identidad Única.
4. Crear reglamentación necesaria en conjunto con los Principales Oficiales de Informáticas de las agencias del Gobierno de Puerto Rico.
5. Garantizar que los contratos con vendors cumplan con los requisitos establecidos.

(b) = PRITS tendrá autoridad para imponer sanciones a vendors que incumplan con esta Ley~~.~~ *y con la reglamentación que se adopte.*

Artículo 9 - Disposiciones Transitorias

(a) = Todas las agencias y sus instrumentalidades tendrán un período de 12 meses desde la aprobación de esta Ley para auditar y garantizar que las APIs existentes cumplan con los requisitos aquí establecidos y adoptar mecanismos para entrar a la interface de identidad única.

(b) = Los contratos actuales que no cumplan con esta Ley deberán ser renegociados o terminados.

Artículo 10 - Cláusula de Separabilidad

Si cualquier disposición de esta Ley fuera declarada inconstitucional, las demás disposiciones mantendrán su vigencia y aplicabilidad.

Artículo 12. – Vigencia.

Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

“INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la **Proyecto del Senado 329**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con **las enmiendas** contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para establecer el marco regulatorio sobre el uso, desarrollo, adquisición y propiedad de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) en el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, con el propósito de garantizar la soberanía tecnológica, la interoperabilidad entre agencias, la protección de la información del gobierno y los contribuyentes, evitar la dependencia de proveedores externos, y crear un sistema único de identidad digital para los contribuyentes con el fin de eliminar la duplicidad de gestiones y uniformar los servicios gubernamentales mediante el uso de APIs; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

El avance tecnológico exige que el Gobierno de Puerto Rico implemente soluciones modernas y eficientes para mejorar el flujo de información entre sus agencias y los contribuyentes. Las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) permiten la comunicación segura y efectiva entre sistemas, optimizando los servicios públicos. Sin embargo, la dependencia de proveedores externos ("vendors") para el desarrollo y mantenimiento de APIs ha generado preocupaciones sobre la soberanía tecnológica, la privacidad de los datos y el uso apropiado de recursos públicos.

Esta ley asegura que, una vez el Gobierno de Puerto Rico invierta en APIs, estas sean consideradas propiedad exclusiva del Estado y sus instrumentalidades, eliminando barreras para cambios de proveedores y promoviendo la transparencia en la gestión tecnológica. Además, las APIs deben cumplir con normativas de seguridad y privacidad, alineadas con leyes existentes como la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como Ley de Gobierno Electrónico de Gobierno de Puerto Rico y la Ley 141-2019, según enmendada. Conocida como la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se establece la creación de un sistema de identidad digital único para los contribuyentes, el cual permitirá la interconexión entre todas las agencias gubernamentales mediante APIs, eliminando la redundancia de datos, reduciendo la burocracia y facilitando la gestión de servicios públicos. Esto contribuirá a una administración más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del presente Proyecto del Senado, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico analizó los memoriales explicativos recibidos por parte de la Puerto Rico Innovation and Technology Service, Puerto Rico Innovation Technology Cluster, Giancarlo González Ascar, Internet Society Puerto Rico Chapter y Onboard, LLC. A continuación, se desprende la posición expuesta por cada una de las instrumentalidades consultadas.

Puerto Rico Innovation And Technology Service

El Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS) presentó ante la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico su posición oficial en respaldo al Proyecto del Senado 329.

PRITS respalda la medida por su potencial para transformar la administración pública al optimizar servicios, reducir duplicidades y fortalecer la infraestructura tecnológica del gobierno. Destacó que el proyecto se alinea con la política pública contenida en la Ley Núm. 75-2019 y que su agencia ya ha comenzado esfuerzos relacionados, como la orden administrativa OA-IDEA-2025-003 que impulsa el uso de APIs bajo su coordinación.

El memorial resalta los beneficios de las APIs en el contexto gubernamental: automatización de procesos, integración tecnológica, innovación, eficiencia y seguridad. También identifica los problemas históricos como la dependencia de proveedores externos, falta de estandarización tecnológica, y fragmentación digital, que han limitado la capacidad del gobierno para operar eficientemente.

En ese contexto, PRITS enfatiza la importancia de que las APIs desarrolladas con fondos públicos sean propiedad exclusiva del Estado. Esto evitaría restricciones impuestas por terceros, garantizaría la continuidad operativa, y preservaría la soberanía tecnológica. PRITS se compromete a ejercer las funciones asignadas en el Artículo 8 del proyecto, incluyendo la supervisión, auditoría, desarrollo reglamentario, coordinación con las agencias, y aplicación de sanciones.

Finalmente, se subraya que el proyecto fortalece la ciberseguridad gubernamental al imponer mecanismos de protección como el cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactor, en cumplimiento con la Ley de Ciberseguridad de Puerto Rico (Ley Núm. 40-2024). PRITS concluye expresando su respaldo a la aprobación del P. del S. 329 y reafirma que esta legislación es un paso decisivo hacia una administración pública moderna, segura, y centrada en la tecnología.

Puerto Rico Information Technology Cluster

El Puerto Rico Information Technology Cluster (PRITC) presentó su posición oficial sobre el Proyecto del Senado 329, reconociendo su relevancia para la modernización digital del Gobierno de Puerto Rico y respaldando sus objetivos principales. El PRITC enfatizó que esta legislación tiene el potencial de fortalecer la soberanía tecnológica, mejorar la interoperabilidad entre agencias, proteger la información gubernamental y de los contribuyentes, reducir la dependencia de proveedores externos, e implementar un sistema único de identidad digital. Además, expresó su apoyo a varias disposiciones clave del proyecto, como la exigencia de estándares abiertos, la implementación de protocolos de seguridad robustos, y el fomento del talento y los negocios locales en el sector tecnológico.

No obstante, el PRITC también planteó recomendaciones puntuales para mejorar el alcance y viabilidad del proyecto. Entre ellas, solicitó una mayor claridad sobre la participación de proveedores y los derechos de propiedad intelectual, permitiendo que estos conserven derechos sobre mejoras no financiadas exclusivamente por el gobierno. También recomendó extender el cronograma de implementación de 12 a 24 meses, estableciendo programas piloto para facilitar la transición. Además, sugirió que la Oficina de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) cuente con los recursos necesarios para supervisar la implementación y que se cree un comité asesor multisectorial.

El PRITC advirtió sobre los riesgos de interrumpir contratos existentes sin una transición estructurada, y propuso fomentar la colaboración público-privada mediante subvenciones y espacios de prueba para nuevas soluciones tecnológicas. Finalmente, subrayó la importancia de que PRITS exprese públicamente su respaldo al proyecto y confirme su alineación con sus objetivos. El PRITC reiteró su disposición a colaborar con los legisladores, las agencias gubernamentales y la industria para garantizar una implementación exitosa del Proyecto del Senado 329.

Giancarlo González Ascar

En su ponencia ante la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado, el Sr. Giancarlo González expresó su firme respaldo al Proyecto del Senado 329, destacándolo como una legislación fundamental para la modernización digital del Gobierno de Puerto Rico. El proyecto propone establecer un marco regulatorio para el desarrollo, uso y propiedad de interfaces de programación de aplicaciones (APIs), con el fin de fomentar la interoperabilidad, aumentar la transparencia y mejorar la eficiencia en la gestión gubernamental.

González señaló que muchas agencias gubernamentales en Puerto Rico carecen de la capacidad para desarrollar y mantener APIs, dependen de proveedores externos que controlan sistemas críticos, y enfrentan restricciones presupuestarias que limitan su acceso a tecnologías modernas. Estas deficiencias resultan en procesos ineficientes, costosos y lentos que afectan negativamente a ciudadanos y empresas. Ante esto, recomendó que cada agencia identifique sus sistemas críticos y garantice que estos cuenten con APIs documentadas y registradas en un repositorio central, gestionado por PRITS. Además, enfatizó la necesidad de que los proveedores de tecnología aseguren la interoperabilidad entre sistemas, promoviendo la competencia y evitando prácticas monopolísticas.

Como ejemplos de éxito, citó el sistema EDGAR de la SEC en EE.UU., que permite el acceso automatizado y estructurado a datos regulatorios mediante una API pública, y la infraestructura X-Road en Estonia, que posibilita que más del 99% de los servicios gubernamentales se realicen en línea gracias a una arquitectura de APIs segura y descentralizada.

González también resaltó los serios vacíos de interoperabilidad digital en Puerto Rico. Señaló la falta de APIs públicas en plataformas clave como SURI, el Single Business Portal, el Departamento de Seguridad Pública, AAA, LUMA y el Registro de la Propiedad. Esta ausencia de conectividad genera duplicación de procesos, trámites manuales innecesarios y costos elevados para el Estado y el sector privado.

Finalmente, propuso la creación de un Repositorio Central de APIs Gubernamentales bajo la supervisión de PRITS. Este repositorio actuaría como un punto único de acceso regulado a las APIs del gobierno, asegurando su disponibilidad, seguridad y utilidad en beneficio de Puerto Rico y de una administración pública más ágil, moderna y eficiente.

Internet Society Puerto Rico Chapter

El Internet Society Puerto Rico Chapter estblece en su ponencia que entre los beneficios clave que identifican se destacan el fortalecimiento de la soberanía tecnológica, al disminuir la dependencia de proveedores externos mediante la adopción de estándares abiertos; el fortalecimiento de la seguridad y protección de los datos gubernamentales; la optimización de los recursos públicos mediante la reducción de redundancias y costos por medio de plataformas unificadas; y el fomento a la innovación tecnológica a través de la participación activa de empresas locales.

No obstante, también se señalan varios retos que deben atenderse, tales como la necesidad de definir protocolos abiertos y estándares internacionales para garantizar la interoperabilidad, establecer una entidad supervisora que vele por la privacidad y la ciberseguridad, promover un ecosistema inclusivo que integre a las pequeñas y medianas empresas, e implementar un sistema de identidad digital robusto que utilice autenticación multifactor y tecnologías seguras para proteger la identidad de los ciudadanos. Para su implementación, se recomienda la adopción de un marco regulador basado en estándares abiertos como RESTful APIs, GraphQL y OAuth 2.0, el desarrollo de un ecosistema local de innovación mediante alianzas con universidades y empresas emergentes, y la creación de un sistema de gobernanza multisectorial que supervise el cumplimiento del proyecto.

Además, proponen que el sistema cuente con una plataforma centralizada, multilingüe, compatible con dispositivos móviles, y accesible a todas las personas, garantizando así inclusión y equidad en el acceso a los servicios digitales. La Internet Society reitera su respaldo al proyecto y su disposición a colaborar activamente para lograr una implementación efectiva que promueva la modernización, seguridad y accesibilidad digital en Puerto Rico.

Onboard, LLC

La empresa Onboard, LLC presentó sus comentarios sobre el Proyecto del Senado 329, expresando su respaldo a la modernización del gobierno mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs) para mejorar la eficiencia, interoperabilidad y seguridad de los servicios públicos. Sin embargo, señala aspectos que deben analizarse para evitar limitaciones innecesarias.

En cuanto a la propiedad de las APIs recomiendan aclarar que solo las APIs desarrolladas para integrar sistemas gubernamentales serán propiedad exclusiva del gobierno, evitando restricciones que limiten el uso de tecnologías innovadoras con propiedad intelectual.

Sobre el uso de estándares abiertos, su recomendación fue que, aunque promover softwares de códigos abiertos es positivo para la soberanía tecnológica, no debe imponerse como requisito legal debido a que las soluciones propietarias pueden ser más robustas en seguridad y escalabilidad. Además, recomiendan adoptar una plataforma basada en protocolos existentes de autenticación y autorización en lugar de crear una nueva desde cero, pues la adopción de estos estándares facilitaría la auditoría de accesos y el cumplimiento normativo.

Concluyen destacando la importancia de la flexibilidad tecnológica, evitando regulaciones que limiten el uso de herramientas avanzadas y enfatizan que las mejores prácticas en seguridad y modernización deben definirse a nivel de políticas y estándares técnicos.

IMPACTO FISCAL

La presente medida no contiene ningún tipo de impacto a las arcas fiscales del Gobierno de Puerto Rico.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre la **Proyecto del Senado 329**, recomendando su aprobación con **las enmiendas** contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Wilmer Reyes Berríos
Presidente
Comisión de Ciencia, Tecnología
e Inteligencia Artificial"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 372, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para ~~enmendar los Artículos~~ *añadir un nuevo inciso (w) en el Artículo* 4 *y reenumerar los actuales incisos (w) al (ii) como incisos (x) al (jj), respectivamente* y *enmendar el Artículo* 53 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019", con el fin de aclarar quien es un licitador participante; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra Constitución exige que la propiedad y los fondos públicos se utilicen para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento del Estado. Este mandato constitucional requiere el establecimiento de normas jurídicas y procesos administrativos que garanticen la protección del erario.

El Gobierno de Puerto Rico, en su obligación de hacer obra pública y proveer servicios a la ciudadanía, utiliza diversos medios de licitación pública dirigidos a obtener bienes y servicios y realizar obras al mejor precio.

Mediante la *aprobación de la* Ley 73-2019, ~~se adoptó la~~ *según enmendada, conocida como la* "Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de 2019"*(en adelante, Ley 73-2019), el Gobierno de Puerto Rico centralizó los procesos de compras gubernamentales de bienes, obras y servicios para lograr mayores ahorros fiscales en beneficio del pueblo de Puerto Rico*. Las *determinaciones y* adjudicaciones realizadas por la Administración Auxiliar de Adquisiciones, por la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales o por las Juntas de Subastas de las Entidades Exentas quedan sujetas a la revisión de una Junta Revisora de Subastas creada por el Artículo 55 de la Ley 73-2019. A su vez, las partes inconformes con la determinación de esta Junta pueden acudir al Tribunal de Apelaciones, y eventualmente pudieran acudir al Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Ley 73~~, *supra,*~~ *-2019,* recoge un detallado proceso de adjudicación, notificación e impugnación de las adjudicaciones en los procesos de licitación pública.

Ahora bien, en los procesos de licitación, como son las subastas y solicitud de propuestas selladas (RFP), ~~siempre ha sido~~ *como* regla general, ~~que se rechacen~~ *se rechazan* las ofertas presentadas *cuando ha* pasado la fecha y hora límite *o establecida* de presentación, porque de lo contrario se infringiría el deber de equidad exigido a los demás licitadores. El cumplimiento de los plazos de presentación garantiza la equidad y la igualdad de trato ~~de todos~~ *a* los participantes en un proceso de contratación pública. Una oferta tardía interrumpe la integridad de la competencia y puede causar retrasos significativos en el cronograma del proyecto. Además, aceptar una oferta tardía de un licitador equivale a un trato preferencial para ese licitador. De hecho, sería brindar a ese licitador tiempo adicional para preparar y presentar su oferta.

En ocasiones, licitadores han acudido a pedir revisión a pesar de que sus ofertas ni siquiera fueron aceptadas, precisamente por haber llegado a presentar su oferta pasada la fecha y hora límite. Aunque parecería obvio que el derecho a impugnar la no aceptación de su oferta nace en el momento en que no es aceptada, pues es la determinación final en cuanto a ese licitador, en ocasiones esperan a que la misma sea adjudicada semanas o meses después, para impugnar la determinación de no haberse aceptado su oferta previamente. Esto causa retrasos innecesarios en la entrega de obras o prestación de servicios adjudicados, además de la pérdida de tiempo y recursos por parte, tanto del Estado como de los licitadores que ~~si~~ *sí* cumplieron con entregar sus ofertas a tiempo y fueron favorecidos. ~~Permitir a un licitador actuar como si fuera una sorpresa que no fue favorecido en un proceso de licitación en el cual su oferta no había sido aceptada, por lo que, como mínimo, podría catalogarse como negligencia de su parte, cuando a todas luces ya no estaba participando del proceso por causas~~

~~atribuibles solo a él, es~~ *Ello podría resultar* contrario a los mejores intereses del Estado y el mejor uso de los fondos públicos.

A veces se pierde de perspectiva que, si bien las adjudicaciones de licitaciones públicas son procedimientos sui generis con características adjudicativas, estas deben ser revisadas con premura debido, entre otras cosas, al riesgo de pérdida de fondos públicos si no se formalizan los contratos a tiempo, pues su otorgación tiene una fecha cierta de caducidad. En ese sentido, la enmienda propuesta, no se limita a los procedimientos que lleva a cabo la Administración de Servicios Generales pues la propia Ley 73-2019, en su Artículo 3, establece que las entidades exentas de llevar sus procesos a través de la ASG, deben utilizar los procedimientos en ella establecidos al momento de realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales

Mediante esta enmienda dejamos claro que, aquel licitador cuya oferta sea rechazada por entrega tardía, y entienda que el rechazo fue injustificado, tendrá oportunidad de impugnar, pero el término para ello comenzará a contar en la fecha del rechazo de oferta. De esta manera, a tenor con los propósitos de la Ley, despejamos cualquier duda al respecto y evitamos que licitadores, que saben de antemano que su oferta no estará siendo considerada, esperen a que semanas o meses después, cuando finalmente se adjudique la *buena pro,* entorpezcan de manera frívola la terminación de obras o prestación de servicios necesarios.

Por último, se aclara que, cuando una Resolución en la cual se adjudique un proceso de licitación sea enmendada, independientemente sea a raíz de una impugnación o ~~motu proprio~~ *motu proprio* para hacer alguna corrección, esta enmienda será notificada y enviada a las mismas partes a las que se envió la Resolución original. Esto responde a la necesidad de dejar claro la separación que existe entre el proceso adjudicativo de la licitación y el proceso ~~de~~ *en* donde se adjudica quien tiene razón con respecto a la impugnación. Si bien la notificación de órdenes, resoluciones y sentencias del foro en donde se impugna, se debe enviar al abogado o abogada que surge del registro, al igual que todo escrito presentado por las partes, una Resolución o Aviso de una adjudicación, aun cuando sea enmendada no es un escrito de los que se presentan ante un foro en el proceso de la impugnación. Es por esto por lo que, una enmienda a una adjudicación se notificará de acuerdo con las normas bajo las cuales se notifica de ordinario una adjudicación. De existir inconformidad de un licitador con la adjudicación enmendada, el proceso para impugnarlo será igual al que rige en cualquier adjudicación.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo inciso ~~w~~ *(w)* en el Artículo 4 de la Ley 73-2019, según enmendada, y se reenumeran los actuales incisos ~~w~~ *(w)* al ~~ii~~ *(ii)* como incisos ~~x~~ *(x)* al ~~jj~~ *(jj)*, respectivamente, para que lea:

"Artículo 4. — Definiciones.

Los términos utilizados en esta Ley, tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra definición; los términos en singular incluyen el plural y en la acepción masculina se incluye la femenina:

a) …

w) Licitador Participante - Licitador que, previo a la adjudicación, haya cumplido con participar de los eventos que son requisitos para una licitación, como lo son las reuniones ~~pre-subastas~~ pre-subastas o ~~inspección~~ inspecciones oculares que sean compulsorias, y que llegada la fecha y hora límite de entregar una oferta o propuesta, haya presentado su oferta dentro del plazo anunciado. Una vez un licitador deje de cumplir con alguno de los requisitos o formalidades necesarias, y conozca o debió conocer su incumplimiento, dejará de considerarse un licitador participante.

~~*x) ...*~~
~~w)~~ *x)* Licitador Responsivo:…
~~x)~~ *y)* Mejor Valor:…
~~y)~~ *z)* Municipios:…
~~z)~~ *aa)* Municipios participantes:…
~~aa)~~ *bb)* Obra:…
~~bb)~~ *cc)* Pliego de Subasta:…
~~cc)~~ *dd)* Pymes:…
~~dd)~~ *ee)* Rama Ejecutiva:…
~~ee)~~ *ff)* Registro Único de Licitadores o Registro:…
~~ff)~~ *gg)* Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales:…
~~gg)~~ *hh)* Servicios Auxiliares:…
~~hh)~~ *ii*) Servicios no profesionales:…
~~ii)~~ *jj)* Servicios profesionales:…"

Sección 2. – Se enmienda el Artículo 53 de la Ley 73-2019, según enmendada para que lea:

"Artículo 53. — Determinación Final. Notificación de adjudicación.

Una vez adjudicado un asunto ante la consideración de la Junta de Subastas, esta ~~procederá~~ *procederá* a notificar su determinación final, según los procedimientos y mecanismos que se establezcan en el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas. La notificación de adjudicación de subasta será notificada adecuadamente, mediante correo federal certificado con acuse de recibo o correo electrónico, a todas las partes, *entiéndase a todos los licitadores participantes,* que tengan derecho a impugnar tal determinación. La notificación se realizará de manera simultánea y utilizando el mismo método de notificación para todas las partes. La notificación de adjudicación ~~estará~~ *estará* debidamente fundamentada y deberá incluir los fundamentos que justifican la determinación, aunque sea de forma breve o sucinta, en aras de que los foros revisores puedan revisar tales fundamentos y ~~así~~ *así* determinar si la decisión fue arbitraria, caprichosa o irrazonable. Como mínimo, la notificación debe incluir: (1) los nombres de los licitadores que participaron en la subasta y una síntesis de sus propuestas; (2) los factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de los licitadores perdidosos; y (4) la disponibilidad y el plazo para solicitar revisión administrativa ante la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales y revisión judicial. La determinación final de la Junta de Subastas contendrá determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. La parte adversamente afectada por una actuación, determinación final o resolución de la Junta de Subastas podrá presentar un recurso de revisión, conforme a lo establecido en el Capítulo VIII de esta Ley.

En el caso de un licitador cuya oferta no haya sido aceptada por haberse entregado pasada la fecha y hora límite anunciada, tal determinación se considera como determinación final en cuanto a esa oferta para propósitos de esta Ley, y en ese momento comenzará a contar el término para impugnar de este licitador.

Cuando un aviso de adjudicación sea enmendado, este deberá notificarse de igual forma y a las mismas partes a las que se notificó la adjudicación que en este se enmienda.

Sección 3.- Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio, análisis y consideración del Proyecto del Senado 372, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente Informe Positivo con las enmiendas incluidas en el Entirillado Electrónico que lo acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 372, tiene el propósito de enmendar los Artículos 4 y 53 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019", con el fin de aclarar quién es un licitador participante; y para otros fines.

INTRODUCCIÓN

La Constitución de Puerto Rico exige que los fondos públicos se utilicen para fines públicos y el buen funcionamiento del Estado. Así pues, el Gobierno de Puerto Rico, para garantizar la transparencia en las contrataciones, utiliza procesos de licitación pública para adquirir bienes, servicios y realizar obras al mejor precio.

Una vez la entrada en vigor de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico", se centralizaron las compras del Gobierno y estableció un proceso detallado de adjudicación y revisión de subastas. Estas decisiones pueden ser revisadas por una Junta Revisora de Subastas y, si las partes están inconformes, pueden apelar a foros judiciales.

Esta medida procura enmendar la legislación vigente para añadir la definición de «licitador participante» a los fines de aclarar que solo serán considerados licitadores participantes aquellos que hayan cumplido con los requisitos formales y hayan presentado su oferta dentro del plazo establecido. De esta manera, se excluye del proceso a quienes incumplan con estos requisitos. Aclarando que las ofertas tardías deben ser rechazadas para asegurar la equidad en el proceso. Por lo que, si un licitador considera que el rechazo fue injusto, debe impugnar desde el momento en que su oferta es rechazada, no cuando se adjudique el contrato tiempo después. Esto evitará retrasos innecesarios en la ejecución de proyectos y la prestación de servicios.

Por otro lado, el P. del S. 372 pretende aclarar que, en el caso de licitadores excluidos por incumplir con algún requisito del proceso, el término para presentar una impugnación comenzará a contarse desde el momento en que su oferta sea rechazada, y no a partir de la adjudicación del proceso competitivo.

Tal como se explica en la Exposición de Motivos de la medida, ésta responde a preocupaciones sobre demoras en la adjudicación de contratos debido a impugnaciones realizadas por licitadores que no cumplieron con los requisitos del proceso. Ello, puesto que ha sucedido que algunos licitadores presentan impugnaciones pese a haber sido legítimamente excluidos. Estas acciones generan retrasos innecesarios, afectan la ejecución de obras y representan una carga administrativa para el Estado.

A veces se pierde de perspectiva que, las adjudicaciones de licitaciones públicas son procedimientos *sui generis* con características adjudicativas, por lo que deben ser revisadas con premura debido, entre otras cosas, al riesgo de pérdida de fondos públicos si no se formalizan los contratos a tiempo, pues su otorgación tiene una fecha cierta de caducidad. Si bien es a la Ley 73-2019 no se limita a los procedimientos que lleva a cabo la Administración de Servicios Generales, en su Artículo 3 establece que las entidades exentas de llevar sus procesos a través de la Administración

de Servicios Generales, deben utilizar los procedimientos en ella establecidos al momento de realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales

Por último, el proyecto pretende eliminar ambigüedades que permitan este tipo de impugnaciones y fortalecer la equidad y eficiencia del sistema de compras públicas**,** acelerar los procesos de contratación pública, evitar litigios frívolos y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

ALCANCE DEL INFORME

En aras de analizar y evaluar la medida, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tuvo ante su consideración los comentarios presentados por la Administración de Servicios Generales.

Administración de Servicios Generales (ASG)

La Administración de Servicios Generales (ASG) presentó su memorial explicativo para el P. del S. 372 por conducto de su Administradora y Principal Oficial de Compras, Lcda. Karla G. Mercado Rivera, expresándose a favor de su aprobación, resaltando la importancia de aclarar el lenguaje en la Ley 73-2019.

La ASG considera que las enmiendas propuestas brindan mayor certeza, transparencia y agilidad a los procesos de licitación tanto en la ASG como en las entidades exentas. Además, considera que la medida aclara disposiciones que, aunque lógicas en su interpretación actual, pueden ser objeto de impugnaciones innecesarias que retrasan la adjudicación de contratos.

En cuanto a la definición establecida en el P. del S. 372, la consideran apropiada ya que distingue entre: a) Licitadores que cumplen con todos los requisitos y tienen expectativas reales de ser adjudicados. b) Licitadores que incumplen y, aún así, buscan impugnar procesos en los que no deberían participar.

De su memorial surge que la falta de claridad en la definición actual ha permitido que licitadores impugnen procesos, a pesar de que sus ofertas fueron rechazadas por incumplimiento, situación que genera retrasos innecesarios en la entrega de obras y servicios al pueblo de Puerto Rico.

Asimismo, coinciden en que la notificación de adjudicación debe dirigirse únicamente a los licitadores que hayan cumplido con los requisitos del proceso, ya que son quienes tienen un derecho legítimo para impugnar. Consideran acertado que la notificación sobre el incumplimiento de dichos requisitos sea el punto de partida para presentar una posible reclamación, en lugar de esperar a que el proceso culmine con la adjudicación.

Adelantan que las enmiendas presentadas en el P. del S. 372 tendrían el efecto de reducir impugnaciones frívolas y brindaría mayor agilidad en los procesos de competencia.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobierno, certifica que la aprobación del P. del S. 372, no conlleva un impacto fiscal que genere obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

El Proyecto del Senado 372 responde a preocupaciones sobre demoras en la adjudicación de contratos debido a impugnaciones realizadas por licitadores que no cumplieron con los requisitos del proceso. Las enmiendas propuestas persiguen que haya mayor eficiencia en la adjudicación de contratos públicos, evitando retrasos innecesarios; la transparencia y equidad en los procesos de

licitación al definir claramente quiénes pueden impugnar y en qué plazos; y la reducción de litigios frívolos, asegurando que solo licitadores legítimos puedan impugnar decisiones.

Las enmiendas propuestas en el Proyecto del Senado 372 buscan mejorar la gestión de compras del Gobierno, mover los procesos de licitación y reducir conflictos innecesarios. La implementación de estos cambios puede contribuir a un uso más eficiente de los recursos públicos y mayor certeza en los procesos de contratación gubernamental.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 372,** recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Sen. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 413, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para establecer la "Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional" y ordenar a la "Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS) la creación, implementación y mantenimiento de un expediente digital centralizado que contenga información sobre los servicios prestados por el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional a personas con diversidad funcional; establecer los deberes de las agencias concernidas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Puerto Rico, las personas con diversidad funcional enfrentan múltiples obstáculos en su acceso a servicios esenciales provistos por diversas agencias gubernamentales. Actualmente, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional manejan de forma independiente los expedientes de cada persona que recibe sus servicios. Sin embargo, la falta de integración entre estos sistemas administrativos ha generado problemas significativos en la continuidad de los servicios, afectando negativamente el desarrollo educacional y vocacional de esta población.

Cada vez que una persona con diversidad funcional transiciona entre agencias –ya sea de salud a educación o de educación a rehabilitación vocacional– su expediente no se transfiere de manera automática ni estandarizada. Esto obliga a la persona o a sus tutores a recopilar nuevamente información médica, académica y vocacional, lo que puede derivar en la pérdida de documentos, retrasos en la prestación de servicios y lagunas en la planificación de su desarrollo. Además, la falta de políticas claras sobre la digitalización, conservación y acceso a estos expedientes conlleva problemas adicionales, como la falta de respaldo adecuado, la imposibilidad de consulta en tiempo real y riesgos en la protección de datos sensibles.

Ante esta realidad, se hace imperativo establecer la Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional, con el objetivo de centralizar la gestión de la información en un sistema digital accesible, seguro e interoperable entre las agencias pertinentes. La "Puerto Rico Innovation and Technology Service" será la entidad responsable de la creación, implementación y mantenimiento de este expediente digital, garantizando la continuidad en la prestación de servicios y el acceso seguro y eficiente a la información de cada persona con diversidad funcional.

La implementación del Expediente Digital Único optimizará los procesos administrativos, eliminará la duplicidad de gestiones burocráticas y garantizará que las personas con diversidad funcional accedan a los servicios esenciales de manera eficiente, ágil y sin interrupciones. Además, fortalecerá la conservación y gestión documental bajo los más altos estándares de seguridad, confidencialidad y protección de datos.

Esta legislación constituye un paso significativo hacia la modernización y eficiencia del sistema gubernamental, asegurando un enfoque centrado en la inclusión, el bienestar y el desarrollo integral de las personas con diversidad funcional en Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Título.

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la "Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional".

Artículo 2.-Declaración de Política Pública.

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico garantizar la continuidad, eficiencia y accesibilidad de los servicios prestados a las personas con diversidad funcional mediante la creación de un expediente digital único e interoperable entre el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional.

Artículo 3.-Creación del Expediente Digital Único.

Se ordena a la "Puerto Rico Innovation and Technology Service" (en adelante, "PRITS") la creación, implementación y mantenimiento de un Expediente Digital Único para personas con diversidad funcional. Este expediente centralizado contendrá toda la información relevante sobre los servicios recibidos de las agencias gubernamentales pertinentes y garantizará la continuidad y accesibilidad de dichos servicios a lo largo del tiempo.

PRITS será el custodio del Expediente Digital Único y tendrá la responsabilidad de asegurar su óptimo funcionamiento, integridad, seguridad y confidencialidad, conforme a las leyes y reglamentaciones aplicables.

Artículo 4.-Responsabilidades de las Agencias Gubernamentales.

a. El Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional estarán obligados a integrar la información de cada persona con diversidad funcional en el Expediente Digital Único.

b. PRITS establecerá los mecanismos necesarios para que el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional procedan con la digitalización, actualización y acceso seguro de los documentos contenidos en el Expediente Digital Único. Dichos mecanismos deberán garantizar la interoperabilidad entre agencias, la protección de datos personales y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de privacidad y seguridad de la información.

c. Ninguna agencia podrá exigir a la persona con diversidad funcional, ni a sus tutores legales, la presentación física de documentos previamente almacenados en el Expediente Digital Único.

Artículo 5.-Implementación.

PRITS establecerá los protocolos y estándares tecnológicos necesarios para la implementación efectiva del Expediente Digital Único. Cada agencia gubernamental tendrá un plazo de noventa (90) días, a partir ~~de la aprobación de esta Ley,~~ *de la aprobación reglamentaria de PRITS según el artículo 7 de esta ley*, para integrar sus plataformas y/o sistemas de información para constituir los datos necesarios para implementar el Expediente Digital Único.

Artículo 6.-Acceso a la Información.

PRITS, en coordinación con las agencias pertinentes, establecerá los mecanismos necesarios para garantizar que las personas con diversidad funcional tengan acceso seguro, ágil y confidencial a la información contenida en su Expediente Digital Único. Dicho acceso deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables en materia de privacidad, protección de datos y accesibilidad digital, asegurando que la información esté disponible en formatos adecuados y accesibles para las personas con diversidad funcional.

Artículo 7.-Reglamentación.

PRITS, en coordinación con las agencias concernidas, adoptará la reglamentación necesaria para el cumplimiento de esta Ley en un periodo no mayor de ciento ochenta (180) días desde su aprobación. Las agencias concernidas realizarán los cambios que sea necesarios en sus cartas circulares, reglas, reglamentos, normas y procedimientos para cumplir con lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 8.-Acuerdos Colaborativos.

A los fines de asegurar la efectiva consecución de lo establecido mediante esta Ley, se dispone que el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional y, colabore con PRITS proveyendo, de ser necesario, profesionales capacitados para cumplir con lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 9.- Seguridad y Confidencialidad de los Datos.

Toda información contenida en el Expediente Digital Único estará protegida bajo la normativa vigente de confidencialidad y protección de datos personales. El acceso al expediente estará estrictamente limitado a las agencias concernidas y a la persona con diversidad funcional o sus representantes legales, según establecido por ley.

Artículo 10.- Cláusula Derogatoria.

Cualquier disposición de ley o reglamentación que sea incompatible con las disposiciones de esta Ley queda por la presente derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad.

Artículo 11.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal

efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente.

Artículo 12.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir ciento ochenta (180) días luego de su aprobación, con excepción de aquellas disposiciones sobre adopción de reglamentos, recopilación y preparación de inventarios de datos, diseño del expediente único digital, planes de trabajo, informes y manuales, las cuales entrarán en vigor inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **Proyecto del Senado 413**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con **las enmiendas** contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para establecer la "Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional" y ordenar a la "Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS) la creación, implementación y mantenimiento de un expediente digital centralizado que contenga información sobre los servicios prestados por el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional a personas con diversidad funcional; establecer los deberes de las agencias concernidas; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial ha evaluado el Proyecto del Senado 413, cuyo propósito es establecer la "Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional", y emite un informe positivo sobre esta medida legislativa. Esta propuesta responde a una necesidad urgente dentro de nuestro sistema gubernamental debido a la falta de integración entre los sistemas de manejo de información de agencias clave como el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional. Actualmente, cada agencia maneja los expedientes de forma independiente, lo que crea barreras innecesarias en la continuidad de los servicios dirigidos a personas con diversidad funcional.

La transición de estas personas entre agencias implica, en muchas ocasiones, la duplicación de esfuerzos para recopilar documentos médicos, académicos y vocacionales. Esta situación genera retrasos, pérdida de información y lagunas en la planificación educativa, vocacional y de servicios de salud. Además, la ausencia de políticas uniformes sobre digitalización, conservación y acceso seguro a estos expedientes profundiza las deficiencias del sistema.

Con la creación del Expediente Digital Único, se busca centralizar la información en una plataforma digital accesible, segura e interoperable, que permita a las agencias brindar servicios de manera continua y eficiente. La iniciativa estará a cargo de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), que tendrá la responsabilidad de su diseño, implantación y mantenimiento.

Esta medida no solo contribuirá a mejorar la calidad de los servicios gubernamentales, sino que representa un avance significativo hacia la inclusión, la equidad y el respeto a los derechos de las personas con diversidad funcional en Puerto Rico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del presente Proyecto, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico analizó los memoriales explicativos recibidos por parte de la Puerto Rico Innovation and Technology Service, Departamento de Educación, Administración de Rehabilitación Vocacional y el Departamento de Salud. A continuación, se desprende la posición expuesta por cada una de las instrumentalidades consultadas.

Puerto Rico Innovation And Technology Service

La Puerto Rico Innovation and Technology Services expresó su firme respaldo al Proyecto del Senado 413, que propone establecer la "Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional". PRITS destaca que este proyecto representa una herramienta transformadora para el manejo de la información y la prestación de servicios a la población con diversidad funcional, consolidando en una sola plataforma digital los datos relevantes provenientes del Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional.

Actualmente, los expedientes son gestionados de forma aislada por cada agencia, lo cual ocasiona problemas como pérdida de documentos, duplicación de esfuerzos, retrasos en los servicios y una carga administrativa considerable para las personas afectadas y sus familias. La creación del Expediente Digital Único busca corregir esta deficiencia sistémica mediante un sistema interoperable, accesible, seguro y eficiente, garantizando la continuidad de servicios y facilitando la toma de decisiones informadas por parte de profesionales y usuarios.

Desde el punto de vista legal, PRITS explica que este proyecto se alinea con su mandato bajo las leyes Núm. 75-2019 (Ley de PRITS), Núm. 151-2004 (Ley de Gobierno Electrónico) y Núm. 40-2024 (Ley de Ciberseguridad). Estas leyes le otorgan a PRITS amplias facultades para desarrollar infraestructura tecnológica, garantizar la seguridad de los sistemas de información, implementar políticas de interoperabilidad y velar por el uso responsable de los datos gubernamentales.

PRITS subraya que la implementación de esta plataforma generará beneficios significativos tanto para las personas con diversidad funcional como para el gobierno. Se facilitará la atención integrada, se eliminarán barreras burocráticas, se documentará de forma continua el historial de servicios de cada persona y se logrará un mejor uso de los recursos públicos. La agencia resalta que ya cuenta con la infraestructura, personal técnico y experiencia necesarios para ejecutar exitosamente este proyecto, así como con una arquitectura de ciberseguridad basada en principios de zero trust y vigilancia constante.

Finalmente, PRITS considera que esta legislación es un paso esencial hacia un gobierno más ágil, moderno e inclusivo, y se reafirma como la entidad idónea para asumir la responsabilidad del diseño, desarrollo e implementación del Expediente Digital Único. Reitera su compromiso con la protección de la información ciudadana y con los principios de eficiencia, innovación y servicio público. En conclusión, la agencia apoya de manera categórica la aprobación del P. del S. 413 por parte del Senado.

Administración de Rehabilitación Vocacional

La Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), en torno al Proyecto del Senado 413, destaca el marco legal federal y estatal que regula la operación de la ARV, particularmente la Ley Pública Federal 93-112 y sus enmiendas bajo la Ley WIOA, que establecen la misión de integrar a personas con impedimentos a la fuerza laboral y a una vida independiente. Asimismo, detalla los

criterios de elegibilidad que rigen los servicios de rehabilitación vocacional y el rol de los Centros de Servicios de Consejería en Rehabilitación Vocacional (CSCRV), Centros de Avaluación y Ajuste (CAA), y Centros de Apoyo y Modalidades de Empleo (CAME) como parte del modelo de atención de la agencia.

Su escrito también subraya la importancia del proceso de transición educativa y vocacional que se da entre el Departamento de Educación y la ARV, particularmente para estudiantes con impedimentos. Resalta que actualmente existen más de 16,000 casos activos que han sido referidos a la ARV desde el sistema educativo, y que una deficiencia en la transferencia de documentos entre agencias puede entorpecer el proceso de elegibilidad y acceso a servicios.

En ese contexto, su ponencia enfatiza que el Expediente Digital Único debe garantizar la inclusión de todos los documentos esenciales que requiere la ARV para cumplir con la reglamentación federal sobre determinación de elegibilidad. Señala que, si bien el expediente digital facilitará el proceso de referimiento, en casos excepcionales la ARV podría necesitar solicitar información adicional. Asimismo, recalca que toda información manejada debe regirse por los más altos estándares de confidencialidad, conforme a la Ley de Rehabilitación Federal.

Finalmente, la ARV expresa su aval a la medida, destacando que se trata de un proyecto que fortalecerá el proceso de transición, aumentará la eficiencia administrativa, eliminará barreras burocráticas y redundancias, y garantizará el acceso continuo y seguro a servicios esenciales. La creación del Expediente Digital Único representa una política pública centrada en la inclusión y la autonomía de las personas con diversidad funcional, impulsando su inserción en la vida comunitaria y laboral.

Departamento de Salud

El Departamento de Salud de Puerto Rico destaca que, actualmente, la falta de un sistema integrado provoca retrasos, pérdida de documentos y dificultades en la transición de los usuarios entre agencias. Como entidad principal encargada de los servicios de salud pública, incluyendo el Sistema de Intervención Temprana "Avanzando Juntos", el Departamento reconoce la importancia de centralizar los datos mediante un expediente electrónico. Este sistema permitiría registrar y compartir información sobre servicios como patología del habla, terapias ocupacional y física, psicología, trabajo social, educación especial y coordinación de servicios, entre otros. A partir de mayo de 2025, la agencia comenzará a utilizar el nuevo sistema "Puerto Rico Early Intervention Data System (PREIDS)" para integrar esta información.

Además, se detalla el proceso de transición de menores al cumplir tres años hacia el Programa de Educación Especial, enfatizando que el expediente digital eliminaría la necesidad de entregar documentación física, facilitando una transición automática y efectiva. También se subraya la necesidad de cumplir con las leyes federales de privacidad, como HIPAA y FERPA.

El memorial también destaca los servicios que el Departamento provee a personas adultas con discapacidad intelectual a través de la Sección de Servicios a Personas Adultas con Discapacidad Intelectual (SSPADI). Este programa, sustentado en el "Joint Compliance Action Plan" del caso civil federal USA v. Commonwealth of PR, tiene como fin la desinstitucionalización y la integración comunitaria de esta población. Entre los servicios ofrecidos se encuentran hogares comunitarios, centros transicionales, clínicas dentales y programas de inclusión social. La adopción del expediente digital único permitiría validar criterios de elegibilidad de manera más ágil, canalizar servicios de forma adecuada y desarrollar planes de tratamiento más comprensivos.

En conclusión, el Departamento de Salud endosa el Proyecto del Senado 413 y lo reconoce como un paso significativo hacia la mejora del acceso y continuidad en los servicios para personas

con diversidad funcional. El expediente digital único fortalecería la comunicación interagencial, optimizaría procesos administrativos y respondería a las preocupaciones de los cuidadores y familias, promoviendo una atención centrada en el desarrollo integral de esta población.

Departamento de Educación de Puerto Rico

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) expresó su apoyo a la medida legislativa y ofreció una evaluación detallada del alcance e implicaciones de la misma. Este proyecto propone la creación de la "Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional" y encomienda a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) el desarrollo, implementación y mantenimiento de un expediente digital centralizado que contenga la información relacionada a los servicios brindados por el Departamento de Salud, el DEPR y la Administración de Rehabilitación Vocacional.

El DEPR contextualiza su análisis recordando su misión constitucional y legal de garantizar una educación pública de calidad, conforme a la Sección 5 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico y la Ley 85-2018, conocida como Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico. Se recalca que el sistema educativo es esencial para el desarrollo económico y social del país, y que el acceso eficiente a los servicios es indispensable para promover la equidad y la productividad de los estudiantes, especialmente aquellos con diversidad funcional.

En su análisis del proyecto, el DEPR señala que comparte el objetivo de centralizar la gestión de información para mejorar la eficiencia, continuidad y accesibilidad en la prestación de servicios a esta población. A través del artículo 4 del proyecto, se establecen las responsabilidades específicas de las agencias gubernamentales involucradas: integración de datos al Expediente Digital Único, aseguramiento del acceso y actualización de información bajo criterios de interoperabilidad, protección de datos y prohibición de solicitar documentos físicos que ya estén en el sistema.

El Departamento resalta que ya cuenta con una plataforma digital llamada "Mi Portal MIPE", donde se recopila y maneja información relacionada con los estudiantes con diversidad funcional. Esta plataforma incluye datos demográficos, información sobre condiciones, servicios relacionados (como terapias, transportación y equipos especializados), así como componentes académicos como planes educativos individuales (PEI). El sistema utiliza el número de estudiante como identificador único y está integrado con otros sistemas internos.

El DEPR afirma que el sistema MIPE podría integrarse fácilmente al sistema centralizado que desarrollaría PRITS a través de una interfaz API. Asimismo, señala que su Oficina de Sistemas de Información, junto a la Secretaría Auxiliar de Educación Especial, está disponible para colaborar en el proceso de desarrollo e implementación de esta ley. En conclusión, el Departamento de Educación reitera su compromiso con las políticas públicas dirigidas a garantizar la equidad, continuidad y eficiencia en la provisión de servicios a las personas con diversidad funcional.

IMPACTO FISCAL

La presente medida no contiene ningún tipo de impacto a las arcas fiscales del Gobierno de Puerto Rico.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 413**, recomendando su aprobación, con las enmiendas contenidas en el **entirillado** electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Wilmer Reyes Berríos
Presidente
Comisión de Ciencia, Tecnología
e Inteligencia Artificial"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), realizar un registro de todas las empresas o negocios que ~~operen,~~ desarrollen *lenguajes o códigos* ~~o utilicen~~ ~~sistemas~~ de Inteligencia Artificial en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según el ~~"National Iniative Intelligence Act of 2020"~~ *National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020* la Inteligencia Artificial es un sistema computarizado capaz de realizar predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyan en entornos reales o virtuales, de acuerdo con un conjunto de objetivos definidos por los seres humanos.[10] Los sistemas de inteligencia artificial utilizan información proveniente de computadoras y seres humanos para: percibir entornos reales y virtuales; convertir esas percepciones en modelos mediante análisis automatizado; y emplear modelos de inferencia para formular información o conclusiones.[11]

La inteligencia artificial es un instrumento tecnológico que ha llegado a nuestras vidas para quedarse. ~~Sin embargo, debido a la incertidumbre que genera su gran capacidad y los frecuentes cambios en su uso, es necesario regularla~~. Por ello, diversos estados han presentado legislación en esa dirección. Entre las medidas destacan las dirigidas a regular la información que se comparte de los ciudadanos, así como a evitar el discrimen que puede generar este tipo de tecnología. Según se ha comprobado, existen algoritmos discriminatorios que, en ocasiones, deniegan las mismas oportunidades a nuestros ciudadanos

Cónsono con lo antes expuesto, esta legislación nace con el objetivo de que el estado tenga conocimiento de las empresas que manejan este tipo de tecnología en su territorio. Para ello, esta Asamblea Legislativa considera pertinente crear un registro de empresas que ~~utilicen~~ *desarrollen lenguajes o códigos de* inteligencia artificial, con el fin de salvaguardar la seguridad y los derechos de nuestros ciudadanos

[10] Véase, ~~"National Iniative Intelligence Act of 2020"~~ *National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020*
[11] Id.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Orden

Se ordena al Puerto Rico Innovations and Technology Service (PRITS), realizar un registro ~~de todas las empresas o negocios que operen, desarrollen o utilicen sistemas de Inteligencia Artificial en Puerto Rico.~~ *de desarrolladores de lenguajes y códigos de inteligencia artificial.*

El PRITS, ~~deberá establecer un formulario en papel~~ ~~y~~ *establecerá un formulario* digital en coordinación con todas las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico ~~que tengan contacto o relación con empresas o negocios que operan, desarrollan o utilizan sistemas~~ *que desarrollen lenguajes o códigos* de Inteligencia Artificial en Puerto Rico *clasificados en categorías: Salud, medicina, finanzas, seguros, juegos de azar, apuestas, educación, aprendizaje, transporte, movilidad, ciberseguridad, vigilancia, entretenimiento, contenido digital, energía, medio ambiente, automatización del trabajo, servicios al cliente, apoyo de back office, gobierno y administración pública.* El Departamento de Estado, así como, las diversas instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico deberán asistir al PRITS en el registro de dichas empresas.

Artículo 2. – Contenido del Formulario

El formulario establecido en el Artículo anterior deberá:

(a) contener un mensaje donde se explique el propósito del registro;

(b) el nombre del negocio ~~operando,~~ desarrollando *lenguajes o códigos* ~~o utilizando sistemas~~ de inteligencia artificial;

~~(c) dirección IP o (IP Address) del negocio o empresa;~~

~~(d) el tipo de código de Inteligencia Artificial utilizado por el negocio o empresa;~~

~~(e) el tipo de programa a ser utilizado;~~

~~(f)~~ (*c)* el nombre y apellido de una persona de contacto en la empresa;

~~(g)~~ (*d)* la dirección postal y física, correo electrónico y el número de teléfono de la persona contacto;

~~(h)~~ *(e)* una casilla donde la empresa que ~~opera~~ *desarrolla* ~~un~~ ~~sistema~~ *lenguajes o códigos* de inteligencia artificial pueda marcar que acepta que el PRITS, almacene la información de la empresa en el registro.

La información obtenida bajo esta sección no podrá ser vendida o utilizada para propósitos comerciales y será de uso público. El PRITS, mantendrá una base de datos en línea con capacidad de búsqueda para empresas ~~que operen,~~ que desarrollen ~~o utilicen sistemas~~ *lenguajes o códigos* de inteligencia artificial.

Nada de lo dispuesto en esta sección se interpretará como que se:

(1) requiere la divulgación de cualquier secreto comercial; o

(2) anular cualquier protección del producto del trabajo de las empresas que forman parte del registro.

Artículo 3.– Informe

Comenzando el 1 de julio del 2025, el PRITS rendirá un informe anual a la Asamblea Legislativa que deberá incluir, pero sin limitarse a lo siguiente:

(a) el número de empresas o negocios que ~~utilizan~~ *desarrollen lenguajes y códigos de* inteligencia artificial registrados hasta el momento;

(b) el número de registros recibidos por cada agencia o instrumentalidad del gobierno;

(c) gastos incurridos si alguno por el departamento;

(d) copia de toda documentación utilizada como fuente de obtención de información; y

(e) cualquier otra documentación relacionada a la confección del registro.

Artículo 4.- Vigencia
Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación"

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la **Resolución Conjunta del Senado 1**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con **las enmiendas** contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), realizar un registro de todas las empresas o negocios que operen, desarrollen o utilicen sistemas de Inteligencia Artificial en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

Según el "National Iniative Intelligence Act of 2020" la Inteligencia Artificial es un sistema computarizado capaz de realizar predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyan en entornos reales o virtuales, de acuerdo con un conjunto de objetivos definidos por los seres humanos.[12] Los sistemas de inteligencia artificial utilizan información proveniente de computadoras y seres humanos para: percibir entornos reales y virtuales; convertir esas percepciones en modelos mediante análisis automatizado; y emplear modelos de inferencia para formular información o conclusiones.[13]

La inteligencia artificial es un instrumento tecnológico que ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Sin embargo, debido a la incertidumbre que genera su gran capacidad y los frecuentes cambios en su uso, es necesario regularla. Por ello, diversos estados han presentado legislación en esa dirección. Entre las medidas destacan las dirigidas a regular la información que se comparte de los ciudadanos, así como a evitar el discrimen que puede generar este tipo de tecnología. Según se ha comprobado, existen algoritmos discriminatorios que, en ocasiones, deniegan las mismas oportunidades a nuestros ciudadanos

Cónsono con lo antes expuesto, esta legislación nace con el objetivo de que el estado tenga conocimiento de las empresas que manejan este tipo de tecnología en su territorio. Para ello, esta Asamblea Legislativa considera pertinente crear un registro de empresas que utilicen inteligencia artificial, con el fin de salvaguardar la seguridad y los derechos de nuestros ciudadanos

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación de la presente Resolución Conjunta, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico analizó los memoriales explicativos recibidos por parte de la Puerto Rico Innovation and Technology Service, Atlanic University, TechNet y Eduardo Cardín. A continuación, se desprende la posición expuesta por cada una de las instrumentalidades consultadas.

[12] Véase, "National Iniative Intelligence Act of 2020"
[13] Id.

Puerto Rico Innovation and Technology Service

Mediante memorial explicativo procede a expresar, el Director Ejecutivo de PRITS, Antonio Ramos Guardiola, que En los Estados Unidos, no existe una legislación federal que establezca un registro de inteligencia artificial (IA) como el que se propone en la Resolución Conjunta. Sin embargo, a nivel estatal y federal se han implementado iniciativas que buscan regular el uso de la IA en diversos sectores. Por ejemplo, en California se presentó el proyecto de ley SB 1047, conocido como *Safe and Secure Innovation for Frontier Artificial Intelligence Model Act*, el cual exige que los desarrolladores de modelos avanzados de IA realicen evaluaciones de riesgo antes de su implementación y establece protecciones para denunciantes. A nivel federal, la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos publicó una guía que establece criterios para el registro de obras que contienen material generado por IA, aclarando cómo se aplica la legislación de derechos de autor en estos casos.

PRITS reconoce y apoya la intención de la Resolución Conjunta en cuanto a la transparencia y regulación de la IA en Puerto Rico. Sin embargo, considera que la redacción actual de la medida es demasiado amplia y podría generar dificultades en su implementación debido a que la IA está integrada en diversas plataformas de uso cotidiano, desde dispositivos móviles y computadoras hasta herramientas de ciberseguridad. Esto significa que prácticamente cualquier empresa o negocio que utilice software moderno podría verse obligado a inscribirse en el registro, lo que dificultaría la ejecución de la medida y desviaría su objetivo principal. En consecuencia, el registro se volvería excesivamente extenso e ineficaz.

Para mejorar la efectividad del registro y garantizar que cumpla con su propósito, sugieren delimitar los criterios que definan qué entidades estarían sujetas a inscripción. Además, recomiendan que el registro se limite a empresas cuya actividad principal sea el desarrollo, modificación o comercialización de sistemas de IA, excluyendo a aquellas que utilicen IA de manera incidental. Además, se debe revisar la información requerida en el formulario de inscripción, enfocándose en datos generales sobre el propósito del sistema de IA, su impacto en la privacidad y los derechos de los ciudadanos, así como si ha sido sometido a auditorías para verificar la ausencia de sesgos o discriminación.

PRITS propone que el registro categorice las empresas según la aplicación de sus sistemas de IA en doce sectores específicos:

1. Salud y medicina
2. Finanzas y seguros
3. Juegos de azar y apuestas
4. Educación y aprendizaje
5. Transporte y movilidad
6. Ciberseguridad y vigilancia
7. Entretenimiento y contenido digital
8. Energía y medio ambiente
9. Automatización del trabajo
10. Servicio al cliente
11. Apoyo de back office
12. Gobierno y administración pública

En adición, recomienda que el acceso público a ciertos datos del registro sea restringido. Información sensible, como direcciones IP y el tipo de código de IA utilizado, debe quedar exclusivamente para uso de entidades gubernamentales pertinentes. También sugiere que el registro

incluya un mecanismo de actualización y revisión periódica, para garantizar que la información contenida sea precisa y refleje los avances en la tecnología de IA.

Eduardo Cardín

El Sr. Cardín compareció ante esta honorable Comisión para presentar su posición sobre la Resolución Conjunta del Senado 1, la cual propone la creación de un registro de empresas que utilizan inteligencia artificial (IA). En su ponencia, el deponente señaló diversas preocupaciones respecto a la viabilidad, aplicabilidad y alcance del registro, así como la necesidad de mayor claridad en la legislación para garantizar que su implementación sea efectiva y no genere complicaciones innecesarias para las empresas y el Gobierno de Puerto Rico.

Uno de los puntos principales expuestos por el Sr. Cardín es la falta de especificidad en cuanto al alcance del registro. En su análisis, destacó que la medida no establece claramente si el registro será de carácter general para todas las empresas, sin importar si tienen o no relación comercial con el Gobierno de Puerto Rico. En caso de que así sea, el deponente recomendó definir con precisión quién será responsable de ingresar y actualizar la información en el registro. Actualmente, la Resolución establece que el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) será responsable de "realizar" el registro, pero el término es ambiguo y no especifica si esto incluye únicamente la implementación técnica del sistema o también la actualización y mantenimiento de la información. Además, se destacó la necesidad de designar una entidad que supervise y garantice el cumplimiento de la obligación de registrarse y actualizar los datos, evitando omisiones que pudieran comprometer la integridad del sistema.

El Sr. Cardín también señaló que, si se asigna al PRITS la responsabilidad de supervisar y hacer cumplir el registro, es necesario considerar que esta entidad tiene como función principal la transformación digital del gobierno y que sus facultades de supervisión actualmente están limitadas al sector público. Para que pueda asumir un rol de fiscalización sobre el sector privado, sería imprescindible establecer una base legal adicional que le otorgue las facultades y recursos necesarios para ejecutar esta función de manera efectiva. Asimismo, planteó la necesidad de definir si el registro será obligatorio o voluntario y, en caso de ser obligatorio, establecer las medidas aplicables a aquellas entidades que no cumplan con su inscripción.

Otro aspecto crítico identificado en la ponencia es la falta de claridad sobre cómo este registro contribuirá a la protección efectiva del público y qué mecanismos se implementarán para garantizar dicho propósito. El deponente recomendó que la legislación contemple principios esenciales para la regulación de la IA, tales como la transparencia, la responsabilidad, la protección contra la discriminación y la privacidad. Explicó que la transparencia debe garantizar que los sistemas de IA cuenten con mecanismos que permitan a los ciudadanos comprender el proceso de toma de decisiones de los modelos algorítmicos. En cuanto a la responsabilidad, enfatizó la importancia de establecer obligaciones legales claras para las entidades que desarrollen o utilicen IA, determinando con precisión quién será responsable en caso de que un sistema cause daños o genere decisiones erróneas, como en el caso de un diagnóstico médico incorrecto.

El Sr. Cardín subrayó la necesidad de la protección contra la discriminación, asegurando que los sistemas de IA respeten los derechos ciudadanos y evitando la generación de sesgos o desigualdades en sectores sensibles como el empleo, la salud, el crédito y la vivienda. Asimismo, expresó que la regulación debe incluir medidas para garantizar la protección de datos y la privacidad, asegurando la confidencialidad de la información, el consentimiento informado para el uso de datos y el derecho al control sobre la información personal utilizada en sistemas de IA.

Otro tema de gran preocupación para el deponente fue el contenido del formulario de inscripción. En particular, criticó la solicitud de información sensible, como direcciones IP, señalando que almacenar este tipo de datos sin medidas estrictas de seguridad representa una vulnerabilidad significativa en términos de ciberseguridad y podría exponer a las empresas registradas a riesgos y ataques cibernéticos. Recomendó que la Resolución defina con claridad el propósito de recolectar esta información y establezca requisitos específicos sobre cómo será protegida.

Asimismo, el Sr. Cardín indicó que la solicitud del "tipo de código de IA utilizado" es demasiado ambigua, ya que no se especifica si se refiere al lenguaje de programación, a las bibliotecas y marcos de trabajo empleados o al tipo de algoritmo implementado. Advirtió que muchas empresas no desarrollan código propio, sino que utilizan IA como servicio a través de plataformas comerciales como OpenAI, Google Cloud AI o AWS AI. Para evitar confusión y garantizar que la información recopilada sea realmente relevante, recomendó reformular esta pregunta o, en su defecto, especificar con mayor claridad qué información se espera obtener de los negocios registrados.

En relación con el acceso a la información contenida en el registro, el Sr. Cardín manifestó su preocupación sobre la disposición de que los datos sean de uso público. Explicó que, aunque la legislación no requiere la divulgación de secretos comerciales, el simple hecho de revelar que una empresa utiliza IA podría constituir información estratégica o confidencial. En este sentido, propuso que la legislación defina con claridad qué información del registro será considerada confidencial y qué datos podrán ser divulgados. También sugirió que se permita a las empresas indicar qué aspectos de su inscripción constituyen información estratégica o competitiva, asegurando su protección contra divulgación no autorizada.

Finalmente, el deponente destacó que la Resolución no aborda de manera explícita los aspectos de seguridad del registro, lo que representa un riesgo significativo en la protección de datos sensibles. Recomendó que la legislación incorpore requisitos específicos en materia de seguridad de la información, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos registrados. Propuso que se incluyan controles de acceso estrictos, cifrado de la información y mecanismos de retención y eliminación de datos para evitar la acumulación innecesaria de información y reducir el riesgo de filtraciones.

En conclusión, el Sr. Cardín reconoció la importancia de la transparencia y regulación en el uso de la inteligencia artificial en Puerto Rico, pero advirtió que la implementación del registro propuesto en la Resolución Conjunta del Senado 1 requiere ajustes significativos para garantizar su efectividad y evitar complicaciones en su aplicación. Su análisis destacó la necesidad de delimitar con mayor precisión el alcance del registro, definir claramente las responsabilidades de supervisión y mantenimiento, precisar qué información se solicitará y cómo será protegida, y establecer medidas de seguridad robustas para garantizar la integridad del sistema. Con estos ajustes, el registro podría convertirse en una herramienta útil para la regulación de la IA sin generar riesgos innecesarios para las empresas y el ecosistema tecnológico del país.

Atlantic University

La Dra. Zayira Jordán Conde, representante de Atlantic University, presentó su posición respecto a la Resolución Conjunta del Senado 1, destacando preocupaciones sobre la viabilidad, utilidad y posibles repercusiones negativas del registro propuesto. En su análisis, la deponente argumentó que el control de dicho registro podría resultar contraproducente y que su implementación conllevaría desafíos significativos tanto en términos operacionales como en sus implicaciones para la privacidad y el desarrollo económico.

Uno de los principales señalamientos de la Dra. Jordán Conde es que la administración del registro sería impráctica, ya que requeriría la recopilación y manejo de informes provenientes de individuos y organizaciones, lo que podría representar una violación a la privacidad que precisamente se pretende proteger. Además, advirtió que el volumen de información que se generaría sería inmanejable para el personal de PRITS, lo que pondría en duda la capacidad operativa del sistema y su eficacia a largo plazo. La acumulación de datos sin una estrategia clara de gestión y protección podría, en lugar de fortalecer la transparencia, crear nuevas vulnerabilidades en la seguridad y confidencialidad de la información.

Otro aspecto de gran preocupación para la deponente es el impacto negativo del registro en la innovación y el desarrollo económico. Explicó que su implementación podría enviar un mensaje desalentador para el desarrollo del conocimiento, la creación de propiedad intelectual y el fortalecimiento de la economía basada en tecnología en Puerto Rico. Al imponer requisitos adicionales a individuos y organizaciones que trabajan en el ámbito de la inteligencia artificial, la legislación podría generar un efecto disuasorio en la investigación y el emprendimiento, alejando a posibles inversionistas y limitando la competitividad del sector tecnológico en la isla.

Ante estas preocupaciones, la Dra. Jordán Conde recomendó que, en lugar de establecer un registro obligatorio, la legislación adopte un enfoque más amplio que promueva la educación y el uso ético de la tecnología. Considera que una estrategia basada en la formación y concienciación sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad sería mucho más efectiva que una medida punitiva o restrictiva. En ese sentido, abogó por una política pública que fomente el desarrollo responsable de la tecnología, en lugar de imponer cargas administrativas que podrían frenar la innovación.

Asimismo, destacó la importancia de examinar las posibles brechas en la protección de la privacidad de datos dentro del marco legal actual. Considera que la Legislatura debe enfocar sus esfuerzos en identificar aquellas lagunas normativas que podrían comprometer la confidencialidad, integridad y accesibilidad de los datos ciudadanos. De este modo, en lugar de crear un registro que potencialmente aumente los riesgos para la privacidad, se podrían desarrollar iniciativas legislativas dirigidas a optimizar los requerimientos de protección de datos en las organizaciones, fortaleciendo la seguridad y promoviendo la confianza en el uso de tecnologías emergentes.

En conclusión, la Dra. Jordán Conde recomendó que la Legislatura adopte un enfoque más educativo y proactivo, centrado en la protección de datos y el fomento de la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial, asegurando así un marco regulador que impulse la innovación sin comprometer la privacidad y la seguridad de los ciudadanos.

TECHNET

La empresa TECHNET presentó sus comentarios sobre la Resolución Conjunta del Senado 1, expresando preocupaciones sobre el requisito de registro propuesto y su posible impacto en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA) en Puerto Rico. TECHNET señaló que la medida, tal como está redactada, se aplicaría de manera demasiado amplia, incluyendo cualquier tipo de uso, desarrollo u operación de tecnologías relacionadas con IA. Argumentaron que este enfoque es problemático porque se aparta del tratamiento que han recibido otras tecnologías de propósito general, como las computadoras, los teléfonos celulares o el Internet, ninguna de las cuales requiere un registro obligatorio ante el gobierno para su uso.

Desde la perspectiva de TECHNET, la RCS 1 también representa un retroceso en relación con el trabajo realizado a nivel federal y global para promover el avance responsable de la IA. Destacaron que el gobierno de los Estados Unidos ha trabajado en el desarrollo, adopción y adaptación de marcos regulatorios basados en riesgos, como los creados por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología

(*National Institute of Standards and Technology*, NIST). Según la empresa, estos marcos permiten gestionar los riesgos asociados con la IA sin obstaculizar la innovación, algo que la propuesta de la RCS 1 no toma en cuenta.

Otro punto clave en la ponencia de TECHNET es que la Resolución agrupa todas las tecnologías de IA en un mismo conjunto, sin considerar que existen distintos tipos de aplicaciones de IA con niveles de riesgo muy diferentes. La empresa advirtió que esta falta de diferenciación puede generar una regulación desproporcionada y poco efectiva, imponiendo barreras innecesarias a tecnologías que no representan un alto riesgo. En ese sentido, recomendaron la eliminación de los Artículos 1 y 2 de la Resolución, ya que consideran que estos elementos podrían frenar la innovación en Puerto Rico. También propusieron eliminar el segundo párrafo de la Declaración de Propósitos, el cual sostiene que la innovación, por su naturaleza dinámica, justifica una regulación. A juicio de TECHNET, esta premisa parte de una visión restrictiva y no promueve el desarrollo responsable de la tecnología.

Como alternativa a la creación de un registro obligatorio, TECHNET sugirió que se revise el Artículo 3 para que, en lugar de imponer requisitos de registro, se establezca un grupo de trabajo o consejo especializado. Este organismo estaría encargado de estudiar los desafíos asociados con la IA y explorar oportunidades para aprovecharla de manera responsable en beneficio de los residentes de Puerto Rico. Consideran que este enfoque permitiría una discusión más informada sobre el impacto de la IA en distintos sectores, alineándose mejor con las tendencias regulatorias internacionales.

En conclusión, TECHNET recomendó que la Legislatura opte por un enfoque más estratégico y basado en la gestión de riesgos, promoviendo el estudio de la IA sin frenar su crecimiento. Además, enfatizaron la necesidad de que cualquier regulación futura considere el impacto económico y tecnológico que estas medidas pueden tener en la competitividad del país a nivel global.

IMPACTO FISCAL

La presente medida no contiene ningún tipo de impacto a las arcas fiscales del Gobierno de Puerto Rico.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre la **Resolución Conjunta del Senado 1**, recomendando su aprobación con **las enmiendas** contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Wilmer Reyes Berríos
Presidente
Comisión de Ciencia, Tecnología
e Inteligencia Artificial"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 14, y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno; y de Planificación, Permisos, Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

“RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para modificar los límites territoriales de los municipios de Naranjito y Toa Alta, a los fines de extender la jurisdicción del Municipio de Naranjito a través de la transferencia de la totalidad del área que comprende el Parque Enrique Medina ubicado en el barrio Lomas de Naranjito en colindancia con el barrio Quebrada Arenas de Toa Alta, con Núm. de Catastro: 140-037-131-10; que se relocalice la línea divisoria entre los municipios de Naranjito y Toa Alta, para que el Puente Atirantado Jesús Izcoa Moure se ubique totalmente en la demarcación geográfica del Municipio de Naranjito; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

~~El Artículo VI, sec I de la Constitución de Puerto Rico,~~ *La Constitución de Puerto Rico, en su Artículo VI, Sección 1,* dispone que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función. Conforme a ~~lo antes expuesto,~~ *ello,* ~~proponemos mediante~~ la presente Resolución Conjunta~~,~~ *propone* modificar los límites territoriales de los municipios de Naranjito y Toa Alta. Lo anterior, con el propósito de atender una legítima petición del alcalde del Municipio de Naranjito, Hon. Orlando Ortiz Chevres~~.~~ ~~El honorable Ortiz Chevres ha mostrado~~ *en la cual manifiesta* el interés ~~sobre el~~ *en torno al* mantenimiento del Parque Enrique Medina y realizar mejoras en el Puente Atirantado Jesús Izcoa Moure.

Específicamente, ~~proponemos~~ *propone* modificar los límites territoriales de los municipios de Naranjito y Toa Alta, a los fines de extender la jurisdicción del Municipio de Naranjito a través de la transferencia de la totalidad del área que comprende el Parque Enrique Medina ubicado en el barrio Lomas de Naranjito en colindancia con el barrio Quebrada Arenas de Toa Alta, con Núm. de Catastro: 140-037-131-10; y que se relocalice la línea divisoria entre los municipios de Naranjito y Toa Alta, para que el Puente Atirantado Jesús Izcoa Moure se ubique totalmente en la demarcación geográfica del Municipio de Naranjito.

~~En una comunicación del 20 de febrero de 2024, el alcalde del mencionado municipio solicitó la modificación de los límites territoriales de Naranjito y Toa Alta. Sostiene su petición en que mantiene en buen estado el referido parque antes referido y a que ha sido activo en las reparaciones del puente atirantado. Destacó el hecho, igualmente, de que cada vez que en la prensa y redes sociales se hace referencia al puente, siempre lo mencionan como el Atirantado de Naranjito. Por ello, solicitó se presente legislación dirigida a modificar la demarcación de los mencionados municipios. Como dato adicional, se debe añadir que, el alcalde del Municipio de Toa Alta, Hon. Clemente Agosto, avala la petición de su homólogo.~~

~~Tal y como dispone el Artículo 1.006 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107), el Municipio de Naranjito solicitó la modificación de los límites territoriales de ambos pueblos, mediante comunicación escrita. Específicamente, el citado Artículo, dispone que "[l]os límites territoriales de cada municipio serán los mismos que tenga fijados a la fecha de vigencia de este Código, salvo que sean modificados por virtud de cualquier ley al efecto. **La ley que a tal efecto se apruebe se tramitará a petición de** la Legislatura Municipal del municipio solicitante y de **los municipios cuyos límites se afecten** o, en la alternativa, una resolución conjunta de los cuerpos legislativos municipales de los municipios concernidos antes de su aprobación" (Subrayado y ennegrecido nuestro).~~

En vista de lo antes expuesto y ~~en consideración a que el alcalde de~~ *tomando cuenta de que la administración municipal del municipio de* Toa Alta~~,~~ está de acuerdo con lo propuesto, esta Asamblea

Legislativa ordena la modificación de los límites territoriales de los Municipios de Naranjito y Toa Alta.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se modifican los límites territoriales de los municipios de Naranjito y Toa Alta, a los fines de extender la jurisdicción del Municipio de Naranjito a través de la transferencia de la totalidad del área que comprende el Parque Enrique Medina ubicado en el barrio Lomas de Naranjito en colindancia con el barrio Quebrada Arenas de Toa Alta, con Núm. de Catastro: 140-037-131-10, y coordenadas: 18.329005, -66.270458; y que se relocalice la línea divisoria entre los municipios de Naranjito y Toa Alta, para que el Puente Atirantado Jesús Izcoa Moure (coordenadas 18.322841, -66.208411) se ubique totalmente en la demarcación geográfica del Municipio de Naranjito.

Sección 2.- Se ordena a la Junta de Planificación a modificar los límites territoriales de los municipios de Naranjito y Toa Alta de forma consistente con lo ordenado en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.

Sección 3.- La Junta de Planificación, en conjunto con los municipios de Naranjito y Toa Alta, prepararán en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, un mapa delimitando los nuevos límites territoriales de ambos municipios.

Sección 4.- Se ordena a la Junta de Planificación a notificar a las agencias estatales y federales concernidas, incluyendo los tribunales de justicia de la nueva forma y límites territoriales de los municipios de Naranjito y Toa Alta.

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Gobierno; y de Planificación, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, luego de haber estudiado y considerado la Resolución Conjunta del Senado 14, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 14 tiene como propósito modificar los límites territoriales de los municipios de Naranjito y Toa Alta, a los fines de extender la jurisdicción del Municipio de Naranjito a través de la transferencia de la totalidad del área que comprende el Parque Enrique Medina ubicado en el barrio Lomas de Naranjito en colindancia con el barrio Quebrada Arenas de Toa Alta, con Núm. de Catastro: 140-037-131-10; que se relocalice la línea divisoria entre los municipios de Naranjito y Toa Alta, para que el Puente Atirantado Jesús Izcoa Moure se ubique totalmente en la demarcación geográfica del Municipio de Naranjito; y para otros fines relacionados.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno, conjuntamente a la Comisión de Planificación, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, evaluó y analizó los propósitos, así como la intención legislativa plasmada en Resolución Conjunta del Senado 14**.** Además, consideró el trámite legislativo otorgado a la Resolución Conjunta de la Cámara 622 de la Décimo Novena Asamblea Legislativa, la

cual es una medida que cumplió con idénticos propósitos a los contemplados en la Medida ante nuestra consideración, pero que nunca culminó su trámite legislativo.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Exposición de Motivos, en el Artículo VI, Sección I de la Constitución de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función.

Conforme a ello, la Resolución Conjunta del Senado 14 propone modificar los límites territoriales de los municipios de Naranjito y Toa Alta a los fines de extender la jurisdicción del Municipio de Naranjito a través de la transferencia de la totalidad del área que comprende el Parque Enrique Medina y que se relocalice la línea divisoria entre los municipios de Naranjito y Toa Alta para que el Puente Atirantado Jesús Izcoa Moure se ubique totalmente en la demarcación geográfica del Municipio de Naranjito.

Por otra parte, se destaca que el Hon. Alcalde Orlando Ortiz Chevres ha mostrado interés en realizar los trabajos de mantenimiento al Parque Enrique Medina, así como mejoras en el Puente Atirantado Jesús Izcoa Moure. Sostiene en su petición que ha mantenido en buen estado el referido parque y tambien ha participado activamente en las reparaciones del puente atirantado. Destacó el hecho, igualmente, de que el alcalde del Municipio de Toa Alta, Hon. Clemente "Chito" Agosto Lugardo, avaló la petición de su homólogo alcalde.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Gobierno, conjuntamente a la Comisión de Planificación, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, en aras de atender su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación de la presente medida, evaluó y examinó los memoriales explicativos remitidos a la Comisión de Gobierno de la Décimo Novena Asamblea Legislativa; el tracto procesal de la medida en ambos Cuerpos Legislativos; así como los comentarios remitidos a esta Comisión de Gobierno en la Presente Asamblea Legislativa.

Como parte del proceso de evaluación de la R. C. del S. 19, la Comisión de Gobierno solicitó comentarios al Municipio de Toa Alta y el de Naranjito, así como a la Junta de Planificación de Puerto Rico. Al momento de la redacción del presente Informe, se habían recibido únicamente los comentarios de los municipios de Naranjito y de Toa Alta. Veamos.

Municipio de Naranjito

El Municipio de Naranjito compareció al análisis de la medida a través de un Memorial Explicativo suscrito por su alcalde, el Hon. Orlando Ortiz Chevres. En el Memorial Explicativo éste sostuvo que el Puente Atirantado se ha convertido en símbolo de nuestro pueblo, siendo ampliamente referido como "el Puente Atirantado de Naranjito", reflejando la percepción pública de su vinculación con el municipio.

Asimismo, la administración municipal ha asumido el mantenimiento del Parque Enrique Medina, asegurando su conservación y operatividad para el disfrute de la comunidad. De igual manera el Municipio de Naranjito ha sido activo a lo largo de los años en el cuidado y promoción del Puente Atirantado Jesús Izcoa Moure, un símbolo arquitectónico y vial clave para la región.

Sostuvo que la modificación de los límites territoriales, según lo propuesto por la R.C. del S. 14, consolidará esta identidad y permitirá una mejor gestión en términos de promoción turística y desarrollo económico. Por lo cual, se reiteró **a favor** de la aprobación de la medida, según redactada.

Municipio de Toa Alta

El Municipio de Toa Alta compareció al análisis de la R. C. del S. 14 mediante memorial explicativo firmado por su alcalde, Hon. Clemente "Chito" Agosto Lugardo. En el documento **expresó no tener objeción alguna en que la franja del Municipio de Naranjito sea ampliada, única y exclusivamente en los tramos del Sector Lomas**.

Esto es, específicamente, en el lugar donde se encuentra el Parque Enrique Medina y en el tramo donde ubica el Puente Atirantado Jesús Izcoa Moure, para que cumpla con los propósitos en la medida y muestra la demarcación territorial a base de las imágenes siguientes.

Ejemplo para el tramo en el Barrio Lomas en colindancia con el Barrio Quebrada Cruz – Parque Enrique Medina



Ejemplo para el tramo en puente atirantado Jesús Izcoa Moure.



IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico no solicitó comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, puesto que la R. C. del S. 14 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Gobierno y de Planificación, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 14, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que le acompaña.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno

(Fdo.)
Héctor Gabriel González López
Presidente
Comisión de Planificación,
Infraestructura y Urbanismo"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 16, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial, sin enmiendas:

"RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) la creación e implementación de una aplicación basada en inteligencia artificial para el monitoreo de los procesos de subasta pública en Puerto Rico; garantizar la transparencia, la equidad y la prevención de prácticas deshonestas en dichos procesos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los procesos de subasta pública son fundamentales para la adquisición de bienes y servicios del Estado. La integridad de estos procesos es clave para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera justa, eficiente y transparente. A pesar de lo anteior, hemos sido testigos de como estos procesos no están exentos de riesgos de corrupción, manipulación o prácticas deshonestas que puedan afectar su transparencia y equidad.

La inteligencia artificial (IA) ofrece herramientas avanzadas que pueden revolucionar el monitoreo y la gestión de las subastas públicas. Tecnologías basadas en IA pueden analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, identificar patrones sospechosos y alertar sobre posibles irregularidades, fortaleciendo así los controles preventivos. La tecnología sin lugar a duda constituye una herramienta adicional que permitiría asegurar que los contratos se otorguen de manera justa y conforme a la ley, protegiendo los intereses públicos y optimizando el uso de los recursos del Estado.

Por estas razones, es necesario que el Gobierno de Puerto Rico, a través de PRITS, lidere la creación e implementación de esta aplicación para modernizar los procesos de subasta pública, asegurar su transparencia y prevenir prácticas deshonestas.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) desarrollar e implementar una aplicación basada en inteligencia artificial para el monitoreo de los procesos de subasta pública en Puerto Rico. La aplicación deberá incluir las siguientes funciones:

a) Monitoreo en tiempo real de los procesos de subasta.
b) Análisis de datos para identificar patrones sospechosos o actividades irregulares.
c) Generación de alertas automáticas ante posibles irregularidades.
d) Reportes accesibles para los administradores del sistema y las entidades fiscalizadoras.

Sección 2.- PRITS deberá presentar un plan detallado de desarrollo e implementación de la aplicación a la Asamblea Legislativa dentro de los noventa (90) días siguientes a la aprobación de esta Resolución Conjunta. Este plan deberá incluir:

a) Cronograma de trabajo.
b) Recursos necesarios para su implementación.
c) Estrategias para la integración del sistema con las plataformas existentes de subastas públicas.

Sección 3.- PRITS trabajará en coordinación con la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina del Inspector General, la Administración de Servicios Generales, la Oficina de Ética Gubernamental y cualquier otra agencia pertinente para garantizar que la aplicación cumpla con los requisitos legales y de transparencia necesarios.

Sección 4.- PRITS deberá presentar informes trimestrales a la Asamblea Legislativa sobre el progreso en el desarrollo e implementación de la aplicación durante el primer año de vigencia de la presente Resolución Conjunta.

Sección 5.- Vigencia.

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la **Resolución Conjunta del Senado 16**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) la creación e implementación de una aplicación basada en inteligencia artificial para el monitoreo de los procesos de subasta pública en Puerto Rico; garantizar la transparencia, la equidad y la prevención de prácticas deshonestas en dichos procesos; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial ha evaluado con detenimiento los beneficios de integrar herramientas de inteligencia artificial en los procesos de subasta pública del Gobierno de Puerto Rico. A través de esta medida, se reconoce la necesidad urgente de fortalecer la

transparencia, eficiencia y equidad en la adquisición de bienes y servicios mediante el uso de tecnologías emergentes. Los procesos de subasta son una piedra angular en la administración de los recursos públicos, y su integridad es esencial para preservar la confianza ciudadana y garantizar el cumplimiento de la ley.

En vista de los riesgos históricos de corrupción, manipulación y otras prácticas deshonestas que pueden afectar estos procesos, la aplicación de inteligencia artificial representa una oportunidad innovadora para mejorar los controles preventivos, identificar patrones irregulares y optimizar la toma de decisiones basada en datos. La Comisión concluye que esta iniciativa es cónsona con los objetivos de modernización gubernamental, alineada con el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), y representa un paso afirmativo hacia una gobernanza más ética, transparente y eficiente. Por tanto, esta Comisión rinde un informe positivo sobre la medida propuesta.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del presente Resolución Conjunta, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico analizó los memoriales explicativos recibidos por parte de la Puerto Rico Innovation and Technology Service y la Administración de Servicios Generales. A continuación, se desprende la posición expuesta por cada una de las instrumentalidades consultadas.

Puerto Rico Innovation and Technology Service

La Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) presentó su posición en relación con la Resolución Conjunta del Senado 16, que propone crear una aplicación basada en inteligencia artificial (IA) para monitorear los procesos de subasta pública en Puerto Rico. PRITS reconoció la validez del objetivo de la medida, promover la transparencia y prevenir prácticas deshonestas en la adquisición de bienes y servicios del Estado, pero aclaró que estos propósitos ya están siendo atendidos mediante el sistema Joint E-procurement Digital Intelligence (JEDI), desarrollado por la Administración de Servicios Generales (ASG).

Desde su implementación en 2021, JEDI ha digitalizado múltiples fases del proceso de compras gubernamentales, eliminando formularios físicos, acortando tiempos de tramitación y permitiendo la presentación ágil y transparente de requisiciones. En su evolución, la plataforma ha dado paso a JEDI 2.0, que optimiza aún más la planificación de compras por parte de las agencias. Estas plataformas se encuentran actualmente en proceso de integración con el sistema central de administración financiera del gobierno (ERP), basado en Oracle Cloud, lo cual consolidará la supervisión de los procesos de adquisición en una sola plataforma y facilitará el control fiscal.

PRITS destacó que esta integración permitirá un análisis más preciso del gasto público, detección temprana de irregularidades y una mejor planificación presupuestaria. Por tanto, considera que desarrollar una nueva aplicación basada en IA, como propone la medida, sería redundante y posiblemente ineficiente en términos del uso de recursos públicos. En cambio, recomienda continuar fortaleciendo y monitoreando las capacidades de JEDI y JEDI 2.0, asegurando que se mantengan alineadas con los estándares tecnológicos más altos.

En conclusión, PRITS no respalda la aprobación de la Resolución tal como está redactada, y sugiere que esta se ajuste a los sistemas existentes o se transforme en una medida de evaluación de los mismos. También recomienda que se consulte a la ASG, dado que tiene jurisdicción exclusiva sobre las compras y subastas en la Rama Ejecutiva, para asegurar que cualquier iniciativa legislativa se alinee con los esfuerzos ya en curso.

Administración de Servicios Generales

La Administración de Servicios Generales (ASG) expresa su posición favorable a la Resolución Conjunta del Senado 16, que ordena al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) a crear e implementar una aplicación de inteligencia artificial para monitorear los procesos de subasta pública en Puerto Rico. La ASG reconoce la importancia de esta medida, especialmente considerando la seriedad e integridad que deben caracterizar los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.

En su exposición, la ASG detalla su experiencia previa con herramientas digitales, como el sistema de compras J.E.D.I. y los Registros Uniformes de Licitadores y Proveedores de Servicios Profesionales. Estas herramientas han permitido automatizar procesos, identificar irregularidades y aumentar la eficiencia en las licitaciones públicas. El sistema J.E.D.I., por ejemplo, ya permite programar alertas clasificadas por severidad, lo que ha facilitado la detección de irregularidades como cotizaciones recurrentes por un mismo licitador, adjudicaciones reiteradas, y otras prácticas que requieren atención.

Por tanto, la ASG no solo respalda la Resolución Conjunta, sino que ofrece su colaboración para la implementación de la tecnología propuesta, enfatizando que el éxito de esta política requerirá una regulación abarcadora que garantice su continuidad y actualización como parte de la política pública del Gobierno. La agencia concluye expresando su disposición total a colaborar con PRITS en esta iniciativa y agradece la oportunidad de aportar a la discusión legislativa sobre este importante proyecto.

IMPACTO FISCAL

La presente medida no contiene ningún tipo de impacto a las arcas fiscales del Gobierno de Puerto Rico.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre la **Resolución Conjunta del Senado 16**, recomendando su aprobación sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Wilmer Reyes Berríos
Presidente
Comisión de Ciencia, Tecnología
e Inteligencia Artificial"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 77, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de _____ *Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor* del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre las razones por las cuales no se ha culminado la construcción de la carretera PR-385, conocida como el Desvío Sur, del Municipio de Peñuelas~~; y para otros fines~~.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por más de quince *(15)* años los residentes del Municipio de Peñuelas aguardan por la culminación de la construcción de la carretera PR-385, conocida como el Desvío Sur, ubicada en dicho municipio. El propósito de dicha vía es reducir el tránsito de vehículos por una de las vías principales del pueblo, la Calle Luis Muñoz Rivera. En esta calle se ubican las escuelas Adolfo Grana, Daniel Webster y Rafael Irizarry, por lo que la seguridad de los niños, padres, maestros y toda la comunidad escolar se ve comprometida.

Por otro lado, la congestión de tránsito en la Calle Luis Muñoz ~~Riva~~ *Rivera* en las horas pico afecta la calidad de vida de los residentes de este municipio y provoca accidentes con frecuencia. Además, pone en peligro la vida de aquellos que sufren una emergencia médica y tienen que trasladarse de las áreas sur y este del municipio, cuyas facilidades médicas para atender estas situaciones se encuentran en el área noroeste.

Según la información provista por el Municipio de Peñuelas, para culminar la construcción de la carretera PR-385 resta la pavimentación de un tramo de aproximadamente cuatrocientos cincuenta metros (450m). Esto, a pesar de que varios secretarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas se han comprometido con terminar este proyecto.

Unas tres mil trecientas veintiséis (3,326) residencias están ubicadas en los barrios de Santo Domingo, Macaná, Alturas de Peñuelas 1, 2 y Extensión, Reparto Kennedy, Jaguas y el Barreal, Brisas del Guayanés, Peñuelas Valley y Mira Monte, Urbanización Colinas de Peñuelas, La Carcajada, Coto Quebrada y Matos. Estas comunidades tendrían acceso directo a esta carretea *carretera*. Es por lo que, según los estimados más conservadores, una vez realizadas las obras de construcción en el Desvío Sur, se beneficiará alrededor de la mitad de los residentes del Municipio de Peñuelas.

A la luz de lo anterior, el Senado de Puerto Rico entiende necesario realizar una investigación para conocer las razones por las cuales el proyecto de construcción de la carretera PR-385 no han culminado luego de transcurrido más de veinte (20) años de su comienzo. A esos fines, se le ordena a la Comisión de _____ *Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor* del Senado a realizar dicha investigación e informarle al Cuerpo de sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.– Se ordena a la Comisión de _____ *Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor* del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre las razones por las cuales no se ha culminado la construcción de la carretera PR-385, conocida como el Desvío Sur, del Municipio de Peñuelas.

Sección 2.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios y testigos; requerir información, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares, a los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución.

~~Sección 2.-~~ *Sección 3.-* La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, ~~así como las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con~~

~~relación al asunto objeto de estudio,~~ en un término de ~~noventa (90)~~ *ciento ochenta (180)* días contados a partir de la aprobación de esta Resolución.

~~Sección 3.-~~ *Sección 4.-* Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previa consideración, recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 77, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

La R. del S. 77, propone ordenar a la Comisión de _____ del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre las razones por las cuales no se ha culminado la construcción de la carretera PR-385, conocida como el Desvío Sur, del Municipio de Peñuelas; y para otros fines.

Esta Comisión entiende que la solicitud es razonable, dado que el asunto objeto de la medida presentada se encuentra dentro de la jurisdicción de la Comisión Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico de Puerto Rico y puede ser atendido por esta, según dispuesto en la R. del S. 15, aprobada el 16 de enero de 2025.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 77, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Asuntos Internos"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 14, y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno; y de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para enmendar la Ley Núm. 81-2019, según enmendada, conocida como~~,~~ "Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de insertar un nuevo Artículo 3.16 para prohibir a los Operadores, sus componentes o cualquier proveedor de servicio de estos, la recolección de información de las apuestas de los jugadores autorizados con el propósito de predecir la forma y manera en que estos apostarán; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el 2018, ~~el Tribunal Supremo~~ *la Corte Suprema* de los Estados Unidos cambió el panorama de los eventos deportivos al declarar inconstitucional la legislación que impedía a los estados regular y autorizar las apuestas en eventos deportivos~~.~~ *al resolver el caso de Murphy v. National Collegiate*

Athletic Association, *584 U.S. 453, 2018*. Debido a este cambio en el panorama deportivo y aprovechando la coyuntura histórica, el Gobierno de Puerto Rico dio un paso adelante y ~~creó~~ *aprobó la Ley 81-2019, según enmendada, conocida como* la *"*Ley de la Comisión de Juegos ~~de~~ *del Gobierno de* Puerto Rico*",* con el fin de*, entre otras cosas,* legalizar las apuestas deportivas en ~~la isla~~ *Puerto Rico*.

~~Sin embargo, con el paso del tiempo, para mantenerse a la vanguardia,~~ *Las enmiendas presentadas en esta legislación responden a la necesidad de atemperar el marco regulatorio de la industria de las apuestas deportivas* ~~es necesario atemperar las leyes~~ a los cambios tecnológicos que experimentamos *desde la aprobación de la Ley 81-2019, supra*. Existen tecnologías, como la Inteligencia Artificial, que, a través de la recolección de información, pueden predecir el comportamiento de los jugadores autorizados al momento de realizar sus apuestas. Debido a esto, se hace necesaria esta legislación para brindar seguridad y garantías a las apuestas deportivas en Puerto Rico.

Dentro de ese marco *de recolección de información de los jugadores autorizados* es que surge la necesidad de regular la recolección de información de las apuestas deportivas~~;~~. ~~y ya estados como Illinois han presentado legislación en esta dirección~~[14]~~.~~ Esto con el fin de proteger a los jugadores autorizados, así como a la industria en general a través del "*fair game*" o juego limpio.

Por ello, esta Asamblea Legislativa en su compromiso con la protección de nuestros ciudadanos y del juego limpio entiende pertinente enmendar la Ley 81-2019 a los fines de prohibir la recolección de información de las apuestas de los jugadores autorizados con el fin de predecir su comportamiento *o cualquier otro propósito relacionado*.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

~~Artículo~~ *Sección* 1.- Se ~~enmienda~~ *inserta un nuevo Artículo 3.16 a* la Ley Núm. 81-2019, según enmendada, conocida como, "Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico", ~~a los fines de insertar un nuevo artículo 3.16~~ que leerá como sigue:

"~~*Artículo*~~ *Artículo 3.16 – Prohibición de Recolección de Data.*

Se prohíbe a los Operadores, sus componentes o cualquier proveedor de servicio de éste la recolección de información de las apuestas de los jugadores autorizados con la intención de predecir la forma y manera en que los jugadores apostarán. Cualquier persona o entidad que no cumpla lo aquí dispuesto se expondrá a las multas establecidas en el Artículo 2.7 de esta Ley."

~~Artículo~~ *Sección* 2.- Orden de reglamentación.

Se ordena a la Comisión de Juegos ~~de~~ *del Gobierno de* Puerto Rico a establecer la reglamentación necesaria para cumplir con las disposiciones establecidas en esta Ley, de conformidad con lo establecido en la Ley Núm. 38-2017, según enmendada conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico".

~~Artículo~~ *Sección* 3.- Orden de Acuerdos.

Se ~~ordena~~ *faculta* a la Comisión de Juegos ~~de~~ *del Gobierno de* Puerto Rico y al Puerto Rico Innovations and Technology Services (PRITS), realizar los acuerdos colaborativos necesarios para cumplir con lo aquí dispuesto.

~~[14] Vease, Illinois General Assembly HB2570 (2023) https://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?DocNum=2570&GAID=17&DocTypeID=HB&LegID=147678&SessionID=112&SpecSess=&Session=&GA=103~~

~~Artículo~~ *Sección* 4.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, sección o parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción y competencia, la sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará el resto de las disposiciones de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, sección o parte de la Ley que hubiere sido declarada inconstitucional.

~~Artículo~~ *Sección* 5.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO

Las Comisiones de Gobierno; y de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 14, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con enmiendas**.**

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 14 propone enmendar la Ley Núm. 81-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de insertar un nuevo Artículo 3.16 para prohibir a los Operadores, sus componentes o cualquier proveedor de servicio de estos, la recolección de información de las apuestas de los jugadores autorizados con el propósito de predecir la forma y manera en que estos apostarán; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Exposición de Motivos del P. del S. 14 estableció que, para el 2018, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión histórica que transformó el panorama de las apuestas deportivas en toda la nación y territorios de los Estados Unidos de América. En el caso de *Murphy v. National Collegiate Athletic Association*, la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley federal que impedía a los estados regular y autorizar este tipo de apuestas. Esta decisión abrió la puerta para que cada estado estableciera sus propias reglas sobre las apuestas en eventos deportivos.

Así las cosas, el Gobierno de Puerto Rico tomó la iniciativa y aprobó la Ley 81-2019, según enmendada, conocida como la "Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico". Su propósito principal era legalizar y regular las apuestas deportivas en la Puerto Rico, y así, asegurar un marco normativo y reglamentario adecuado para esta nueva industria de las apuestas deportivas.

Desde entonces, el sector de las apuestas deportivas ha evolucionado rápidamente debido a muchos factores en los cuales, sin lugar a duda, están recogidos los avances tecnológicos. En particular, la entrada en el tablero de tecnologías como la Inteligencia Artificial, ubica al Gobierno de Puerto Rico en la posición de atemperar su marco normativo a la nueva realidad social y tecnológica que ella trajo consigo. Ejemplo de ello lo es la recolección y análisis de datos de los jugadores, lo que puede potencialmente usarse para predecir patrones de comportamiento y estrategias de apuestas.

Por un lado, si bien estas tecnologías pueden traer beneficios en términos de seguridad, eficiencia y muchas otras cosas, por el otro, también generan serias preocupaciones sobre asuntos que inciden o pudieran incidir en la privacidad y la equidad en las apuestas deportivas. Algunos estados de los Estados unidos de América, como, por ejemplo, el estado de Illinois, han implementado regulaciones estatales para garantizar la transparencia y proteger tanto a los apostadores como a la industria misma, promoviendo el principio de "juego limpio" (*fair game*).

Esta medida busca garantizar un entorno de apuestas seguro y justo, protegiendo la privacidad de los jugadores y asegurando que la industria opere bajo principios de integridad y transparencia. Al adaptar la regulación a los nuevos desafíos tecnológicos, el Gobierno de Puerto Rico se alinea con otras jurisdicciones que han tomado pasos similares para fortalecer sus marcos legales en el ámbito de las apuestas deportivas.

Por tanto, en respuesta a estos cambios y preocupaciones, mediante la aprobación de esta medida, la Asamblea Legislativa plasma el imperativo de prohibir la recolección de información de las apuestas de los jugadores autorizados con fines de predicción de comportamiento u otros usos similares.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, en aras de ejecutar su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del Proyecto del Senado 14, solicitó memoriales explicativos para llevar a cabo el proceso de análisis de la medida a las siguientes agencias: Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción; *Puerto Rico Innovation and Technology Service* (PRITS) y a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.

Al momento de la redacción del presente Informe, la Comisión de Gobierno contó con los memoriales explicativos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y *Puerto Rico Innovation and Technology Service* (PRITS). En el presente informe se hace constar los comentarios escritos y la postura de las agencias comparecientes. Veamos.

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción presentó su Memorial Explicativo por conducto de su administradora, Catherine I. Oliver Franco. En el Memorial, luego de hacer un recuento de los propósitos de la pieza legislativa, evaluar su alcance y realizar el análisis correspondiente, se mostraron a favor de su aprobación con enmiendas sugeridas a su texto decretativo.

La ASSMCA sostuvo que, puesto que por virtud de ley son la agencia encargada de velar por la salud mental y la prevención de adicciones, expresó su preocupación en torno a los efectos que la prevalencia del juego presenta en la sociedad, particularmente en lo relacionado a las secuelas que acompañan la adicción al juego o ludopatía.

Entre los fundamentos más destacados en la postura del Memorial, la ASSMCA sostuvo que el juego patológico es un trastorno de salud mental y que éste se incluye en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana. Que se estima que la prevalencia "de por vida" de este trastorno es de .4% en la población general y que sólo entre el 2% a 10% de las personas busca ayuda. Ello, sin contar, que la ayuda sea buscada como consecuencia de presiones financieras y no por un deseo genuino de abstenerse de jugar. Y que, más marcado aún, las personas con problemas de juegos patológicos tienen una probabilidad de entre 17% a 24% de presentar una conducta suicida.

Entre las enmiendas sugeridas, se destacan las siguientes:

a. Establecer alertas o notificaciones a los jugadores sobre su actividad de juego.
b. Limitar el acceso a ciertas secciones a las cuales a los jugadores se les dificulte controlar sus apuestas (Es decir, que el jugador se pueda autolimitar sus apuestas a las secciones a las cuales si pueda controlar).
c. Autorregular el límite y cuánto puede depositar para "juego" en un periodo de tiempo en específico.

d. Autoexcluirse de apostar con el operador por un tiempo preseleccionado.
e. Tiempos de descanso o tiempo fuera.
f. Establecimiento de límite de apuestas en las maquinas.
g. Utilizar el historial de juego para controlar las apuestas.

Las enmiendas fueron evaluadas y consideradas, más no fueron acogidas por la Comisión de Gobierno.

Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS)

La *Puerto Rico Innovation and Technology Services* presentó su memorial explicativo por conducto de su Director Ejecutivo, Antonio J. Ramos Guardiola. En sus comentarios, luego de hacer un recuento del alcance de la medida, realizar un análisis sobre el impacto del desarrollo de estas tecnologías de inteligencia artificial en la industria del juego y la exposición de sus conclusiones, se mostraron a favor de su aprobación con enmiendas sugeridas a su texto.

A suma síntesis, el proyecto resalta cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada en la industria del juego para varios propósitos. Entre los diversos usos que se le da a la inteligencia artificial al presente, está el que el P. del S. 14 promueve regular y proteger; la recolección de datos. Esto es, el empleo de inteligencia artificial para analizar el comportamiento y las preferencias de los jugadores en tiempo real. Ello mediante segmentos por denominadores o factores de ubicación, historial de apuestas, patrones de compra y otros, con el fin de predecir el comportamiento del jugador.

Por otro lado, la inteligencia artificial también está siendo utilizada como mecanismo de detección de fraude ya que puede identificar actividades sospechosas, como la creación múltiple de cuentas o patrones de comportamiento anómalo. De igual forma, algunas empresas alegan que emplean la inteligencia artificial para monitorear signos de juego compulsivo y facilitar intervenciones tempranas que promuevan prácticas de juego seguras. Sin embargo, al menos sobre esto último, persisten ciertas dudas sobre la trasparencia en el uso de estos datos y la efectividad real de estas medidas en la protección de los jugadores compulsivos. Y es que, precisamente, uno de los riesgos que se pueden atribuir al uso de inteligencia artificial es que, en lugar de "mitigar la prevalencia del juego" lo exacerbe empleando de forma optimizada estrategias que fomenten el juego compulsivo.

Con ello como fundamento principal, PRITS respalda la aprobación del Proyecto del Senado 14 ya que considera fundamental garantizar la privacidad y la trasparencia en el uso de la tecnología en la industria del juego, asegurando que su implementación responda a los principios éticos y buenas prácticas.

Sostuvo, además, que son de la creencia de que la prohibición de uso de datos para el análisis y predicción de comportamientos de los jugadores no limita a la innovación tecnológica. Muy por el contrario, equilibra, mediante un marco regulatorio claro, los avances tecnológicos y el desarrollo económico en un ambiente de confianza para el jugador en estos juegos.

Por último, recomendaron que se eliminara el Artículo 3, el cual ordena la firma de acuerdos colaborativos entre PRITS y la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, puesto que consideran que las disposiciones de este proyecto de ley son claras y autoejecutables sin necesidad de acuerdos entre las agencias. Esta enmienda fue evaluada, considerada y acogida, en parte, por la Comisión de Gobierno y su enmienda incorporada al Entirillado Electrónico que acompaña a este Informe.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico certifica

que el P. del S. 14 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 14,** recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que acompaña a este Informe.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Sen. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno

(Fdo.)
Sen. Nitza Moran Trinidad
Presidente
Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 17, y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para enmendar los Artículos 3.4 y 5.3 e insertar los nuevos Artículos 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9 a la Ley ~~Núm.~~ 10-2017, según enmendada, conocida como~~,~~ "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico~~,~~", a los fines de conceder al Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), la facultad de emitir certificaciones para la inscripción en el Registro de la Propiedad y de transferir derechos o la titularidad de bienes inmuebles; crear un Fondo de Reinversión Social de Puerto Rico y definir sus funciones; además de establecer un proceso expedito de entrega de títulos de propiedad a familias de comunidades rezagadas de todo Puerto Rico, enfocar los esfuerzos para combatir la pobreza en todas sus dimensiones, fortalecer y alinear la estructura gubernamental en beneficio de las poblaciones vulnerables; transferir todos los activos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales a la Oficina de Desarrollo Socio Económico y Comunitario de Puerto Rico; derogar la Ley ~~Núm.~~ 271-2002, según enmendada, conocida como, "Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales"; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la Ley ~~Núm.~~ 10-2017, según enmendada, se creó la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) con el fin de asistir en la transformación de las comunidades desventajadas de nuestra Isla y en mejorar la calidad de vida de quienes aquí residen. Además, la ODSEC tiene, por virtud de ley, el deber de colaborar en mejorar las condiciones físicas, de infraestructura y medioambientales de estas comunidades, lo que incluye la obtención de una vivienda digna, el acceso igualitario a servicios básicos y a otros servicios que contribuyan al cabal desarrollo de los residentes de nuestras comunidades especiales.

A la ODSEC se le otorgó la responsabilidad de corregir las deficiencias creadas a lo largo de los años bajo el programa de Comunidades Especiales, específicamente bajo el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales. Desde su creación mediante la Ley ~~Núm.~~ 271-2002, según enmendada, conocida como la "Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales*"*, el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales (en adelante, el "Fideicomiso") se conceptualizó como un instrumento para el desarrollo de infraestructura, la construcción o rehabilitación de viviendas, así como para la implementación de proyectos e iniciativas dirigidas a propiciar el desarrollo integral de las comunidades desventajadas. En principio, se concibió que los recursos de dicho Fideicomiso se ~~utilizaran~~ *utilizarán*, entre otras metas, para proveer residencias dignas a muchas familias e individuos, en un intento por reducir la brecha y disparidad en el acceso a recursos que enfrentan las familias que residen en las llamadas comunidades especiales.

No obstante, los errores cometidos en la implementación del mencionado programa provocaron serios impedimentos para cumplir con las metas establecidas. Debido a la dimensión y el alcance que pretendía el programa, así como la premura por ejecutarlo, es posible que muchos de los errores cometidos no se previeran o anticiparan.

Un ejemplo de esto son los obstáculos legales que han impedido la entrega de los títulos de propiedad a las familias que tanto los esperan. Actualmente, existen miles de familias que aún aguardan por su título de propiedad. Este proceso se ve obstaculizado en gran medida por barreras legales y gubernamentales, o por falta de documentación adecuada. En resumen, para entregar los títulos se requiere, en principio, la acción del Poder Ejecutivo y Judicial, ~~(~~a través del Registro de la Propiedad~~)~~. Por ello, se requiere la intervención del Poder Legislativo para superar los obstáculos legales que dificultan de manera innecesaria y dilatan el cumplimiento del compromiso asumido con miles de familias puertorriqueñas.

~~Sin embargo~~ *Ahora bien*, el asunto de los títulos de propiedad no es el único problema que enfrenta el Fideicomiso. Ante el cierre del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), conforme lo dispuesto por la Ley Núm. 109-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico", el deber de actuar como fiduciario del Fideicomiso fue transferido de dicha entidad a la ODSEC. Como parte del proceso de quiebra, el Fideicomiso sufrió un menoscabo de más de cien millones de dólares que aún permanecían en las cuentas del BGF. Si se analiza la situación actual del Fideicomiso al amparo de la Ley ~~Núm.~~ 219-2012, *según enmendada,* conocida como la "Ley de Fideicomisos", se debe concluir inevitablemente que la razón para la cual fue creado resulta ahora imposible de cumplir bajo la estructura actual del organismo. Las recientes evaluaciones legales y fiscales sustentan la necesidad de reformular y reestructurar el organismo. Esto es imprescindible, no solo para cumplir con el compromiso hacia la mayor cantidad de familias, sino también para eliminar la carga que el organismo impone sobre el aparato gubernamental en su totalidad.

Lo anterior necesariamente encamina a una reingeniería de programas para combatir la pobreza. En tiempos recientes, han proliferado buenas intenciones y propuestas de gobierno para enfrentar la pobreza. Sin embargo, en el intento se ha obviado brindar cohesión y estructura a esos esfuerzos, de manera que la iniciativa para combatir la pobreza sea centrada y maximice los recursos de forma coherente y efectiva.

Con esto en mente, la presente Ley busca consolidar comisiones y programas bajo la estructura de la ODSEC, con el fin de reunificar los esfuerzos y lograr resultados eficaces.

En síntesis, la siguiente Ley persigue varias metas fundamentales, estas son:

a) hacerle justicia a miles de familias que aún esperan por su título de propiedad;

b) consolidar programas para combatir la pobreza de forma tal que puedan tener mayor efectividad en la encomienda;
c) promover el envolvimiento efectivo del sector sin fines de lucro en acciones concertadas; y
d) establecer una nueva fórmula para combatir la pobreza fomentada en la participación de todos los sectores de interés.

Por otra parte, el Gobierno promoverá una política pública renovada desde una perspectiva integral y holística, pero, sobre todo, enfocada realmente en resolver la problemática de la pobreza, sin crear capas de burocracia adicionales que, al final, entorpecen y obstruyen el logro de las metas propuestas.

En fin, esta Asamblea Legislativa en su compromiso con el pueblo de Puerto Rico de mejorar las condiciones de nuestros menos afortunados entiende necesaria esta legislación en busca de brindar mayor eficacia, agilidad y recursos a ODSEC.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. – Se enmienda el Artículo 3.4 de la Ley 10-2017, según enmendada, conocida como, "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico~~,~~", para que lea como sigue

"Artículo 3.4. — Funciones y Deberes del Director Ejecutivo.

El Director Ejecutivo tendrá el deber de ejecutar la política pública establecida en esta Ley, así como la ejecución de la política pública relacionada al Tercer Sector en Puerto Rico. De igual forma, tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:

a. …

…

ñ. Fungir como Presidente de la Junta de Directores del Fondo para la Reinversión Social de Puerto Rico.

o. Emitir certificaciones para la inscripción, así como para la transferencia de derechos o de la titularidad de bienes inmuebles conforme a lo dispuesto en esta ley.~~"~~

Sección 2. – Se enmienda el Artículo 5.3 de la Ley Núm. 10-2017, según enmendada, conocida como, "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico," para que lea como sigue:

[Artículo 5. 3. — Creación del Fondo para la Reinversión Social de Puerto Rico.

Se crea el Fondo de Reinversión Social de Puerto Rico (en adelante el "Fondo"). Este Fondo estará administrado por la ODSEC y se podrá utilizar para incentivar iniciativas, tanto comunitarias como del Tercer Sector.

Estas iniciativas podrán ser para distintos fines, incluyendo, pero sin limitarse a:

a. Proyectos de infraestructura.
b. Reparación de viviendas, centros comunales, centros tecnológicos, espacios deportivos o de recreación.
c. Implementación de programas de servicios comunitarios.
d. Compra de equipos asistidos para personas con problemas de salud o impedimento.
e. Ayuda a Organizaciones Sin Fines de Lucro o Juntas Comunitarias que no sea para pagar asuntos administrativos.
f. Talleres de capacitación, entre otras iniciativas.

Este Fondo se nutrirá de asignaciones estatales, fondos federales y aportaciones del sector privado o individuos.]

"Artículo 5.3 — Creación del Fondo para la Reinversión Social de Puerto Rico.

Se crea el Fondo para la Reinversión Social de Puerto Rico (en adelante el "Fondo"). Este Fondo será creado de forma y manera que se constituya bajo la figura jurídica de un fideicomiso público, según dispone la Ley ~~Núm.~~ 219-2012, según enmendada, conocida como ~~la~~ "Ley de Fideicomisos de Puerto Rico~~.~~" el cual será dirigido por un Director Ejecutivo, designado por el presidente de la Junta creada en esta Ley y ratificado por esta.

El Fondo se podrá utilizar para incentivar iniciativas, tanto comunitarias como del Tercer Sector. Estas iniciativas podrán ser para distintos fines, incluyendo, pero sin limitarse a:

A. Entrega de títulos de propiedad en las comunidades de ingreso moderado o bajo teniendo prioridad las familias de comunidades denominadas anteriormente como "comunidades especiales" según la lista que para estos efectos posee la ODSEC.

B. Proyectos de infraestructura en comunidades de ingreso moderado o bajo.

C. Reparación de viviendas, centros comunales, centros tecnológicos, espacios deportivos o de recreación.

D. Implementación de programas de servicios comunitarios.

E. Compra de equipos asistido para personas con problemas de salud o impedimento.

F. Ayuda a Organizaciones Sin Fines de Lucro o Juntas Comunitarias que no sean para pagar asuntos administrativos.

G. Talleres de capacitación, entre otras iniciativas.

El Fondo se nutrirá de asignaciones estatales, fondos federales y aportaciones del sector privado o individuos, así como de todos los activos no comprometidos del extinto Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, según se estableció ~~bajo~~ en la Ley 271-2002, según enmendada, conocida como "Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales". El dinero del Fondo se mantendrá depositado en la banca comercial, separados e independientes de otros fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico.

Sección 3.- Se añade un Artículo 5.4 a la Ley ~~Núm.~~ 10-2017, según enmendada, conocida como, "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico~~,~~", para que lea como sigue:

"Artículo 5.4 -. Poderes del Fondo.

El Fondo será dirigido por un director ejecutivo, según establecido en el Artículo 5.3 y sus acciones tendrán que ser ratificadas por la Junta de Directores del mismo, a excepción de aquellas medidas de carácter administrativo que estén vinculadas directamente a la operación diaria del Fondo. Además, se dispone que el Fondo tendrá y podrá ejercer todos los derechos y poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a cabo su propósito, incluyendo los siguientes:

a. Adoptar un sello oficial y alterar el mismo a su conveniencia.

b. Demandar y ser demandado bajo su propio nombre y querellarse y ser querellado.

c. Formular, adoptar, enmendar y derogar estatutos para la administración de sus asuntos y aquellas normas, reglas y reglamentos que fueren necesarios o pertinentes para ejercitar y desempeñar sus funciones, poderes y deberes.

d. Adquirir bienes muebles e inmuebles por cualquier forma legítima, incluyendo concesión, regalo, compra, legado o donación y poseer y ejercer todos los derechos de propiedad sobre los mismos, así como disponer de ellos.

e. Tomar dinero a préstamo con el propósito de proveer fondos para pagar el costo de adquisición de cualquier propiedad para el Fondo o para llevar a cabo cualquiera de sus fines o para el propósito de refinanciar, pagar o redimir cualesquiera de sus obligaciones en y podrá garantizar el pago de todas y cualesquiera de sus obligaciones mediante cesión, pignoración, hipoteca o cualquier otro gravamen sobre todos o cualesquiera de sus contratos, rentas, ingresos o propiedades.

f. Otorgar financiamiento, mediante delegación de fondos, contratos de servicios o donativos de otra índole a personas individuales o jurídicas que provean servicios de gestión, apoyo y asistencia técnica para desarrollo de obras y proyectos en las denominadas Comunidades Especiales o cualquier otra comunidad de ingreso bajo que el Fondo decida de acuerdo a sus propios reglamentos.

g. Otorgar a residentes de comunidades de ingreso moderado o bajo préstamos personales o préstamos con garantía hipotecaria para la compra, construcción o rehabilitación del hogar propio de dichos residentes siempre que dichos préstamos estén evidenciados por pagarés o documentos fehacientes que reconozcan dicha deuda.

h. Otorgar a residentes de las Comunidades de ingreso moderado o bajo préstamos personales o préstamos con garantía hipotecaria para el desarrollo por dichos residentes de proyectos económicos localizados en dichas Comunidades siempre que dichos préstamos estén evidenciados por pagarés o documentos fehacientes que reconozcan dicha deuda. Se entenderá por proyecto económico toda aquella iniciativa de autogestión económica.

i. Recibir asistencia gerencial, técnica, administrativa y contratar para estos fines.

j. Invertir sus fondos, según sea autorizado por resolución de la Junta, sujeto a cualquier restricción y limitación conforme a la Ley ~~Núm.~~ 113~~ de 3 de agosto de~~ 1995, ~~según enmendada~~ ~~mejor~~ conocida como "Ley para autorizar al Gobernador a Promulgar Directrices y Asesorar a las Agencias sobre Inversión de Fondos Públicos".

k. Negociar y otorgar, con cualquier persona, incluyendo cualquier agencia gubernamental, federal o estatal, todo tipo de contrato y todos aquellos instrumentos y acuerdos necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidos al Fondo por esta Ley.

l. Ejercer todos los poderes inherentes a las funciones, prerrogativas y responsabilidades que le confiere esta Ley, ejercer aquellos otros poderes que le confiera cualquier otra ley aplicable, así como realizar cualquier acción o actividad necesaria o conveniente para llevar a cabo sus propósitos lo que puede incluir pero no se limita a: evaluar e incluir disposiciones que permitan exonerar total o parcialmente del pago de las hipotecas anteriormente generadas bajo el extinto Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales a individuos y familias que cumplan con los criterios que establezca el propio Fondo, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la evaluación de la situación socioeconómica, fuentes de ingreso, edad, composición familiar y condiciones de salud de los participantes del extinto programa de Comunidades Especiales.

m. Otorgar donativos a residentes de las Comunidades de ingreso moderado o bajo que no excedan de $15,000 para ser utilizados para la compra, construcción o rehabilitación de la vivienda en la cual residan y de la cual sean sus propietarios; entendiéndose que el desembolso nunca se hará directamente al residente. El Fondo

establecerá los requisitos y normas para la otorgación de los donativos a personas de escasos recursos económicos y le dará al evidenciar el uso que se hará del donativo que se conceda.

n. Negociar y otorgar con cualquier persona contratos, pagarés en evidencia de deuda y todos aquellos otros instrumentos, acuerdos y obligaciones de cualquier naturaleza, que sean necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidos al Fideicomiso. El Fondo también podrá hipotecar o pignorar la totalidad o parte de los ingresos que reciba."

Sección 4 - Se añade un Artículo 5.5 a la Ley ~~Núm.~~ 10-2017, según enmendada, conocida como, "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico~~,~~", para que lea como sigue:

"Artículo 5.5 - Junta de Directores del Fondo

Los poderes del Fondo serán ejercidos por una Junta de Directores que estará compuesta por siete (7) miembros, a saber: el Secretario de la Vivienda, el Secretario de Transportación y Obras Públicas, el Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario quien fungirá como su Fiduciario y Presidente, un (1) Alcalde, un (1) Líder Comunitario residente de una comunidad de ingreso moderado o bajo y dos (2) ciudadanos privados en representación del interés público. El Alcalde y el Líder Comunitario serán designados por el Gobernador o Gobernadora de turno por un término de cuatro (4) años, y permanecerán en sus puestos hasta que sus sucesores sean designados. El Alcalde podrá ser removido si el Gobernador o Gobernadora entiende que no goza de su confianza y el Líder Comunitario será seleccionado de una lista de potenciales candidatos presentados por las Comunidades de ingreso bajo según validadas bajo la ODSEC al amparo de la Ley y reglamentos y solo podrá ser removido durante su término por justa causa. Los dos (2) ciudadanos privados que representan el interés público en la Junta serán nombrados por el Gobernador o Gobernadora por términos escalonados de cinco (5) y seis (6) años cada uno, hasta que sus sucesores sean designados. Estos ciudadanos podrán ser removidos de sus cargos por el Gobernador o Gobernadora en cualquier momento. En caso de renuncia de algún miembro, su sucesor será designado por el período restante del término original del director saliente. Los miembros de la Junta de Directores no recibirán compensación alguna por sus servicios como tales; sin embargo, los que no sean funcionarios públicos tendrán derecho a reembolso por gastos.

Una mayoría de los miembros de la Junta constituirá quórum para todos los fines y los acuerdos se adoptarán con el voto afirmativo de la mayoría de los presentes. Ninguna ausencia o vacante entre los miembros de la Junta impedirá que ésta, una vez haya quórum, ejerza todos sus derechos y desempeñe todos sus deberes. Salvo que el reglamento del Fondo lo prohíba o lo restrinja, cualquier acción necesaria o permitida en cualquier reunión de la Junta o de cualquier comité designado por la Junta conforme a las facultades que en esta Ley se le confiere, será autorizada sin que medie una reunión, siempre y cuando todos los miembros de la Junta o comité de la Junta, según sea el caso, den su consentimiento escrito a dicha acción. En tal caso, el documento escrito constará en las actas de la Junta o comité de la Junta, según sea el caso. Salvo que el reglamento del Fondo provea otra cosa, los miembros de la Junta o de cualquier comité de la Junta podrán participar en cualquier reunión de la Junta o de cualquier comité de ésta, respectivamente, mediante conferencia telefónica, u otro medio de comunicación, a través del cual todas las personas participantes en la reunión puedan escucharse simultáneamente. La participación de cualquier miembro de la Junta o

cualquier comité de ésta en la forma antes descrita constituirá asistencia a dicha reunión. Disponiéndose, que dicha reunión será objeto de convocatoria con por lo menos veinticuatro horas de antelación."

Sección 5.- Se añade un Artículo 5.6 a la Ley ~~Núm.~~ 10-2017, según enmendada, conocida como, "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico," para que lea como sigue:

"Artículo 5.~~5~~6 - Responsabilidad Civil

La Junta, sus miembros, sus oficiales, agentes representantes y empleados de la ODSEC en funciones inherentes al Fondo no incurrirán en responsabilidad civil por cualquier acción tomada de buena fe en el desempeño de sus deberes y responsabilidades conforme a las disposiciones de esta Ley. El Gobierno de Puerto Rico proveerá representación legal, y asumirá el pago de cualquier reclamación o sentencia que pudiera exigirse o recaer sobre la Junta o cualquiera de sus miembros, oficiales, agentes representantes y empleados de la ODSEC en su capacidad personal u oficial, que sea demandado en daños y perjuicios por el desempeño de sus funciones cuando la causa de acción se base en negligencia o en alegadas violaciones a los derechos civiles del demandante, debido a actos u omisiones, incurridos de buena fe, en el curso de su trabajo encomendado y dentro del marco de sus funciones."

Sección 6. - Se añade un Artículo 5.7 a la Ley ~~Núm.~~ 10-2017, según enmendada, conocida como, "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico~~,~~", para que lea como sigue:

"Artículo 5.7 - Exenciones Contributiva y/o Administrativas

Se resuelve y declara que los fines para los cuales se crea el Fondo y para los cuales ejercerá sus poderes son propósitos públicos para el beneficio del pueblo de Puerto Rico, y el ejercicio de los poderes conferidos bajo esta Ley constituye el cumplimiento de funciones gubernamentales esenciales. El Fondo, exclusivamente, estará exento del pago de todas las contribuciones, patentes, cargos o licencias impuestas por el Gobierno de Puerto Rico o sus municipios.

El Fondo estará también exento del pago de todo tipo de cargos, sellos y comprobantes de rentas internas, aranceles, contribuciones o impuestos de toda naturaleza requeridos por ley para la tramitación de procedimientos judiciales, la producción de certificados en toda oficina o dependencia del Gobierno de Puerto Rico, y el otorgamiento de documentos públicos y su inscripción en cualquier registro público del Gobierno de Puerto Rico.

Con el propósito de facilitar la gestión de fondos que le permitan realizar sus propósitos corporativos, los préstamos solicitados y emitidos a favor del Fondo bajo esta Ley, su transferencia y el ingreso que de ellos se devenguen, incluyendo cualquier ganancia realizada de la venta de dichas obligaciones, estarán y permanecerán en todo tiempo exentos de contribuciones sobre ingresos, patentes o cargos impuestos por el Gobierno de Puerto Rico o cualquiera de sus municipios.

El Fondo queda eximido de la Ley ~~Núm.~~ 73-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Generales para Centralización del Gobierno de Puerto Rico de 2019" y para esos propósitos constituye su propia junta de compras y subastas para la cual se aprobará reglamento al amparo de la Ley ~~Núm.~~ 38-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico~~.~~".

Se exime a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico y al Fondo para la Reinversión Social del pago de toda clase de derechos, comprobantes,

sellos, aranceles o impuestos requeridos para el otorgamiento de los documentos públicos antes mencionados, así como para la presentación e inscripción en el Registro de la Propiedad o en cualquier otro registro público. Esta exención se extiende al pago de derechos requeridos por la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio o cualquier oficina de permisos de los municipios autónomos con jerarquías de la I a la V.

Expresamente se exime del cumplimiento con lo dispuesto en la Ley ~~Núm.~~ 26-2017, según enmendada, ~~mejor~~ conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal~~,~~", a los negocios o transacciones jurídicas respecto a los bienes inmuebles del Fondo de Reinversión Social o de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico.

Los proyectos que realice el Fondo estarán exentos de tener que cumplir con los requisitos de la Ley ~~Núm.~~ 416-2004, según enmendada, ~~mejor~~ conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental~~,~~", dado que van mayormente dirigidos a la rehabilitación, reemplazo, reparación, reconstrucción y construcción de vivienda, obras públicas y/o infraestructura de servicios en áreas previamente impactadas y debido a que dichas obras no deben constituir un impacto significativo adicional al medioambiente. Además, se eximen dado a que los proyectos propuestos no sólo mejorarán la calidad de vida de los residentes de estas comunidades, sino que también elimina la contaminación de aguas usadas, basura en los cuerpos de agua, criaderos de mosquitos, contaminación por corriente superficial y otras situaciones negativas a los recursos. No participará de dicha exención cualquier proyecto de reemplazo o construcción de vivienda, obras públicas o infraestructura de servicios fuera de la comunidad ya existente o en cualquier área dentro de la comunidad que no haya sido previamente impactada.

Sección 7.- Se añade un Artículo 5.8 a la Ley ~~Núm.~~ 10-2017, según enmendada, conocida como, "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico~~,~~", para que lea como sigue:

"Artículo 5.8. - Exclusión e inscripción mediante Certificación

Con el propósito de dar celeridad, certeza y uniformidad registral a aquellos inmuebles adquiridos, reparados, reconstruidos, rehabilitados o construidos con fondos provenientes del extinto Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales o de cualquier otro fondo asignado o administrado por la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico o por el propio Fondo creado mediante esta Ley, se autoriza al Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico en calidad de Fiduciario, o al funcionario que éste designe, a emitir bajo juramento certificaciones para la inscripción, transferencia de derechos o títulos de propiedad. Dichas certificaciones incluirán una descripción detallada del inmueble cuya inscripción se solicita o cuya titularidad o derechos son transferidos, así como una relación de la transacción jurídica y de los fondos utilizados para la adquisición, reparaciones o construcción de dicho inmueble. Tales certificaciones serán suficientes para la inscripción de la propiedad, así como para la transferencia de derechos o de la titularidad en favor del Fondo, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico o de cualquier otra persona a la que se le vayan a transferir derechos o la titularidad de tales inmuebles y las mismas serán inscritas en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico sin sujeción a requisitos como lo son el tracto y otras consideraciones registrales."

Sección 8.- Se añade un Artículo 5.9 a la Ley ~~Núm.~~ 10-2017, según enmendada, conocida como, "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico~~,~~", para que lea como sigue:

"Artículo 5.9 – Recursos Humanos

Los empleados que servirán de apoyo al Fondo serán provistos por la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC). Los empleados de la ODSEC tendrán entre su hoja de deberes el brindar apoyo técnico y administrativo al Fondo según sea necesario~~.~~".

Sección 9. — Derogación

Se deroga la Ley ~~Núm.~~ 271-2002, según enmendada, conocida como "Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales" ~~que creó un Fondo Público, conocido como 'Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales"~~.

Sección 10.- Transferencia de Fondos

Se transfieren todos los activos del ~~"~~Fondo del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales~~"~~ a la ~~"~~Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico~~",~~ (ODSEC). Se ordena a todas las agencias concernidas que adquirieron propiedades inmuebles con fondos del aquí derogado Fideicomiso a que transfieran la titularidad de las mismas de manera inmediata a la ODSEC.

Sección 11. - Separabilidad

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de esta ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de esta que así hubiere sido declarada inconstitucional.

Sección 12. - Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME CONJUNTO

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Gobierno; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, previo estudio, análisis y consideración del Proyecto del Senado 17, recomiendan a este Honorable Cuerpo Legislativo su aprobación, con las enmiendas, según incluidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 17 tiene el propósito de enmendar los Artículos 3.4 y 5.3 e insertar los nuevos Artículos 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9 a la Ley Núm. 10-2017, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico", a los fines de conceder al Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), la facultad de emitir certificaciones para la inscripción en el Registro de la Propiedad y de transferir derechos o la titularidad de bienes inmuebles; crear un Fondo de Reinversión Social de Puerto Rico y definir sus funciones; además de establecer un proceso expedito de entrega de títulos de propiedad a familias de comunidades rezagadas de todo Puerto Rico, enfocar los esfuerzos para combatir la pobreza en todas sus dimensiones, fortalecer y alinear la estructura gubernamental en beneficio de las poblaciones vulnerables; transferir todos los activos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales a la Oficina de Desarrollo Socio Económico

y Comunitario de Puerto Rico; derogar la Ley Núm. 271-2002, según enmendada, conocida como, "Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales"; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

Mediante la aprobación de la Ley 10-2017, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico" se creó la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (en adelante, ODSEC) con el fin de mejorar la calidad de vida en comunidades desventajadas. Ello incluye la obtención de una vivienda digna, el acceso igualitario a servicios básicos y a otros servicios que contribuyan al cabal desarrollo de los residentes de nuestras comunidades especiales en Puerto Rico.

Entre otras cosas, la ODSEC tiene como misión transformar estas comunidades, mejorar su infraestructura y garantizar el acceso a servicios básicos como vivienda digna, educación y salud. No obstante, la implementación de programas destinados a cumplir estos objetivos ha enfrentado serios problemas administrativos, legales y financieros, lo que ha limitado su efectividad.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la ODSEC es la entrega de títulos de propiedad a miles de familias que llevan años esperando su documentación legal. La falta de coordinación entre las Ramas de Gobierno, junto a las barreras legales y problemas de documentación, han retrasado este proceso sustancialmente.

Es por ello que, en aras de solucionar esta situación, la Asamblea Legislativa propone eliminar los obstáculos legales que dificultan de manera innecesaria y que dilatan el cumplimiento del compromiso del Gobierno de Puerto Rico y agilizar la titularización de propiedades, para garantizar con ello la estabilidad y seguridad jurídica a los residentes de estas comunidades especiales.

Según la Exposición de Motivos de la medida, a la ODSEC se le otorgó la responsabilidad de corregir las deficiencias surgidas a lo largo de los años bajo el programa de Comunidades Especiales, específicamente bajo el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, creado en virtud de la Ley 271-2002, según enmendada, conocida como "Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales". Este fideicomiso se estableció con la intención de financiar el desarrollo de infraestructura, la construcción y rehabilitación de viviendas, y la implementación de proyectos comunitarios.

Sin embargo, con el cierre del Banco Gubernamental de Fomento en 2017, los fondos del fideicomiso se vieron gravemente afectados con una pérdida superior a los cien millones de dólares. Esto ha provocado que la estructura actual del fideicomiso no sea sostenible, provocando, por tanto, la necesidad de rediseñarlo a los fines de revestirlo de funcionalidad y que sus recursos sean maximizados.

Ante estos desafíos, esta pieza legislativa busca reorganizar y consolidar los programas sociales bajo la estructura de la ODSEC, con el objetivo de mejorar la efectividad en la lucha contra la pobreza. Se identifican cuatro objetivos fundamentales: En síntesis, la siguiente Ley persigue varias metas fundamentales, estas son:

a) hacerle justicia a miles de familias que aún esperan por su título de propiedad;
b) consolidar programas para combatir la pobreza de forma tal que puedan tener mayor efectividad en la encomienda;
c) promover el envolvimiento efectivo del sector sin fines de lucro en acciones concertadas; y
d) establecer una nueva fórmula para combatir la pobreza fomentada en la participación de todos los sectores de interés.

Por último, el proyecto enfatiza la importancia de una política pública renovada que no solo atienda las necesidades de las comunidades desventajadas, sino que también lo haga de manera ágil y eficaz. Ello, eliminando los obstáculos que han afectado la gestión de la ODSEC, garantizando una administración más eficiente y orientada a resultados concretos. En conclusión, esta legislación representa un compromiso con la equidad y el desarrollo social, brindando a miles de puertorriqueños la oportunidad de acceder a mejores condiciones de vida.

ALCANCE DEL INFORME

En aras de analizar y evaluar la medida, el 13 de febrero de 2015 las Comisiones de Gobierno; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico solicitaron memoriales explicativos a la Administración de Servicios Generales; el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario y al Departamento de la Vivienda.

Al momento de la redacción del presente Informe, las Comisiones de Gobierno; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional contaron con los memoriales explicativos del Departamento de Transportación y Obras Públicas y del Departamento de la Vivienda. Así pues, en el presente Informe Conjunto se hace constar los comentarios escritos y la postura de las dos agencias comparecientes. Veamos.

Departamento de la Vivienda

El Departamento de la Vivienda presentó su memorial explicativo por conducto de su Secretaria, Ciary Y. Pérez Peña, manifestando su respaldo a la aprobación del P. del S. 17 y guardando deferencia con ODSEC.

Ello fundamentado en los objetivos principales de la medida, los cuales, entre otras cosas, se dirigen a: i. reestructurar y fortalecer a la ODSEC con la finalidad de mejorar la efectividad de los programas destinados a las comunidades desventajadas en Perto Rico; ii. atender la problemática que surge para entregar a las familias los títulos de propiedad debido a las barreras legales y administrativas que retrasan y obstaculizan los procesos a favor de las familias beneficiadas; iii. atender, mediante una reestructuración, la crisis financiera del Fideicomiso Perpetuo que sufrió un menoscabo tras el cierre del Banco Gubernamental de Fomento, lo que ha impedido su correcto funcionamiento; iv. subsanar la falta de cohesión y coordinación en los programas destinados a combatir la pobreza mediante la consolidación de todos estos programas bajo la estructura de la ODSEC; y v. promover la participación del sector sin fines de lucro, propiciándolo a través de un enfoque integral que no solo brinde asistencia inmediata, sino que fomente un modelo de desarrollo sostenible.

El Departamento de la Vivienda sostiene que la propuesta presentada en la medida legislativa atiende la necesidad de generar un enfoque integral que permita una acción más coordinada, eficiente y efectiva en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas de Puerto Rico. Por lo cual respalda la aprobación del P. del S. 17 por su enfoque estructural y organizativo para mejorar la ODSEC, garantizar la entrega de títulos, fortalecer el Fideicomiso Perpetuo y coordinar los esfuerzos contra la pobreza en Puerto Rico.

Departamento de Transportación y Obras Públicas

El Departamento de Transportación y Obras Públicas, por conducto de su Secretario, el Dr. Edwin E. González Montalvo, sostuvo que esta medida propone enmendar la estructura y funciones de la ODSEC con el propósito de mejorar la calidad de vida en las comunidades desventajadas.

Sostuvo que, según la exposición de motivos, la ODSEC asumió la responsabilidad de corregir las deficiencias del programa de Comunidades Especiales, en particular, del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, que fue concebido para fomentar el desarrollo de infraestructura, viviendas y proyectos comunitarios. No obstante, su implementación enfrentó obstáculos legales y financieros, como la falta de entrega de títulos de propiedad y la quiebra del Banco Gubernamental de Fomento, lo que evidencia la necesidad de reformular y reestructurar a la ODSEC.

El DTOP sostiene que la medida está alineada con iniciativas para incentivar el desarrollo económico y facilitar el trámite y el acceso a la vivienda en comunidades vulnerables. No obstante, destaca que ciertas facultades incluidas en la medida, como lo puede ser, por ejemplo, la negociación de contratos, emisión de deuda y establecimiento de acuerdos financieros, deberían consultarse con otras entidades gubernamentales.

Si bien el DTOP no objeta la firma de la medida, enfatiza la necesidad de que la inscripción de títulos en el Registro de la Propiedad se realice mediante **Certificación**, solicitando que se le notifique previamente una lista de las propiedades a transferir antes de ejecutar cualquier transacción.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", las Comisiones de Gobierno; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional, certifican que la aprobación del P. del S. 17, no conlleva un impacto fiscal que genere obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

El P. del S. 17 responde al compromiso del Gobierno de Puerto Rico con la equidad social y el desarrollo sostenible, mediante una gestión gubernamental ágil, coordinada y efectiva, que garantice justicia social y oportunidades reales para las comunidades más vulnerables en Puerto Rico.

Además, las enmiendas propuestas son un paso esencial para fortalecer la ODSEC y garantizar una gestión eficiente y efectiva en el desarrollo de las comunidades desventajadas de Puerto Rico. La reestructuración del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales corrige deficiencias en la administración de recursos, asegurando su uso óptimo en infraestructura, vivienda y desarrollo comunitario. La medida elimina barreras en la obtención de los títulos de propiedad y optimiza los programas que luchas contra la pobreza en la ODSEC

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Gobierno; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo Conjunto sobre el **Proyecto del Senado 17,** recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

(Fdo.)
Sen. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno

(Fdo.)
Sen. Wanda "Wandy" Soto Tolentino
Presidenta
Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 74, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales, sin enmiendas:

"LEY

Para añadir un nuevo sub-inciso (r) al inciso 4 del Artículo 1-B, y enmendar el inciso (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo"; a los fines de aumentar los beneficios de compensación por incapacidad transitoria (dietas) y autorizar al administrador para realizar ajustes por costo de vida para todos los pagos por incapacidad que permite la ley; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con la premisa constitucional que reconoce a todo trabajador protección contra riesgos a su salud en el ejercicio de su trabajo o empleo, se estableció un sistema de compensaciones por accidentes del trabajo y enfermedades de carácter ocupacional. Éste representa el programa de seguridad social más antiguo en el Gobierno de Puerto Rico, cuyo ente principal es el trabajador. Y es que, el bienestar de éste constituye un pilar del desarrollo económico. Es así que, en virtud de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo" se establece un adecuado balance entre los intereses que fundamentan las relaciones laborales.

Los beneficios de compensación económica que provee el Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo tienen como propósito primordial remediar, en parte, la pérdida de ingresos de los trabajadores que sufren alguna condición o lesión como resultado de un acto o función inherente al trabajo, que haya ocurrido en el curso de éste y que resulte como consecuencia de la ejecución del mismo. Este Sistema es administrado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, agencia encargada de instrumentar la política proteccionista que promueve la precitada Ley, y otorga compensaciones económicas a aquellos obreros que, por motivo de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, se determine que se encuentran total o parcialmente incapacitados.

El Sistema provee al trabajador accidentado ayuda económica durante su periodo de incapacidad transitoria para que éste pueda sostenerse económicamente hasta su reinserción al mundo laboral. Asimismo, provee compensación económica para atender la pérdida de ingresos del trabajador que sufre lesiones incapacitantes o la muerte como consecuencia de un accidente del trabajo o enfermedad ocupacional.

El Gobierno de Puerto Rico, históricamente ha implementado para nuestros lesionados diferentes aumentos en los beneficios por incapacidad transitoria, tales como, el aumento en el beneficio semanal por incapacidad transitoria (dietas) a un máximo de sesenta y cinco (65) dólares; y el incremento al pago por concepto de incapacidad transitoria a un máximo de cien (100) dólares y un mínimo de treinta (30) dólares, esto mediante las Leyes Núm. 97 de 10 de julio de 1986; y 257-2004, respectivamente.

Evidentemente, los beneficios que reciben los trabajadores lesionados han permanecidos inalterados desde el año 2004, y no se han tomado en consideración factores que han impactado el costo de vida de los puertorriqueños, como la crisis económica a nivel mundial, la inflación, el impacto de desastres naturales (huracanes y terremotos), y la pandemia producida por el COVID-19. Todos estos factores han incidido en el costo de vida de los puertorriqueños, lo que ha provocado que la compensación del trabajador no sea proporcional al momento económico que se vive. Por lo cual,

muchos trabajadores optan por no acogerse a los beneficios por no ser suficientes para el sustento de su familia.

La política pública de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado es la de brindar la mejor y más amplia protección contra los riesgos del empleo, y que resulte favorable a los mejores intereses del trabajador. Esto con el fin de garantizar el derecho constitucional de toda persona trabajadora a estar asegurada contra riesgos a su salud en el lugar de empleo. Ciertamente, el compromiso de esta Asamblea Legislativa es proveerle a nuestros trabajadores una compensación económica que se atempere a los tiempos, con el propósito de otorgarles mejores beneficios y calidad de vida. Es nuestra responsabilidad proteger y mejorar las condiciones de nuestros trabajadores. Por ello consideramos meritorio incrementar los beneficios de compensación por incapacidad transitoria (dietas), y autorizar al administrador para que realice los ajustes correspondientes por costo de vida en todos los pagos por incapacidad establecidos por la ley.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo sub-inciso (r) al inciso 4 del Artículo 1-B de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 1-B.- Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Se crea, para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, una corporación como instrumentalidad gubernamental del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para actuar, por autoridad del mismo, bajo el nombre de Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

(1) Facultades y poderes generales de la Corporación.

…

(2) Junta de Gobierno.

…

(3) Facultades y obligaciones.

…

(4) Deberes y funciones del Administrador.

Además de las funciones que la Junta de Directores asigne al Administrador, de conformidad con los poderes conferidos a ésta, el Administrador deberá llevar a cabo los siguientes deberes y funciones:

(a) …

…

(r) Se autoriza a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para que cada tres (3) años, pueda realizar un ajuste por costo de vida, a todos los pagos por incapacidad, de conformidad con las necesidades de los lesionados a los beneficios dispuestos en esta Ley. En el caso de la incapacidad transitoria, cualquier ajuste se hará con posterioridad al 1 de julio de 2028."

Sección 2.- Se enmienda el inciso (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 3.- Derechos de Obreros y Empleados.

Todo obrero o empleado que sufriere lesiones o enfermedades ocupacionales dentro de las condiciones de esta Ley tal y como se establece en el Artículo 2 de esta ley tendrá derecho:

ASISTENCIA MEDICA

(a) Asistencia Médica. -…

(1) …

…

(2) …

…

INCAPACIDAD TRANSITORIA

(b) Incapacidad Transitoria.- Si la incapacidad fuere de carácter temporal o transitoria, a una compensación equivalente a sesenta y seis y dos tercios (66 2/3) por ciento del jornal que percibía el día del accidente, o que hubiere de percibir a no ser por la ocurrencia del accidente, durante el período de incapacidad para el trabajo, pagadera por semanas vencidas. El período de tal pago no excederá en ningún caso de **[trescientas doce (312)]** *trescientas sesenta y cuatro (364)* semanas; **/Disponiéndose, que]** en ningún caso se pagará más de **[cien (100)]** *doscientos (200)* dólares ni menos de **[treinta 30)]** *sesenta (60)* dólares semanales. El obrero o empleado tendrá derecho a compensación desde el día que se presente al médico para recibir tratamiento. **[Disponiéndose, que en]** *En* aquellos casos en que un lesionado a juicio del Administrador requiera como parte del tratamiento ser referido a adiestramiento o readiestramiento vocacional, el lesionado recibirá la compensación antes mencionada, pero en ningún caso se pagarán más de veintiséis (26) semanas. Ningún empleado o funcionario público podrá recibir durante el período de incapacidad para el trabajo, con excepción del período que disfrute de la licencia regular por vacaciones o por enfermedad, cantidad alguna por concepto de compensaciones semanales que, sumadas al sueldo que reciba de la agencia del gobierno para la que trabaje, exceda del sueldo regular de su plaza.

…"

Sección 3.- Reglamentación.

Se ordena y faculta a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a promulgar toda regla, reglamento, carta circular o norma administrativa que sea necesaria para poder cumplir con las disposiciones de esta Ley.

Sección 4.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier disposición de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la parte específica de esta, que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Sección 5.- Vigencia.

Esta Ley y sus disposiciones le serán aplicables a todo obrero o empleado que sufra un accidente del trabajo o enfermedad ocupacional que ocurra a partir del 1 de julio de 2025."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión del Trabajo y Relaciones Laborales, previo estudio y consideración del **P. del S. 74**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El **Proyecto del Senado 74,** tiene como objetivo *añadir un nuevo sub-inciso (r) al inciso 4 del Artículo 1-B, y enmendar el inciso (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo"; a los*

fines de aumentar los beneficios de compensación por incapacidad transitoria (dietas) y autorizar al administrador para realizar ajustes por costo de vida para todos los pagos por incapacidad que permite la ley; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo en Puerto Rico es un componente esencial de la seguridad social, establecido bajo la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, con el objetivo de proteger a los trabajadores ante los riesgos para su salud derivados de su actividad laboral. Este sistema ha jugado un papel crucial en la economía del país, promoviendo el bienestar de los trabajadores y contribuyendo a su desarrollo económico. No obstante, a pesar de los esfuerzos históricos por mejorar los beneficios de los trabajadores, desde 2004 no se han realizado ajustes significativos en las compensaciones. Ante este escenario, el Proyecto del Senado 74 promueve una reforma crucial que busca actualizar los beneficios por incapacidad transitoria, ajustándolos a las realidades económicas actuales y mejorando la calidad de vida de los trabajadores lesionados.

El Proyecto del Senado 74 se presenta como una respuesta a las necesidades de actualización y mejora del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo en Puerto Rico. Este sistema, que tiene como objetivo proteger a los trabajadores que sufren accidentes laborales o enfermedades ocupacionales, ofrece compensaciones económicas para garantizar su sustento durante el tiempo de incapacidad. Sin embargo, los beneficios establecidos por la Ley Núm. 45 han permanecido sin cambios desde 2004, a pesar de los diversos factores que han impactado el costo de vida, como la crisis económica mundial, la inflación, los desastres naturales y la pandemia del COVID-19.

El Proyecto del Senado 74 promueve un ajuste en los beneficios por incapacidad transitoria (dietas), proponiendo un aumento en las compensaciones y autorizando al administrador del sistema a realizar ajustes conforme al costo de vida actual. El objetivo principal es que los beneficios sean proporcionales a la situación económica del país, para que los trabajadores lesionados puedan acceder a una compensación económica más acorde con sus necesidades. Esta iniciativa busca garantizar que los trabajadores reciban un apoyo más justo y adecuado, protegiendo así su derecho constitucional a estar asegurados contra riesgos laborales, y mejorando su calidad de vida

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión Trabajo y Relaciones Laborales del Senado de Puerto Rico, en cumplimiento de su responsabilidad en el estudio y evaluación del proyecto, solicitó memoriales explicativos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y a las Uniones de Contadores Internos y Externos, Abogados, Empleados y Médicos. Habiéndose recibido en la Comisión los comentarios de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, expresamos su posición sobre los propósitos de esta medida. Los mismos se exponen a continuación.

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) ha reconocido que los beneficios para los trabajadores lesionados no se han ajustado desde 2004. Para cumplir con los objetivos de la Asamblea Legislativa, la CFSE encargó un estudio actuarial que evaluó el impacto económico de los aumentos en las mensualidades de las incapacidades transitorias. El estudio indicó que, si se duplicaran los pagos, el costo sería de aproximadamente $11,022,347.48. En cuanto a la extensión de las semanas de beneficio de 312 a 364 semanas, esta medida no afectaría significativamente, ya que el promedio de semanas pagadas es de menos de 5 semanas.

La CFSE recomienda a la Asamblea Legislativa que, en lugar de ajustar los beneficios únicamente con base en el costo de vida, se otorguen las herramientas necesarias para revisar la estructura de los beneficios. A pesar de estos desafíos, los últimos siete estados financieros de la CFSE muestran una posición neta promedio de $75,944,970.86, lo que indica que, si esta tendencia continúa, la entidad estaría en una posición favorable para afrontar los aumentos sin necesidad de incrementar los costos de las tarifas.

Por lo antes expuesto, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)**, endosó la aprobación** de esta pieza legislativa, con las recomendaciones sugeridas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional certifica que el P. del S. 215 no impone una obligación económica adicional en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión del Trabajo y Relaciones Laborales, reconociendo la importancia del Proyecto del Senado 74, entiende que esta medida es no solo justa, sino también necesaria para abordar las realidades económicas actuales que enfrentan los trabajadores lesionados en Puerto Rico.

El Proyecto del Senado 74 se presenta como una medida crucial para actualizar los beneficios por incapacidad transitoria, ajustándolos a las condiciones económicas actuales y mejorando la calidad de vida de los trabajadores lesionados. La Comisión considera que esta reforma es justa, pues busca garantizar que los beneficios sean proporcionales al costo de vida, permitiendo a los trabajadores lesionados acceder a una compensación económica adecuada que les permita sostenerse durante su incapacidad.

Además, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), reconoció a través del memorial explicativo sometido, que tiene los recursos necesarios para afrontar el aumento de los beneficios sin la necesidad de incrementar los costos de las tarifas. Por ello, la Comisión del Trabajo y Relaciones Laborales apoya firmemente la aprobación de este proyecto, entendiendo que es una medida que responde a las necesidades de los trabajadores y fortalece el sistema de compensaciones, garantizando la protección y bienestar de los empleados en Puerto Rico.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión del Trabajo y Relaciones Laborales del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el P. del S. 74**,** recomendando su aprobación sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Luis Daniel Colón La Santa
Presidente
Comisión del Trabajo y Relaciones Laborales"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 79, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, ~~y~~ conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra", a los fines de cumplir con la política pública de centralizar los procesos de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos o la dependencia gubernamental que le sustituya; y para otros fines para relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de Puerto Rico ha expresado en numerosas ocasiones su compromiso con promover y agilizar el desarrollo económico de la isla. Con este propósito, aprobó la Ley *Núm.* 161-2009, según enmendada, conocida como ~~la~~ "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos *de Puerto Rico*". Esta ley tiene como objetivo establecer el marco legal y administrativo ~~que regirá~~ *para* la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por parte del Gobierno de Puerto Rico. Además, creó la Oficina de Gerencia de Permisos, entre otras disposiciones. De esta forma se buscó establecer un nuevo sistema de permisos transparente, ágil y eficiente.

De conformidad con la exposición de motivos de la ~~referida~~ Ley *Núm.* 161, *supra*, la intención de la Asamblea Legislativa fue que la Oficina de Gerencia de Permisos, evaluara las solicitudes de permisos y consultas de ubicación. Además, requirió que emitieran determinaciones finales, permisos y certificaciones para la prevención de incendios y de salud ambiental. Estos procesos, que antes de la aprobación de ~~esta~~ *dicha* ley eran evaluados y expedidos o denegados por diversas entidades gubernamentales bajo sus leyes orgánicas o leyes especiales, ahora están a cargo de la Oficina de Gerencia de Permisos. Asimismo, las entidades gubernamentales regresarían *a* su función original: ~~la de~~ fiscalizar y proteger los importantes intereses que sus leyes orgánicas les delegan. Así, mediante el mecanismo establecido, estas entidades podrán fiscalizar el cumplimiento de los solicitantes con los permisos otorgados y expedir multas, solicitar paralización de obras, entre otras acciones.

Por otro lado, la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, ~~y mejor~~ conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra" tiene el propósito de reglamentar la extracción de arena, grava, piedra, tierra, sílice, calcita, arcilla y cualquier otro componente similar de la corteza terrestre para uso comercial y que no esté reglamentado como mineral económico de terrenos públicos y privados.

Lo que se pretende con esta legislación es enmendar la Ley Núm. 132 ~~de 25 de junio de 1968~~, supra, para cumplir con la política pública establecida de unificar y centralizar en una sola agencia, ~~la Oficina de Gerencia de Permiso,~~ el proceso de concesión o denegación de los permisos que otorga el Gobierno de Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, *conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 1. — Jurisdicción del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Se confiere jurisdicción al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales *en la fiscalización de los permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos* sobre las actividades de extracción, excavación, remoción y dragado de los componentes de la corteza terrestre llamados arena, grava, piedra, tierra, sílice, calcita, arcilla

y cualquier otro componente similar de la corteza terrestre, que no esté reglamentado como mineral económico en terrenos públicos y privados. En lo sucesivo se hará referencia a las anteriores substancias como "componentes de la corteza terrestre", al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como "el Departamento" y al referido Secretario como "el Secretario" *y a la Oficina de Gerencia de Permisos como "la Oficina".*

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 2. — Permiso—Necesidad.

Ninguna persona, natural o jurídica, asociación o grupo de personas, departamento, agencia, corporación cuasi pública, municipio o instrumentalidad del [**Estado Libre Asociado]** *Gobierno* de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América realizará excavaciones, extracciones, remociones o dragados de los componentes de la corteza terrestre en terrenos públicos o privados dentro de los límites geográficos del [**Estado Libre Asociado]** *Gobierno* de Puerto Rico sin obtener un permiso a esos fines *de la Oficina* [**del Secretario]**. Tampoco podrán exportarse componentes de la corteza terrestre excavados, extraídos, removidos o dragados en el [**Estado Libre Asociado]** *Gobierno* de Puerto Rico, sin la previa autorización [**del Secretario]** *de la Oficina.*

[El Secretario] *La Oficina* establecerá por reglamento las normas *y requisitos* a regir *para la otorgación de los permisos* cuando se trate de excavaciones, extracciones, remociones o dragados incidentales a, o necesarios para la realización de obras o proyectos autorizados conforme a las disposiciones de ley. De igual forma, dispondrá todo lo relacionado con la exportación de componentes de la corteza terrestre.

[El Secretario] *La Oficina* podrá eximir de permisos y del pago que en virtud de ello corresponda cuando las cantidades extraídas no sean significativas o sustanciales.

[El Secretario] *La Oficina* asegurará el cumplimiento de la Ley sobre Política Pública Ambiental, mediante la circulación de una Evaluación Ambiental o de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes de otorgar cualquier permiso, excepto para aquellos peticionarios que soliciten en la zona costanera y en las cuencas hidrográficas de ríos que se utilizan como toma de agua. En estos casos [**el Secretario]** *la Oficina* se asegurará del cumplimiento de la [**Ley de Política Ambiental]** *Ley Núm. 416-2004, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental"* mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Mediante el permiso, [**el Secretario]** *la Oficina* reglamentará todos los requisitos, límites y restricciones relacionadas con los aspectos operacionales de las actividades de excavación, extracción, remoción o dragado de los componentes de la corteza terrestre, así como los días y horas de operación y acarreo. Esta facultad para reglamentar los días y horas de operación se extiende tanto a los días laborales, festivos y los fines de semana.

En casos de solicitudes de permisos originales que **[el Departamento]** *la Oficina* certifique en un término no mayor de treinta (30) días que fueron radicadas completas y correctas, **[el Secretario]** *la Oficina* tendrá la responsabilidad de otorgar o denegar el permiso en un término no mayor de noventa (90) días."

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 3. — Vistas públicas.

Antes de expedir un nuevo permiso, [**el Secretario]** *la Oficina* notificará al *Departamento y al* público sobre las solicitudes al efecto a través de los medios que por reglamento establezca. [**El Secretario]** *La Oficina* celebrará vistas públicas si surgieren comentarios, controversias u objeciones en torno a alguna solicitud y podrá convocar éstas motu proprio o a requerimiento de parte interesada. Estas vistas públicas se celebrarán en el municipio donde se llevaría a cabo la actividad solicitada, en horas no laborables, presidida por un panel técnico legal. En la primera parte de la vista los solicitantes le presentarán a la comunidad la actividad que solicita que sea autorizada y contestarán preguntas y aclararán dudas de los asistentes. En la segunda parte el panel recibirá para récord todos los comentarios, preocupaciones, dudas y objeciones de los comparecientes en cuanto al permiso solicitado. Los interesados o afectados podrán comparecer personalmente o por conducto de abogado, interrogar testigos y ofrecer evidencia para probar su caso. Se fomentará la participación del público de la forma más liberal y abierta posible. Luego de celebrada la vista, y dentro de los treinta (30) días de haberse celebrado dicha vista, [**el Secretario]** *la Oficina* tendrá la responsabilidad de denegar o conceder el permiso y así lo consignará por escrito, con las conclusiones de hecho y de derecho en que se basa la misma y remitirá por correo certificado copia de dicho escrito a cada una de las partes comparecientes en el procedimiento. Las incidencias de la vista pública serán recogidas en un récord admisible en evidencia ante un tribunal.

[**El Secretario]** *La Oficina* permitirá la participación o intervención en estas vistas *del Departamento y* de todas las personas que así lo interesen.

[**El Secretario]** *La Oficina* podrá requerir de los solicitantes del permiso el pago de los gastos en que *la Oficina* [**el Departamento]** incurra por concepto de celebrar de las vistas tales como el uso de salón, avisos públicos, sistema de sonido, entre otros. [**El Secretario]** *La Oficina* determinará por reglamento las normas relativas a esta disposición. Los pagos irán a un fondo especial y su importe será usado para sufragar los gastos en razón de las vistas. Los solicitantes tendrán la opción de contratar directamente los servicios requeridos para celebrar las vistas."

Sección 4.- Se enmienda el ~~acápite A de~~ Artículo 4 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, *conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 4. — Factores en otorgamiento o denegación de permisos.

(a) *La Oficina* **[El Secretario]** tomará en consideración ~~los siguientes~~ *las recomendaciones del Departamento y los siguientes* factores al otorgar o denegar los permisos: […]

(1) …

…

(8) Violaciones anteriores por el peticionario, sus representantes o agentes, de cualquier condición o requisito establecido en un permiso, de cualquier resolución, decisión u orden dictada por ~~el Secretario~~ *la Oficina* o cualesquiera disposiciones de esta ley o de los reglamentos promulgados al amparo del mismo.

(b) ~~…~~ Las asociaciones y entidades que operen sin fines de lucro tendrán prelación sobre cualesquiera otras personas, asociaciones y entidades que operen con fines distintos

para excavar, extraer, remover y dragar componentes de la corteza terrestre en terrenos de dominio público o en terrenos propiedad del ~~Estado Libre Asociado~~ *Gobierno de Puerto Rico* o de cualquiera de sus corporaciones públicas o municipios excepto cuando se trate de la renovación de un permiso. "

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 5. — Limitaciones.

(a) Los permisos consignarán las condiciones y limitaciones relativas a las actividades que autoricen. Los permisos no se otorgarán por un período mayor de cinco (5) años y no serán objeto de traspaso o cesión de clase alguna, sin la aprobación [**del Secretario]** *de la Oficina.* [**El Secretario]** *La Oficina* establecerá la fecha de efectividad de un permiso teniendo presente el tiempo que le tome a su poseedor iniciar la actividad que autorice y además, por justa causa, tendrá autoridad para reducir o extender la misma. [**El Secretario]** *La Oficina* tendrá la autoridad para extender la vigencia, entre otras razones, para reponer el tiempo que un concesionario esté impedido de utilizar su permiso por causas ajenas a su voluntad.

(b) [**El Secretario]** *La Oficina* fijará fianza en todo permiso a concederse en virtud de esta ley, y la misma se consignará a favor **[del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales]** *de la Oficina de Gerencia de Permisos*. Para realizar el cálculo de la fianza se deberá tomar en consideración el costo real de la actividad cubierta por esta ley ajustado al nivel inflacionario vigente al momento de otorgar el permiso o su renovación, más la restauración total del área objeto del permiso, la que no será mayor a la cantidad previamente establecida y el costo de la inflación, según la proyección oficial del Gobierno de Puerto Rico. El término de la fianza se extenderá por un año posterior a la fecha de vencimiento del permiso. Previa determinación de justa causa, **[el Departamento]** *la Oficina* podrá requerir la extensión del término de la duración de la fianza.

(c) [**El Secretario]** *La Oficina* podrá revisar, cuando crea necesario, las condiciones y limitaciones consignadas en los permisos concedidos por virtud de esta ley y podrá ordenar, con cargo a sus poseedores, los estudios, las evaluaciones y las mejoras que estime pertinentes para la protección del interés público.

(d) Previa celebración de vistas de naturaleza cuasi judicial, [**del Secretario]** *la Oficina* podrá revocar un permiso cuando hubiese comprobado que su poseedor ha violado los términos del mismo, o cuando las condiciones geológicas, naturales o ambientales existentes en el área al momento de su expedición hubieren variado significativamente, o cuando demostrare que la revocación abonaría a la salud, a la seguridad, al orden o al interés público.

(e) [**El Secretario]** *La Oficina* no expedirá permisos para excavar, extraer, remover o dragar componentes de la corteza terrestre cuando esté presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

(1) Cuando dichos componentes fuesen a ser extraídos de terrenos de dominio público o de terrenos propiedad del ~~Estado Libre Asociado~~ *Gobierno de Puerto Rico* o de cualquiera de sus corporaciones públicas o municipios con el fin de exportar o transportar los mismos fuera de los límites jurisdiccionales del ~~Estado Libre Asociado~~ *Gobierno* de Puerto Rico. Sólo se permitirá la

exportación de materiales de la corteza terrestre cuando a juicio [**del Secretario]** *la Oficina* no se afecta el interés público y dichos materiales hubiesen sido extraídos de terrenos privados.

(2) (A) Cuando el lugar donde se desarrollaría la actividad fuese un área de pesca o un área recreativa, o un balneario, o un arrecife, o un área de reserva de recursos naturales o de vida silvestre o dunas o cuando dicho lugar estuviese localizado en los alrededores de cualquiera de las áreas mencionadas y la labor de excavación, extracción, remoción o dragado pudiese afectar las actividades de pesca y recreación o la integridad de los sistemas naturales del arrecife del área de reserva.

(B) Cuando el lugar donde se desarrollaría la actividad fuese la zona marítimo-terrestre; o aguas abajo de ríos represados; o fincas con propósitos agrícolas, excepto cuando se declare cualesquiera de los lugares anteriores como yacimiento de interés público especial o que de la naturaleza de la acción solicitada se demuestre mediante Declaración de Impacto Ambiental que no tiene impacto ambiental significativo y se preserva o mejora la calidad del área, incluyendo la servidumbre del salvamento, o para fines de conservación y control de inundaciones.

(3) Cuando la persona o empresa solicitante o cualesquiera de los miembros de su Junta de Directores, o cualesquiera de sus accionistas, o cualesquiera de sus funcionarios le adeudase **[al Departamento]** *a la Oficina* o al Secretario de Hacienda cualquier suma de dinero por concepto de actividades controladas por esta ley.

(4) Cuando la persona o empresa solicitante o cualesquiera de los miembros de su Junta de Directores, o cualesquiera de sus accionistas, o cualesquiera de sus funcionarios fuese poseedor, en todo o en parte, de un cierto número de permisos similares al que solicita. [**El Secretario]** *La Oficina* establecerá por reglamento normas relativas al número de permisos que podrá poseer, en todo o en parte, una misma persona o empresa y al hacer tal determinación velará por que en ningún área o región de Puerto Rico se cree una situación opuesta al interés público que pueda encarecer los materiales que precisa la industria de la construcción. Hasta tanto se establezcan las normas a este efecto, por la presente se limita a cuatro (4) el número de permisos que [**el Secretario]** *la Oficina* podrá concederle, en todo o en parte, a una misma persona o empresa para excavar, extraer, remover o dragar componentes de la corteza terrestre. Esta disposición no afectará la renovación de permisos vigentes a la fecha de aprobación de esta ley.

(5) Cuando no se hubiese hecho un deslinde preciso del lugar donde la actividad se desarrollaría y, de necesitarse, un estudio del efecto que la misma tendría sobre dicho lugar y el área adyacente

(f) [**El Secretario]** *La Oficina* establecerá un sistema que permita identificar el origen y otras circunstancias de materiales extraídos de la corteza terrestre que se transportan por las vías públicas de Puerto Rico.

(g) [**El Secretario]** *La Oficina* podrá enmendar cualesquiera de los términos y condiciones del permiso ya sea por solicitud o motu proprio. Se considera una enmienda a permiso cualquier solicitud dirigida a modificar de alguna forma las condiciones de un permiso

otorgado una vez pasados los veinte (20) días provistos por ley para solicitar reconsideración al mismo.

(1) Cualquier solicitud de enmienda que cambie la información presentada en el aviso publicado como parte del trámite del permiso concedido requerirá la publicación de aviso público de dicho cambio y el derecho de comentar sobre el mismo en un período no menor de diez (10) días a partir de dicha publicación.

(2) Cualquier solicitud de enmienda que genere impactos al ambiente no evaluados previamente por **[el Departamento]** *la Oficina*, **[el Secretario]** *ésta* asegurará el cumplimiento con la **[Ley de Política Ambiental]** Ley *Núm.* 416-2004, según enmendada, *conocida como* "Ley sobre Política Pública Ambiental", mediante la circulación de una Evaluación Ambiental o suplementando el documento ambiental original correspondiente.

(3) Cualquier solicitud de aumento de vigencia de tres (3) años será evaluada como si fuese una solicitud de renovación y deberá cumplir con el procedimiento prescrito en el Artículo 6 de esta ley."

Sección 6.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

Artículo 6. — Renovación.

[**El Secretario]** *La Oficina* podrá renovar los permisos de extracción, excavación, remoción o dragado de los componentes de la corteza terrestre. La solicitud de renovación se hará por escrito [**al Secretario]** *a la Oficina* con no menos de noventa (90) días de antelación a la fecha del vencimiento del permiso que se intenta renovar. La solicitud de renovación deberá cumplir con todos los requisitos de la solicitud original, entendiéndose, que si no ha habido cambios en las condiciones expresadas en la solicitud original, bastará con consignarlos así mediante declaración jurada del solicitante. No empece, toda solicitud de renovación deberá contener la información necesaria para que **[el Departamento]** *la Oficina* pueda cumplir con el Artículo 4(c) de la **[Ley 9 sobre Política Pública Ambiental]** *Ley Núm. 416-2004, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental"*. Una vez radicada la solicitud de renovación en tiempo **[el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales]** *la Oficina de Gerencia de Permisos* tendrá treinta (30) días para certificar que la misma está completa para ser procesada. Pasado dichos treinta (30) días sin **[el Departamento]** *la Oficina* haber hecho su certificación, se entenderá que la solicitud de renovación está completa para ser procesada. La evaluación de una solicitud de renovación deberá considerar los factores mencionados en el Artículo 4 de esta ley, e incluirá una inspección ocular del área de extracción. [**El Secretario]** *La Oficina* podrá requerir una evaluación legal. [**El Secretario]** *La Oficina*, una vez que la Junta de Calidad Ambiental certifique el cumplimiento del Artículo 4(c), podrá consignar su decisión sobre la solicitud de renovación.

Disponiéndose, sin embargo, que el permiso continuará en vigor como permiso provisional hasta tanto **[el Departamento]** *la Oficina* y demás agencias resuelvan la solicitud de renovación y la misma advenga final y firme. Aquellas solicitudes de renovación que no se presenten con los noventa (90) días de antelación al vencimiento del permiso no tendrán el beneficio de los términos concedidos en esta sección y se considerarán como solicitudes de permiso original.

Para toda solicitud de renovación, **[el Departamento]** *la Oficina* llevará a cabo una inspección ocular para verificar los datos de la solicitud. También, se requerirá una notificación a las comunidades aledañas apercibiéndoles de su derecho a comentar u objetar dentro de los próximos treinta (30) días desde la notificación, la expedición del permiso objeto de renovación. Toda persona que pueda verse afectada por la adjudicación de la solicitud de renovación y que interese comentar u objetar una renovación o permiso podrá solicitar la celebración de una vista pública, según lo dispone en el Artículo 3 de esta ley."

Sección 7.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 8. — Denegación o revocación; vista pública.

Cuando se otorgue, deniegue o revoque un permiso, [**el Secretario]** *la Oficina* notificará al peticionario y a los comentantes o participantes de la vista pública del permiso o al titular del permiso, según sea el caso, con un escrito contentivo de los fundamentos o razones que mediaron para la denegatoria, [otorgamiento] o la revocación del permiso. Los comentantes o participantes del proceso de vista pública del permiso así como la parte adversamente afectada que demuestren que la acción final que se tome sobre un permiso afectará a sus personas, sus ingresos, su economía o sus derechos o menoscabará o degradará el ambiente o los sistemas naturales en el área inmediata o adyacente al lugar donde se haría la excavación, extracción, remoción o dragado de componentes de la corteza terrestre podrá solicitar dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la notificación que se celebre una vista pública cuasijudicial.

[**El Secretario]** *La Oficina* podrá requerir de quienes soliciten vistas el pago de los gastos y honorarios por servicios profesionales y consultivos en que **[el Departamento]** incurra por concepto de las vistas y de las investigaciones, o estudios correspondientes. [**El Secretario]** *La Oficina* podrá eximir el pago de estos gastos y honorarios a personas que demuestren ser de escasos recursos. [**El Secretario]** *La Oficina* determinará por reglamento las normas relativas a esta disposición. Los pagos irán a un fondo especial y su importe será usado para sufragar los gastos en razón de las vistas."

Sección 8.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 9. — Oficiales examinadores, facultades.

[**El Secretario]** *La Oficina* podrá designar a uno o más oficiales examinadores para presidir las vistas públicas que se contemplan en esta ley. Uno de ellos deberá estar admitido a ejercer la profesión de abogado en el **[Estado Libre Asociado]** *Gobierno* de Puerto Rico. Los examinadores tendrán autoridad para:

(1) Tomar juramentos y declaraciones;

(2) expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos y la presentación de evidencia documental;

(3) recibir evidencia pertinente y dictaminar sobre ella;

(4) tomar o hacer tomar deposiciones;

(5) dirigir el curso de la audiencia;

(6) celebrar conferencias para simplificar las controversias;

(7) disponer de instancias procesales o asuntos similares, y

(8) recomendar decisiones

Sección 9.- Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, *conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 10. — Reconsideración y revisión ante el Tribunal **[de Circuito]** de Apelaciones.

(a) Reconsideración. — Cualquier parte adversamente afectada por una resolución, orden o decisión [**del Secretario]** *la Oficina*, y debidamente legitimada, podrá solicitar reconsideración dentro del término de quince (15) días, a partir de la fecha de notificación de dicha resolución, orden o decisión.

La radicación de la solicitud de reconsideración no eximirá a persona alguna de cumplir u obedecer cualquier decisión u orden [**del Secretario]** *la Oficina*, ni operará en forma alguna a modo de suspensión o posposición de la vigencia de la misma, a menos que medie una orden especial ~~del Secretario~~ *de ésta*. [**El Secretario]** *La Oficina* tendrá la facultad para conceder o denegar la reconsideración o para suspender, enmendar o revocar su orden o decisión con o sin la celebración de vista. La radicación de una solicitud de reconsideración suspenderá el término para radicar un recurso de revisión ante el Tribunal **[de Circuito]** de Apelaciones y el término comenzará a contarse de nuevo desde que se notifica la decisión final [**del Secretario]** *la Oficina* sobre la solicitud de reconsideración.

(b) Revisión ante el Tribunal **[de Circuito]** de Apelaciones. — La resolución o decisión que emita [**el Secretario]** *la Oficina* luego de celebrada la vista pública o sometido el caso advendrá final y firme a menos que la parte o partes legitimadas que resulten adversamente afectadas soliciten una revisión ante el Tribunal **[de Circuito]** de Apelaciones, panel de San Juan, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación. En esta solicitud de revisión sólo podrán levantarse argumentos que figuren en el récord del caso y los cuales [**el Secretario]** *la Oficina* haya tenido la oportunidad de evaluar y considerar. La radicación del recurso de revisión de cualquier resolución, orden o decisión [**del Secretario]** *de la Oficina* no suspenderá los efectos de tal resolución, orden o decisión a menos que el tribunal así lo ordene a solicitud de parte interesada, previa vista y determinación de que la parte contra la que se hubiere dictado la resolución, orden o decisión, sufrirá daños graves o irreparables de no decretarse tal suspensión. La resolución que al efecto dicte el tribunal deberá señalar una fianza por la cantidad que se considere justa para responder de los daños y perjuicios que se ocasionarán por la suspensión de la ejecución de la resolución, orden o decisión [**del Secretario]** *de la Oficina*. La revisión judicial se llevará a efecto a base del récord administrativo de los procedimientos ante ~~el Departamento~~ *la Oficina*. Las determinaciones [**del Secretario]** *la Oficina* en relación a los hechos serán concluyentes si están sostenidas por evidencia sustancial. La resolución que dicte el tribunal será firme a los treinta (30) días de notificada y solamente podrá revisarse por certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual expedirá el auto a su discreción.

Sección 10.- Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, *conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 11. — Entrada a propiedad privada.

[El Secretario o su representante] *La Oficina o el Secretario,* previo permiso del dueño o poseedor, podrá entrar a propiedad privada en el cumplimiento de sus funciones. Si

no fuere posible obtener dicho permiso, **[el Secretario o su representante]** *la Oficina o el Secretario* podrá*n* solicitar de cualquier juez del Tribunal de Primera Instancia, mediante declaración que expida una orden autorizando entrar en la propiedad. El juez expedirá la orden si determinare que la entrada a la propiedad es pertinente a la investigación."

Sección 11.- Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 12. — Facultad para emitir órdenes, comparecencia ante los tribunales.

[**El Secretario]** *La Oficina o el Secretario* podrá*n* obligar a cualquier solicitante o poseedor de un permiso a mostrar libros, papeles y documentos que a su juicio sean necesarios para realizar cualquier acto o ejercer cualquier función que esta ley le encomienda. También podrá expedir aquellas órdenes de hacer o no hacer y de cese y desistimiento que estime necesarias a los fines de lograr el cumplimiento de los propósitos de esta ley y de los reglamentos que al amparo del mismo se promulguen. La parte adversamente afectada por tal orden, podrá solicitar una vista administrativa en la que expondrá las razones que tuviere para que la orden sea modificada o revocada y no deba ser puesta en vigor. La resolución o dictamen [**del Secretario]** *de la Oficina o del Secretario* podrá ser revisada en la forma en que se disponga en el Artículo 10 de esta ley. No se suspenderán los efectos de dicha resolución o dictamen [**del Secretario]** *de la Oficina o del Secretario* a menos que así lo ordene el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico o **[el propio Secretario]** *la propia Oficina o Secretario*, conforme se establece en el mencionado Artículo 10. Podrá*n*, además, [**el Secretario]** *la Oficina*, *o el Secretario* **[representado]** *representada o representado* por el Secretario de Justicia, por los abogados del Departamento o por un abogado particular que al efecto se contrate, acudir ante los tribunales de Puerto Rico o ante los tribunales de los Estados Unidos de América, para solicitar que se ponga en vigor cualquier orden o decisión suya o para solicitar, mediante cualquier acción civil, cualquier remedio que estime pertinente para lograr los propósitos de esta ley y de los reglamentos que al amparo del mismo se promulguen.

Sección 12.- Se enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 13. — Sanciones penales.

Cualquier persona, natural o jurídica, asociación o grupo de personas, corporación cuasi pública, departamento, agencia, municipio o instrumentalidad del **[Estado Libre Asociado]** *Gobierno* de Puerto Rico que personalmente y/o a través de sus agentes, representantes o empleados, realice actividades de extracción, excavación, remoción o dragado de los componentes de la corteza terrestre en terrenos públicos o privados del **[Estado Libre Asociado]** *Gobierno* de Puerto Rico sin un previo permiso **[del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales]** *de la Oficina de Gerencia de Permiso*, incurrirá en delito menos grave y, convicto que fuere, será castigado con multa no mayor de quinientos dólares ($500) ni menor de cien dólares ($100) o con cárcel que no excederá de seis (6) meses o ambas a penas a discreción del tribunal.

También constituirá delito menos grave, castigable con las penas arriba indicadas, la violación por parte de los mencionados en el párrafo anterior, personalmente y/o a través de sus agentes, representantes o empleados, de cualquier resolución, decisión u orden dictada por [**el Secretario]** *la Oficina o el Secretario* o de cualquier condición o requisito establecido en

un permiso o de cualesquiera de las disposiciones de esta ley y de los reglamentos promulgados al amparo de las mismas.

Cada uno de los días en que continúe la infracción de cualquier disposición, requisito, determinación, orden o reglamento [**del Secretario]** *de la Oficina* *o del Secretario* o de cualesquiera de las disposiciones de dichas secciones, o decreto final expedido por el Tribunal de ~~Distrito de Puerto Rico~~ *Primera Instancia*, constituirá una infracción separada y distinta.

Se concede competencia al Tribunal de ~~Distrito de Puerto Rico~~ *Primera Instancia* para ventilar los delitos establecidos en esta sección.

Sección 13.- Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 14. — Multas administrativas.

Se faculta [**al Secretario]** *a la Oficina* para imponer sanciones y multas administrativas por infracciones a esta ley, previa celebración de vistas públicas de naturaleza cuasi judicial. Las multas administrativas no excederán de cincuenta mil dólares ($50,000).

Sección 14.- Se enmienda el Artículo 15 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 15. — Fondo Especial.

Todos los dineros que reciba [**el Secretario]** *la Oficina* en el cumplimiento de su tarea de poner en vigor esta ley y los reglamentos promulgados en virtud de la misma, ingresarán en un Fondo Especial que se denominará "Fondo Especial a Favor **[del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales]** *de la Oficina de Gerencia de Permiso*", para ser utilizado por [**el Secretario]** *la Oficina* para aquellas funciones, actividades, procedimientos o gestiones administrativas vinculadas al cumplimiento de los propósitos de esta ley y de los reglamentos que al amparo del mismo se promulguen. El Secretario de Hacienda pondrá a la disposición [d**el Secretario]** *de la Oficina*, los dineros ingresados en dicho Fondo Especial mediante libramientos autorizados o firmados por **[del Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales]** *de la Oficina de Gerencia de Permisos* o su representante autorizado."

Sección 15.- Se enmienda el Artículo 16 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 16. — Información pública.

La información, los documentos y los estudios relacionados con la excavación, extracción, remoción y dragado de componentes de la corteza terrestre que obren en poder **[del Departamento]** *de la Oficina* serán tenidos como información, documentos y estudios de carácter público, y se harán disponibles a cualquier ciudadano que interese examinarlos. No obstante, los documentos, libros y papeles que [**el Secretario]** *la Oficina* ordene que los poseedores le muestren con arreglo a la facultad que le otorga el Artículo 12 de esta ley tendrán un carácter confidencial."

Sección 16.- Se enmienda el Artículo 17 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 17. — Acciones de ciudadanos.

Cualquier persona interesada en o afectada por una actividad de excavación, extracción, remoción o dragado de componentes de la corteza terrestre podrá instar una acción civil bajo esta ley en los siguientes casos:

(1) Contra cualquier persona, instrumentalidad, agencia, municipio, corporación pública o cuasi pública del **[Estado Libre Asociado]** Gobierno de Puerto Rico que se halle en violación de esta ley o de cualquier reglamento u orden adoptado al amparo de él por [**el Secretario]** *la Oficina*.

(2) Contra [**el Secretario]** *la Oficina* cuando **[éste]** *ésta* haya dejado de cumplir un deber no discrecional que esta ley le imponen o cuando haya incurrido en un abuso o exceso de discreción, o en una acción arbitraria al poner en vigor esta ley o los reglamentos u órdenes que adopte al amparo de la misma.

El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico tendrá jurisdicción sobre estas acciones independientemente de cual sea la cuantía en controversia.

Al emitir cualquier orden final sobre acciones incoadas bajo esta sección, el tribunal podrá hacer la adjudicación de costas que a su juicio proceda a cualquier de las partes litigantes."

Sección 17.- Se enmienda el Artículo 18 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 18. — Delegación de Facultad.

[**El Secretario]** *La Oficina* podrá delegar las facultades que por esta ley se le confieren, excepto la adopción de reglamentos en cualquier funcionario o empleado que actúe bajo su jurisdicción. La autorización así delegada podrá ser revocada en cualquier momento por [**el Secretario]** *la Oficina*.

Sección 18.- Se enmienda el Artículo 19 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 19. — Facultad para reglamentar.

Las reglas y reglamentos relativos a la excavación, extracción, remoción y dragado de componentes de la corteza terrestre vigentes a la fecha de aprobación de esta ley, y no incompatibles con los fines de la misma, se mantendrán en vigor por un período no mayor de un (1) año a partir de dicha fecha. Antes de concluir ese período, [**el Secretario]** *la Oficina* deberá haber adoptado nuevas reglas y reglamentos a tenor con los propósitos de esta ley y con sujeción a lo que establece la **[Ley núm. 112 de 30 de junio de 1957, según enmendada]** *Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".*

Sección 19.- Se enmienda el Artículo 20 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada*, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra"* para que lea como sigue:

"Artículo 20. — Derechos.

[**El Secretario]** *La Oficina* establecerá mediante reglamento las normas con arreglo a las cuales deberán computarse los derechos que **[el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales]** ~~*la Oficina de Gerencia de Permiso*~~ *ésta* cobrará por los permisos que esta ley le autorizan a conceder. La cuantía agregada de esos derechos deberá satisfacer sustancial o

totalmente los gastos en que **[el Departamento]** *la Oficina* incurra en razón de la implementación de esta ley. Los derechos que se cobren al amparo de esta sección ingresarán en el Fondo Especial que esta ley establece.

Sección 20. - Si cualquier Artículo de esta Ley fuere declarado inconstitucional en todo o en parte, por un tribunal con jurisdicción, su inconstitucionalidad no afectará, perjudicará o invalidará las restantes disposiciones de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, disposición, sección, inciso o parte de esta Ley, que hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Sección 21.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, previo estudio y consideración del **P. del S. 79**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 79 tiene como objetivo enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra", a los fines de cumplir con la política pública de centralizar los procesos de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos o la dependencia gubernamental que le sustituya.

INTRODUCCIÓN

La Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", se promulgó para establecer el marco legal y administrativo para regir los procesos de solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos de uso, de construcción y desarrollo de terrenos en el Gobierno de Puerto Rico. El propósito de la promulgación de dicha ley fue reformar y transformar el sistema de permisos de Puerto Rico en uno moderno, confiable, ágil y eficiente para fomentar el desarrollo integral, económico social y físico sostenible de Puerto Rico. En virtud de dicha ley, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), es la entidad gubernamental facultada para dirigir el esfuerzo de emitir determinaciones finales, permisos, licencias, inspecciones, certificaciones y otras autorizaciones para el desarrollo y uso de terrenos. Con la aprobación de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, las Entidades Gubernamentales Concernidas pasaron a realizar la función para la que originalmente fueron creadas, la de fiscalizar y proteger los importantes intereses que sus leyes orgánicas les delegan, fiscalizando el cumplimiento de los solicitantes con los permisos otorgados por OGPe.

Por otra parte, de conformidad con la Ley Núm. 171-2018, conocida como "Plan de Reorganización de Recursos Naturales y Ambientales de 2018", el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) constituye el organismo del Gobierno de Puerto Rico responsable de implementar la política y los programas relacionados con el manejo, desarrollo sostenible, utilización, aprovechamiento y protección de los recursos naturales y ambientales de Puerto Rico. La misión del DRNA es proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales de la isla, de forma balanceada para propiciar una mejor calidad de vida y garantizar su disfrute a las próximas generaciones. Hasta el presente, la agencia que administra la Ley Núm. 132, *supra*, según el texto de la misma, es el DRNA.

El Proyecto del Senado 79 se propone enmendar la Ley Núm. 132, *supra,* para cumplir con la política pública establecida de unificar y centralizar en la Oficina de Gerencia de Permisos el proceso de concesión o denegación de los permisos que otorga el Gobierno de Puerto Rico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

De un análisis del Proyecto del Senado 79 se desprende que según el texto de la Ley Núm. 132, *supra*, la jurisdicción sobre los permisos otorgados para las actividades de extracción, excavación, remoción y dragado de los componentes de la corteza terrestre llamados arena, grava, piedra, tierra, sílice, calcita, arcilla y cualquier otro componente similar de la corteza terrestre, que no esté reglamentado como mineral económico en terrenos públicos y privados, recae sobre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Como se mencionó en la introducción del presente informe, el propósito del proyecto es cumplir con la política pública establecida de unificar y centralizar en la Oficina de Gerencia de Permisos el proceso de concesión o denegación de los permisos que otorga el Gobierno de Puerto Rico. Por ende, las enmiendas propuestas propenden sustituir al DRNA o a su Secretario por la Oficina de Gerencia de Permisos en el proceso de otorgación de permisos.
Se solicitaron memoriales explicativos a la Oficina de Gerencia de Permisos y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Como resultado, se recibieron y examinaron dichos memoriales:

Oficina de Gerencia de Permisos

La Oficina de Gerencia de Permisos por conducto de su Secretario Auxiliar, Norberto Almodóvar Vélez, avaló la medida y expresó que, las enmiendas propuestas en el P. del S. 79 son cónsonas con lo dispuesto en el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, con vigencia de 16 de junio de 2023 (Reglamento Conjunto 2023), específicamente en el Capítulo 3. Sobre Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre. Indica, que dichos permisos son evaluados actualmente por la Oficina de Gerencia de Permisos, y que, las enmiendas propuestas armonizan la ley con lo establecido en el Reglamento Conjunto 2023. Recomendó, además, que se mantenga al DRNA junto a OGPe en los Artículos 11, 12 y 13 de la Ley Núm. 132, *supra*, por responder a procesos de fiscalización de los permisos otorgados.

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por conducto de su Secretario, Waldemar Quiles Pérez, avaló la medida indicando que la misma agilizará la expedición de permisos en Puerto Rico. En su memorial, discute el trasfondo de las leyes orgánicas del DRNA y de la OGPe, a su vez discute la política pública sobre la centralización de la expedición de permisos.

IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico no solicitó comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencial Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 79 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

Además, esta medida no representa un impacto fiscal negativo, ya que no implica una nueva asignación de fondos ni reduce los ingresos del Fondo General.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado 79, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Sen. Héctor G. González López
Presidente
Comisión de Planificación, Permisos,
Infraestructura y Urbanismo"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 149, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para *enmendar la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada", a los fines de añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 6* ~~crear la "Ley para la Presentación Anual de Plan de Contingencia en Hogares de Cuido de Ancianos~~" a los efectos de ordenar a todos los ~~hogares privados de cuidado de ancianos, también conocidos como hogares de envejecientes o de personas de edad avanzada~~, *establecimientos de cuidado de adultos mayores* en Puerto Rico a que rindan ante el Departamento de la Familia, Oficina de Licenciamiento, sus planes de contingencia para lidiar con la temporada de huracanes y emergencias en o antes del primero (1) de mayo de cada año; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La atención y protección de las personas de edad avanzada es una responsabilidad que debe ser atendida con prioridad por la sociedad en su conjunto, particularmente durante situaciones de emergencia que puedan comprometer su seguridad y bienestar. En Puerto Rico, los ~~hogares de cuido de ancianos~~ *establecimientos de cuidado de adultos mayores* han experimentado un notable crecimiento, convirtiéndose en una opción crucial para aquellas familias que buscan un entorno seguro y confiable para sus seres queridos. No obstante, este aumento en la demanda también requiere medidas concretas que garanticen que estas instituciones estén plenamente preparadas para enfrentar escenarios de crisis.

Las lecciones derivadas de eventos recientes han puesto de manifiesto serias deficiencias en la capacidad de ~~algunos hogares de cuido~~ *los establecimientos que nos atañen,* para responder adecuadamente a emergencias, especialmente durante desastres naturales como huracanes. En muchos casos, la falta de preparación ha resultado en situaciones críticas, donde los ~~hogares~~ *establecimientos* no han podido satisfacer las necesidades básicas de sus residentes, recurriendo a medidas como solicitar ayuda estatal o devolver a los ~~ancianos~~ *adultos mayores* a sus familiares, lo que genera desafíos adicionales para las familias afectadas.

La población atendida en ~~estos hogares~~ *estas facilidades* presenta características particulares, como condiciones de salud delicadas y movilidad reducida, que requieren protocolos específicos para garantizar su seguridad. La implementación de un plan de contingencia efectivo, adaptado a las necesidades de los residentes, es esencial para asegurar que puedan recibir los servicios necesarios durante emergencias, minimizando la dependencia inicial del gobierno. *Es indispensable que los planes de contingencia a los que aspira esta medida contengan al menos, los protocolos de emergencia, suplido de combustible, disponibilidad de medicamentos y alimentos, capacidad de operación sin servicios básicos, entre otros.*

Por ello, esta ley busca establecer un requisito obligatorio para que todos los ~~hogares privados de cuido de ancianos~~ *establecimientos de cuidado de adultos mayores* presenten anualmente un plan de contingencia detallado ante el Departamento de la Familia, a través de su Oficina de Licenciamiento. Dichos planes deberán incluir estrategias específicas para operar sin interrupciones en el suministro de energía eléctrica y agua potable, garantizar el acceso continuo a combustible para generadores, y definir protocolos claros para la entrada y salida de residentes antes, durante y después de eventos adversos. Asimismo, estos informes deberán detallar acciones relacionadas con la provisión de medicamentos, alimentos, personal capacitado y medidas de mitigación de daños a las instalaciones.

El cumplimiento de este requisito no solo beneficiará a los residentes de estos ~~hogares~~ *lugares*, quienes representan una de las poblaciones más vulnerables durante emergencias, sino que también permitirá una mejor coordinación entre el gobierno y estas instituciones privadas. Conociendo de antemano los recursos y limitaciones de cada ~~hogar~~ *facilidad*, las autoridades podrán intervenir de manera más eficiente y estratégica cuando sea necesario, optimizando la respuesta en situaciones críticas.

Finalmente, esta ley busca promover la autosuficiencia y la planificación proactiva de los ~~hogares de cuido de ancianos~~ *establecimientos de cuidado de adultos mayores,* fortaleciendo su capacidad de resiliencia y garantizando un servicio de calidad a sus residentes. De esta manera, se contribuye a proteger la vida y dignidad de las personas mayores, ofreciendo tranquilidad a las familias que confían en ~~estos hogares~~ *estas facilidades y entidades* para el cuidado de sus seres queridos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- ~~Esta Ley se conocerá como "Ley para la Presentación Anual de Plan de Contingencia en Hogares de Cuido de Ancianos *establecimientos de cuidado de adultos mayores*".~~ *Se anade un nuevo inciso (e) al Articulo 6 de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada", para que lea como sigue:*

"Artículo 6.- Inspección de Instituciones

(a) …

(b) …

(e) El Departamento visitará e inspeccionará, por lo menos una vez cada tres (3) meses, todo establecimiento de adultos mayores licenciado por esta agencia. Como parte del proceso de licenciamiento y renovación, será requisito que todo establecimiento presente ante la Oficina de Licenciamiento un Plan de Contingencia anual para enfrentar emergencias, incluyendo la temporada de huracanes, en o antes del primero (1) de mayo de cada año. Dicho plan deberá incluir, al menos:

1. *Medidas concretas para operar sin servicio directo de energía eléctrica ni agua potable por un período no menor de treinta (30) días;*
2. *Protocolos de entrada y salida de residentes antes, durante y después de eventos atmosféricos;*
3. *Planes para suplido de medicamentos, alimentos, combustible, personal y mitigación de daños estructurales;*
4. *Certificación del Plan por la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias donde ubique el establecimiento."*

Artículo 2.- Todo ~~hogar~~ *establecimiento* dedicado al cuido privado de ~~ancianos~~ *adultos mayores* en Puerto Rico presentará anualmente en el Departamento de la Familia, Oficina de Licenciamiento, de la región a la cual pertenezca, en o antes del primero (1) de mayo de cada año, un informe donde establezca sus planes de contingencia para lidiar con la temporada de huracanes y situaciones de emergencia. Dicho informe deberá incluir los planes concretos y detallados que tienen para operar por días sin servicio directo de energía eléctrica y agua potable, incluyendo las alternativas que tienen para suplir de manera regular el combustible de sus generadores eléctricos, así como los protocolos para la entrada y salida de ~~ancianos~~ *residentes* antes, durante y después de un fenómeno atmosférico o de emergencia. También deben establecer su plan de acción en cuanto al personal de cuidadores, médico, enfermeras, suplido de medicamentos, alimentos y todo aquello que resulte necesario para ofrecer el servicio a los residentes del ~~hogar~~ *establecimiento* y cubrir de manera adecuada sus necesidades. Deberán presentar en su informe las acciones que tomarán encaminadas a la mitigación de daños a las facilidades, de surgir alguno, para de esa manera minimizar posibles daños a los residentes. *El plan deberá estar certificado por la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias correspondiente a la ubicación del establecimiento y será un requisito obligatorio para toda solicitud o renovación de licencia emitida por el Departamento de la Familia.* El plan presentado deberá demostrar que pueden cubrir las necesidades de los residentes durante un período de emergencia por un término no menor de 30 días.

Artículo 3.-El incumplimiento por parte de los ~~Hogares de Cuido~~ *Establecimientos de Cuidado de Adultos Mayores* con lo dispuesto en el Artículo 1 resultará en la suspensión de su licencia de funcionamiento ~~como hogar de cuido~~ hasta que se cumpla con dicho requisito.

Artículo 4.- ~~El Departamento de la Familia redactará y adoptará los reglamentos necesarios para cumplir con las disposiciones de esta Ley. Esto incluirá la coordinación con el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y cualquier otra agencia pertinente para el ofrecimiento de talleres compulsorios sobre los planes de emergencias/desalojo y planes de contingencia (anuales) a los hogares de cuido establecimientos de cuidado de adultos mayores~~. *El Departamento de la Familia, en coordinación con el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y cualquier otra agencia pertinente, adoptará los reglamentos necesarios para cumplir con las disposiciones de esta Ley. Dichos reglamentos establecerán, entre otras cosas:*

a) Que será responsabilidad de cada operador o administrador de establecimiento de cuidado de adultos mayores desarrollar su Plan de Contingencia anual en coordinación con el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres;

b) Que el Plan deberá contar con el endoso y certificación del Negociado como requisito para ser considerado conforme por el Departamento de la Familia;

c) Que los operadores y administradores deberán participar anualmente en talleres de capacitación ofrecidos o avalados por el Negociado de Manejo de Emergencias y

Administración de Desastres, relacionados a la preparación y ejecución de planes de emergencia y desalojo.

Artículo 5.- Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días a partir de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, previo estudio concienzudo y consideración, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto del Senado 149, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 149, según radicado, propone crear la "Ley para la Presentación Anual de Plan de Contingencia en Hogares de Cuido de Adultos Mayores" a los efectos de ordenar a todos los hogares privados de cuidado de ancianos, también conocidos como hogares de envejecientes o de personas de edad avanzada, en Puerto Rico a que rindan ante el Departamento de la Familia, Oficina de Licenciamiento, sus planes de contingencia para lidiar con la temporada de huracanes y emergencias en o antes del primero (1) de mayo de cada año; y para otros fines relacionados.

La autora del proyecto expone que la atención y protección de los adultos mayores es una responsabilidad que debe ser atendida con prioridad por la sociedad en su conjunto, particularmente durante situaciones de emergencia que puedan comprometer su seguridad y bienestar. En Puerto Rico, los establecimientos de cuidado de adultos mayores han experimentado un notable crecimiento, convirtiéndose en una opción crucial para aquellas familias que buscan un entorno seguro y confiable para sus seres queridos. No obstante, este aumento en la demanda también requiere medidas concretas que garanticen que estas instituciones estén plenamente preparadas para enfrentar escenarios de crisis.

Las lecciones derivadas de eventos recientes han puesto de manifiesto serias deficiencias en la capacidad de los establecimientos que nos atañen, para responder adecuadamente a emergencias, especialmente durante desastres naturales como huracanes. En muchos casos, la falta de preparación ha resultado en situaciones críticas, donde los establecimientos no han podido satisfacer las necesidades básicas de sus residentes, recurriendo a medidas como solicitar ayuda estatal o devolver a los adultos mayores a sus familiares, lo que genera desafíos adicionales para las familias afectadas.

La población atendida estas facilidades presenta características particulares, como condiciones de salud delicadas y movilidad reducida, que requieren protocolos específicos para garantizar su seguridad. La implementación de un plan de contingencia efectivo, adaptado a las necesidades de los residentes, es esencial para asegurar que puedan recibir los servicios necesarios durante emergencias, minimizando la dependencia inicial del gobierno. Es indispensable que los planes de contingencia a los que aspira esta medida contengan al menos, los protocolos de emergencia, suplido de combustible, disponibilidad de medicamentos y alimentos, capacidad de operación sin servicios básicos, entre otros.

Ante esa realidad, la intención del Proyecto del Senado 149 persigue establecer un requisito obligatorio para que todos los establecimientos de cuidado de adultos mayores presenten anualmente un plan de contingencia detallado ante el Departamento de la Familia, a través de su Oficina de Licenciamiento. Dichos planes deberán incluir estrategias específicas para operar sin interrupciones en el suministro de energía eléctrica y agua potable, garantizar el acceso continuo a combustible para generadores, y definir protocolos claros para la entrada y salida de residentes antes, durante y después de eventos adversos. Asimismo, estos informes deberán detallar acciones relacionadas con la

provisión de medicamentos, alimentos, personal capacitado y medidas de mitigación de daños a las instalaciones.

El cumplimiento de este requisito no solo beneficiará a los residentes de estos lugares, quienes representan una de las poblaciones más vulnerables durante emergencias, sino que también permitirá una mejor coordinación entre el gobierno y estas instituciones privadas. Conociendo de antemano los recursos y limitaciones de cada facilidad, las autoridades podrán intervenir de manera más eficiente y estratégica cuando sea necesario, optimizando la respuesta en situaciones críticas.

Finalmente, esta medida busca promover la autosuficiencia y la planificación proactiva de los establecimientos de cuidado de adultos mayores, fortaleciendo su capacidad de resiliencia y garantizando un servicio de calidad a sus residentes. De esta manera, se contribuye a proteger la vida y dignidad de las personas mayores, ofreciendo tranquilidad a las familias que confían en estas facilidades y entidades para el cuidado de sus seres queridos.

INTRODUCCIÓN

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social estudió el texto de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, "Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada" y el texto de la Ley 121-2019, "Ley de la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores". En segunda instancia, se evaluó la viabilidad en términos presupuestarios y fiscales.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para una evaluación integral de esta medida, la Comisión de Vivienda y Bienestar, en aras de analizar y estudiar el P. del S. 149 solicitó memoriales explicativos para sustentar una evaluación laboriosa del proyecto al Departamento de la Familia, Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), el Negociado de Manejo de Emergencias, y a la Cruz Roja Americana. Como resultado, se recibieron y se observaron las ponencias y los comentarios del Departamento de la Familia y de la OPPEA.

El **Departamento de la Familia** endosó la aprobación del Proyecto del Senado 149 con enmiendas. En su ponencia, el ente administrativo reconoció la importancia del propósito que persigue la medida a los efectos de proteger a la población de personas de edad avanzada en Puerto Rico, así como la intención legislativa que persigue este proyecto. Sin embargo, la agencia recomendó a esta Comisión que evaluara enmendar la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, "Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada" en lugar de establecer una nueva ley, tal y como propone la medida según redactada.

Específicamente, el Departamento de la Familia recomendó enmendar la referida Ley 94, *supra*, para incluir la presentación de los planes de contingencia como uno de los requisitos del establecimiento de estos centros de cuidado. En adición, el Departamento recomendó enmiendas de forma para atemperar los términos utilizados en el proyecto con los términos establecidos en la Ley 121-2019, "Ley de la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores".

Por su parte, la OPPEA recomendó definir con precisión el rol del Departamento de la Familia en torno al contenido de los informes anuales para asegurar su pertinencia conforme a su composición y las necesidades particulares de los residentes. Igualmente, sugiere definir y constituir los "Hogares de Cuido de Adultos Mayores" privados que serán sujetos a las disposiciones del estatuto. Finalmente, la OPPEA punteó que se debe añadir las Casas de Salud administradas por ASSMCA para que haya un elemento de uniformidad, ya que poseen instituciones de cuidado de

larga duración donde residen adultos mayores que no son regulados por el Departamento de la Familia.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico no solicitó comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencial Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 149 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico considera meritorio la aprobación del P. del S. 149 con las enmiendas en el entirillado electrónico que se acompaña. A juicio de esta Comisión, el propósito que persogue la medida objeto de este informe es uno loable y a fin con la política pública del Gobierno de Puerto Rico de proteger a nuestros adultos mayores. En consecuencia, se presenta este informe con el entirillado electrónico correspondiente.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este distinguido Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado** 149, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Hon. Jamie Barlucea Rodríguez
Presidenta
Comisión de Vivienda y Bienestar Social"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 164, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para enmendar los Artículos 2, 3, 7, 9, 22, ~~26,~~ 33*;* ~~y derogar los Artículos 4 y 8;~~ *derogar el actual Artículo 4 y renumerar los actuales artículos 5, 6 y 7 como los Artículos 4, 5 y 6; derogar el actual Artículo 8* y renumerar los ~~subsiguientes~~ *actuales* Artículos *9 al 56 como los Artículos 7 al 54 respectivamente* de la ~~Ley Núm. 135 del 1 de septiembre de 2020,~~ *Ley 135-2020,* según enmendada, conocida como la "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico", a los fines de prescindir de la Junta de Directores; ~~establecer el término y la manera en que se designará al Director Ejecutivo;~~ definir las funciones y *establecer la facultad de reglamentación* del Director Ejecutivo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley ~~Orgánica~~ del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, creada mediante la Ley ~~Núm.~~ 135-2020, estableció las bases legales para el funcionamiento de esta Agencia con el objetivo de proveer servicios forenses de alta calidad en beneficio de la administración de justicia en Puerto

Rico. Sin embargo, se ha identificado la necesidad de modificar ciertos aspectos estructurales y operacionales de la ley con el fin de optimizar el funcionamiento del Instituto y permitirle una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y necesidades urgentes.

La Ley 135-2020, según enmendada, estableció una Junta de Directores con representación de sectores claves en la administración de justicia, diseñada para supervisar y establecer la política administrativa del Instituto de Ciencias Forenses. No obstante, la experiencia ha demostrado que esta estructura colegiada ~~no empece~~ *pese a* siempre haber sido deferente con la dirección ejecutiva de la Agencia, ~~puede demorar~~ *demora* la toma de decisiones, generar duplicidad de esfuerzos y ~~comprometer~~ *compromete* la agilidad operativa que el Instituto requiere para cumplir con su mandato.

La complejidad de las funciones que desempeña el Instituto de Ciencias Forenses demanda una estructura administrativa que permita decisiones inmediatas y una gestión eficiente, particularmente en un contexto en el que la rapidez y precisión son esenciales para garantizar la justicia. Por ello, resulta imperativo reevaluar la estructura administrativa del Instituto para fortalecer su capacidad operativa y garantizar que cumpla con su propósito primordial: salvaguardar la objetividad investigativa y contribuir eficazmente a la resolución de casos criminales.

~~Por otra parte, el hecho de que el Secretario de Justicia sea el Presidente de la Junta ha sido argumento reiterado utilizado en los Tribunales con el fin de impugnar por prejuicio a los Peritos del Instituto de Ciencias Forenses. Además, y a la luz de las decisiones judiciales federales tales como *Meléndez-Díaz v. Massachusetts*, 129 S.Ct. 2527 (2009) y su progenie la vinculación antes mencionada a la parte adversativa reviste de carácter testimonial a los reportes periciales y provoca que en casos donde el perito que realizó el análisis ya no trabaje en el Instituto de Ciencias Forenses, no pueda ser sustituido por personal nuestro y la evidencia se tenga que reanalizar.~~

A tales efectos, este proyecto de ley propone eliminar la Junta de Directores del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico y consolidar la autoridad administrativa y operativa en el Director Ejecutivo. Esta medida permitirá centralizar la toma de decisiones, agilizar los procesos internos y garantizar que el Instituto de Ciencias Forenses opere con la eficiencia y eficacia que exige el sistema de justicia penal del país.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. - Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 135-2020, según enmendada, conocida como la "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artículo 2. — Definiciones

Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) Instituto — Significa Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.

[(b) Junta — Significa Junta de Directores del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.]

[(c)] *(b)* Director Ejecutivo — Significa Director del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.

[(d)] *(c)* Científico forense — Significa toda persona que haya completado estudios académicos post graduados, especializados en el análisis científico de la prueba a ser utilizada en la investigación criminal por el Sistema de Justicia Criminal, según lo establece la "American Academy of Forensic Sciences" (AAFS). Debe poseer, además, al menos tres (3) años de experiencia práctica en el análisis pericial de dicha prueba en una institución forense, cuyas prácticas operacionales sean de acorde a las establecidas por las agencias acreditadoras."

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 135-2020, según enmendada, conocida como la "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artículo 3. — Creación del Instituto

Se crea el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico como una entidad autónoma. Las divisiones científicas y técnicas del Instituto deberán estar acreditadas y reacreditadas subsiguientemente por las respectivas instituciones acreditadoras, desglosadas a continuación:

(a) El Laboratorio de Criminalística por la "ANSI National Accreditation Board (ANAB)".

(b) La División de Patología por la "National Association of Medical Examiners".

(c) La División de Investigadores Forenses y Seguridad por la "ANSI National Accreditation Board (ANAB)".

(d) Otras organizaciones de igual estándar y reconocidas en el campo forense nacional o internacional o por las sucesoras de las instituciones acreditadoras antes mencionadas.

Así también, el Instituto como entidad autónoma deberá pertenecer al sistema de base de datos de perfiles genéticos (ADN o Ácido Desoxirribonucleico) del Negociado Federal de Investigaciones, conocido como CODIS ("The FBI Laboratory´s Combined DNA Index System"). A tales efectos, el Director Ejecutivo del Instituto deberá presentar ante la **[Junta de Directores y ante la]** Asamblea Legislativa un **[plan]** *informe* institucional donde se establezcan los **[cursos de acción a seguir para la obtención de las referidas acreditaciones o certificaciones. Dicho plan deberá ser presentado seis (6) meses luego de la aprobación de esta Ley]** *estados de las referidas acreditaciones o certificaciones. Dicho plan deberá ser presentado anualmente a la Asamblea Legislativa*."

Sección 3.- Se deroga el *actual* Artículo 4 ~~de la Ley Núm. 135 -2020,~~ y se renumeran los ~~subsiguientes~~ *actuales* Artículos ~~para que lean como siguen:~~ *5, 6 y 7 como los artículos 4, 5 y 6 respectivamente de la Ley Núm. 135 -2020, según enmendada, para que lea como sigue:*

"[Artículo 4. — Junta Directora]

~~"~~Artículo **[5]** *4*.- Instituto de Ciencias Forenses, Funciones

…

Artículo **[6]** *5*.- Jurisdicción del Instituto

…

Artículo **[7]** *6*.- Personal y organización

…"

Sección 4.- Se enmienda el *actual* Artículo 7 de la Ley Núm. 135-2020*,* según enmendada, conocida como la "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artículo ~~7.~~ *6.*— Personal y organización

El personal del Instituto consistirá de un Director Ejecutivo, quien será el Científico Forense de Puerto Rico, Patólogos Forenses, Patólogos Forenses Auxiliares, Médicos Forenses, Médicos Clínico Forenses, Técnicos en Radiología Forense, Enfermeras Forenses, Investigadores Forenses, Químicos Forenses, Serólogos Forenses, Documentólogos Forenses, Examinadores de Armas de Fuego y Marcas de Herramienta, Examinadores de Evidencia Digital y Multimedia, Técnicos de Fotografía, Auxiliar de Patología Forense, Técnicos de Laboratorio, Examinadores de Documentos Dudosos y el personal científico, técnico y administrativo que sea necesario para desempeñar las funciones que se fijan en esta Ley. Hasta donde sea posible, el Instituto conducirá sus funciones organizándose operacionalmente en secciones técnicas las cuales pueden ser, sin que la enumeración sea exhaustiva, las siguientes: sección de patología forense, sección de toxicología, sección de ADN y serología, sección de

química forense, sección de evidencia digital y multimedia, sección de documentología forense, sección de identificación de armas de fuego y marcas de herramienta, sección de sustancias controladas, sección de control y custodia de evidencia.

Todo el personal del Instituto tendrá que cumplir con los requerimientos de educación continua que **[la Junta, en coordinación con]** el Director Ejecutivo, tomando como base los requisitos de las agencias acreditadoras en el campo forense, determinen por reglamento y rendirá sus funciones en las facilidades físicas del Instituto o en investigaciones de campo. En los casos de los Patólogos Forenses, Examinadores de Armas de Fuego y Marcas de Herramienta, Investigadores Forenses, Químicos Forenses, Serólogos Forenses, Examinadores de Evidencia Digital, y Multimedia y Examinadores de Documentos Dudosos que hayan sido capacitados y certificados con cargo a fondos administrados por el Instituto, tendrán que rendir sus servicios en el Instituto por un periodo no menor de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la culminación de dicho periodo de capacitación y certificación. Si el periodo de capacitación y certificación es mayor de veinticuatro (24) meses, el tiempo para el rendimiento de servicios será igual a la duración de este periodo. Se eximirá del requisito de servicio establecido en el párrafo anterior a toda persona que transcurridos treinta (30) días luego de la culminación de su período de capacitación no haya recibido de parte del Instituto una oferta de empleo para ocupar una plaza en la subespecialidad para la cual fue capacitado. Con excepción del Director Ejecutivo, todos los Patólogos Forenses, Examinadores de Armas de Fuego y Marcas de Herramientas, Investigadores Forenses, Químicos Forenses, Serólogos Forenses, Examinadores de Evidencia Digital y Multimedia y Examinadores de Documentos Dudosos, que hayan recibido una capacitación y certificación costeado por el Instituto, que renuncie o voluntariamente abandone su trabajo antes del vencimiento del periodo de prestación de servicios, deberá satisfacer un pago equivalente al gasto incurrido por el Instituto de Ciencias Forenses en dicha capacitación o adiestramiento. El pago debe hacerse a favor del Instituto de Ciencias Forenses. El Instituto deberá promulgar reglamentación a esos fines e incluir en el proceso de contratación o nombramiento de dicho personal información sobre la normativa reglamentaria adoptada para implementar los propósitos de esta ley."

Sección 5.- Se deroga el Artículo 8 *y se renumeran los actuales Artículos 9 al 56 como Artículos 7 al 54 respectivamente* de la Ley Núm. 135-2020 según enmendada, conocida como la "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico"~~, y se renumeran los actuales Artículos 9 al 56 como Artículos 7 al 54.~~

Sección 6.- Se enmienda el actual Artículo 9 de la Ley Núm. 135 -2020*,* según enmendada, conocida como la "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artículo ~~9.~~ *7.* — Director Ejecutivo; nombramiento, cualificaciones, requisitos y funciones

El Gobernador, con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen el Senado de Puerto Rico, nombrará al Director Ejecutivo, quien habrá de ser un Científico Forense cualificado y quien desempeñará el cargo por un término de seis (6) años hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión del cargo. Dicho Director Ejecutivo, durante el período de su nombramiento, no podrá dedicarse a gestiones de negocios particulares o profesión alguna y devengará el salario que **[la Junta de Directores del Instituto autorice]** *se le asigne de acuerdo con el presupuesto aprobado.*

Serán requisitos adicionales para ser nombrado Director Ejecutivo del Instituto, los siguientes:

(a) Poseer un doctorado de una institución de educación superior acreditada por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) en una de las disciplinas forenses

reconocidas por la American Academy of Forensic Sciences (AAFS) o por las sucesoras de las entidades antes mencionadas;

(b) Poseer las debidas certificaciones o acreditaciones de la Junta, Colegio o Consejo (American Board) de su especialidad si aplica; y

(c) Poseer tres (3) años de experiencia ocupando puestos de similar responsabilidad en una institución forense.

[En adición a dirigir las operaciones y funciones del Instituto, el Director Ejecutivo deberá presentar ante la Junta, un estado de situación de la dependencia semestralmente, incluyendo, pero sin limitarse, a la relación de informes periciales pendientes a realizar. Dicho estado de situación formará parte de la evaluación semestral que establece el Artículo 8 de esta Ley.]

[De igual manera, podrá delegar en funcionarios o empleados del Instituto cualquier función o facultad que le haya sido conferida, excepto aquellas facultades que por disposición de esta Ley comparte con, o requieren aprobación de la Junta Directora. Asignará las labores administrativas a base de criterios que permitan el uso más eficaz de los recursos humanos, considerando, entre otros, los siguientes factores: asignación y distribución racional de funciones; distribución de poder a tono con las responsabilidades; selección acertada del personal; proveer recursos a tono con las necesidades del Instituto y sus secciones.]

En adición a dirigir las operaciones y funciones del Instituto, el Director Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:

1. *Formular la política específica para la operación del Instituto de Ciencias Forenses.*
2. *Supervisar y evaluar la operación del Instituto.*
3. *Aprobar la petición presupuestaria anual y cualquier otro tipo de solicitud de fondos que surja del Instituto.*
4. *Establecer las cualificaciones mínimas para el nombramiento de los empleados profesionales del Instituto.*
5. *Formular la reglamentación necesaria, compatible con las disposiciones de esta ley, para definir las funciones de las secciones o departamentos y del personal profesional, técnico y administrativo del Instituto.*
6. *Requerir los informes y datos estadísticos que considere necesarios para la operación eficiente del Instituto.*
7. *Someter al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe anual sobre las operaciones del Instituto, el cual será publicado en su página de Internet.*
8. *Celebrar reuniones extraordinarias cuando lo estime necesario para la operación más eficiente del Instituto.*
9. *Establecer por reglamento las normas, los criterios y requisitos de educación continua para todo el personal técnico y científico del Instituto, tomando en consideración las recomendaciones de las entidades acreditadoras reconocidas en el campo forense.*
10. *Revisar y aprobar los informes sobre la situación del Instituto, incluyendo, pero no limitado a, los informes periciales pendientes de realizar.*

El Director Ejecutivo podrá delegar en funcionarios o empleados del Instituto cualquier función o facultad que le haya sido conferida, excepto aquellas facultades

que requieren aprobación especial de las autoridades pertinentes. Asignará las labores administrativas a base de criterios que permitan el uso más eficaz de los recursos humanos, considerando, entre otros, los siguientes factores: asignación y distribución racional de funciones; distribución de poder a tono con las responsabilidades; selección acertada del personal; proveer recursos a tono con las necesidades del Instituto y sus secciones.

Asimismo, el Director Ejecutivo tendrá el poder de comprar, contratar o de otro modo, proveer al Instituto todos los materiales, suministros, equipo, piezas o servicios que estime sean necesarios o convenientes para la operación del Instituto."

Sección 7.- Se enmienda el actual Artículo 22 de la Ley Núm. 135 -2020, según enmendada, conocida como la "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artículo ~~22.~~ *20.* — **[~~Reglas y Procedimientos~~]** *Facultad de Reglamentación*

[El Director Ejecutivo del Instituto propondrá a la Junta de Directores todas las reglas y reglamentos necesarios para el funcionamiento del Instituto y para la implantación de esta Ley] *El Director Ejecutivo del Instituto ~~propondrá~~ tendrá facultad para adoptar todas las reglas y reglamentos necesarios para el funcionamiento del Instituto y para la implantación de esta Ley*."

~~Sección 8.- Se enmienda el Artículo 26 de la Ley Núm. 135-2020, según enmendada, conocida como la "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico", para que lea como sigue:~~

~~"Artículo 26. Disposición del Cadáver a Persona Particular (34 L.P.R.A. §3066)~~

~~Una vez transcurrido el término de seis (6) días desde la autopsia e investigación y no se reclamare el cadáver, de acuerdo, a lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 296-2002, según enmendada, conocida como "Ley de Donaciones Anatómicas de Puerto Rico", cualquier persona o entidad podrá reclamar el mismo para su sepultura o cremación, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:~~

~~(a) La persona que reclamare el interfecto deberá ser mayor de edad.~~

~~(b) La persona que reclamare el interfecto deberá proveer al Instituto un certificado de antecedentes penales negativo.~~

~~(c) La persona o entidad que reclama el cadáver debe haber tenido algún vínculo con el interfecto o que el interfecto haya pertenecido a la entidad que lo reclamare.~~

~~(d) Si el reclamante pertenece a alguna entidad cívica o religiosa deberá proveer una solicitud formal de dicha organización para reclamar al cadáver y acreditar que el interfecto pertenecía a dicha entidad.~~

~~(e) La persona o entidad debe acreditar mediante declaración jurada:~~

~~1. Los motivos que tiene para reclamar el interfecto.~~

~~2. Vínculo con el interfecto.~~

~~3. Describir las acciones que realizó para conseguir a los familiares del interfecto o acreditar que desconoce el paradero de los mismos.~~

~~4. Nombre de la institución donde sepultará o cremará al interfecto.~~

~~5. El reclamante deberá suministrar al Instituto información o documentos que acrediten la información contenida en la declaración jurada.~~

~~Pasado el término para reclamar el cadáver según dispuesto en esta Ley, el Instituto de Ciencias Forenses no incurrirá en responsabilidad civil cuando haga entrega de un cadáver de conformidad con lo aquí dispuesto, en ausencia de una reclamación oportuna de una persona con prioridad dentro del término dispuesto en ley.~~

~~Todo cadáver no reclamado que permanezca en el Instituto luego de expirado el término de **[diez (10)]** *cinco (5)* días consecutivos desde la autopsia e investigación, estará disponible para disposición por parte del Instituto mediante enterramiento o cremación según los recursos disponibles. El Instituto publicará en su portal de Internet una lista de los cadáveres no reclamados y la fecha desde la cual se podrá disponer de los mismos. Todo cadáver no reclamado se podrá destinar para estudios científicos según requerido por los mejores intereses del Gobierno y la sociedad en general.~~

~~Este Artículo aplica igualmente a los cadáveres que, a pesar de haber sido identificados, no han sido reclamados.”~~

Sección *8.-* ~~9.-~~ Se enmienda el actual Artículo 33 de la Ley Núm. 135 -2020, según enmendada, conocida como la “Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico”, *para* que lea como sigue:

“Artículo ~~33.~~ *31.*— Demarcaciones Territoriales Servidas por las Diversas Oficinas y Laboratorios

[La Junta del Instituto] El *Director Ejecutivo* determinará la localización de las Oficinas y Laboratorios Regionales del Instituto de Ciencias Forenses y la demarcación territorial a la que habrán de servir.”

Sección 9.- Separabilidad

Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por un tribunal de jurisdicción y competencia, este fallo no afectará ni invalidará el resto de la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial.

Sección 10.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación”

“INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, tras un análisis y consideración del P. del S. 164, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 164, tiene como objetivo enmendar los Artículos 2, 3, 7, 9, 22, 33 y derogar los Artículos 4 y 8; y renumerar los subsiguientes Artículos de la Ley Núm. 135 del 1 de septiembre de 2020, según enmendada, conocida como la “Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico”, a los fines de prescindir de la Junta de Directores; definir las funciones y establecer la facultad de reglamentación del Director del Instituto.

INTRODUCCIÓN

Según se desprende de su declaración de propósitos, el P. del S. 164 propone enmendar la Ley Núm. 135-2020, conocida como, “Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico”, con el fin de optimizar el funcionamiento de dicha entidad y mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y necesidades operacionales urgentes. Mediante la referida Ley 135-2020, se estableció una Junta de Directores con representación multisectorial para supervisar y establecer la política administrativa del Instituto de Ciencias Forenses (en adelante, Instituto). Sin embargo, la experiencia práctica ha demostrado que dicha estructura, aunque deferente en ocasiones con la dirección ejecutiva,

puede ocasionar demoras en la toma de decisiones, duplicación de esfuerzos y limitaciones a la agilidad operativa que el Instituto requiere para cumplir con eficacia su mandato.

La exposición de motivos subraya que las funciones que desempeña el Instituto requieren una estructura administrativa que permita decisiones inmediatas y una gestión eficiente. En contextos donde la rapidez y precisión son fundamentales para garantizar la justicia, resulta imperativo fortalecer la capacidad operativa del Instituto y asegurar que su estructura responda adecuadamente a sus exigencias funcionales.[15]

Ante estos planteamientos, la medida propone la eliminación de la Junta de Directores y la consolidación de la autoridad administrativa y operativa en la figura del Director Ejecutivo. Esta reorganización estructural busca centralizar la toma de decisiones, agilizar los procesos internos y garantizar que el Instituto de Ciencias Forenses opere con la eficacia que exige el sistema de justicia penal de Puerto Rico.

En síntesis, la exposición de motivos del P. del S. 164, establece que la medida responde a una necesidad concreta de reformar la estructura organizacional del Instituto para maximizar su funcionalidad, preservar la objetividad de sus análisis científicos y asegurar la disponibilidad oportuna de la prueba pericial en los procesos judiciales.[16]

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisión"), como parte del estudio y evaluación del **P. del S. 164**, solicitó el 27 de febrero de 2025, memoriales explicativos al Instituto de Ciencias Forenses y al Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico. Al momento de presentar este informe esta Comisión no ha recibido los comentarios escritos del Departamento de Justicia. Por su parte, se recibió el memorial explicativo del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. En dicho memorial, el Instituto **expresó su apoyo** a la medida legislativa y ofreció una serie de comentarios que esta Comisión estima pertinente destacar en el presente informe.

Instituto de Ciencias Forenses

El Instituto, manifestó en su memorial que la estructura organizativa vigente, establecida en virtud de la Ley Núm. 135-2020, ha demostrado generar retrasos operacionales y duplicidad de esfuerzos, particularmente por la presencia de una Junta de Directores con funciones administrativas. La experiencia institucional ha puesto en evidencia que dicho modelo limita la capacidad de respuesta ante situaciones urgentes y compromete la agilidad operacional necesaria para el cumplimiento eficiente del mandato del Instituto.[17]

En este contexto, el Instituto **endosó** la propuesta de eliminar la Junta de Directores y consolidar la autoridad administrativa y operativa en la figura del Director Ejecutivo. A juicio del Instituto, este cambio permitirá centralizar la toma de decisiones, agilizar procesos internos y mejorar la eficiencia institucional, especialmente en lo que respecta al manejo de evidencia, la respuesta ante emergencias forenses y la administración de recursos limitados.[18]

Según se expone en el memorial, el Instituto considera que una estructura administrativa independiente contribuye a reforzar la credibilidad y confiabilidad de los informes periciales, y

[15] Véase, Exposición de Motivos del P. del S. 164
[16] Id.
[17] Véase, Memorial Explicativo del Instituto de Ciencias Forenses
[18] Id.

fortalece la defensa de su admisibilidad en los procesos judiciales, conforme a precedentes jurisprudenciales relevantes.

En conclusión, el Instituto de Ciencias Forenses expresó su conformidad con el Proyecto del Senado 164 y sostuvo que los cambios propuestos son consistentes con el interés público y con su función esencial dentro del sistema de justicia penal de Puerto Rico.

Historial Legislativo Ley 135-2020

Como parte de la evaluación de **P. de la S. 164**, además de los memoriales explicativos recibidos la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, examinó el historial legislativo de la Ley 135-2020, según enmendada.

El Instituto de Ciencias Forenses, fue establecido originalmente mediante la Ley Núm. 13 del 24 de julio de 1985, con el objetivo de crear una entidad dedicada al análisis y examen científico-forense de evidencia física, biológica, documental y digital. Posteriormente, esta legislación fue derogada por la Ley 20-2017 que integró las funciones del Instituto dentro del Departamento de Seguridad Pública, como Negociado de Ciencias Forenses. Esta pérdida de autonomía impactó adversamente el funcionamiento efectivo del Negociado.

Consciente de esta situación, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 135-2020, la cual restableció el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico como entidad independiente, separándolo del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Esta medida legislativa surgió en respuesta a las deficiencias observadas tras la integración del Instituto al DSP bajo la Ley 20-2017. En la exposición de motivos de la Ley 135-2020, la Asamblea Legislativa reconoció que el antiguo Negociado de Ciencias Forenses (adscrito al DSP) "enfrentaba, constantemente, serios tropiezos,"[19] debido a que había perdido su estatus de entidad autónoma, convirtiéndose en un mero organismo adscrito a otra dependencia gubernamental.

Asimismo, la Ley 135-2020 le confirió al Instituto personalidad y estructura propia. Esta autonomía estructural le proveyó al Director Ejecutivo, el espacio jurídico necesario para dirigir el Instituto con mayor libertad de gestión, libre de las trabas burocráticas que implicaba su anterior condición bajo la estructura de otra agencia. Mediante la Ley 135-2020, la Asamblea Legislativa procuró dotar con los poderes necesarios al Director Ejecutivo del Instituto para llevar a cabo todas las actividades y funciones científicas dirigidas a la investigación forense de la conducta delictiva.[20]

Posteriormente, la Asamblea Legislativa continuó afinando la autonomía del Instituto mediante la aprobación Ley 50-2022. Dicha ley enmendó varios artículos de la Ley 135-2020, con el fin de ampliar la flexibilidad administrativa del ICF y reforzar la estabilidad en su dirección ejecutiva . Esta dispuso varias medidas concretas para agilizar la gestión interna del Instituto de Ciencias Forenses, entre ellas: la exención de leyes administrativas centrales; flexibilidad en sistemas de gestión; y el nombramiento del Director Ejecutivo a término fijo.[21] A pesar de esto, persisten obstáculos administrativos que entorpecen la operación ágil del Instituto.

Por ello, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio otorgar al director ejecutivo del Instituto mayor autoridad, autonomía y estabilidad. Al reconocer, que esto redunda en un Instituto de Ciencias Forenses más eficaz.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico entiende que el **Proyecto del Senado 164,** se encuentra en estricta sintonía con ese propósito legislativo, de

[19] Véase, Ley 50-2022
[20] Id.
[21] Id.

agilizar los procesos internos, evitar duplicidad de funciones, y garantizar una administración más eficiente del Instituto de Ciencias Forenses.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.0007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como, "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, certifica que el P. del S. 164, no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La aprobación del **P. del S. 164** responde a la necesidad de optimizar la estructura administrativa del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, garantizando una gestión más eficiente, ágil y coherente con su rol técnico-científico dentro del sistema de justicia penal.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobación del **P. del S. 164**, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Hon. Thomas Rivera Schatz
Presidente de la Comisión de Innovación,
Reforma y Nombramientos
del Senado de Puerto Rico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 430, y se da cuenta del Informe de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para ~~enmendar los~~ *añadir un nuevo inciso (11) al Artículo* ~~Artículos~~ 3 y *enmendar el inciso (a) del Artículo* 8 de la Ley Núm. 29-2009, según enmendada, ~~mejor~~ conocida como "Ley de las Alianzas Público Privadas" con el propósito de incluir como objeto para convertirse en Contrato de Alianza la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones cuyo único propósito sea albergar a mujeres víctimas de algún delito de violencia doméstica en Puerto Rico; establecer la composición del Comité de Alianza para este propósito; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 2024, se reportaron 6,094 incidentes de violencia ~~domestica~~ *doméstica* de las cuales veinticuatro (24) terminaron en asesinato. La Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica", se aprobó reconociendo que la violencia doméstica es uno de los problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad. Se reconoció también que la violencia doméstica atenta contra la integridad misma de la familia, piedra angular de nuestra sociedad, y constituye una amenaza a la estabilidad y a la preservación de la convivencia civilizada de nuestro pueblo.

A pesar de esto, la violencia doméstica sigue siendo un serio y ~~agravante~~ *grave* problema en nuestra sociedad. Cada año son más los casos de violencia de género en Puerto Rico y ~~esta Administración~~ *este Gobierno* tiene el compromiso de atender esta problemática. Un sinnúmero de organizaciones sin fines de lucro brinda*n* servicios de apoyo moral, psicológico y económico a víctimas de violencia doméstica pero su limitación de recursos solo les permite ayudar a *un* número reducido de víctimas.

Por lo que, para ~~esta Administración~~ *este Gobierno* es vital colaborar con estos aliados del tercer sector para juntos erradicar ~~este mal~~ *el mal de la violencia doméstica* que afecta todas las esferas ~~sociales~~ de la sociedad puertorriqueña.

Existen varias entidades sin fines de lucro que se dedican a concederles albergue a mujeres que han sido víctima de este mal social. No obstante, las mismas no cuentan con los mecanismos administrativos ni el capital para poder subsistir económicamente y poder continuar ofreciendo la gama de servicios que les ofrece a estas víctimas.

Esta Asamblea Legislativa entiende que el tema de la violencia doméstica es uno sumamente complejo y sensitivo, el cual debe ser atendido por las entidades gubernamentales con pericia en la materia. Es por esto que entendemos que mediante la creación de Alianzas Público-Privadas bajo las disposiciones de la Ley *Núm.* 29-2009, según enmendada, conocida como ~~la~~ "Ley de Alianzas Público Privadas", ~~podemos~~ *debemos* insertar un nuevo elemento en nuestra lucha para erradicar la violencia de género. Este objetivo podrá ser logrado ~~pues~~ a través de las disposiciones de esta ley*, y* se podrá dar énfasis a este tipo de contratos de alianza público privadas*, así como,* ~~y~~ agilizar los procesos para el establecimiento de este tipo de infraestructura.

Por tal razón, es la intención específica de esta Asamblea Legislativa, enmendar la citada Ley Núm. ~~29~~ *29-2009*, con el propósito de incluir como objeto para convertirse en Contrato de Alianza Público Privadas la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones cuyo único propósito sea albergar a mujeres víctimas de algún delito de violencia doméstica en Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 29-2009, según enmendada, conocida como ~~la~~ "Ley de Alianzas Público Privadas", *para añadir un nuevo inciso (11),* para que se lea como sigue:

"Artículo 3. — Política Pública.

Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico favorecer y promover el establecimiento de Alianzas Público Privadas para la creación de Proyectos Prioritarios y, entre otras cosas, fomentar el desarrollo y mantenimiento de instalaciones de infraestructura, compartir entre el Estado y el Contratante el riesgo que representa el desarrollo, operación o mantenimiento de dichos proyectos, mejorar los servicios prestados y las funciones del Gobierno, fomentar la creación de empleos, promover el desarrollo socioeconómico y la competitividad de Puerto Rico. Se declara, asimismo, que mediante el establecimiento de Alianzas Público Privadas se propiciará mayor participación ciudadana y de empresas locales en la inversión de proyectos, así como mayor adquisición de productos y servicios a empresas localizadas en Puerto Rico. También las Alianzas Público Privadas promoverán la transferencia de conocimiento a nuestra fuerza laboral y colaborarán con las instituciones de educación superior para la evaluación, supervisión y ejecución de proyectos. Conforme con la política pública antes mencionada, la Junta y los Comités que aquí se crean considerarán como únicas Funciones, Instalaciones o Servicios, existentes o nuevos, objeto de convertirse en Contratos de Alianza, los siguientes proyectos:

(1) …

(2) …
(3) …
…
(11) La construcción, mantenimiento u operación de edificaciones cuyo único propósito sea albergar a mujeres víctimas de algún delito de violencia doméstica en Puerto Rico."

Sección 2.- Se enmienda *el inciso (a) d*el Artículo 8 de la Ley Núm. 29~~ de 8 de junio de~~ 2009, según enmendada, conocida como ~~la~~ "Ley de Alianzas Público Privadas", para que se lea como sigue:

"Artículo 8. — Comité de Alianzas.

(a) Creación de Alianzas. — La Autoridad creará un Comité de Alianzas para cada Alianza que haya determinado es apropiada. El Comité estará integrado por (i) el Director Ejecutivo de la AAFAF o su delegado o delegada, (ii) el funcionario o funcionaria de la Entidad Gubernamental Participante con inherencia directa en el proyecto o su delegado o delegada, (iii) un (1) integrante de la Junta de Directores o Directoras de la Entidad Gubernamental Participante o en el caso de Entidades Gubernamentales sin Junta de Directores o Directoras, el Secretario o Secretaria del Departamento al cual está adscrita dicha Entidad Gubernamental Participante o su delegado o delegada o algún funcionario o funcionaria de ésta con conocimiento especializado en el tipo de proyecto de la Alianza seleccionado por la Junta de la Autoridad, y (iv) dos (2) funcionarios o funcionarias de cualquier Entidad Gubernamental escogidos por la Junta de Directores o Directoras de la Autoridad por sus conocimientos y experiencias en el tipo de proyecto objeto de la Alianza contemplada. El quórum de la Junta será constituido por mayoría simple de sus miembros, para todos los fines, decisiones y para los acuerdos que se tomen. Los miembros del Comité de Alianzas no podrán estar afiliados a, ni tener interés económico, directo o indirecto, con algún Proponente o Contratante. Los miembros de la Junta de Directores no podrán estar afiliados a, ni tener interés económico, directo o indirecto, con algún Contratante. Esta prohibición se extenderá a todo miembro de la Junta de la Autoridad por un periodo de cinco (5) años, luego del cese de sus funciones. Esta prohibición se extenderá a todos los empleados y empleadas de la Autoridad, y les aplicará a los miembros del Comité de Alianza por un periodo de dos (2) años. Si dentro del término antes establecido algún miembro de la Junta de la Autoridad, que haya renunciado a dicho cargo, interesa obtener una dispensa para la restricción aquí establecida, tendrá que solicitarla ante los miembros incumbentes de la Junta de la Autoridad, quienes la evaluarán y sólo podrán concederla por unanimidad, previa evaluación y recomendación en la afirmativa de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. En caso de surgir algún conflicto de interés, el miembro del Comité de Alianza afectado deberá dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el Artículo 4.5 de la Ley 1-2012, conocida como "Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico", titulado "Deber de Informar Situaciones de Posibles Acciones Antiéticas o de Conflictos de Intereses". Si la Oficina de Ética Gubernamental concluyera que el mecanismo de inhibición está disponible para la situación consultada, el miembro afectado será sustituido mientras existe tal conflicto por un miembro de la Junta de Directores o Directoras de la Autoridad o de la Entidad Gubernamental Participante o por otro funcionario o funcionaria de la AAFAF o de la Entidad Gubernamental Participante, según sea designado por la Junta de Directores o Directoras de la Autoridad.

En el caso del Comité para las Alianzas de construcción, mantenimiento u operación de edificaciones cuyo único propósito sea albergar a mujeres víctimas de

algún delito de violencia doméstica en Puerto Rico, éste estará integrado por el Director Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas o su delegado, el Secretario del Departamento de Justicia o su delegado, el Secretario del Departamento de la Familia o su delegado, y la Procuradora de las Mujeres o su delegado y el o los Alcalde(s) del/los municipio(s) donde estará sita la construcción. En el caso del o los Alcaldes, éstos podrán delegar por escrito, su participación en un funcionario municipal que les represente para fines del Comité de Alianzas establecido en este inciso.

(b) …

…"

Sección 4.-Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 430, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 430 (en adelante, P. del S. 430) , según radicado, tiene como propósito, "enmendar los Artículos 3 y 8 de la Ley Núm. 29-2009, según enmendada, mejor conocida como "Ley de las Alianzas Público Privadas" con el propósito de incluir como objeto para convertirse en Contrato de Alianza la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones cuyo único propósito sea albergar a mujeres víctimas de algún delito de violencia doméstica en Puerto Rico; establecer la composición del Comité de Alianza para este propósito; y para otros fines relacionados."

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El Artículo 3 de la Ley Núm. 29-2009, según enmendada, establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico fomentar las Alianzas Público Privadas (en adelante, APP) con el fin de crear proyectos prioritarios para desarrollar y mantener infraestructura, mejorar servicios públicos, compartir riesgos, generar empleos, promover la competitividad socioeconómica y asegurar la participación ciudadana y empresarial local en inversiones y compras, así como facilitar la transferencia de conocimiento y colaboración con instituciones educativas superiores. La Ley, además, define específicamente las áreas permitidas para estas alianzas, incluyendo manejo de desperdicios sólidos, infraestructura hidráulica y energética, transporte, educación, salud, seguridad, vivienda social, instalaciones recreativas, telecomunicaciones, sistemas tecnológicos e informáticos, así como cualquier otro proyecto que, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas del Gobierno de Puerto Rico (AAPP) determine prioritario por reglamento.

Por su parte, el Artículo 8 de la Ley Núm. 29-2009, antes mencionada, establece que, para cada Alianza Público Privada se creará un Comité de Alianzas integrado por representantes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), de la Entidad Gubernamental Participante y otros funcionarios expertos seleccionados por la Junta de la AAPP, con prohibiciones específicas para evitar conflictos de interés, aplicables durante y después de sus funciones. Dispone además, que, el Comité de Alianza tendrá entre sus responsabilidades principales aprobar documentos relacionados con la solicitud y evaluación de propuestas, precalificar contratantes potenciales,

seleccionar la propuesta más beneficiosa, negociar contratos, contratar asesores técnicos, mantener actas, elaborar informes detallados sobre el proceso de selección y negociación, velar por el cumplimiento de procedimientos y reglamentos, y en ciertos casos, crear subcomités técnicos de evaluación. Establece que, dicho informe final será presentado ante diversas entidades gubernamentales, legislativas y será publicado en las páginas web correspondientes para asegurar transparencia.

Así las cosas, el P. del S. 430, enmienda los artículos antes mencionados de la Ley Núm. 29-2009, *supra*, con el propósito de incluir como objeto del Contrato de Alianza Público Privadas la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones cuyo único propósito sea albergar a víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico.

La Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, (en adelante, Comisión), como parte del estudio y evaluación del P. del S. 430, solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: Departamento de la Familia, Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Departamento de Justicia, Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Federación de Alcaldes de Puerto Rico y la entidad sin fines de lucro Coordinadora Paz para la Mujer. Al momento de la redacción de este Informe, se recibieron los comentarios del Departamento de la Familia, de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, del Departamento de Justicia y de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. A continuación, se expone lo expresado por estas entidades gubernamentales.

Departamento de la Familia

El Departamento de la Familia (en adelante, Departamento) expresó su respaldo al P. del S. 430. El Departamento consideró que, la parte expositiva de la medida señala válidamente que, debido al aumento significativo de casos de violencia doméstica en Puerto Rico, se busca brindar apoyo a las víctimas en su vida diaria. Mencionó que, ha colaborado con otras agencias y entidades del Gobierno de Puerto Rico para lograr una mayor protección a todas las víctimas de violencia doméstica. En este sentido, entendió que, el P. del S. 430 está alineado con las prioridades del Gobierno de Puerto Rico al buscar atender las necesidades inmediatas de las víctimas de violencia doméstica.

El Departamento también, consideró que, la medida ante nos, brinda un entorno seguro a estas víctimas y sus familias. Por consiguiente, el Departamento de la Familia expresó su respaldo al P. del S. 430.

Oficina de la Procuradora de las Mujeres

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (en adelante, OPM) destacó que, respalda en su totalidad toda política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a erradicar la violencia de género. En este sentido, la OPM acogió con beneplácito la intención legislativa del P. del S. 430. La OPM señaló además que, en los últimos años, el mayor reto que han enfrentado las organizaciones ha sido la identificación de fondos para la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones para albergar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Indicó que, en consonancia con su deber fiduciario y a través de los fondos que administra, colaboró en la misma dirección que la medida y, por lo tanto, la apoya en su totalidad.

Sin embargo, la OPM planteó lo siguiente:

1. Señaló, una cuestión técnica en la composición del Comité de Alianza para estos proyectos y es que, casi todos sus miembros pueden estar representados por sus delegados, excepto la Procuradora de las Mujeres. La OPM consideró que este asunto debe ser corregido para garantizar la coherencia y precisión. Además, la OPM afirmó

que cuenta con personal capacitado para el monitoreo e inspección de los albergues, por lo cual, consideró que, tal delegación es razonable.

2. Recomendó que, en atención a la urgencia de albergar a las víctimas de violencia doméstica y la realidad de que, en muchas ocasiones los albergues no cuentan con la capacidad de habitaciones para atenderlas, se considere extender el Contrato de Alianza, a la operación de edificaciones cuyo único propósito no sea únicamente albergar. Mencionó que, en los Estados Unidos, para atender el problema de ocupación, se implementaron programas de violencia doméstica a través de vales de hotel para los sobrevivientes cuando no hay habitaciones disponibles en los refugios locales, funcionando como una solución temporal.

En resumen, la OPM avala el P. del S. 430 con las recomendaciones antes mencionadas.

Departamento de Justicia

Tras analizar la pieza legislativa, el Departamento de Justicia (en adelante, Justicia) manifestó no haber identificado obstáculo legal alguno para la aprobación de la medida. Reconoció la urgente necesidad de albergues de protección para víctimas en Puerto Rico, considerando que, el P. del S. 430 es una herramienta adicional para atender las necesidades apremiantes de las víctimas de violencia doméstica y representa una oportunidad para ofrecerles mejores servicios a esa población.

En consideración a lo anterior, Justicia concluyó que el P. del S. 430 no sólo es un ejercicio legítimo de las prerrogativas constitucionalmente asignadas a la Asamblea Legislativa, sino que, además, constituye un esfuerzo encomiable dirigido a atender un asunto de la más alta prioridad para este Gobierno, por lo que, avala la medida.

Asociación de Alcaldes de Puerto Rico

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico avaló la medida en su totalidad y expresó que resulta acertado que incluyan a los alcaldes en el Comité de Alianza donde esté sita la construcción. Por lo cual, no tienen reparo con la aprobación del P. del S. 430.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107–2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico certifica que el P. del S. 430 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, reconociendo la importancia del P. del S. 430, efectuó un análisis minucioso de la Ley Núm. 29-2009 y su propósito, así como de las recomendaciones y los comentarios esbozados en los memoriales explicativos recibidos del Departamento de la Familia, de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, del Departamento de Justicia y la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, por lo que, la Comisión coincide en que, la medida, proporciona una herramienta innovadora para combatir la violencia doméstica, y proteger a las víctimas.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 430**, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Hon. Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 32, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a realizar un inventario y depuración de solares y fincas vacantes, con usufructo en abandono, sin propiedades enclavadas y con propiedades enclavadas, así como su digitalización para garantizar [*el*] acceso a empleados gubernamentales y al público en general.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico enfrenta una crisis de vivienda que impacta a miles de ciudadanos, ~~quienes requieren~~ *en búsqueda de* acceso a terrenos y propiedades para establecer una residencia digna. Existen múltiples solares y fincas vacantes bajo la administración del Departamento de la Vivienda que han ~~quedado~~ *permanecido* en abandono o ~~sin un uso definido~~ *en desuso*, lo que limita su aprovechamiento en beneficio de la comunidad.

Es imperativo que el Departamento de la Vivienda realice un inventario detallado de estos bienes inmuebles, categorizando aquellos con usufructo en abandono, sin propiedades enclavadas y con propiedades enclavadas. Este inventario deberá ser depurado a medida que se asignen usufructos o titularidades~~,~~ asegurando una base de datos actualizada y eficiente.

Asimismo, se requiere la digitalización de este inventario para que los empleados del Departamento de la Vivienda y otras agencias pertinentes puedan ofrecer servicios oportunos a la ciudadanía y orientar a las personas con necesidad de vivienda sobre los procesos y oportunidades. Además, esta información deberá estar accesible al público para garantizar transparencia y facilitar la identificación de oportunidades de vivienda y desarrollo comunitario.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Orden al Departamento de la Vivienda

Se ordena al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a realizar un inventario completo de solares y fincas vacantes bajo su administración, categorizando aquellos con usufructo en abandono, sin propiedades enclavadas y con propiedades enclavadas.

Artículo 2.- Depuración del Inventario

El Departamento de la Vivienda deberá realizar una depuración constante del inventario a medida que se asignen nuevos usufructos o titularidades, garantizando que la base de datos ~~refleje~~ *muestre* [*la*]información actualizada en todo momento.

Artículo 3.- Digitalización y Accesibilidad

El inventario deberá ser digitalizado y accesible a todos los empleados del Departamento de la Vivienda y demás agencias encargadas de brindar servicios de vivienda a la ciudadanía. Se

establecerán mecanismos de acceso seguro y protocolos para garantizar la actualización constante de los datos.

Artículo 4.- Acceso Público

Se ordena que el inventario digitalizado esté disponible al público a través de una plataforma en línea, permitiendo a los ciudadanos conocer la disponibilidad de solares y fincas, así como los procedimientos para solicitar usufructo o titularidad.

Artículo 5.- Plazo para Cumplimiento

El Departamento de la Vivienda tendrá un plazo de seis (6) meses a partir de la aprobación de esta resolución para completar el inventario inicial. ~~y~~ *Además*, *contará con un* plazo adicional de seis (6) meses para ~~la implementación de la~~ *implementar la* digitalización y [*el*] acceso público.

Artículo 6.- Supervisión y Reportes

El Departamento de la Vivienda deberá presentar informes trimestrales a la Asamblea Legislativa detallando el progreso en la recopilación, depuración y digitalización del inventario. Dichos informes deberán incluir métricas sobre la cantidad de propiedades identificadas, asignadas y los casos en proceso.

Artículo 7.- Vigencia

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social, previa consideración, recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 32, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El autor de la Resolución Conjunta del Senado 32, posee la intención de ordenar al Departamento de la Vivienda a realizar un inventario y depuración de solares y fincas vacantes, con usufructo en abandono, sin propiedades enclavadas y con propiedades enclavadas, así como la digitalización para garantizar acceso a empleados gubernamentales y al público en general. Ello, dado que es de alto interés y conocimiento público que Puerto Rico enfrenta una crisis de vivienda asequible que impacta a miles de ciudadanos. A casi ocho (8) años del paso del huracán María por nuestra zona, y ante la realidad en el mercado inmobiliario es imperativo que el Departamento de la Vivienda en la búsqueda de resolver paulatinamente esta problemática ejecute los inventarios propuestos.

INTRODUCCIÓN

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social evaluó y estudió la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda" para analizar concienzudamente el alcance y la jurisdicción del Departamento de la Vivienda vis a vis la intención de la presente Resolución Conjunta.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para una evaluación integral de esta Resolución Conjunta, la Comisión de Vivienda y Bienestar Social no solicitó memoriales explicativos o comentarios a las agencias administrativas. Para sustentar su viabilidad fue suficiente evaluar su razonabilidad, propósito, pertinencia y jurisdicción del Departamento de la Vivienda.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico no solicitó comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencial Municipal, toda vez que la Resolución Conjunta del Senado 32 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico entiende que la solicitud del autor de la presente Resolución Conjunta del Senado 32 es razonable, dado que mostrará hallazgos que ayudarán a identificar y atender la incertidumbre existente con la disponibilidad de terrenos y viviendas en Puerto Rico.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de la **Resolución Conjunta del Senado 32**, con las enmiendas contenidas en el entirrillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Jamie Barlucea Rodríguez
Presidenta
Comisión de Vivienda y Bienestar Social"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe Parcial en torno a la Resolución del Senado 17, sometido por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe Parcial en torno a la Resolución del Senado 22, sometido por la Comisión de Educación, Arte y Cultura.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en torno a la Resolución del Senado 40, sometido por la Comisión de Educación, Arte y Cultura.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 75, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"RESOLUCIÓN

Para ordenar a ~~las Comisiones~~ *la Comisión* de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional~~; y de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo~~ del Senado de Puerto Rico, ~~a~~ realizar una investigación abarcadora sobre los protocolos bancarios y medidas implementadas por las instituciones financieras

en la Isla para prevenir la explotación financiera de los adultos mayores; ~~y para otros fines relacionados~~.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Puerto Rico enfrenta un reto cada vez más alarmante en la protección de su población adulta mayor ante la creciente incidencia de fraudes y esquemas de explotación financiera. La vulnerabilidad de esta población, que representa una parte significativa del tejido demográfico de la Isla, ha convertido el problema en una crisis de seguridad financiera con implicaciones devastadoras para miles de familias puertorriqueñas. La explotación financiera de los adultos mayores se manifiesta en múltiples formas, desde estafas telefónicas y fraudes románticos hasta la manipulación indebida de sus cuentas bancarias por parte de terceros con intenciones maliciosas. En muchos casos, estos delitos pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde y los fondos sustraídos se vuelven irrecuperables.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI)_,_ ha advertido sobre el aumento de estos esquemas fraudulentos en Puerto Rico, destacando que el uso de inteligencia artificial ha facilitado la creación de documentos falsificados y la duplicación de identidades con una sofisticación sin precedentes. Según las autoridades federales, la Isla se encuentra entre las jurisdicciones más afectadas por estos delitos~~,~~ con un número considerable de víctimas que, al perder sus ahorros de toda la vida, enfrentan graves consecuencias económicas y emocionales.

Además de los fraudes perpetrados por organizaciones criminales y estafadores externos, un aspecto particularmente preocupante es que, en algunos casos, los propios perpetradores de estos fraudes y de la explotación financiera hacia los adultos mayores son miembros de su familia. Estudios han demostrado que los familiares cercanos~~,~~ en quienes los adultos mayores suelen depositar mayor confianza, pueden aprovecharse de su acceso a cuentas bancarias y documentos financieros para apropiarse ilegalmente de sus bienes o inducirlos a realizar transacciones en su perjuicio. Esta situación es especialmente alarmante porque muchas víctimas temen denunciar a sus propios hijos, nietos o cuidadores por miedo a represalias, dependencia emocional o simplemente por no querer causar conflictos familiares.

A pesar de que existen marcos legales diseñados para prevenir la explotación financiera de los adultos mayores, como la Ley ~~206-2008 de Protección Financiera a Personas de Edad Avanzada o Incapacitada,~~*76-2020, según enmendada conocida como* "*Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos", la Ley 121-2019, según enmendada conocida como* ~~la~~ *"*Carta de Derechos y *la Política Pública del Gobierno* a favor de los Adultos Mayores*",* y regulaciones de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), persisten fallas en la implementación efectiva de estas salvaguardas. Organizaciones como la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) han reconocido que, si bien los bancos tienen la obligación de reportar actividades sospechosas a las agencias pertinentes, la efectividad de estos referidos es limitada debido a la falta de seguimiento adecuado y a la ausencia de un marco interagencial más ágil y coordinado.

Un aspecto crucial en esta problemática es la insuficiencia de educación financiera tanto en los adultos mayores como en sus familias. En muchas ocasiones, las víctimas de estos esquemas desconocen sus derechos o carecen de la información necesaria para identificar señales de alerta. Además, las campañas de concienciación han sido fragmentadas y con un alcance limitado, lo que impide una mayor protección preventiva. Expertos han señalado que en otras jurisdicciones se han implementado programas obligatorios de educación financiera en el currículo escolar, lo que ha contribuido a reducir la incidencia de fraudes financieros. En Puerto Rico, aún persiste la necesidad de fortalecer esta área y de establecer estrategias proactivas para mitigar los riesgos de explotación.

Si bien los bancos y cooperativas han tomado algunas medidas para entrenar a su personal en la detección de irregularidades y en la identificación de transacciones inusuales realizadas por adultos mayores, las regulaciones vigentes aún presentan vacíos que limitan la capacidad de las instituciones financieras para intervenir con mayor efectividad. La confidencialidad de los referidos, la posibilidad de detener transacciones sospechosas por un periodo más prolongado y la implementación de tecnología avanzada para detectar patrones de fraude son áreas que requieren revisión y fortalecimiento.

Ante este panorama, resulta imperativo que el Senado de Puerto Rico tome acción para evaluar de manera exhaustiva las políticas, protocolos y medidas que actualmente rigen la prevención de la explotación financiera de los adultos mayores en la Isla. Es necesario determinar si las regulaciones existentes son suficientes, si su cumplimiento es efectivo y si las agencias responsables cuentan con los recursos adecuados para hacer cumplir las disposiciones vigentes. Asimismo, se debe examinar la posibilidad de adoptar nuevas estrategias, tales como iniciativas legislativas más robustas, mecanismos de colaboración interagencial más eficientes y modelos de prevención y educación financiera que hayan demostrado éxito en otras jurisdicciones.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a ~~las Comisiones~~ *la Comisión* de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional~~; y de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo~~ del Senado de Puerto Rico ~~a~~ realizar una investigación abarcadora sobre los protocolos bancarios y medidas implementadas por las instituciones financieras en la Isla para prevenir la explotación financiera de los adultos mayores.

~~Sección 2.- La investigación deberá incluir, pero no se limitará a, el examen de los protocolos de los bancos y cooperativas para detectar transacciones sospechosas realizadas por adultos mayores, la evaluación del cumplimiento de las instituciones financieras con la normativa vigente en materia de protección financiera a esta población, la identificación de lagunas en la legislación o en la fiscalización de los mecanismos de prevención y respuesta ante estos delitos, la efectividad de la educación financiera y las campañas de concienciación dirigidas a los adultos mayores y sus familias, la coordinación entre las instituciones financieras, el Departamento de la Familia, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y otras agencias pertinentes en la detección y mitigación de la explotación financiera, y la revisión de las mejores prácticas en otras jurisdicciones para determinar si pueden adaptarse a Puerto Rico.~~

~~Sección 3.- Se autoriza a las Comisiones a celebrar vistas públicas y requerir la comparecencia de funcionarios del gobierno, representantes de la banca y cooperativas, organizaciones de defensa de los adultos mayores y cualquier otro ente pertinente.~~ *Sección 2.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios y testigos; requerir información, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares, a los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución.*

Sección *3.-* ~~4.- Las Comisiones rendirán~~ *La Comisión deberá rendir* un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un término no mayor de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta Resolución.

~~Sección 5.-~~ *Sección 4.-* Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.”

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previa consideración, recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 75, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

La R. del S. 75, propone ordenar a las Comisiones de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional; y de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación abarcadora sobre los protocolos bancarios y medidas implementadas por las instituciones financieras en la Isla para prevenir la explotación financiera de los adultos mayores; y para otros fines relacionados.

Esta Comisión entiende que la solicitud es razonable, dado que el asunto objeto de la medida presentada se encuentra dentro de la jurisdicción de la Comisión la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico y puede ser atendido por esta, según dispuesto en la R. del S. 15, aprobada el 16 de enero de 2025.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 75, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Asuntos Internos"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 82, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado ~~del Gobierno~~ de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las obras y ~~el~~ *del* presupuesto asignado, ~~desglosado por partidas,~~ *al* ~~del~~ Centro de Trauma de Mayagüez; ~~determinar la fase en que se encuentra el proyecto según la información más reciente del año 2024, incluyendo vistas recientes en el Senado y publicaciones en medios de comunicación; y, con base en los hallazgos, establecer los próximos pasos necesarios para la culminación de este proyecto que beneficiará a numerosas familias puertorriqueñas en situaciones de emergencia~~.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acceso a servicios médicos especializados y de emergencia es un derecho fundamental de los ciudadanos, y garantizar dicho acceso debe ser una prioridad para el ~~gobierno~~ *Gobierno* de Puerto Rico. La región oeste de la isla, con una población de más de medio millón de habitantes, carece actualmente de un Centro de Trauma de Nivel I o II, lo que obliga a los pacientes con lesiones críticas

a ser transportados al Centro Médico de Puerto Rico en San Juan. Este traslado, que puede tomar horas dependiendo de la ubicación, pone en riesgo vidas humanas que podrían salvarse con un tratamiento inmediato.

~~Este traslado, que puede tomar hasta tres horas, dependiendo de la ubicación y el tráfico, pone en riesgo vidas humanas que podrían salvarse con un tratamiento inmediato.~~

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que los sistemas de atención de trauma bien estructurados pueden reducir las muertes por lesiones hasta en un *veinticinco por ciento* 25%. Además, un informe de la *American College of Surgeons Committee on Trauma* resalta que los tiempos prolongados de transporte son un factor determinante en la mortalidad de pacientes politraumatizados. En Puerto Rico, la ausencia de centros de trauma fuera de la región metropolitana amplifica esta disparidad, con consecuencias graves para las comunidades del oeste, sur y este de la isla.

En un estudio realizado por la *Asociación de Hospitales de Puerto Rico*, se identificó que los residentes de las regiones sur y oeste tienen menos probabilidades de acceder a servicios de emergencia avanzada en la primera "hora dorada" tras un evento traumático, un periodo crítico para la supervivencia. Este estudio también concluyó que la centralización de los servicios médicos de trauma en la región metropolitana crea una inequidad significativa en el acceso a la atención. El Departamento de Salud, en un análisis de datos de emergencias de los años 2018-2022, señaló que el *treinta y cuatro por ciento* 34% de las muertes por trauma en la región oeste ocurrieron antes de que los pacientes llegaran al hospital adecuado debido a retrasos en el transporte.

La creación de un Centro de Trauma en Mayagüez no solo beneficiaría directamente a los residentes de esta región, sino que también aliviaría la sobrecarga de pacientes en el Centro Médico de Puerto Rico. Actualmente, este último opera por encima de su capacidad en la mayoría de los casos críticos, lo que compromete la calidad y la rapidez de la atención.

El modelo implementado en otros estados de los Estados Unidos y territorios insulares, como Hawái, demuestra que la descentralización de los servicios de trauma reduce significativamente la mortalidad en áreas rurales o de difícil acceso. En Hawái, la apertura de centros de trauma regionales en las islas exteriores disminuyó en un *veinte por ciento* 20% las muertes relacionadas con lesiones críticas entre *los años* 2010 y 2020.

El Centro de Trauma de Mayagüez ha sido objeto de múltiples asignaciones presupuestarias y esfuerzos gubernamentales destinados a su desarrollo y culminación. Desde su conceptualización, el proyecto fue identificado como una solución para reducir la disparidad en la disponibilidad de servicios médicos de emergencia en la isla. En 2012, se iniciaron los primeros esfuerzos para establecer este centro, pero el progreso ha sido lento debido a una combinación de problemas presupuestarios, falta de coordinación interagencial y retos administrativos. En junio de 2022, se anunció un acuerdo entre el Municipio de Mayagüez y el Departamento de Salud para combinar fondos y finalizar los trabajos del centro, con el municipio aportando sobre $9 millones de dólares y el Departamento de Salud comprometiéndose a cubrir el resto de los fondos necesarios para culminar la fase cinco y seis del proyecto. Sin embargo, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) luego descubrió que dichos fondos se malversaron dejando el proyecto en un estado estático en la fase cuatro de desarrollo de infraestructura, donde se han completado trabajos preliminares como diseño estructural y reforzamiento de las instalaciones principales, pero no se ha avanzado en la adquisición e instalación de equipos médicos especializados ni en la contratación del personal médico requerido. Estas preocupaciones han sido discutidas en vistas recientes del Senado y ampliamente documentadas en medios de comunicación. A pesar de estos esfuerzos, las

actualizaciones recientes del año 2024 indican que no se han realizado avances significativos en la adquisición e instalación de equipos médicos ni en la contratación de personal capacitado.

Entre los retos principales se encuentra la falta de médicos especializados, un problema agravado por el éxodo masivo de profesionales de la salud que ha impactado toda la isla. Según declaraciones recientes en vistas del Senado *de Puerto Rico*, este obstáculo ha retrasado significativamente el progreso del proyecto. Además, persisten inquietudes sobre la transparencia en el uso de los fondos asignados y sobre el manejo administrativo del proyecto, temas que deben ser aclarados para garantizar su culminación exitosa.

Diversos sectores, incluyendo la ciudadanía, líderes comunitarios y organizaciones de la salud, han levantado su voz en los medios de comunicación para destacar la urgencia de este proyecto. Las constantes emergencias médicas en la región oeste y la falta de instalaciones especializadas refuerzan la importancia de culminar el Centro de Trauma de Mayagüez. Esta instalación no solo atendería emergencias críticas, sino que también serviría como un centro de capacitación para médicos y otros profesionales de la salud, fortaleciendo el sistema médico del país en su conjunto.

El Senado de Puerto Rico, tiene la responsabilidad de velar por el buen uso de los recursos públicos y garantizar que los proyectos esenciales para la salud y seguridad de la ciudadanía sean completados de manera efectiva. Es por esto, que se hace imperativo investigar exhaustivamente el estado actual de este proyecto, identificando sus retos, logros y áreas de mejora, y estableciendo un plan claro para su culminación.

La investigación sobre el estado actual del Centro de Trauma de Mayagüez no solo permitirá identificar los obstáculos que han frenado el proyecto, sino que también proporcionará un marco claro para tomar las decisiones necesarias en beneficio de miles de familias puertorriqueñas. Culminar este proyecto es esencial para garantizar que la región oeste de la isla cuente con servicios médicos de emergencia adecuados, salvando vidas y fortaleciendo la infraestructura de salud pública de Puerto Rico.

Dada la importancia crítica de este proyecto para la salud y seguridad de los ciudadanos del oeste de Puerto Rico, es imperativo que el Senado de Puerto Rico obtenga información detallada y actualizada sobre el estado de las obras, el presupuesto asignado y utilizado, y las fases pendientes para la culminación del Centro de Trauma de Mayagüez.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Salud del Senado ~~del Gobierno~~ *de* Puerto Rico, ~~llevar a cabo~~ *realizar* una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las obras *y del presupuesto asignado al* ~~del~~ Centro de Trauma de Mayagüez. ~~Esta investigación deberá incluir, pero no limitarse a:~~

~~a) Un informe detallado del presupuesto asignado al proyecto, desglosado por partidas, incluyendo fondos asignados, utilizados y remanentes.~~

~~b) La fase actual en que se encuentra el proyecto, especificando las obras completadas, en proceso y pendientes.~~

~~c) Identificación de obstáculos o desafíos que han retrasado o impedido la culminación del proyecto, incluyendo aspectos relacionados o impedido la culminación del proyecto, incluyendo aspectos relacionados con recursos humanos, financieros, legales o administrativos.~~

~~d) Recomendaciones específicas para los próximos pasos necesarios para la culminación exitosa del Centro de Trauma de Mayagüez.~~

Sección 2.- La Comisión ~~de Salud~~ podrá celebrar vistas públicas*; citar funcionarios y testigos; requerir información, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares, a los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución.* ~~y requerir la comparecencia de funcionarios del Departamento de Salud, representantes del Municipio de Mayagüez, contratistas involucrados en el proyecto y cualquier otra parte pertinente, así como requerir información de las partes y realizar inspecciones oculares, con el fin de recopilar información precisa y actualizada~~.

Sección 3.- La Comisión ~~de Salud~~ deberá rendir ~~informes continuos al Senado de Puerto Rico~~ *un informe* con ~~los~~ *sus* hallazgos ~~de la investigación~~, conclusiones y ~~las~~ recomendaciones ~~correspondientes. El primer informe se deberá presentar en un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Resolución, y un informe final deberá ser presentado antes de la conclusión de la Segunda (2da) Sesión Ordinaria de la Vigésima (20ma) Asamblea Legislativa~~ *en un término no mayor de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta Resolución*.

Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previa consideración, recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 82, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

La R. del S. 82, propone ordenar a la Comisión de Salud del Senado del Gobierno de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las obras y el presupuesto asignado, desglosado por partidas, del Centro de Trauma de Mayagüez; determinar la fase en que se encuentra el proyecto según la información más reciente del año 2024, incluyendo vistas recientes en el Senado y publicaciones en medios de comunicación; y, con base en los hallazgos, establecer los próximos pasos necesarios para la culminación de este proyecto que beneficiará a numerosas familias puertorriqueñas en situaciones de emergencia.

Esta Comisión entiende que la solicitud es razonable, dado que el asunto objeto de la medida presentada se encuentra dentro de la jurisdicción de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico y puede ser atendido por esta, según dispuesto en la R. del S. 15, aprobada el 16 de enero de 2025.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 82, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Asuntos Internos"

- - - -

PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, antes de continuar los trabajos, para relevar a la Comisión de Salud de atender el Proyecto del Senado 440 y referirlo a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción a la solicitud del compañero portavoz Toledo López, se aprueba.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para comenzar con la discusión del Calendario de Órdenes Especiales del Día.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Adelante.

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA

Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 59, titulado:

"Para enmendar el Artículo 58, derogar el actual Artículo 59 y sustituirlo por uno nuevo, y enmendar el Artículo 60 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", a los fines de establecer la obligación de los notarios de informar los testimonios en el índice mensual, eliminando así el requisito de la inscripción en el Registro de Testimonios; enmendar los Artículos 2 y 4 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, a los fines de eliminar el Registro de Testimonios; establecer disposiciones transitorias; y para otros fines relacionados."

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Sí, es que se acaba de llamar la medida, esta medida legislativa, el Proyecto del Senado 59. Tenemos que hacer la salvedad de que esta medida en la parte de Impacto Fiscal Municipal hace referencia a una medida distinta. Si se dan cuenta, hace referencia al PC 1, en lugar PS 1, en lugar de PS 59. Nuestra solicitud –¿verdad?– a esos efectos, pues, sería que se envíe la medida a la Comisión para que se pueda corregir. Me explico, la Ley 107 del 2020, según enmendada, y conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", exige que toda medida legislativa que se pretenda aprobar, en su informe de Impacto Municipal, si alguno, sobre los municipios, haga referencia, en este caso el impacto ambiental hace referencia, el Impacto Municipal, disculpe, hace referencia a otro proyecto.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Breve receso en Sala, señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Sí, señor Portavoz. Vamos a hacer un breve receso porque quiero verificar si esto no fue un *typo* y se pudiera enmendar en el proceso legislativo sin regresarlo a Comisión, que es una solicitud que usted muy bien a su haber puede establecer.

Así que voy a pedir un breve receso en Sala antes de provocar una votación.

Breve receso en Sala.

RECESO

PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Estamos listos para resolver el planteamiento del compañero portavoz Hernández.

El Proyecto del Senado 59, y de igual manera el Proyecto del Senado 60, adolecen de lo que a todas luces parecería que es un error humano, porque hace el Impacto Fiscal Municipal, como muy bien plantea el compañero Hernández Ortiz, que es el Proyecto del Senado número 1, cuando estamos

evaluando el 59. Para conocimiento de los compañeros, que esta es la primera vez que se enfrentan a este reto legislativo, el proceso correcto es devolverlos a Comisión y de la propia Comisión haría un Segundo Informe donde se enmienda el *typo* o el error involuntario del Proyecto del Senado. Se trae entonces a una convocatoria, que muy posiblemente se hará aquí en el Salón de Mujeres Ilustres, y de esa manera el tracto legislativo se perfecciona con el señalamiento de Impacto Fiscal al Proyecto que le corresponde.

Esa es la manera correcta de hacer. Y si esa es la solicitud del compañero Hernández Ortiz…

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Eso es correcto, Presidente. Y le agradecemos el trámite.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Vamos entonces, señor Portavoz.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, estaríamos solicitando entonces que se devuelvan estos dos Proyectos a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos.

PRIMER VICEPRESIDENTE: El Proyecto del Senado 59 y el Proyecto del Senado…

SR. TOLEDO LÓPEZ: Sesenta (60). Cincuenta y nueve (59) y 60.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Que se devuelvan a Comisión.

Próximo asunto.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Breve receso, señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Receso.

RECESO

PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 68, titulado:

"Para crear "la Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico", crear la figura del Oficial de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico adscrito al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y establecer sus deberes; crear el ~~Consejo~~ *Comité* de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico y establecer sus deberes; ordenar al Puerto Rico Innovations and Technology Services (PRITS) crear y desarrollar la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en relación con la implementación de la Inteligencia Artificial a través de las agencias e instrumentalidades gubernamentales; y para otros fines relacionados."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción…

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Hay objeción…

PRIMER VICEPRESIDENTE: Hay objeción…

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: …a las enmiendas en el informe.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Hay una objeción de la compañera María de Lourdes Santiago. Habiendo objeción, vamos a votación.

Todos aquellos que estén a favor del planteamiento de la compañera María de Lourdes Santiago dirán que sí. Que conste para récord, escuché dos (2) personas nada más. Compañero Hernández Ortiz, ¿usted se opone y la compañera Negrón?

Todos los que estén a favor, en contra del planteamiento de la compañera María de Lourdes Santiago dirán que sí. Los sí ganan. Así que se sostienen las enmiendas.

Señor Portavoz, adelante.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Que se lean.

ENMIENDAS EN SALA

En el Decrétase:

Página 4, línea 5,	después de "Artículo" eliminar "2" y sustituir por "3"
Página 4, línea 6,	después de "PRITS-" eliminar todo su contenido y sustituir por "significará el Puerto Rico Innovation and Technology Service;"
Página 4, línea 13,	después de "Rico" eliminar "Technology and Innovation Services" y sustituir por "Innovation and Technology Service"
Página 4, línea 15,	antes de "nombrará" eliminar "(PRITS)"
Página 7, línea 13,	antes de "desarrollar" eliminar "(13)" y sustituir por "(10)"
Página 7, línea 15,	antes de "a partir" eliminar "(14)" y sustituir por "(11)"
Página 8, línea 2,	antes de "o un representante" eliminar "(PRITS)"
Página 8, línea 4,	después de "el" eliminar "Director Ejecutivo" y sustituir por "Administrador"
Página 8, línea 4,	después de "Generales" añadir "y Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico"
Página 9, línea 12,	después de "según la" eliminar "ley para La" y sustituir por "Ley para la"
Página 9, línea 13,	después de "Rico;" eliminar "ley 8 del 2017" y sustituir por "Ley 8-2017"
Página 11, línea 15,	después de "Rico" eliminar "Innovations" y sustituir por "Innovation"
Página 11, línea 15,	después de "Technology" eliminar "Services" y sustituir por "Service"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción…

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: La compañera Álvarez Conde.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Para hablar de la medida.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Déjeme primero aprobar las enmiendas en Sala, de ser aprobadas, entonces vamos al turno de la medida.

Señor Portavoz, plantéelo, las enmiendas en Sala, para la aprobación.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Todos aquellos que estén a favor dirán que sí. Todos los que estén en contra dirán que no. Ganan los sí.

Compañera Ada Álvarez Conde, para un turno sobre la medida.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Seré breve, señor Presidente.

Simplemente quiero traer a colación que una de las cosas que vimos en esta vista pública, la cual participé como Portavoz del Partido Popular en ella, es que uno de los planteamientos que se hicieron allí es que debemos de salvaguardar que la Inteligencia Artificial no sea una excusa eventualmente para reemplazar servidores públicos. Eso en la vista fue algo que se expresó y la mayoría de los ponentes estuvieron de acuerdo, inclusive hicieron, contestaron -¿verdad?- que no era para reemplazar personas. Pero dado esa circunstancia de garantizar, ya que este proyecto y este informe establece que por eso que se va a implementar Inteligencia Artificial podría haber movimiento de personal, quisiera proponer una enmienda en Sala para salvaguardar eso que se habló en esa vista.

La enmienda en Sala es la siguiente: en el Decrétase, página 9, línea 14, después del "." insertar "En tal escenario la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos deberá notificar además a la Asamblea Legislativa con no menos de noventa (90) días de anticipación a la entrada en vigor de los cambios administrativos.".

Esa es la enmienda.

PRIMER VICEPRESIDENTE: ¿Puede repetirla, por favor?

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Okay.

En el Decrétase, página 9, línea 14, después del "." insertar "En tal escenario la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos deberá notificar además a la Asamblea Legislativa con no menos de noventa (90) días de anticipación a la entrada en vigor de los cambios administrativos.".

SR. TOLEDO LÓPEZ: Breve receso en Sala, Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Breve receso en Sala.

RECESO

PRIMER VICEPRESIDENTE: Senadora Álvarez Conde, ¿tengo entendido de que usted va a reconsiderar la posición de la enmienda en Sala para someter otra enmienda? Pues para que quede en récord, proceda.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Para que quede en récord que retiro lo anterior dicho porque nos dimos cuenta que faltaba una palabra. Para someter una nueva enmienda.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Okay. Pues…

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Okay. En el Decrétase, página 9, línea 14, después del "." insertar "En tal escenario la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno deberá notificar además a la Asamblea Legislativa con no menos de noventa (90) días de anticipación a la entrada en vigor de los cambios administrativos.".

Estas son las enmiendas.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, a las enmiendas presentadas por la senadora Álvarez Conde no tenemos objeción.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, se acogen las enmiendas.

Solamente quiero hacer un punto de referencia, señor Portavoz.

Para efectos de la economía procesal, en el futuro, en las enmiendas que se van a hacer en Sala, que ocurren, se debe dar la conversación con los asesores, pero le vamos a pedir encarecidamente de que si hay un Presidente de Comisión que atendió la medida se incluya ese Presidente de Comisión o a cualquier otro Senador o Senadora que le interese el tema dentro de la discusión para entonces tener una sola reunión y no varias reuniones, y de esa manera pues establecemos una economía procesal.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha enmendada.

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Señor Presidente, para expresarme sobre la medida.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Compañera María de Lourdes Santiago, usted tiene la palabra.

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: La reglamentación de la Inteligencia Artificial es probablemente de los mayores retos que tiene cualquier Estado en el mundo actual. La capacidad de manejo y producción de información, de conocimiento, buen manejo o mal manejo, se convierten virtualmente infinitas con este nuevo instrumento que está disponible desde versiones accesibles en los teléfonos inteligentes, hasta proyectos muchísimo más sofisticados y complejos.

Y es, por lo tanto, importante que el Gobierno de Puerto Rico se inserte en esa corriente y cree estructuras de regulación y de fiscalización. Hay quien dice que el reto que representa la Inteligencia Artificial solamente es comparable a los cambios que representó la mecanización de la producción en el momento de la revolución industrial. El Proyecto del Senado 68, sin embargo, no es ese instrumento de regulación y fiscalización al que llaman los tiempos.

En primer lugar, la Inteligencia Artificial, por su naturaleza, es una herramienta en constante evolución, se va nutriendo de la experiencia de los usuarios de la información a la que tiene acceso. Y eso provoca y hemos visto -cada cual habrá tenido su experiencia- que su utilización suele estar marcada peligrosamente por los sesgos de la gente que interactúa con el sistema. Y va a depender del espacio de manufactura, va a depender de quiénes intervinieron en su desarrollo. Y la única forma de ejercer algún control sobre esa evolución de la Inteligencia Artificial es a través de auditorías realizadas por seres humanos. El Proyecto del Senado 68 no dispone nada abocado a ese fin.

En segundo lugar, uno de los grandes peligros de la digitalización en general -¿verdad?-, ni hablar del tema de Inteligencia Artificial, es cuántos datos se debe compartir por parte de las estructuras gubernamentales. Nada en este Proyecto garantiza la segregación y protección de datos.

Para dar un ejemplo muy sencillo. Información ciudadana que ciertamente es oportuna que la tenga el Departamento de Salud, no tiene por qué estar accesible para Desarrollo y Comercio o para el Departamento de Estado. Pero en la medida en que no se establecen unos marcos operacionales claros o que esa sea la responsabilidad del oficial que se crea por virtud de esta Ley, el país queda desprotegido.

No existe tampoco, no provee el proyecto para que el oficial de Inteligencia Artificial o su menguado comité –voy ya mismo a ese tema– tenga la obligación de notificar, de hacer pública la comisión de errores significativos; y no solamente no tienen que notificarlos, no se provee para que creen mecanismos de apelación de estas determinaciones que, de nuevo, no corresponden a personas, sino a procesos que ya están comenzando a depositarse en un sistema de Inteligencia Artificial.

Son elementos que quizás pudieran haberse incorporado en el trámite legislativo. Pero lejos de hacer eso, el trabajo de la Comisión con jurisdicción empobreció significativamente el Proyecto del Senado 68 y por eso me opuse a las enmiendas contenidas en el informe.

En primer lugar, se elimina -que estaba en el texto original- “que el oficial de Inteligencia Artificial tenga la obligación de asegurarse de que el desarrollo, adquisición y utilización de un sistema

automatizado sea documentable y trazable" –me imagino que se refieren a la documentación de su proceso–, pero eliminaron completamente esa cláusula. En la misma página, "la obligación de asegurarse de establecer los requisitos de acceso público para la publicación, información apropiada por parte de la agencia estatal que utiliza el sistema automatizado", tachado completamente, eliminado del Proyecto del Senado 68. "El que el oficial tenga la obligación de asegurarse de que sea apropiadamente transparente cada agencia en la divulgación de cualquier información que sea relevante", eliminado en su totalidad. De hecho, la única garantía que tenía el país de que en este proceso hubiera una "representación que no estuviera vinculada directamente a estructuras políticas, que era la inclusión de dos (2) miembros del interés públicos a ser nombrados", eliminado.

Todo el tema de Inteligencia Artificial en el Gobierno va a estar en manos del Principal Ejecutivo de PRITS, del Director Ejecutivo de Servicios Generales, que a lo que se dedica fundamentalmente es a la adquisición de bienes y servicios; del Departamento de Desarrollo Económico o un representante; y del Director Ejecutivo de OATRH. Solamente una de esas personas puede reclamar que tiene conocimiento especializado en el tema y, sin embargo, se excluye la posibilidad de que se incorpore, ¡caramba!, a gente que sí sepa de un asunto muy complicado, e insisto, en constante evolución.

Me parece que, por lo tanto, el proyecto, repito, ha sido empobrecido por el trabajo de la Comisión. Continúan las enmiendas; "la obligación de presentar un inventario de sistemas utilizado por cada agencia y que sea publicado", eliminada también. La tecnología, si algo, si algo, debería ser la herramienta para promocionar transparencia y rendición de cuentas, que el Estado no continúe actuando a espaldas de las ciudadanas y los ciudadanos.

Lo que promueve el Proyecto del Senado 68 es todo lo contrario, que la incursión en el ámbito de la Inteligencia Artificial se convierta en un mecanismo para multiplicar la opacidad, para que cada vez más las comunidades, los ciudadanos estén alejadas y alejados de determinaciones gubernamentales que estarán tomadas por un mecanismo que todavía está en vías de ensayo por la humanidad completa.

Me parece que la exclusión de elementos indispensables, agravada por la eliminación de las disposiciones que sí estaban en el proyecto original, hace que no sea posible que aprobemos el Proyecto del Senado 68. La Delegación del Partido Independentista le votará en contra.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Muchas gracias a la compañera María de Lourdes Santiago.

¿Algún otro compañero o compañera?

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Ante la solicitud del compañero Portavoz para que se apruebe la medida según ha sido enmendada, aquellos que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobada.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que se lean.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Adelante.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos que se aprueben.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Sobre el Proyecto del Senado 68.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Sí.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Adelante. Que se aprueben.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Ahora sí, señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que se lean.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Adelante.

ENMIENDAS EN SALA

En el Título:

Línea 5, después de "Rico" eliminar "Innovations" y sustituir por "Innovation"; después de "Technology" eliminar "Services" y sustituir por "Service"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Aquellos que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobadas.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Adelante.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 82, titulado:

"Para añadir un sub-inciso (d) al Inciso (13) del Artículo 1.4 de la Ley 82-2010, según enmendada, conocida como "Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico," con el objetivo de incorporar en la definición de Energía Renovable Alterna el uso de tecnologías a base de hidrógeno, en consonancia con el plan estratégico adoptado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Breve receso en Sala.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Breve receso.

RECESO

PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

Señor Presidente, hay enmiendas en Sala del Proyecto del Senado 82, proponemos que se lean.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Ahora sí. Que se lean.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Señor Presidente, la enmienda en Sala, quiero simplemente explicar que el hidrógeno tiene tres (3) tipos, azul, gris o verde, así se conoce en la industria. El azul y gris es de energía combustible, versus el verde, que sería de energía no fósil. Así que la enmienda propuesta al P. del S. 82 dice: página 4, línea 14, después de "fósiles" insertar "conocido como hidrógeno verde".

SR. TOLEDO LÓPEZ: No hay objeción a las enmiendas, señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, o a menos que haya alguna objeción,…

SR. MOLINA PÉREZ: Señor Presidente.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Antes que nada, señor Senador, ¿su turno es para una enmienda adicional o para oponerse a la enmienda de la compañera o aprobarla?

SR. MOLINA PÉREZ: Bueno, es que para una enmienda precisamente en eso, y no va cónsona con la de ella, que puede ser posterior entonces, si quiere.

PRIMER VICEPRESIDENTE: No posterior. Sí, eso le iba a decir. Para cuestión de orden procesal, tenemos que aprobar la de la compañera o desaprobarla y luego, si usted tuviese una enmienda que va a sobre la misma, una nueva enmienda,…

SR. MOLINA PÉREZ: Por eso.

PRIMER VICEPRESIDENTE: …también se traería a colación para entonces votar sobre la enmienda sobre la enmienda.

Así que vamos a votar sobre la enmienda de la compañera Álvarez Conde. Todos aquellos que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobada la enmienda.

Compañero Eliezer Molina Pérez, para su enmienda sobre la enmienda.

SR. MOLINA PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Es que cuando veo la medida observo los incisos que la compañera hace referencia, entonces dice el "a. combustión de gas derivado del sistema de relleno sanitario; b. digestión anaeróbica; c. pilas de combustible; d. combustión de hidrógeno no derivado de combustible fósil." La compañera está proponiendo un color. Pero es que aquí lo que hay que poner como enmienda es la fuente y el origen del hidrógeno que se tiene para utilizarlo como, no sé, componente de energía. ¿Saben por qué? Porque el hidrógeno no es una fuente de energía renovable. ¿Aquí cuántos somos, veintiocho (28) o veintinueve (29)? Yo estoy buscando uno que me diga que el hidrógeno es una fuente de energía renovable.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Compañero Molina, una Cuestión de Orden de la Presidencia, pero para ilustrar.

SR. MOLINA PÉREZ: Sí.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Obviamente, lo que estamos haciendo es enmiendas en Sala, se hace la enmienda y, una vez se hace la enmienda, se pudiera pedir un turno sobre la enmienda para explicar. Y de esa manera, pues, pudiera ilustrar al Cuerpo sobre lo mismo.

Esta medida para todos los efectos ya fue aprobada. Así que lo que estamos es en enmiendas sobre la enmienda, y entonces, al ser aprobada la enmienda de la compañera, si usted va a hacer una enmienda sobre la enmienda…

SR. MOLINA PÉREZ: ¿Está aprobada?

PRIMER VICEPRESIDENTE: La enmienda. La enmienda sí.

SR. TOLEDO LÓPEZ: La enmienda sí.

PRIMER VICEPRESIDENTE: La enmienda sí. Entonces lo que procedería sería que usted propone la enmienda y antes de que se votara usted entonces asumiría un turno sobre la enmienda sobre la enmienda.

SR. MOLINA PÉREZ: Entonces cojo el turno…

PRIMER VICEPRESIDENTE: Pero para eso tiene que someterme la enmienda primero, señor Senador. Pues someta la enmienda y pide un turno sobre la enmienda…

SR. MOLINA PÉREZ: Un receso, por favor.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Receso en Sala.

RECESO

PRIMER VICEPRESIDENTE: Compañero Eliezer Molina.

SR. MOLINA PÉREZ: Lo que vamos es a solicitar un turno sobre la medida.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Okay. Ahora sí. Eso sí. Usted puede hacer un turno sobre la medida ahora y dentro su alocución del turno después somete la enmienda. ¿Eso es lo que usted intenta hacer?

SR. MOLINA PÉREZ: Sí.

PRIMER VICEPRESIDENTE: Muy bien.

Adelante, señor Senador.

SR. MOLINA PÉREZ: Bien. Ya que nos interrumpieron.

El gas natural es la fuente que se utiliza y los hidrocarburos -adicional a los tres (3) incisos que tiene la Ley-, para obtener el hidrógeno. Dice que esto es para la política del calentamiento global. Eso dice.

Compañeros del Senado, el hidrógeno, que es el elemento número 1 en la Tabla Periódica, es el átomo, que, convertido en molécula, genera enfriamiento. Si usted está extrayendo esto de la corteza terrestre, ¿aquí cómo van a hablar de calentamiento global?

Incluso, incluso, cuando vemos los métodos que están utilizando de extracción, he dejado la garganta, porque aquí simplemente es los biodigestores. No han querido hacerlo, pero lo tienen aquí, digestión anaeróbica. Todos los elementos, aquí los tienen, para poder sacar hidrógeno. ¿Pero qué sucede? Que el residual, el residual en los procesos de extracción de gas natural es el hidrógeno.

Así que lo que ustedes están aprobando aquí es que las empresas de gas natural cuando vengan, si usted no tiene cómo clasificar de dónde viene ese hidrógeno, pues ya saben de dónde es. Las personas que venden gas natural están empujando el residual de su producto para que los puertorriqueños entonces lo incluyan, algo que no es una fuente de energía en una Ley de política pública de energía; no es una fuente de energía. El sol de una fuente de energía, el viento es una fuente de energía, pero el hidrógeno no.

No sé si me estoy expresando bien o correcto y si me están entendiendo, pero el hidrógeno no es una fuente de energía.

De las formas que se puede extraer es combinada. Pero no es correcto lo que dice aquí, porque la procedencia de ese elemento, lamentablemente viene de lo que están haciendo las extracciones, no hay de otra. Pero para esto hace falta tanta educación, que si nosotros no sabemos lo que es un proceso de entalpía, si nosotros no entendemos esta dinámica después estamos llorando que el planeta se está calentando. Y si servimos como clientelismo de los mercados que son los que propulsan esto, ¿pues entonces qué hacemos aquí? ¿Cuándo viene el proyecto para utilizar el sol? ¿Cuándo viene el proyecto para utilizar las olas del mar, el viento, cuándo viene? Están alimentando a los mercados y utilizándonos a nosotros como clientes. Mira, ponga la Inteligencia Artificial aquí de una vez y por todas.

El planeta tiene un sistema de enfriamiento, un sistema termal, por eso es que su comportamiento varía. Ustedes nunca han visto una tormenta eléctrica en sequía, ¿verdad que no? La ven cuando hay agua. Porque el hidrógeno cuando cae en contacto con oxidación genera agua. Y si usted tiene el hidrógeno en las cortezas terrestres es porque está haciendo un trabajo y estos malandrines que utilizan los hidrocarburos son los culpables de sacarlos de ahí.

Quizás el texto lee simple, un inciso ahí: "combustión de hidrógeno no derivado de combustibles fósiles". ¡Pues dime de dónde es! Yo no tengo problema, yo le voto a favor. Pero yo quisiera saber de dónde lo van a sacar, adicional a todos los procesos anteriores que están ahí.

Cuando vengan las barcazas por ahí, ahí no estén gritando. Se les está diciendo con tiempo. Y cuando tú lees el Informe Positivo, aquí yo no he visto ningún análisis.

¿Ustedes saben quién es Robert Boyle? Robert Boyle comenzó a hacer análisis con esto, se dio cuenta que el volumen de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a su presión. No le hicieron caso y reventó el *zeppelin*. Pues ahora van a reventar la isla de nosotros.

Uno tiene que entender de dónde se originan las cosas antes de legislarlas, no podemos ser un sello de goma. Mira, si aquí hubo una legislación que se propone y uno ve un análisis de la medida, lamentablemente nosotros aquí ninguno puede ir a todas las vistas públicas porque las hacen a las mismas horas y muchas veces pues confligen. Pero cuando tú lees este Análisis. Las palabras del Secretario de Recursos Naturales, pero si ese señor les dijo a todos ustedes que no sabía lo que eran recursos naturales. No sabe el límite entre tierra adentro, va a saber lo que es un cambio de entalpía, de entropía, o los procesos de los gases, esotérico, exotérmico …. Ninguno sabe nada. Pero no hay un cuerpo técnico.

Vamos a ver. La Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón Díaz. Pero cada año que pasa la Autoridad de Energía Eléctrica está peor, pero siguen los mismos personajes. Ahora le llaman Zar. Ahora le llaman Zar.

Hace un montón de tiempo aquí hubo un grupo que empezaba y decía: queremos sol. Fíjense, no es estadista. Y cuando vinieron donde este servidor les dije que eso era algo erróneo. Ahí empezaron a atacarme. Y yo les pregunté que en qué lugar en Puerto Rico se hacen placas solares. Se hacen baterías y nosotros tenemos la materia prima para edificar todos esos componentes. Pues simplemente somos presos del mercado una y otra vez. Ahora es con el hidrógeno en una transición a la energía renovable.

Tengo 44 años, desde que nací me están diciendo que en Puerto Rico sí importa el 85% de lo que comemos y que estamos en transición a una energía renovable. Claro. Y que la estadidad está a la vuelta de la esquina. Ninguna se cumplió. ¿Pero qué se cumplió? Miren, y lo voy a leer: "*Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron"*. Juan 1:5.

Aquí tengo el calendario 2025, porque la Gobernadora dijo que iba a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de un cheque. Yo se los dije a ustedes que iba a estar el calendario. Ya estamos en la Semana Santa, el cheque no ha salido, no ha salido el cheque. Pero ahora tenemos que cargar el hidrógeno.

Cuando vino los terremotos que se cayeron los edificios, las escuelas, este servidor empezó a traer el tema de las columnas cortas y muchos se burlaron, se burlaban, ¿por qué? Pues por la ignorancia. Cuando eso ocurrió el Cuerpo de Ingenieros que vino a hacer un análisis estructural de esa infraestructura se comunicó con este servidor para que yo los acompañara, y yo dije que no. Una semana después resulta que el individuo es de mi pueblo, de San Sebastián. Dos semanas después estaban trayendo unas plantas chiquitas nucleares -me acuerdo con el que era Alcalde de San Sebastián en aquel entonces, Javier Jiménez, y esas personas trataron de convencerme. Ustedes saben que en ningún lugar han hecho, han experimentado con esas plantas y en Estados Unidos comienzan entonces a distribuirla en pequeños lotes y nos escogieron a nosotros, tenemos una suerte que nos escogieron a nosotros. Yo les aseguro que por ahí viene este proyecto.

Allá en el campo se hizo un análisis de definición de palabra y nosotros tenemos una que usamos mucho allá, se llama "bobo cria'o". ¿Y qué es un "bobo cria'o"? Una persona que alcanza la adultez, pero sigue dependiendo. Y cuando vemos este proyecto, este es el proyecto, una vez más, del "bobo cria'o".

¿Cuándo van a hacer la asignación? Yo les aseguro que aquí todo el mundo va a votar a favor el día que se proponga hacer la primera generatriz de energía renovable, energía limpia. Yo le aseguro que aquí todo el mundo va a votar a favor. ¿Pero cuándo va a llegar ese momento? Es el parcho, tras el parcho, con el parcho, del parcho. Mientras tanto, pues, ahí legislando un montón de cosas. Pero esto es serio. Esto es bien serio.

La única ventaja que tiene el hidrógeno se las voy a decir, que en su proceso de combustión es inoloro y es incoloro y que enfría. ¿Nosotros sabemos cómo es la dinámica de ese elemento? No. Podemos tener algún tipo de conocimiento, pero no el alcance. Entonces la compañera presenta una medida para ponerle un color. Aquí la enmienda debe ser eliminar el ejercicio y la medida, porque no me están definiendo cuál es la fuente de adquisición de ese hidrógeno. Y aquí van a hacer comités del cambio climático para después comprar el hidrógeno a los que están destruyendo el planeta. Y cuando yo pido aquí que simplemente me digan y que me expliquen en la medida cuál es la fuente entonces de ese hidrógeno, no ha habido uno que me la explique.

¿Ustedes van a votar por algo que no entienden? Yo no.

Cuando usted va la piscina, va a la playa, usted coge un vaso -yo sé que ustedes lo hicieron cuando pequeños- y entra el vaso en el agua y lo vira, ustedes van a ver una burbuja que va aumentando su volumen hasta que llega a la superficie, de pequeñita a mayor amplitud. ¿Verdad que sí? Ahora imagínense que usted está dentro de la piscina –y no se rían–, les surge una flatulencia, esa flatulencia va a subir así mismo, hace "pap". Cuando se abre así, se alimentó el planeta de hidrógeno por condiciones naturales. Ustedes van a celebrar esa flatulencia y sin agua.

Y es muy lamentable, porque yo sé que aquí todos tienen el mejor interés de que podamos tener un mejor país. Pero no veo un análisis serio y científico. Y me preocupa que tomemos una determinación sin conocer el impacto tan severo que es esto, porque el hidrógeno no es una fuente de energía renovable. Se los estoy diciendo con el corazón en la mano. Si lo van a admitir, admítalo. Pero que para el récord histórico quede que por lo menos hubo un Senador que le dijo aquí a los puertorriqueños que el hidrógeno no es una fuente de energía renovable. Que el hidrógeno, si se hacen estudios intensivos, van a encontrar que es un súper conductor, precisamente porque ayuda al enfriamiento, y lo han confundido porque los mercados tienen un residual y quieren obtener dinero con su residual, y han encontrado un cliente en los puertorriqueños y un vehículo que lo proponga.

Jenniffer, llegamos a los cien (100) días y no sale el cheque.

Serían mis palabras.

- - - -

Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz

- - - -

SR. PRESIDENTE: Muy bien.

Señor Portavoz.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 82, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

SR. TOLEDO LÓPEZ: Antes de continuar, señor Presidente, para autorizar a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos a hacer una Reunión Ejecutiva de los Proyectos del Senado 59 y 60 ahora a las tres (3:00); y para autorizar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, quien se encuentra en segunda instancia, a celebrar una Reunión Ejecutiva sobre el Proyecto del Senado 334.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Ambas son en la Sala de Mujeres Ilustres.

SR. PRESIDENTE: Debidamente notificado, para que participen los compañeros.

Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 88, titulado:

"Para enmendar el Artículo 1.03, añadir un nuevo Artículo 10.08, y reenumerar los actuales Artículos 10.08 al 10.13 como los Artículos 10.09 al 10.14, respectivamente, de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico"; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 170-2002, según enmendada; y derogar la Ley Núm. 240-2002, según enmendada, a los fines de consolidar las disposiciones relativas a la alfabetización en Braille de estudiantes ciegos y parcialmente ciegos, promoviendo su evaluación individual y asegurando la igualdad de oportunidades educativas; y para otros fines relacionados."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción en las enmiendas que contiene el Proyecto del Senado 88, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 88, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 211, titulado:

"Para enmendar los artículos 8.030 y 8.070 de la Ley 194-2011, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", con el propósito de reducir los periodos de espera que deben transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado o a los patronos de PYMES o a

los miembros de asociaciones bona fides, antes de que puedan ser elegibles a recibir ciertos beneficios bajo los términos del plan médico; disponer para que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico promulgue o enmiende las cartas normativas o los reglamentos que sean necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción en las enmiendas que contiene el Proyecto del Senado 211, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 211, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 329, titulado:

"Para establecer el marco regulatorio sobre el uso, desarrollo, adquisición y propiedad de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) en el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, con el propósito de garantizar la soberanía tecnológica, la interoperabilidad entre agencias, la protección de la información del gobierno y los contribuyentes, evitar la dependencia de proveedores externos, y crear un sistema único de identidad digital para los contribuyentes con el fin de eliminar la duplicidad de gestiones y uniformar los servicios gubernamentales mediante el uso de APIs; y para otros fines relacionados."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción en las enmiendas que contiene el Proyecto del Senado 329, se aprueban.

SR. REYES BERRÍOS: Señor Presidente, para un breve turno.

SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero.

SR. REYES BERRÍOS: Muy buenas tardes a todos los compañeros.

Hoy se atiende el Proyecto del Senado 329 una medida de nuestra autoría. Como parte de los esfuerzos de nuestra Comisión nos hemos dado a la tarea de recibir en nuestra Comisión todos aquellos expertos en tecnología, todo lo que tenga que ver con ciencia e Inteligencia Artificial, para ponerlo a la disposición no solamente del Gobierno de Puerto Rico, sino también de que los procesos burocráticos de nuestro Gobierno se eliminen y sean en favor del constituyente.

Entre esas reuniones que hemos tenido con constituyentes que son expertos en esta materia nos señalaron esta problemática que muchas veces nuestros constituyentes van a las agencias de Gobierno y lamentablemente tienen que ir de agencia en agencia buscando el mismo papel que se lo puede proveer entre Gobierno e información que dilata, y uno de los escollos es que lamentablemente no hay una regulación sobre las APIs ahora mismo en el Gobierno de Puerto Rico.

¿Qué significa esto? Que dependemos lamentablemente de la voluntad de los Secretarios, de los que estén en informática allí, para que se puedan interconectar las agencias para darle un mejor servicio del Gobierno. Y esto no es nuevo, ya pasó con CESCO Digital y lo vimos como ha funcionado excelentemente. Hemos visto como ha funcionado entre CESCO Digital y AutoExpreso y eso es lo que queremos en todas las agencias.

Así que es importante resaltar que el objetivo principal es que las APIs sean utilizadas de manera que el Gobierno mantenga control sobre las herramientas tecnológicas sin depender de proveedores externos.

Esto también implica proteger la información sensible y promover la interoperabilidad entre agencias para mejorar la eficiencia de los servicios públicos. También es bien importante que esto, esta medida establece de quiénes son propiedad estas APIs. Las APIs desarrolladas con fondos públicos serán propiedad exclusiva del Gobierno de Puerto Rico. Así que ningún contratista, ninguna persona que venga a operarla el día que se vaya se la puede llevar, le van a pertenecer al Gobierno de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico. Esto previene que proveedores reclamen derechos sobre las herramientas tecnológicas y asegura que estas sean accesibles y modificables sin restricciones. De esta manera el Gobierno puede evitar depender de proveedores externos para mantener sus sistemas.

Es importante que también, como les dije, esto provee una interoperabilidad en Entidad Digital Única. El Puerto Rico Innovation and Technology Service, mejor conocido como PRITS, establecerá estándares de interoperabilidad entre agencias, utilizando tecnologías abiertas evitando soluciones propietarias. Además, se crea una Entidad Digital Única para contribuyentes lo que permitirá realizar trámites con un solo perfil de usuario. Con esta medida ponemos fin a todas aquellas personas que se le crea la dificultad que tienen que crear un usuario por SURI, otro por CESCO, con una sola cuenta todo el mundo podrá acceder a sus datos. Lo que permitirá realizar trámites con un solo perfil de usuario simplificando la interacción con los servicios públicos.

También, esta medida atiende lo que es la seguridad y la protección de los datos. Las APIs deberán cumplir con altos estándares de seguridad, incluyendo cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactor para proteger la información sensible de los ciudadanos.

Los proveedores deberán firmar acuerdos de confidencialidad, para garantizar que los datos no sean divulgados sin autorización. De igual forma se establece bien cuál va a ser la relación con los proveedores y los contratos. Los contratos con proveedores tecnológicos no podrán incluir cláusulas que penalicen el cambio de proveedor, lo que permite la flexibilidad al Gobierno para adaptarse a nuevas soluciones tecnológicas. Lo proveedores deberán cumplir con los requisitos establecidos en cuanto a seguridad, confidencialidad y transparencia.

Y, por último, le damos un mandato de cuál es el rol a PRITS que será supervisar la implementación del marco regulatorio, asegurando que las APIs cumplan con los estándares de interoperabilidad y seguridad establecidos.

Además, esta agencia será responsable de imponer sanciones a aquellos que no cumplan con las normativas, garantizando la integridad del sistema.

En fin, compañeros y compañeras, esta medida lo que atiende es eliminar aquellos procesos burocráticos en aquellas agencias que mandan a nuestra gente a buscar un papel aquí, un papel allá, inclusive hasta a nuestros servidores públicos. Si queremos eliminar la burocracia, si queremos tener un Gobierno eficiente utilizando la tecnología, poniendo a la disposición de nuestros servidores públicos, poniendo a la disposición de los contribuyentes, les pido que encarecidamente favorezcamos este proyecto.

Estas son mis palabras, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Señor Portavoz.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean.
SR. PRESIDENTE: Adelante.

ENMIENDAS EN SALA

En la Exposición de Motivos

Página 2, línea 4,	después de "como" eliminar "Ley de Gobierno Electrónico de Gobierno de Puerto Rico" y sustituir por ""Ley de Gobierno Electrónico""
Página 2, línea 5,	después de "enmendada" eliminar ". Conocida como la ley de Transparencia y Acceso a la" y sustituir por ", conocida como "Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública"."
Página 2, línea 6,	antes de "Se" eliminar "Información Pública."

En el Decrétase

Página 2, línea 10,	después de "Ley 75" añadir "-2019, conocida como "Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service"."
Página 2, línea 11,	antes de "Agencia" eliminar "del 2019."
Página 3, línea 1,	después de "(c)" eliminar "Vendor" y sustituir por "Proveedor"
Página 4, línea 1,	después de "Ningún" eliminar "vendor" y sustituir por "proveedor"
Página 4, línea 17,	después de "Los" eliminar "vendor" y sustituir por "proveedores"
Página 4, línea 22,	después de "Cambio de" eliminar "Vendor" y sustituir por "Proveedor"
Página 5, línea 1,	después de "un" eliminar "vendor" y sustituir por "proveedor"
Página 5, línea 2,	después de "cambiar de" eliminar "proveedor" y sustituir por "proveedores"
Página 5, línea 3,	después de "los" eliminar "vendors" y sustituir por "proveedores"
Página 5, línea 12,	después de "contratos con" eliminar "vendors" y sustituir por "los proveedores"
Página 5, línea 14,	después de "a" eliminar "vendors" y sustituir por "los proveedores"
Página 5, línea 17,	después de "de" eliminar "12" y sustituir por "doce (12)"
Página 6, línea 4,	después de "Artículo" eliminar "12" y sustituir por "13"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 329, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda en Sala al título.

SR. PRESIDENTE: ¿Del informe?

SR. TOLEDO LÓPEZ: No. Hay enmienda en Sala al título, proponemos que se lea.

SR. PRESIDENTE: Pues entonces que se lea la enmienda entonces.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Sí.

ENMIENDA EN SALA

En el Título

Línea 1, después de "Para" añadir "crear la "Ley de Uniformidad de Servicios mediante Interface de Programación de Aplicaciones en el Gobierno de Puerto Rico", a los fines de"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Ahora sí, señor Presidente, para que se apruebe la enmienda en Sala al título.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se acuerda.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Un momento compañero de Secretaría.

Senadora Álvarez.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Era a ver si me podía expresar sobre la medida. No sé si…

SR. PRESIDENTE: Ya la aprobamos compañera, para la próxima.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Está bien, no hay problema.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 372, titulado:

"Para ~~enmendar los Artículos~~ *añadir un nuevo inciso (w) en el Artículo* 4 *y reenumerar los actuales incisos (w) al (ii) como incisos (x) al (jj), respectivamente* y *enmendar el Artículo* 53 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019", con el fin de aclarar quien es un licitador participante; y para otros fines."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción en las enmiendas que contiene el Proyecto del Senado 372, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 372, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado.

Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título del Proyecto del Senado 372, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 413, titulado:

"Para establecer la "Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional" y ordenar a la "Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS) la creación, implementación y mantenimiento de un expediente digital centralizado que contenga información sobre los servicios prestados por el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional a personas con diversidad funcional; establecer los deberes de las agencias concernidas; y para otros fines relacionados."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción en las enmiendas que contiene el Proyecto del Senado 413, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 413, sin enmiendas, perdón, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1, titulada:

"Para ordenar al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), realizar un registro de todas las empresas o negocios que ~~operen,~~ desarrollen *lenguajes o códigos* ~~o utilicen~~ ~~sistemas~~ de Inteligencia Artificial en Puerto Rico; y para otros fines relacionados."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmienda del informe, proponemos que se apruebe.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción en la enmienda que contiene la Resolución Conjunta del Senado 1, se aprueba.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmienda en Sala, proponemos que se lea.

SR. PRESIDENTE: Adelante con la enmienda en Sala.

ENMIENDA EN SALA

En el Resuélvese

Página 2, línea 2, después de "Rico" eliminar "Innovations" y sustituir por "Innovation"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda en Sala.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos que se aprueben.

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Señor Presidente, señor Presidente. Para expresarme sobre la medida.

SR. PRESIDENTE: Sí, permítame un segundito, compañera Santiago.

Se aprobaron las enmiendas. Se tiene que aprobar la medida antes de ir a las del título.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Para expresarme sobre la medida.

SR. PRESIDENTE: Senadora, le voy a permitir que se exprese. Déjeme atender esto primero y le voy a permitir que se exprese.

Ante la consideración del Senado la Resolución Conjunta del Senado 1, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada.

Senadora Santiago Lebrón, Santiago Negrón, perdón.

Adelante.

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: La Resolución del Senado 1 ordena a PRITS que realice un registro de todas las personas, todos los negocios, todas las corporaciones que desarrollen sistema de Inteligencia Artificial en Puerto Rico.

Para la consideración de la medida la Comisión con jurisdicción pidió cuatro (4) memoriales o recibió cuatro (4) memoriales, de PRITS, de Atlantic University, de TechNet y del señor Eduardo Cardín, todas las ponencias expresan muchos reparos con la aprobación de la medida. Varias de ellas señalan en particular que dentro de las catorce (14) facultades reconocidas con la Ley 75 del 2019 a PRITS no se encuentra la fiscalización de empresas privadas. De hecho, aunque la medida provee para que se origine y mantenga un registro de aquellas empresas que desarrollen sistemas de Inteligencia Artificial, PRITS no tiene ningún instrumento, no se lo reconoce su Ley Habilitadora para imponer alguna penalidad. Así que en última instancia resultaría inoficioso el registro que se pretende crear a través de esta Resolución Conjunta.

Aunque alguna de las enmiendas propuestas por PRITS fueron acogidas, por ejemplo, el proyecto, la medida en su versión original pretendía que se registrara toda empresa, toda persona, todo individuo que utilizara Inteligencia Artificial, lo que es absolutamente inmanejable, imposible y se restringe a aquellas compañías que se dediquen al desarrollo de Inteligencia Artificial. La mayoría de las enmiendas propuestas en lo sustantivo no fueron incorporadas, por ejemplo, PRITS que va a ser la entidad a cargo del manejo y confección del registro, específicamente solicitó que se requiriera en la información que se peticiona en el formulario de inscripción que cada empresa documentara cuál es el propósito de su sistema de Inteligencia Artificial, su impacto en la privacidad y los derechos de los ciudadanos y si ha sido o no sometida a auditorías para verificar la ausencia de sesgos o discriminación. Esa enmienda no fue incorporada.

Tampoco se accedió a la petición del señor Eduardo Cardín de que se definiera con precisión quién iba a ser responsable de ingresar y actualizar la información en el registro o la de que se incorporara requisitos específicos en materia de seguridad de la información, asegurando la confidencialidad. Alegan, por ejemplo, que la mera inclusión en un registro, aunque no constituya formalmente la divulgación de un secreto de un negocio pudiera ser una interferencia indebida del Estado con la operación de una entidad privada.

TechNet por su parte, indicó que la medida representa un retroceso en relación con el trabajo realizado a nivel federal y global para promover el avance responsable de la Inteligencia Artificial y concuerda con la recomendación de Atlantic University de que los esfuerzos del Estado se dirijan en lugar a la obligatoriedad de un registro a legislación que adopte un enfoque más amplio que promueva la educación y el uso ético de la tecnología.

Votaremos en contra de la medida.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Sí, antes de eso, compañero "Juaco" Sánchez, por favor, suba a presidir que voy a consumir un turno.

- - - -

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, Presidente Accidental.

- - - -

PRES. ACC. (SR. SÁNCHEZ ÁLVAREZ): Señor Presidente Thomas Rivera Schatz.

SR. RIVERA SCHATZ: Compañeros senadores. En el día de hoy, en este momento estamos atendiendo la Resolución Conjunta del Senado 1, que atiende el tema de la Inteligencia Artificial, dicho de la manera más sencilla lo que se pretende crear un registro para tener constancia de quiénes de alguna manera utilizan esta herramienta.

Escuché a la compañera del Partido Independentista hacer unos planteamientos de lo que propusieron algunas personas durante la consideración de la medida, pues, por ejemplo, hay uno que dice que no dice quién se va a hacer cargo. Bueno, parece que él no lo entendió, pero dice que es PRITS la que se va a hacer cargo. Así que es la agencia nada más y nada menos. Por si acaso él no lo tiene claro, pues nosotros se lo decodificamos aquí.

En segundo lugar, se planteaba que específicamente dentro de las facultades que tiene la agencia, la Ley Habilitadora de PRITS no estaba este tipo de encomienda. Precisamente por eso se radica una Resolución Conjunta. Las Resoluciones Conjuntas tienen fuerza de ley, por supuesto tienen un periodo de vida efímera que procuran alcanzar un objetivo en particular que es el que precisamente está consignado en la Resolución Conjunta.

Así es que no se trata de que no se sabe quién se va a encargar, se va a encargar PRITS. No se trata de que no hay facultad, esta Resolución Conjunta le va a dar facultad, obviamente la diferencia entre un Proyecto de Ley y una Resolución Conjunta debería ser conocida por los que llevan mucho tiempo aquí en la Asamblea Legislativa, aunque quizás por los deponentes no, pero en términos de trámite legislativos y de técnicas legislativas cumple perfecta y fielmente con todos los estándares que se requieren para la consideración de medidas.

Nuestro Reglamento establece lo que es un proyecto, lo que trata una Resolución Conjunta, una Resolución Concurrente y una Resolución y establece las diferencias entre cada una de ellas y el propósito de cada una de ellas. Así que yo creo que eso también está claro.

La pregunta es: ¿quién se puede molestar porque se sepa quiénes están utilizando esa herramienta? ¿De qué manera ofende o de qué manera interfiere o de qué manera daña? Nada, sencillamente es ponerlo en unos registros para que haya constancia y luego de ese registro la Asamblea Legislativa o la propia agencia podría de alguna manera decidir algún curso de acción adicional, pero en el día de hoy no hay información de cómo se está utilizando y de qué manera se está utilizando este tipo de herramienta y es sencillamente traer información, claridad y propósito a lo que está haciendo la agencia.

Son mis palabras, señor Presidente. Para que se apruebe la medida. Gracias, "Juaco".

Señor Portavoz.

- - - -

Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.

- - - -

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título de la Resolución Conjunta del Senado 1, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 14, titulada:

"Para modificar los límites territoriales de los municipios de Naranjito y Toa Alta, a los fines de extender la jurisdicción del Municipio de Naranjito a través de la transferencia de la totalidad del área que comprende el Parque Enrique Medina ubicado en el barrio Lomas de Naranjito en colindancia con el barrio Quebrada Arenas de Toa Alta, con Núm. de Catastro: 140-037-131-10; que se relocalice la línea divisoria entre los municipios de Naranjito y Toa Alta, para que el Puente Atirantado Jesús Izcoa Moure se ubique totalmente en la demarcación geográfica del Municipio de Naranjito; y para otros fines relacionados."

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz Hernández.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Sí, gracias, señor Presidente.

Es que habíamos dialogado con el senador Wilmer Reyes con relación a esta medida y es que en un diálogo con el alcalde de Toa Alta "Chito" Agosto que habló así también con el alcalde de Naranjito nos ilustraron que hay que corregir las coordenadas de la zona donde está el Puente Atirantado.

Así que voy, si me da la oportunidad, hago lectura de las enmiendas.

SR. PRESIDENTE: Adelante compañero.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Página 3, línea 8, eliminar 18.32841, -66.28411 y sustituir por 18.326114177, -66.20893940 y 18.32614177, -6620864116, 18.82413412, -66.20933322, 18.32407541, -66.20826587. Esas serían las enmiendas, señor Presidente.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, en principio no tenemos objeción con las enmiendas, pero vamos a solicitar un breve receso.

SR. PRESIDENTE: Receso.

RECESO

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. Señor Portavoz.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. La catorce (14).

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre la Resolución Conjunta del Senado 14, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hemos leído unas enmiendas en Sala, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que trajo el compañero portavoz Hernández en Sala, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 14, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 16, titulada:

"Para ordenar a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) la creación e implementación de una aplicación basada en inteligencia artificial para el monitoreo de los procesos de subasta pública en Puerto Rico; garantizar la transparencia, la equidad y la prevención de prácticas deshonestas en dichos procesos; y para otros fines relacionados."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada de un informe sin enmiendas, por lo que proponemos que se apruebe la medida.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 16, sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Senadora, senadora Álvarez.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Para hacer unas enmiendas.

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas entonces.

Ya la medida fue aprobada, compañera, pero adelante con las enmiendas. Vamos a escucharlas.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Hablando ya con el Presidente de la Comisión, simplemente queremos añadir en el Resuélvese: página 2, línea 3, después de Puerto Rico insertar, "además estará habilitada para ser utilizada por aquellos gobiernos municipales que opten por integrarlos en sus procesos de subasta". Fin de la enmienda.

SR. PRESIDENTE: Breve receso.

RECESO

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.

Señor Portavoz.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, vamos a reconsiderar la Resolución Conjunta del Senado 16, para introducir enmiendas adicionales.

SR. PRESIDENTE: La está secundando el compañero Luis Daniel Colón La Santa. Señor senador, tiene que prender el micrófono para poder secundarla. ¿Secunda la Moción?

SR. COLÓN LA SANTA: Sí, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: De igual manera el senador Sánchez.

Senador, tiene que prender el micrófono para secundar la solicitud.

SR. SÁNCHEZ ALVAREZ: Sí, sí, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Muy bien. Debidamente secundada.

¿Alguna objeción, no hay objeción? Así se acuerda.

Señor Portavoz.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada en reconsideración.

SR. PRESIDENTE: Vamos entonces, primero a reconsiderar la medida y luego la compañera Ada Álvarez va a leer la enmienda y entonces vamos a atenderlo así.

Llámese la reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 16.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 16, titulada:

"Para ordenar a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) la creación e implementación de una aplicación basada en inteligencia artificial para el monitoreo de los procesos de subasta pública en Puerto Rico; garantizar la transparencia, la equidad y la prevención de prácticas deshonestas en dichos procesos; y para otros fines relacionados."

SR. PRESIDENTE: Muy bien, se llamó la medida. La señora, senadora Álvarez, tiene una enmienda. Adelante, señora senadora, por favor.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Gracias. En el Resuélvase: página 2, línea 3, después de Puerto Rico insertar, "además estará habilitada para ser utilizada por aquellos gobiernos municipales que opten por integrarlos en sus procesos de subasta". Fin de la enmienda.

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?

SR. TOLEDO LÓPEZ: No hay objeción.

SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba la enmienda de la compañera Álvarez.

Señor Portavoz, adelante con la aprobación de la medida.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada en reconsideración.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 16, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 77, titulada:

"Para ordenar a la Comisión de ~~_____~~ *Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor* del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre las razones por las cuales no se ha culminado la construcción de la carretera PR-385, conocida como el Desvío Sur, del Municipio de Peñuelas~~; y para otros fines~~."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción en las enmiendas que contiene el informe sobre la Resolución del Senado 77, se aprueban.
SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean.
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala a la Resolución del Senado 77.

ENMIENDAS EN SALA
En la Exposición de Motivos
Página 2, párrafo 3, línea 5, después de "esta" eliminar "carretea"
Página 2, párrafo 4, línea 5, después de "Senado" añadir "de Puerto Rico"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban.
SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 77, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada.
SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas en el informe, proponemos que se aprueben.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la Resolución del Senado 77, se aprueban.
SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 14, titulado:

"Para enmendar la Ley Núm. 81-2019, según enmendada, conocida como~~,~~ "Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de insertar un nuevo Artículo 3.16 para prohibir a los Operadores, sus componentes o cualquier proveedor de servicio de estos, la recolección

de información de las apuestas de los jugadores autorizados con el propósito de predecir la forma y manera en que estos apostarán; y para otros fines relacionados."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas en el informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción en las enmiendas que contiene el informe sobre el Proyecto del Senado 14, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean.

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala.

ENMIENDAS EN SALA

En el Decrétase

Página 3, línea 7,	después de "Uniforme" añadir "del Gobierno"
Página 3, línea 10,	después de "Rico" eliminar "Innovations" y sustituir por "Innovation"
Página 3, línea 10,	después de "Technology" eliminar "Services" y sustituir por "Service"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 14, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas en el informe al título, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 17, titulado:

"Para enmendar los Artículos 3.4 y 5.3 e insertar los nuevos Artículos 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9 a la Ley ~~Núm.~~ 10-2017, según enmendada, conocida como~~,~~ "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico~~,~~", a los fines de conceder al Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), la facultad de emitir certificaciones para la inscripción en el Registro de la Propiedad y de transferir derechos o la titularidad de bienes inmuebles; crear un Fondo de Reinversión Social de Puerto Rico y definir sus funciones; además de establecer un proceso expedito de entrega de títulos de propiedad a familias de comunidades rezagadas de todo Puerto Rico, enfocar los esfuerzos para combatir la pobreza en todas sus dimensiones, fortalecer y alinear la estructura gubernamental en beneficio de las poblaciones vulnerables; transferir todos los activos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales a la Oficina de Desarrollo Socio Económico y Comunitario de Puerto Rico; derogar la Ley

~~Núm.~~ 271-2002, según enmendada, conocida como, "Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales"; y para otros fines relacionados."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas en el informe, proponemos que se aprueben.

SR. GONZÁLEZ COSTA: Señor Presidente, para expresarme sobre la medida.

SR. PRESIDENTE: Senador Adrián González.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Señor Presidente, también para expresarme sobre la medida.

SR. PRESIDENTE: Y luego la compañera Álvarez.

Adelante compañero González.

SR. GONZÁLEZ COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.

Esta medida incluida en el segundo calendario tiene un impacto y unas repercusiones muy grandes en torno a lo que es el ordenamiento actual referente a lo que son las Comunidades Especiales y la administración del fondo que se creó para distintos propósitos, y dichos fondos estaba contenido en lo que se llamó por Ley un Fideicomiso Perpetuo que dejaría de ser perpetuo porque este proyecto precisamente una de las disposiciones que contiene es derogar la Ley que creó dicho Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales.

En primer lugar, señalo como preocupación principal la ausencia de participación de las Comunidades Especiales en la consideración de la medida por parte de las dos (2) Comisiones que evaluaron la misma. Solamente comparecieron el Departamento de la Vivienda y el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Salta a la curiosidad que el Departamento de la Vivienda, aunque favoreció la medida guardó deferencia a ODSEC. ODSEC no se expresó en la evaluación de esta medida, siendo la entidad que va a administrar el nuevo fideicomiso. Desconocemos la razón por la que ODSEC, que tuvo Directora y ahora tiene Director, la única agencia que ha tenido dos funcionarios en tan poco tiempo y ninguno fue consultado.

Y el Departamento de Obras Públicas que compareció a favor de la medida, añadiendo que se puede realizar mediante Certificación la transferencia de derechos o el otorgamiento de títulos.

Ahora bien, de una primera lectura pareciera que esta medida es un calco de la Ley vigente y uno dice, pues mira, no es muy diferente, pero como el diablo está en los detalles, en las pocas cosas que son diferentes, surgen nuevas preocupaciones. Por ejemplo, la figura del Director Ejecutivo, ya arrastraba un defecto de la Ley anterior porque no, no tenía funciones específicas, salvo las que les delegaba la Junta que la componen siete (7) personas incluyendo Secretarios de agencias, dos (2) ciudadanos representando el interés público, un Alcalde y un líder o lideresa de las Comunidades Especiales. Por el contrario, ahora esas funciones del Director Ejecutivo quien sí era remunerado del propio fideicomiso en la ley anterior, ahora las delega el Presidente de la Junta, que distinto a como era antes, o como sigue siendo actualmente el Presidente de la Junta del Fideicomiso lo escogía la propia Gobernadora de entre la propia Junta. Esta Ley designa al Director de ODSEC como el Presidente de la Junta de forma permanente y a su vez el Director de ODSEC escoge quién es el Director Ejecutivo que administra el Fondo sin delegarle ninguna función a la Junta en términos de lo que implicarían las funciones de ese Director Ejecutivo respecto al Fondo.

Lo que nos lleva a analizar los otros aspectos. Originalmente el Fideicomiso Perpetuo se nutría de inicialmente una asignación de quinientos (500) millones de dólares que salió del BGF que ya no existe.

El nuevo Fondo después de liquidar el Fideicomiso anterior que aquí no dice cómo se va a liquidar porque se elimina un Fideicomiso para crear uno completamente nuevo. El Fideicomiso es una figura jurídica que puede ser creada por ley o por escritura pública, esta fue creada por ley. Hay

que liquidar de alguna forma lo que está ahí y crear un Fideicomiso nuevo como está haciendo la Ley, pero además de escribirlo en una Ley, crear esa nueva figura y este nuevo Fideicomiso se va a nutrir de asignaciones estatales, fondos federales, aportaciones del sector privado, así como de todos los activos no comprometidos del extinto porque la ley extingue el Fideicomiso Perpetuo.

Preocupa que una persona, un Director Ejecutivo cuyas funciones no se desglosan, cuyas responsabilidades no se describen. Básicamente es un representante del Director de ODSEC, administrando incluso propiedades que estaban gravadas por el Fideicomiso anterior y que ya no lo van a estar. Porque hay plena disposición de disponer de las mismas según decía antes y vuelve a decir la Ley y disponer de las mismas puede implicar, por ejemplo, propiedades, activos del Fideicomiso que estén en zonas como humedales, en la Zona Marítimo Terrestre y que las mismas puedan ser vendidas a quien entiendan esas nuevas entidades.

Creo que ante esas dudas que no están aclaradas en el texto de la medida y lo que implicaría el destino de esos activos por una persona que no, no, ni es nombrada por la Gobernadora, ni pasa por aquí ni pasa por la Junta, solo responde al Director de ODSEC es muy sensible y sensitivo el trabajo que va a tener, añadiendo que entonces el Director de ODSEC va a tener unas facultades muy amplias que las puedo entender. Queremos que se agilice el otorgamiento de títulos de propiedad que es un reclamo de muchos años, pero con el otorgamiento del título de propiedad pueden venir otros peligros, incluso expropiaciones, sin título no se pueden expropiar. Una vez tienes el título es más fácil la expropiación.

Así que hay que tener ojo a visor a lo que puede implicar muchas cosas de las que se van a hacer aquí y al haber acogido la enmienda propuesta por el Departamento de Transportación y Obras Públicas de poder ceder, transferir derechos o lo propios títulos de propiedad, cosa que no me preocupa tanto, pero transferir derechos puede también ser quitar propiedad, remover personas de su propiedad porque sigue siendo una transferencia de derechos el sacar a alguien de un sitio y eso se puede hacer mediante certificación, cosa que no se podía hacer antes.

Así que ante la escasa información que contiene el informe que recomienda la medida, la escasa participación de las personas que se verían impactadas por esto, que son, volvemos, son setecientas cuarenta y dos (742) Comunidades Especiales que tradicionalmente cuando se trata la Ley de Comunidades Especiales y en este caso el Fideicomiso, que es para ayudarlos y muy bien como plantea la medida, para facilitar ese proceso de otorgamiento de título, lo recomendable y lo justo es que se les hubiese consultado.

Así que habiendo consignado para el récord nuestros reparos, votaremos en contra de la medida, la Delegación del PIP.

SR. PRESIDENTE: Muy bien. Senadora Álvarez.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Gracias, señor Presidente.

Quiero tomar un turno sobre esta medida porque justamente a mi oficina vinieron varias personas de las Comunidades Especiales a traerme su alerta y aunque entiendo que parte de la razón, la Exposición de Motivos es loable, hay unos asuntos que hay que atender.

Este es un proyecto que otorga nuevos deberes y facultades a la ODSEC y que deroga el Fideicomiso de Comunidades Especiales, el cual no se incluyó en su informe de memorial, como muy bien dice el compañero. Solamente está el DTOP y ODSEC faltó, el otro es Vivienda. No se consultaron a las comunidades que bien organizadas están.

Dicen que hay que eliminar el Fideicomiso porque eso ha imposibilitado entregar los títulos, pero tan reciente como el 14 de marzo de este año, la Gobernadora fue a Comerío y repartió cerca de treinta (30) títulos bajo el Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales o sea no es un problema con la política pública, es un problema de voluntad política.

La medida no considera la recién aprobada Ley 23 del 2021, precisamente aprobada para ejecutar el Programa de Comunidades Especiales, en cuatro (4) años pasados no quisieron implementar esa Ley y la Ley que se llama la Ley de Justicia para Familia e Individuos en el Programa de Comunidades Especiales.

En la Ley 1 de 2001, Ley de Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales en Puerto Rico que sabemos que fue, es un legado que habíamos trabajado del Partido Popular, declaró en la política pública promover el principio de la autogestión y apoderamiento comunitario, esto es el proceso integral mediante el cual las personas y sus comunidades reconocen y ejercen el pleno dominio y control de sus vidas partiendo desde su propio esfuerzo.

Así que básicamente parte de lo bueno que ha sido Comunidades Especiales es fomentar la autogestión, pero en esta medida como está el informe no están las Comunidades o no hay Comunidades que se han expresado y ni siquiera el propio ODSEC que sería quien lo dirigiera.

Así que simplemente quería dejar eso para récord ya que varias personas de las Comunidades Especiales trajeron esa alerta sobre ese cambio entendiendo que el cambio es para beneficiar a las Comunidades y los títulos es una cosa, pero sin la voz de la autogestión de las Comunidades, pues faltaría a la razón de su creación.

Serían mis palabras, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Senador González, asuma la Presidencia que voy a cerrar el debate.

- - - -

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Héctor Gabriel González López, Presidente Accidental.

- - - -

SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente.

PRES. ACC. (SR. GONZÁLEZ LÓPEZ): Adelante, señor Presidente Rivera Schatz.

SR. RIVERA SCHATZ: El Proyecto del Senado 17 tiene el propósito de enmendar la Ley Habilitadora que conocemos como, de lo que conocemos como ODSEC y hemos escuchado al compañero del Partido Independentista y a la compañera del Partido Popular hacer unas expresiones que me parecen que no se fijaron bien lo que dice el informe.

Entonces, pues, por supuesto que si usted no tiene título no le pueden expropiar porque no es suyo. La pregunta es, ¿quién es el dueño? Pues el Gobierno, no se tiene que expropiar, asimismo, es tan elemental como eso, pero las circunstancias legales de todas las Comunidades de Puerto Rico no son las mismas. Esa situación de que no hay uniformidad provoca que pueda concederse títulos a algunas y no pueda concederse títulos a otras. Entonces, el informe lee en la página 2, uno de los principales desafíos que enfrenta ODSEC en la entrega de títulos de propiedad a miles de familias que llevan años esperando su documentación legal, la falta de coordinación entre las Ramas de Gobierno, junto a las barreras legales y problemas de documentación que han retrasado este proceso sustancialmente.

Es por ello que en aras de solucionar esta situación la Asamblea Legislativa propone eliminar los obstáculos legales que dificultan de manera innecesaria y que dilatan el cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico y agilizar la titularización de propiedades, para garantizar con ello la estabilidad y seguridad jurídica a los residentes de estas comunidades.

ODSEC tiene la responsabilidad de corregir las deficiencias surgidas a lo largo de los años bajo el programa de Comunidades Especiales, específicamente bajo el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, creado en virtud de la Ley 271-2002, según enmendada, conocida como

"Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales". Este fideicomiso se estableció con la intención de financiar el desarrollo de infraestructura, la construcción y rehabilitación de viviendas, y la implementación de proyectos comunitarios.

Y aquí viene el porqué. Sin embargo, con el cierre del Banco Gubernamental de Fomento en 2017, los fondos del fideicomiso se vieron gravemente afectados con una pérdida superior a los cien millones de dólares. Esto ha provocado que la estructura actual del fideicomiso no sea sostenible, provocando, por tanto, la necesidad de rediseño a los fines de revestirlo de funcionalidad y que sus recursos sean maximizados.

Ante estos desafíos, la pieza legislativa busca reorganizar, pieza legislativa, este proyecto, busca reorganizar y consolidar los programas sociales bajo la estructura de la ODSEC, con el objetivo de mejorar la efectividad en la lucha contra la pobreza. Se identifican cuatro objetivos fundamentales: En síntesis, la siguiente Ley persigue varias metas fundamentales, estas son:

a) hacerle justicia a miles de familias que aún esperan por su título de propiedad;
b) consolidar programas para combatir la pobreza de forma tal que puedan tener mayor efectividad en la encomienda;
c) promover el envolvimiento efectivo del sector sin fines de lucro en acciones concertadas; y
d) establecer una nueva fórmula para combatir la pobreza fomentada en la participación de todos los sectores.

Así que no se trata de un secreto nacional ni se trata de un subterfugio para regalarle ni una pulgada de terreno a ningún grandes intereses como alguna gente piensa decir. Se trata de eliminar la burocracia de uniformar procedimientos para que miles de personas que llevan desde que se crearon las Comunidades Especiales tratando de buscar el título de propiedad al fin puedan tenerlo. De eso se trata. Ciertamente a veces el desconocimiento provoca que la gente tenga intrigas y tengan preocupación.

Sin lugar a dudas, el proyecto lo que procura es de manera transparente eliminar barreras legales, reenfocar los objetivos para que esas personas que al día de hoy no tienen el título, lo tengan.

Sobre si se les expropia o no, o si se les da derecho o se le quita derecho, bueno, esto el único resultado posible con este proyecto es darle más derechos y poder a la gente, a la gente de las Comunidades Especiales y procura que pueda avanzar el proceso de dar más títulos de propiedad. Que, a propósito, quien comenzó con la teoría de eliminar el usufructo para que todo el mundo fuera dueño de su casa fue don Luis A. Ferré, Presidente y Padre Fundador del Partido Nuevo Progresista.

Así que consistente con la misión de nuestro Padre Fundador que a propósito también fue Presidente del Senado hemos presentado esta medida, no para que sea un subterfugio, no para que haya alguna situación de quitarle nada a nadie, por el contrario, para consistente con lo que ha sido siempre el espíritu y el deseo del Partido Nuevo Progresista que toda la gente pueda tener título de propiedad.

Eso es lo que propone el Proyecto del Senado 17 y está establecido en el informe en un lenguaje sencillo que cualquier persona con inteligencia promedio pudiera entender de modo que no haya duda de cuál es el propósito que se persigue con la medida.

Son mis palabras.

- - - -

Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.

- - - -

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción en las enmiendas que contiene el informe sobre el Proyecto del Senado 17, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 17, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 74, titulado:

"Para añadir un nuevo sub-inciso (r) al inciso 4 del Artículo 1-B, y enmendar el inciso (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo"; a los fines de aumentar los beneficios de compensación por incapacidad transitoria (dietas) y autorizar al administrador para realizar ajustes por costo de vida para todos los pagos por incapacidad que permite la ley; y para otros fines relacionados."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada de un informe sin enmiendas, por lo que proponemos que se apruebe la medida.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 74, sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 79, titulado:

"Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, ~~y~~ conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra", a los fines de cumplir con la política pública de centralizar los procesos de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos o la dependencia gubernamental que le sustituya; y para otros fines para relacionados."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas en el informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el Proyecto del Senado 79, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada.

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Señor Presidente, para expresarme sobre la medida.

SR. PRESIDENTE: Senadora Santiago, adelante.

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: El Proyecto del Senado 79 propone trasladar la jurisdicción sobre la concesión de permisos para extracción de arena, grava y piedra del Departamento de Recursos Naturales a la Oficina de Gerencia de Permisos.

Durante mucho, mucho tiempo durante décadas el litoral puertorriqueño fue saqueado por la industria de la construcción. Toneladas de arena fueron extraídas afectando de manera irreversible en muchos casos a comunidades que dependían de la defensa natural que son las dunas para mantener la estabilidad de sus lugares de residencia en tiempos de marejada o de huracanes. Vestigios de ese saqueo quedan todavía a través de toda la costa de nuestro archipiélago.

La diferencia fundamental que pretender establecer el Proyecto del Senado 79 es revertir en un retroceso de décadas y comenzar a ver de nuevo la arena como material de construcción y no como un recurso natural. Cuya presencia, cuya estabilidad debe ser protegida. En la medida en que la jurisdicción de la protección de un recurso deja de estar en manos de una agencia, cuyo llamado es ese, y pasa a otra con un propósito totalmente distinto me parece que no hay que tener dotes extraordinarios sobrenaturales para anticipar lo que va a ocurrir.

Durante las últimas semanas la Delegación del PIP ha estado precisamente visitando distintos proyectos de restauración de dunas que, de manera trabajosa, meticulosa, están tratando de revertir el daño que han sufrido muchísimas municipalidades costeras, sobre todo, comunidades muy, muy desaventajadas y muy amenazadas por el cambio climático. Son proyectos que han resultado ser exitosos, aun con la utilización de un mínimo de recursos y la adopción de este nuevo concepto o el retroceso a este antiguo concepto, más bien, que propone el Proyecto del Senado 79, me parece realmente desafortunado.

La Delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, votará en contra de la medida.

SR. PRESIDENTE: ¿Algún otro compañero?

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 79, según enmendado, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título del Proyecto del Senado 79, se aprueban.

Próximo asunto.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 149, titulado:

"Para *enmendar la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada", a los fines de añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 6* ~~crear la "Ley para la Presentación Anual de Plan de Contingencia en Hogares de Cuido de Ancianos~~" a los efectos de ordenar a todos los ~~hogares privados de cuidado de ancianos,~~

~~también conocidos como hogares de envejecientes o de personas de edad avanzada~~, *establecimientos de cuidado de adultos mayores* en Puerto Rico a que rindan ante el Departamento de la Familia, Oficina de Licenciamiento, sus planes de contingencia para lidiar con la temporada de huracanes y emergencias en o antes del primero (1) de mayo de cada año; y para otros fines relacionados."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el Proyecto del Senado 149, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

ENMIENDAS EN SALA

En el Decrétase

Página 3, línea 1,	antes de "1" eliminar "Artículo" y sustituir por "Sección"
Página 3, línea 3,	después de "Se" eliminar "anade un nuevo inciso (e) al Articulo" y sustituir por "enmienda el Artículo"
Página 3, entre las líneas 7 y 8,	eliminar todo su contenido y sustituir por "…"
Página 3, línea 9, antes de "El"	eliminar "(e)"
Página 4, línea 12, antes de "2"	eliminar "Artículo" y sustituir por "Sección"
Página 5, línea 11, antes de "3"	eliminar "Artículo" y sustituir por "Sección"
Página 5, línea 15, antes de "4"	eliminar "Artículo" y sustituir por "Sección"
Página 6, línea 11, antes de "5"	eliminar "Artículo" y sustituir por "Sección"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 149, según enmendado, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título del Proyecto del Senado 149, se aprueban.

Próximo asunto.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que se lean.

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala.

ENMIENDAS EN SALA

En el Título:

Línea 1,	después de "enmendar" añadir "el Artículo 6 de"
Línea 2,	después de "fines de" eliminar todo su contenido
Línea 3,	eliminar todo su contenido

Línea 4, antes de “ordenar” eliminar “a los efectos de”

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban.

Próximo asunto.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 164, titulado:

“Para enmendar los Artículos 2, 3, 7, 9, 22, ~~26,~~ 33*;* ~~y derogar los Artículos 4 y 8;~~ *derogar el actual Artículo 4 y renumerar los actuales artículos 5, 6 y 7 como los Artículos 4, 5 y 6; derogar el actual Artículo 8* y renumerar los ~~subsiguientes~~ *actuales* Artículos *9 al 56 como los Artículos 7 al 54 respectivamente* de la ~~Ley Núm. 135 del 1 de septiembre de 2020,~~ *Ley 135-2020,* según enmendada, conocida como la “Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico”, a los fines de prescindir de la Junta de Directores; ~~establecer el término y la manera en que se designará al Director Ejecutivo;~~ definir las funciones y *establecer la facultad de reglamentación* del Director Ejecutivo; y para otros fines relacionados.”

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto del Senado 164, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 164, según enmendado, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título del Proyecto del Senado 164, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 430, titulado:

“Para ~~enmendar los~~ *añadir un nuevo inciso (11) al Artículo* ~~Artículos~~ 3 y *enmendar el inciso (a) del Artículo* 8 de la Ley Núm. 29-2009, según enmendada, ~~mejor~~ conocida como “Ley de las Alianzas Público Privadas” con el propósito de incluir como objeto para convertirse en Contrato de Alianza la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones cuyo único propósito sea albergar a mujeres víctimas de algún delito de violencia doméstica en Puerto Rico; establecer la composición del Comité de Alianza para este propósito; y para otros fines relacionados.”

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: El Proyecto del Senado 430, vamos a devolverlo a Comisión.

Hay una solicitud del compañero Portavoz para que se devuelva a Comisión.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Eso es así.

SR. PRESIDENTE: Que se devuelva, si no hay objeción.

Próximo asunto.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 32, titulada:

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a realizar un inventario y depuración de solares y fincas vacantes, con usufructo en abandono, sin propiedades enclavadas y con propiedades enclavadas, así como su digitalización para garantizar [*el*] acceso a empleados gubernamentales y al público en general."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre la Resolución Conjunta del Senado 32, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean.

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala.

ENMIENDAS EN SALA

En el Resuélvese

Página 2, línea 8, después de "muestre" eliminar "[la]"

Página 3, línea 8, después de "y" eliminar "[el]"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 32, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmienda del informe al título, proponemos que se apruebe.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a la enmienda que contiene el informe sobre el título de la Resolución Conjunta del Senado 32, se aprueba.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmienda en Sala al título, proponemos que se lea.

SR. PRESIDENTE: Adelante con la enmienda en Sala.

ENMIENDAS EN SALA
En el Título:
Línea 4, después de "garantizar" eliminar "[el]"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda en Sala al título.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba.
SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe Parcial sometido por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, en torno a la Resolución del Senado 17, titulada:

"Para ordenar a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico que realice una investigación cuyo propósito sea identificar a todas las personas o entidades propietarias de estructuras ubicadas en la zona marítimo-terrestre sobre terrenos de dominio público, localizados en el Sector La Parguera del Municipio de Lajas; el uso (residencial o comercial) que se les está dando a dichas estructuras; así como los cambios o construcciones recientes realizadas en las propiedades allí ubicadas."

"PRIMER INFORME PARCIAL

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, previo estudio y consideración R. del S. 17, presenta ante este Alto Cuerpo, su Primer Informe Parcial en con hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 17 tiene como objetivo ordenar a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre las estructuras ubicadas en la zona marítimo-terrestre del Sector La Parguera del municipio de Lajas. Según dispone la R. del S. 17, la investigación se deberá enfocar en identificar:

1. Propietarios de dichas estructuras.
2. Uso que se les está dando (residencial o comercial).
3. Modificaciones o construcciones recientes en las propiedades.

ANÁLISIS DEL INFORME

El Primer Informe Parcial aborda las preocupaciones presentadas en la R. del S. 17. En este contexto, el miércoles 19 de febrero de 2025, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, solicitó a el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y al Municipio de Lajas que presentaran memoriales explicativos con su posición y recomendaciones sobre la Resolución del Senado 17. Contando con los Memoriales Explicativos del DRNA y de la Junta de Planificación se prepara este primer informe parcial.

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) comenzó su memorial estableciendo cuál es su jurisdicción como agencia gubernamental. Además, resaltó la importancia de la Reserva Natural de La Parguera y su papel fundamental en la preservación de los recursos naturales. Señaló que por más de cuarenta y cinco (45) años, se han construido en la zona marítimo-terrestre estructuras rústicas en momentos donde no había regulación ambiental ni servicios básicos, y que, a pesar de ello, han persistido a lo largo del tiempo, convirtiéndose en parte del patrimonio cultural y en un pilar del turismo en Puerto Rico.

En relación con la R. del S. 17, el DRNA expresó que: "el Secretario del DRNA promulgo la Orden Administrativa 2025-01A (Orden). Entre otras cosas, la aludida Orden establece y ordena a la División de Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre del DRNA a Notificar a los propietarios de las estructuras para que presenten bajo juramento de un ingeniero, arquitecto o agrimensor licenciado, información sobre la huella existente de las estructuras y muelles ubicados en la Reserva Natural de la Parguera. Estas declaraciones deberán incluir un plano actualizado de la superficie ocupada, lo que le permitirá al DRNA actualizar sus expedientes de dichas casetas, muelles y estructuras; sus usos y las personas o entidades que poseen el dominio de estas. [22]

En este sentido, concluyó que: "[l]a identificación de las personas propietarias de estructuras ubicadas en La Parguera del municipio de Lajas, el uso de tales estructuras y la huella de las mismas es información necesaria, para poner fin a décadas de incertidumbre en torno a esas estructuras y para establecer una normativa que permita las concesiones por usos y aprovechamientos existentes."[23]

Junta de Planificación de Puerto Rico

La Junta de Planificación inició su memorial destacando sus funciones como organismo gubernamental y subrayando el poder investigativo de la Asamblea Legislativa. En este contexto, compartió junto con su memorial documentos pertinentes para el análisis y la investigación en curso, la cual se encuentra anejada a este informe. Estos son:

1. Resolución del 1979 Aprobando la Designación de Áreas de la Reserva Natural la Parguera.
2. Resolución del 1986 aprobando extensión del Area de la Reserva Natural de la Parguera.
3. Vigésima séptima resolución del 1995, Adoptando Plan de Manejo para el Área de Planificación Especial del Suroeste del Sector la Parguera.
4. Resolución PU-002-98-57-01, Aprobando Enmienda al limite Maritimo de la Reserva Natural de la Parguera.
5. Resolución PU-002-98-57-02, Aprobando enmienda al área designada como Reserva Natural de la Parguera.
6. PU-002-2000-57-01, Aprobando enmienda a la Reserva Natural de la Parguera.
7. Mapa de los límites de la Reserva Natural la Parguera.
8. Mapa de la delimitación y zonificación especial para la Reserva Agrícola del Valle de Lajas.[24]

[22] Véase, Memorial del DRNA sobre la R. del. S 17 del 20 de marzo del 2025, pág. 2.
[23] Véase, Memorial del DRNA sobre la R. del. S 17 del 20 de marzo del 2025, pág. 4.
[24] Véase, documentos anejados

En relación a la R. del S. 17 expresó que la Junta de Planificación de Puerto Rico no posee al momento planes, programas o proyectos propuestas Reserva Natural de la Parguera o que inciden en ella.[25]

CONCLUSIÓN

La zona marítimo-terrestre es un área de gran importancia ecológica, económica y social en Puerto Rico, y está protegida por una normativa legal estricta. Recientemente, la Orden Administrativa 2025-01 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ha generado controversia, ya que establece medidas para regular y monitorear las actividades en esta zona.

A tal efecto, la aprobación de la **R. del S. 17** responde a la necesidad de salvaguardar el interés público y garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales y de uso de terrenos de dominio público. Esta medida asegurará una gestión transparente y equitativa de la zona marítimo-terrestre en La Parguera.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares en torno a la R. del S. 17, presenta ante este Alto Cuerpo su **Primer Informe Parcial**.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Hon. Thomas Rivera Schatz
Presidente de la Comisión de Innovación,\
Reforma y Nombramientos
del Senado de Puerto Rico"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se reciba el informe.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe.
Próximo asunto.
SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer Informe Parcial sometido por la Comisión de Educación, Arte y Cultura, en torno a la Resolución del Senado 22, titulada:

"Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado general de la matrícula en la Universidad de Puerto Rico (UPR), los aumentos de los costos de matrícula en años recientes y el impacto de estos sobre el estudiantado, la participación en los programas académicos, sus currículos actuales y el desarrollo de los recintos universitarios."

[25] Véase, Memorial Explicativo de la Junta de Planificación, pág. 2

“PRIMER INFORME PARCIAL

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 22, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Primer Informe Parcial con los hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 22, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado general de la matrícula en la Universidad de Puerto Rico (UPR), los aumentos de los costos de matrícula en años recientes y el impacto de estos sobre el estudiantado, la participación en los programas académicos, sus currículos actuales y el desarrollo de los recintos universitarios.

INTRODUCCIÓN

La Universidad de Puerto Rico (en adelante, UPR), como principal institución de educación superior en Puerto Rico, ha formado a grandes líderes que contribuyen al progreso de nuestra sociedad. Sin embargo, en los últimos años, la UPR ha enfrentado grandes desafíos como lo son la disminución en la matrícula estudiantil, debido a múltiples factores entre los que destacan: los altos costos universitarios, la baja tasa de natalidad en la última década y la emigración de estudiantes hacia universidades fuera del país. Lo que ha generado una merma de más del veinte por ciento (20%) de la matrícula de los diferentes recintos. Lo que no solo compromete la sostenibilidad financiera de la institución, sino que también limita el acceso a la educación superior para muchos jóvenes puertorriqueños.

De igual manera, es necesario que se analicen los programas académicos ofrecidos por la UPR, de manera que se ajusten a las nuevas necesidades del estudiantado y del mercado laboral. A su vez, identificar programas que puedan requerir reestructuración para garantizar su relevancia y calidad. En cuanto a los currículos académicos, se hace necesario revisar de manera exhaustiva su contenido y estructura para asegurar que estén a la vanguardia de las tendencias globales en educación superior.

A tal efecto y como parte de esta Resolución, la Comisión de Educación, Arte y Cultura preparó este primer informe parcial que se limita a la información e insumo recibido por la Universidad de Puerto Rico durante la Inspección Ocular.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Educación, Arte y Cultura, llevó a cabo una Inspección Ocular el martes, 11 de marzo de 2025, en la Oficina del Rector de la Universidad de Puerto Rico que ubica en en la Universidad de Puerto Rico, Administración Central, Jardín Botánico Sur, Río Piedras. En esta se contó con la participación de las siguientes personas: por parte de la Universidad de Puerto Rico, el Presidente Interino, Dr. Miguel A. Muñoz; el Sr. Edwin Vega Milán, Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles; el Sr. Julio Collazo, Director de Infraestructura; Dra. Ana Milena Lucumi, Vice Presidenta de Programas a Distancia y Educación Continua; Dra. Katherine Meléndez, Ayudante Especial del Presidente; Dra. Nieves Hernández, Vice Presidenta de Asuntos Académicos; Dra. Rosa Delia Meléndez, Directora de Comunicación y Prensa.

Estuvieron presentes los siguientes senadores: Hon. Jamie Barlucea Rodríguez, quien es la autora de la medida, y el Hon. Héctor J. Sánchez Álvarez. De igual manera estuvo presente la asistente del Senador Eliezer Molina, Srta. María Isabel Olivera.

ANÁLISIS Y HALLAZGOS

En la Inspección Ocular, el Dr. Muñoz realizó una presentación con datos estadísticos sobre el estado general de la matrícula desde el año 2009 al presente.

AÑO ACADÉMICO	MATRICULADOS	COMENTARIOS
2009-2010	65,223	
2010-2011	61,630	disminución de 3,593
2011-2012	57,165	disminución de 4,465
2012-2013	57,482	aumento de 317
2013-2014	57,772	aumento de 290
2014-2015	58,104	aumento de 332
2015-2016	60,334	aumento de 2,230
2016-2017	62,182	aumento de 1,848
2017-2018	61,747	disminución de 435 (impacto de fenómenos atmosféricos)
2018-2019	57,634	disminución de 4,113
2019-2020	54,940	disminución de 2,694
2020-2021	52,130	disminución de 2,810 (año de pandemia)
2021-2022	49,769	disminución de 2,361 (efectos pandemia)
2022-2023	46,810	disminución de 2,959
2023-2024	42,759	disminución de 4,051
2024-2025	41,829	disminución de 930

* Datos suministrados por la UPR durante la Inspección Ocular.

El Dr. Muñoz, reconoció que ciertamente ha habido cambios en la matrícula de la universidad, no obstante, expresó que por el momento no se está considerando el cierre de recintos, aunque ciertamente es necesario una reestructuración de la Universidad. Este indicó que periódicamente las universidades tienen que evaluar sus programas educativos de manera que se puedan ajustar a las necesidades. También mencionó que al momento hay programas que no tienen matrícula, por lo que no se descarta el cierre de algunos programas que no tienen matrícula y que, de igual manera, algunos programas se estarán consolidando con otros.

Explicó que los estudiantes de hoy día están más interesados en carreras cortas de alta demanda que les permitan trabajar inmediatamente y que la Universidad tiene que volver a sus inicios. Mencionó que ese era el caso de la UPR en Utuado, la cual en sus inicios se estableció para que se impartieran certificaciones, cursos cortos y programas de traslado a otras universidades, y no a nivel de bachillerato o maestría.

Este entiende que hay que trabajar con la promoción de la Universidad, para que, de esta manera, más jóvenes se interesen por entrar a la UPR. De igual manera, señala que la Universidad debe tener un reenfoque más atractivo para atraer a las nuevas generaciones.

A preguntas de la Senadora Jamie Barlucea, sobre el posible cierre de algunos recintos con baja matrícula, este respondió que, aunque no está contemplado el cierre de ningún recinto, ciertamente si eso fuera necesario el recinto que se encuentra en mayor peligro es el de Utuado, ya que es actualmente el recinto con menos matrícula, la matrícula consta de menos de 300 estudiantes, por lo que en este recinto los recaudos son mínimos. No obstante, se encuentran en la búsqueda de alternativas para hacer de este recinto uno más atractivo y aumentar la matrícula.

De igual manera se abordó el tema del aumento en los costos de matrícula. El Dr. Muñoz indicó, que, aunque no habrá aumento de matrícula para el próximo año escolar 2025-26; tampoco habrá reducción de la misma. Estos nos dieron un desglose de los costos de matrícula de programas subgraduados y graduados que se recogen en la siguiente tabla:

AÑO ACADÉMICO	COSTO DE MATRÍCULA SUBGRADUADO
2007-2008	$45
2008-2009	$47
2009-2010	$49
2010-2011	$51
2011-2012	$53
2012-2013	$55
2013-2014	$55
2014-2015	$55
2015-2016	$55
2016-2017	$56
2017-2018	$57
2018-2019	$115
2019-2020	$124
2020-2021	$124
2021-2022	$145
2022-2023	$157
2023-2024	$157
2024-2025	$157

A nivel graduado:

AÑO ACADÉMICO	COSTO DE MATRÍCULA GRADUADO	COMENTARIO
2007-2008	$113	*puede variar por disciplina
2008-2009	$117	*puede variar por disciplina
2009-2010	$122	puede variar or disci lina
2010-2011	$127	*puede variar por disciplina
2011-2012	$132	*puede variar por disciplina
2012-2013	$137	*puede variar por disciplina
2013-2014	$137	*puede variar por disciplina
2014-2015	$137	*puede variar por disciplina
2015-2016	$137	*puede variar por disciplina

2016-2017	$140	*puede variar por disciplina
2017-2018	$143	*puede variar por disciplina
2018-2019	$175 M/$200 PhD	*puede variar por disciplina
2019-2020	$190 M/$200 PhD	*puede variar por disciplina
2020-2021	$190 M/$200 PhD	*puede variar por disciplina
2021-2022	$195M / $205 PhD	*puede variar por disciplina;
2022-2023	$205M /$215 PhD / $305 JD	*puede variar por disciplina; MA Arquitectura $215 x crd.
2023-2024	$205M /$215 PhD /$305 JD	*puede variar por disciplina; MA Arquitectura $215 x crd.
2024-2025	$205M /$215 PhD /$305 JD	*puede variar por programa; MA Arquitectura $215 x crd.

Por su parte el Director de Infraestructura realizó una presentación visual de los edificios que se están construyendo y los proyectos de infraestructura que hay en los diversos recintos; entre estos la construcción de un edificio de ciencias moleculares que será único en el Caribe, y que estará listo para el siguiente año 2026. También mencionó que la UPR en Bayamón, por instrucciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), debe ser demolida casi en su totalidad y ese recinto será reconstruido. También mencionó que están en espera de que se les conceda un espacio en el Recinto de Ciencias Médicas para comenzar la Construcción de lo que será la nueva Escuela de Medicina de Ciencias Médicas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

A tenor a lo antes expuesto, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico presenta las siguientes recomendaciones:

1. Se deben evaluar los programas académicos disponibles y ver cuales de estos pueden ser reestructurados. De la misma manera implementar nuevos programas que vayan de acuerdo a las nuevas necesidades y las nuevas tecnologías e intereses de los futuros estudiantes.
2. También se deben implementar estrategias de mercadeo, a nivel gubernamental, que permitan generar interés en los jóvenes, de comenzar estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico. La universidad debe tener un enfoque mas atractivo. Esto puede lograrse por medio de comerciales que inciten a los estudiantes a querer formar parte del primer centro educativo de nuestra Isla. También pueden realizarse ferias y visitas en las escuelas como hacen las Universidades privadas, donde se oriente a los estudiantes sobre los programas académicos y las ventajas de estudiar en la UPR.
3. Se deben revisar los programas académicos para auscultar la posibilidad de reducir la cantidad de créditos de ciertos programas, de manera que represente un ahorro para los estudiantes y se obtengan mejores tasas de graduación.
4. De deben identificar ayudas económicas adicionales para estudiantes de escasos recursos, que permitan el aumento en las matrículas.
5. Crear más programas de educación a distancia, que permitan que jóvenes y adultos, que al momento no pueden tomar clase de forma presencial, puedan estudiar de manera virtual.

6. Se deben crear mas cursos cortos y técnicos en los que los estudiantes puedan culminar sus profesiones en corto tiempo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares en torno a la R. del S. 22, presenta ante este Alto Cuerpo su **Primer Informe Parcial** sobre la medida de referencia.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Hon. Brenda Pérez Soto
Presidenta
Comisión de Educación, Arte y Cultura"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se reciba el informe.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe.
Próximo asunto.
SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final sometido por la Comisión de Educación, Arte y Cultura, en torno a la Resolución del Senado 40, titulada:

"Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las agresiones suscitadas recientemente entre estudiantes en diversos planteles escolares de Puerto Rico, los protocolos seguidos, la actuación del Comité de Disciplina y los efectos negativos que provocan las grabaciones de estas agresiones, tanto para la víctima, como para los espectadores; y para otros fines relacionados."

"**INFORME FINAL**

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 40, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Informe Final con los hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 40, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las agresiones suscitadas recientemente entre estudiantes en diversos planteles escolares de Puerto Rico, los protocolos seguidos, la actuación del Comité de Disciplina y los efectos negativos que provocan las grabaciones de estas agresiones, tanto para la víctima, como para los espectadores.

INTRODUCCIÓN

La violencia escolar representa una de las amenazas más serias al bienestar integral de nuestros estudiantes y a la calidad del ambiente educativo en Puerto Rico. En respuesta a diversos incidentes de agresión física y verbal ocurridos recientemente entre estudiantes en varios planteles escolares del

país; muchos de ellos grabados y difundidos en redes sociales, el Senado de Puerto Rico adoptó la Resolución del Senado 40 con el fin de realizar una investigación exhaustiva que permitiera evaluar con profundidad esta preocupante situación.

Esta resolución, encomienda a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado investigar los protocolos establecidos por el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) para manejar incidentes de agresión entre estudiantes, el funcionamiento y efectividad de los Comités de Disciplina en las escuelas, y los efectos negativos de la grabación y difusión de estas agresiones tanto en las víctimas como en los espectadores.

La seguridad en el ambiente escolar es fundamental para el desarrollo académico, emocional y social del estudiantado. Cuando se rompe ese entorno seguro, no solo se afecta la capacidad de aprendizaje, sino también la dignidad y la integridad de todos los involucrados. Esta resolución surge como una respuesta legislativa urgente ante la creciente preocupación ciudadana sobre la violencia entre menores de edad, la revictimización provocada por la exposición mediática, y la necesidad de revisar los mecanismos institucionales actuales para atender estos eventos de forma oportuna, sensible y eficaz.

Esta resolución tiene múltiples propósitos: evaluar el estado actual de los protocolos escolares, recomendar reformas necesarias, fomentar un enfoque interagencial en la prevención de la violencia, y proteger los derechos y la dignidad del estudiantado. A través de este proceso legislativo, se busca establecer las bases para una política pública sólida y efectiva que asegure el desarrollo saludable y seguro de nuestros niños y jóvenes en el sistema educativo del país.

Este informe contiene los hallazgos, recomendaciones y reflexiones de la Comisión tras un análisis exhaustivo del testimonio recibido, los memoriales presentados y la información recopilada durante la investigación, con el objetivo de impulsar acciones concretas que transformen nuestros planteles en espacios verdaderamente seguros, inclusivos y respetuosos.

ALCANCE DEL INFORME

En el marco de esta investigación, la Comisión de Educación, Arte y Cultura celebró una Vista Pública el martes, 18 de marzo de 2025, en el Salón de Audiencias Luis Negrón López. En la que se contó con la comparecencia del Sr. César O. González Cordero, Comisionado de Seguridad del Departamento de Educación, quien asistió en representación del Secretario. El Sr. González, con una trayectoria de siete años en su cargo y proveniente de la Policía de Puerto Rico, expuso diversos retos y propuestas relacionadas con la seguridad escolar.

Durante la Vista Pública, se discutieron aspectos críticos como la falta de adiestramiento de directores escolares sobre protocolos de seguridad, la debilidad de muchos Comités de Disciplina, el uso excesivo de celulares en las escuelas, y la urgente necesidad de fomentar la corresponsabilidad entre padres, comunidad y el sistema educativo. También se evidenció la falta de estadísticas actualizadas y sistematizadas sobre incidentes violentos por plantel, una carencia que limita la respuesta institucional ante estas situaciones.

El Departamento de Educación, reiteró su compromiso con la creación de ambientes escolares seguros mediante planes integrales que incluyan prevención del bullying, desarrollo de destrezas socioemocionales, colaboración con fuerzas de seguridad locales, simulacros de emergencia y el fortalecimiento del apoyo a las víctimas.

Durante la vista, se destacó la necesidad de comprender que la gestión académica no es una labor exclusiva de la escuela, sino un esfuerzo comunitario. El senador Hon. Ángel Toledo enfatizó que las conductas de los estudiantes dentro de los planteles responden, en gran parte, a los modelos

observados en sus comunidades. En esa línea, el Sr. González subrayó que, para muchos estudiantes, la escuela representa su único "espacio seguro".

Uno de los puntos medulares discutidos fue la interacción entre padres, maestros y estudiantes como elemento clave para generar un ambiente escolar saludable. El Comisionado insistió en que muchos de los problemas de conducta surgen en el hogar y se trasladan al entorno escolar, por lo que planteó la urgencia de reforzar los vínculos familiares y la integración de los padres en los procesos educativos, incluso en eventos como la entrega de notas.

El Sr. González mencionó que el Reglamento General de Estudiantes 9243, establece los derechos de los estudiantes, regula la disciplina escolar y manera de manejar las situaciones de indisciplina y establece los procedimientos para la resolución de conflictos, entre otros. No obstante, están conscientes de que la reducción de la violencia en las escuelas es un proceso continuo que requiere de compromiso, recursos y colaboración de todos los sectores.

A preguntas del Senador Hon. Ángel Toledo, el Sr. González respondió que la integración de la comunidad es vital para atender el problema de las agresiones en las escuelas. Este mencionó que desafortunadamente los padres no se están integrando el en proceso educativo de sus hijos. Que, aunque son convocados para reuniones, charlas, etc., son muy pocos los padres que participan de dichas actividades, por lo que entiende necesario que se atienda mediante legislación la obligatoriedad de la participación de los padres o tutores.

La Senadora Hon. Migdalia Padilla expresó que hay que fijar responsabilidad a los padres en la escuela, sobre la educación de sus hijos. Mencionó que vivimos en una competencia con la programación del televisor, el uso de celulares, la música, etc., y que muchas veces los niños y jóvenes vienen con valores aprendidos en sus hogares que no necesariamente son buenos.

Por su parte, el Sr. González mencionó que existe un plan de emergencia escolar, y que no es discreción del director atender las situaciones que se presentan en los planteles. Que estos tienen que reportar cada una de las situaciones en la plataforma del DE, pero que lamentablemente hay directores que no reportan las situaciones, ni buscan apoyo del Departamento. Indicó que hay directores que ocultan la información para que no coloquen a sus escuelas bajo medida cautelar.

La Senadora Hon. Jamie Barlucea preguntó al deponente sobre la frecuencia con la que se revisan los protocolos. El Sr. González respondió que no tienen un término fijo establecido, sino que, las revisiones responden a las necesidades que van surgiendo. Expresó que la última revisión fue el año pasado para atender una problemática de cigarrillos electrónicos en las escuelas.

En cuanto a la seguridad institucional, la Presidenta de la Comisión propuso retomar el patrullaje de la Policía Estatal en las inmediaciones escolares. En ese contexto, se discutió la activación de protocolos en situaciones de emergencia. El Sr. González reconoció que el Departamento de Educación (DE) sufre de una sobre-fiscalización, lo que no debe servir de excusa para fallas en la respuesta institucional. Propuso adiestrar a los directores escolares en el conocimiento y aplicación de reglamentos, así como el fortalecimiento de las academias periódicas enfocadas en protocolos de seguridad y cartas circulares.

Otro tema de especial preocupación fue el uso inadecuado de teléfonos celulares por parte del estudiantado. La senadora Hon. Karen Román cuestionó qué estrategias existen para atender este fenómeno, señalando que los docentes compiten con múltiples distractores como redes sociales, videojuegos y música. La Presidenta de la Comisión indicó que esto se hace más necesario durante el periodo de almuerzo de los estudiantes, por lo que el Art. 6, inciso 4 del reglamento debe ser enmendado, a los fines de impedir el uso del celular durante el recreo.

La Senadora Karen Román mencionó, que, aunque la carta circular que regula el uso de celular no permite el registro de los estudiantes al llegar a la escuela, es necesario actualizar la reglamentación que existe sobre el uso del celular en los planteles escolares.

Por otra parte, se abordó la necesidad de identificar fondos estatales para el reclutamiento, capacitación y beneficio de los guardias escolares, así como para el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios. Se recomendó una revisión profunda de las políticas públicas relacionadas con el uso del celular, promoviendo que estos dispositivos se utilicen exclusivamente con fines académicos.

ANÁLISIS Y HALLAZGOS

Como parte de la investigación realizada por la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico en virtud de la Resolución del Senado 40, se identificaron múltiples hallazgos que evidencian fallas estructurales y operacionales dentro del sistema educativo en lo que respecta a la prevención y el manejo de incidentes de agresión escolar. A continuación, se detallan los principales hallazgos derivados del análisis de la información recopilada y de la vista pública celebrada el 18 de marzo de 2025:

Se constató que existe un desconocimiento significativo por parte de muchos directores escolares sobre los reglamentos vigentes y la manera adecuada de activar los protocolos institucionales ante incidentes violentos. Esta situación se agrava debido a la falta de adiestramiento formal y continuo en el tema de seguridad escolar. Asimismo, se evidenció que numerosos planteles escolares no cuentan con personal capacitado ni con equipos de respuesta preparados, lo cual compromete la seguridad física y emocional del estudiantado ante situaciones de emergencia.

Uno de los elementos más reiterados en la vista pública fue la insuficiente integración de los padres, encargados y comunidades en los procesos educativos y en la construcción de ambientes escolares seguros. Se reconoció que muchos de los conflictos que se manifiestan en la escuela tienen sus raíces en el hogar y en dinámicas familiares disfuncionales. Por ello, se destacó la urgente necesidad de fomentar una cultura de corresponsabilidad, donde el entorno familiar asuma un rol más activo y colaborador en la formación del estudiantado y en la prevención de conductas violentas.

Otro hallazgo relevante fue la falta de regulación efectiva del uso de teléfonos celulares dentro de los planteles escolares. El uso excesivo y sin supervisión de estos dispositivos no solo interfiere con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también contribuye al incremento de conflictos entre estudiantes, especialmente cuando se utilizan para grabar y divulgar situaciones de violencia, lo que exacerba el daño emocional de las víctimas y promueve la revictimización.

Se identificó que muchos Comités de Disciplina Escolar carecen de la preparación y apoyo necesarios para operar de manera efectiva. En numerosos casos, estos comités no aplican correctamente los reglamentos ni dan el seguimiento adecuado a los casos de conducta, lo que debilita su capacidad preventiva y su función como ente mediador y correctivo dentro del entorno escolar. Esta situación también genera incertidumbre e inconsistencia en la aplicación de sanciones y medidas disciplinarias.

Finalmente, se reconocieron los esfuerzos del Departamento de Educación en materia preventiva, como la realización de simulacros de tirador activo, la colaboración con la Policía de Puerto Rico y la implementación de programas dirigidos al desarrollo de habilidades socioemocionales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A tenor a lo antes expuesto, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico presenta las siguientes recomendaciones:

1. La violencia escolar y la seguridad en los planteles es un reflejo de la realidad social. Por tanto, este reto no puede recaer exclusivamente sobre el sistema educativo. Se requiere un compromiso integral y sostenido de múltiples sectores: padres, comunidades, agencias de seguridad y el propio estudiantado.
2. Es necesario fortalecer el liderazgo escolar, proveer herramientas efectivas a los educadores y asegurar el cumplimiento de políticas públicas que promuevan ambientes escolares dignos, seguros y propicios para el aprendizaje.
3. Se debe brinde mayor capacitación y seguimiento a los miembros de los comités de disciplina escolar como ente clave en la prevención y mediación de conflictos.
4. Se debe crear un calendario interagencial único, en el que se desarrollen campañas de prevención y orientación que se ajusten a las necesidades particulares de cada plantel y su comunidad escolar.
5. Se debe fortalecer el rol de los superintendentes auxiliares como entes fiscalizadores del cumplimiento de los protocolos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares en torno a la R. del S. 40, presenta ante este Alto Cuerpo su **Informe Final** sobre la medida de referencia.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Hon. Brenda Pérez Soto
Presidenta
Comisión de Educación, Arte y Cultura"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se reciba el informe.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe.
Próximo asunto.
SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia Resolución del Senado 75, titulada:

"Para ordenar a ~~las Comisiones~~ *la Comisión* de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional~~; y de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo~~ del Senado de Puerto Rico, ~~a~~ realizar una investigación abarcadora sobre los protocolos bancarios y medidas implementadas por las instituciones financieras en la Isla para prevenir la explotación financiera de los adultos mayores; ~~y para otros fines relacionados~~."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción en las enmiendas que contiene la Resolución del Senado 75, se aprueban.
SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 75, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título de la Resolución del Senado 75, se aprueban.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia Resolución del Senado 82, titulada:

"Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado ~~del Gobierno~~ de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las obras y ~~el~~ *del* presupuesto asignado, ~~desglosado por partidas,~~ *al* ~~del~~ Centro de Trauma de Mayagüez; ~~determinar la fase en que se encuentra el proyecto según la información más reciente del año 2024, incluyendo vistas recientes en el Senado y publicaciones en medios de comunicación; y, con base en los hallazgos, establecer los próximos pasos necesarios para la culminación de este proyecto que beneficiará a numerosas familias puertorriqueñas en situaciones de emergencia~~."

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción en las enmiendas que contiene la Resolución del Senado 82, se aprueban.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 82, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título de la Resolución del Senado 82, se aprueban.

- - - -

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, vamos a regresar al turno de Informes Positivos.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. Adelante.

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas:

De la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, seis informes proponiendo la aprobación de la designación de la doctora Yolanda Varela Rosa como Procuradora de las Personas

de Edad Avanzada; de la honorable Glorianne Marie Lotti Rodríguez como Jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en ascenso; del licenciado Marcus Ramsey Torres Skerret como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Ángel L. García Rodríguez como Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales y como Fiscal IV del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en ascenso; del honorable Jorge Rafael Rivera Rueda como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; y de la honorable Cyndia Enid Irizarry Casiano como Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para que se incluyan los Informes de Nombramientos y se incluyan en el Calendario del Día de hoy.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe sometido por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la doctora Yolanda Varela Rosa, para el cargo de Procuradora de las Personas de Edad Avanzada:

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 15 aprobada el 16 de enero de 2025, vuestra Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento de la doctora Yolanda Varela Rosa recomendando su confirmación como Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.

El pasado 27 de febrero de 2025, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon Jenniffer González Colón sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Dra. Yolanda Varela Rosa recomendando su confirmación como Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.

La Ley Núm. 76-2013, mejor conocida como la "Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada", crea el cargo del Procurador (a) de las Personas de Edad Avanzada, quien será nombrado por el Gobernador (a) con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, por el término de diez (10) años y hasta que su sucesor o sucesora sea nombrado y tome posesión del cargo. La persona designada deberá ser de reconocido conocimiento y capacidad profesional, e independencia de criterio. Además, dicho cargo sólo podrá ser desempeñado por una persona que tenga conocimientos y/o experiencia en la administración pública, gestión gubernamental, servicios para las personas de edad avanzada, y en adición haya cursado estudios y/o obtenido un grado universitario, a nivel graduado en gerontología.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Orden Administrativa 2025-06, delegó a la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado la investigación de la designada.

I. HISTORIAL DE LA NOMINADA

La Dra. Yolanda Varela Rosa nació en el Municipio de Aguada, donde actualmente reside. Para el año 1977, la nominada completó el grado de Bachillerato en Enfermería en la Universidad De Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Luego, en la Universidad Central del Este de la República Dominicana, para el año 1981 obtuvo un grado doctoral en Medicina. Posteriormente, en el año 1983 realizó la Residencia en Medicina General en el Hospital Pedro J. Zamora en Aguadilla. La doctora Varela Rosa cuenta con múltiples certificaciones y con un Diplomado en Geriatría y en Acupuntura Médica.

Del historial profesional de la Dra. Yolanda Varela Rosa se desprende que desde el año 1987 ejerce la práctica de la medicina en su propia Oficina en Aguada, y se especializa en atender pacientes geriátricos.

II.INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA

La Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, evaluación psicológica e investigación de campo.

(a) Análisis Financiero:

Como parte de la evaluación de la nominada al cargo de Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado realizó un análisis financiero a través de un Contador Público Autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico, así como del personal de la oficina asignado a estas labores. Dicho análisis financiero fue basado en la documentación sometida por la Dra. Yolanda Varela Rosa. Del resultado de dicha investigación se desprende que la designada cumple de forma satisfactoria con sus obligaciones contributivas y financieras. Además, se desprende que no existe situación conflictiva de sus recursos, inversiones o participaciones con las funciones que la nominada va a ejercer.

(b) Evaluación Psicológica:

La doctora Varela Rosa fue objeto de una evaluación psicológica por parte de la psiquiatra contratada para esos propósitos por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos. A raíz de esa evaluación se concluyó que la designada posee la capacidad psicológica para ejercer el cargo al que ha sido nominada y no arroja impedimento alguno para recomendar de forma favorable la confirmación como Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.

(c) Investigación de Campo:

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Dra. Yolanda Varela Rosa cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local.

Como parte de la investigación fueron entrevistados los siguientes profesionales de la medicina y personas particulares; a saber:

- Dr. Abelardo E. Le Compte
- Dr. Evaristo Quiñones
- Sra. Karina Vargas Cruz
- Sr. Anthony Plaza Rivera

- Sra. Nivea Mercado
- Fiscal Silda Rubio

Cabe destacar que todos los entrevistados favorecieron la designación de la Dra. Yolanda Varela Rosa como Procuradora de las Personas de Edad Avanzada y la describieron como una excelente profesional, sumamente comprometida con la salud de sus pacientes, intachable, distinguida ciudadana de Aguada y además una servidora con vocación pública por naturaleza.

La doctora Varela Rosa, mediante una ponencia sometida a la comisión expresó que se propone firmemente ser la voz de los adultos mayores, abogar por sus derechos y garantizar su bienestar integral, y destacó que la vejez no debe ser un obstáculo, sino una etapa de plenitud, participación y dignidad.

Continuó exponiendo la nominada que, para garantizar un envejecimiento digno en Puerto Rico, se propone enfocarse en tres áreas prioritarias, a saber:

1. Apoyo a Cuidadores Familiares: Muchos adultos mayores dependen de familiares que enfrentan retos físicos, emocionales y financieros. Es fundamental proporcionarles recursos, formación y asistencia económica.
2. Salud Mental y Bienestar: El aislamiento social, la depresión y la ansiedad son problemas frecuentes entre los adultos mayores. Es necesario fomentar programas de apoyo psicológico y espacios de integración comunitaria.
3. Inclusión Social y Oportunidades: La participación en la vida comunitaria a través del voluntariado, programas recreativos y oportunidades laborales flexibles es esencial. Además, considera importante implementar políticas contra la discriminación por edad en el empleo y otros ámbitos.

III. CONCLUSIÓN

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial profesional de la nominada, con más de treinta y ocho (38) años en la práctica de la medicina, especializada en pacientes de geriatría, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con todo lo relacionado al sector de personas de edad avanzada en Puerto Rico.

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo, su informe recomendando la confirmación del nombramiento de la doctora Yolanda Varela Rosa como Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos"

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico otorgue su consentimiento al nombramiento de la doctora Yolanda Varela Rosa, como Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la doctora Yolanda Varela Rosa, como Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no.

Confirmado el nombramiento de la doctora Yolanda Varela Rosa, como Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.

Notifíquese a la señora Gobernadora.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, para hacer unas breves expresiones sobre el nombramiento.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, la doctora Yolanda Varela Rosa ha sido designada para ocupar un puesto para el cual sin duda alguna cuenta no solamente con cualificaciones académicas, sino con cualificaciones profesionales a través de su experiencia.

Y sorprende muy positivamente que la doctora Varela Rosa más allá de ser médico licenciada en Puerto Rico, también posee experiencia profesional dentro del campo de la geriatría y dentro del campo de la medicina alternativa, cosa que tiene que sorprender porque dentro de un campo en el que se tratan de buscar medidas diferentes para proteger la salud del puertorriqueño y la puertorriqueña tener a una doctora que cuenta con esa experiencia personal y profesional debe honrarnos.

Me da mucho placer que este Senado haya confirmado este nombramiento, no tengo la más mínima duda de que ejercerá sus funciones de una forma sabia y de una forma responsable para el beneficio de nuestros adultos mayores.

Esas son mis palabras.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe sometido por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la honorable Glorianne Marie Lotti Rodríguez, para el cargo de Jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en ascenso:

“INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 15, aprobada el 16 de enero de 2025, vuestra Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento de la Honorable Glorianne Marie Lotti Rodríguez como Jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en ascenso.

El pasado 2 de abril de 2025, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Honorable Glorianne Marie Lotti Rodríguez como Jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en ascenso.

La Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, dispuso que el Tribunal de Apelaciones será un Tribunal intermedio entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Primera Instancia, considerándolo, así como un tribunal de récord.

Dicha Ley Núm. 201, *supra,* dispone en su Artículo 4.002 que el Tribunal de Apelaciones cumplirá el propósito de proveer a los ciudadanos un foro apelativo mediante el cual un panel de no

menos de tres (3) jueces revisará, como cuestión de derecho, las sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, así como las decisiones finales de los organismos y agencias administrativas, y de manera discrecional cualquier otra resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Tal y como dispone el Artículo 4.003 de la referida Ley de la Judicatura, los Jueces del Tribunal de Apelaciones serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, y desempeñarán su cargo por el término de dieciséis (16) años. A su vez, dicho Artículo establece que nadie será nombrado Juez del Tribunal de Apelaciones, a no ser que tenga diez (10) años de experiencia profesional, posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Orden Administrativa 2025-06, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación de la nominada.

I. HISTORIAL DE LA NOMINADA

La Jueza Glorianne Marie Lotti Rodríguez nació en el Municipio de Ponce. Actualmente reside en el Municipio de Trujillo Alto.

Del historial educativo de la nominada surge que, en 2003 obtuvo un Bachillerato en Artes con una concentración en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Posteriormente, en el año 2007, obtuvo un grado de *Juris Doctor* de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad de Ponce.

El historial profesional de la Jueza Lotti Rodríguez evidencia que para el año 2008 comenzó a trabajar en el Tribunal de Primera Instancia en Ponce como Oficial Jurídico. Posteriormente, en julio del año 2011 fue designada como Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia, posición que ocupó hasta marzo del año 2019. A partir de esta fecha y hasta el presente ocupa la posición de Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia.

II. INVESTIGACION DE LA NOMINADA

La Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e investigación de campo.

(a) Análisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Hon. Glorianne Lotti Rodríguez. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Hon. Glorianne Lotti Rodríguez, ocupar el cargo como Jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en ascenso.

(b) Investigación de Campo:

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Lcda. Glorianne Lotti Rodríguez, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y federal.

III. CONCLUSIÓN

Luego de realizar una evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial académico y profesional de la nominada demostró la capacidad, dedicación y compromiso de ésta en su desempeño en la Rama Judicial.

El examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que la Jueza Lotti Rodríguez cumple con todos los requisitos constitucionales, académicos y de carácter moral para ejercer el cargo al que se le designa y tiene total compromiso y responsabilidad con la Rama Judicial.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Honorable Glorianne Marie Lotti Rodríguez como Jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en ascenso.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico otorgue su consentimiento al nombramiento de la honorable Glorianne Marie Lotti Rodríguez, como Jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en ascenso.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la honorable Glorianne Marie Lotti Rodríguez, como Jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Confirmado el nombramiento de la honorable Glorianne M. Lotti Rodríguez, como Jueza del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Notifíquese a la señora Gobernadora.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe sometido por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Marcus Ramsey Torres Skerret, para el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia:

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 15, aprobada el 16 de enero de 2025, vuestra Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento del licenciado Marcus Ramsey Torres Skerrett como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.

El pasado 2 de abril de 2025, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Lcdo. Marcus Torres Skerrett como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.

La Ley Núm. 201 de 2003, según enmendada, conocida como *Ley de la Judicatura de 2003*, establece que el Poder judicial de Puerto Rico constituirá un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración, y estará compuesto por el Tribunal Supremo como tribunal de última instancia, el Tribunal de Circuito de Apelaciones como tribunal intermedio, y por el Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente constituirán el Tribunal General de Justicia.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.001 de la Ley Núm. 201, *supra,* los jueces superiores forman parte del Tribunal de Primera Instancia, el cual es un tribunal de jurisdicción original general, para actuar a nombre y por la autoridad del Gobierno de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según se disponga por ley.

El Artículo 5.002 de la Ley Núm. 201, *supra,* establece que para ser nombrado Juez Superior se requiere tener, por lo menos siete (7) años de experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y el Art. 2.015, *supra*, además de los requisitos anteriormente mencionados, dispone que los nombramientos de los jueces deberán recaer en personas altamente cualificadas, quienes deberán gozar de buena reputación moral, tener conocimiento y capacidad jurídica, poseer cualidades de integridad, imparcialidad y temperamento judicial, demostrar responsabilidad y capacidad para ejercer las funciones judiciales. Asimismo, ningún juez ejercerá la profesión de abogado o el notariado. Todo Juez Superior será nombrado y desempeñará su cargo por el término de dieciséis (16) años.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Orden Administrativa 2025-06, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación del nominado.

I. HISTORIAL DEL NOMINADO

El Lcdo. Marcus Torres Skerrett nació en el Municipio de San Juan. Actualmente reside en el Municipio de Toa Alta.

Del historial educativo del nominado se desprende que, para el año 2010, completó un Bachillerato en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego para el año 2015 culminó el grado de *Juris Doctor* en la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Además, en el año 2018 obtuvo el grado de Maestría en Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

El historial profesional del licenciado Torres Skerrett evidencia que para los años 2016 y hasta el 2017 se dedicó a la práctica privada de la profesión legal. A partir de esta fecha fungió como Secretario del Negociado de Telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora de Servicio Público. Desde el año 2020 y hasta el presente se desempeña como Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO

La Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e investigación de campo.

(a) Análisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Lcdo. Marcus Torres Skerrett. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al designado, ocupar el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.

(b) Investigación de Campo:

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Lcdo. Marcus Torres Skerrett cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal.

III. CONCLUSIÓN

Luego de realizar una evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial académico y profesional del nominado demostró la capacidad, dedicación y compromiso de éste para ocupar el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. El examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos constitucionales, académicos y de carácter moral para ejercer el cargo al que se le designa y tiene total compromiso y responsabilidad con la Rama Judicial.

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del licenciado Marcus Ramsey Torres Skerrett como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico otorgue su consentimiento al nombramiento del licenciado Marcus Ramsey Torres Skerret, como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Marcus Ramsey Torres Skerret, como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Confirmado el nombramiento del licenciado Marcus R. Torres Skerret, como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. Notifíquese a la señora Gobernadora.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe sometido por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Ángel L. García Rodríguez, para el cargo de Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales; y para el cargo de Fiscal IV del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en ascenso:

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 15, aprobada el 16 de enero de 2025, vuestra Comisión de Innovación, Reforma y

Nombramientos tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre los nombramientos del Lcdo. Ángel L. García Rodríguez, recomendando sus nominaciones como Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales y como Fiscal IV del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en ascenso.

El pasado 13 de febrero de 2025 y 26 de febrero de 2025, respectivamente, la Gobernadora de Puerto Rico sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico las nominaciones del licenciado García Rodríguez como Comisionado del Negociado de Investigaciones y como Fiscal IV del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en ascenso.

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Justicia", y el Plan de Reorganización Núm. 5 de 27 de diciembre de 2011 crea en el Departamento de Justicia los cargos de los Fiscales Auxiliares IV, quienes serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, por un término de doce (12) años. Los Fiscales Auxiliares IV deberán tener por lo menos ocho (8) años de experiencia como abogados.

Por otra parte, el Artículo 7.01 de la Ley 20-2017, según enmendada, mejor conocida como la *"Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico"*, crea el Negociado de Investigaciones Especiales. El Artículo 7.02 de la Ley 20-2017, supra, crea el puesto de Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales. El Comisionado será nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico y ocupará el cargo a discreción del Gobernador. La Persona que dirija el Negociado de Investigaciones Especiales será abogada o abogado, admitido(a) al ejercicio de la profesión legal por el Tribunal Supremo de Puerto Rico o por la entidad con la facultad de admitir al ejercicio de la profesión legal en cualquiera de las jurisdicciones de Estados Unidos de América y contará con por lo menos cinco (5) años de experiencia en el ejercicio de la profesión de abogado en el campo criminal; o un(a) funcionario(a) con no menos de diez (10) años de experiencia en el ámbito de la investigación criminal. Además, deberá poseer conocimiento y destrezas en administración. La persona que ocupe este cargo evidenciará haber obtenido un grado académico de una institución universitaria debidamente acreditada o contará con no menos de cuatro (4) años de experiencia en servicios de seguridad pública. Además, deberá tener conocimiento y destrezas en administración.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Orden Administrativa 2025-06 de 27 de enero de 2025, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación del designado.

I. HISTORIAL DEL NOMINADO

El Lcdo. Ángel L. García Rodríguez nació en Chicago, Illinois. Actualmente reside en el Municipio de Guaynabo.

El licenciado García Rodríguez, para el año 1992, obtuvo un Bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. Luego para el año 1995, obtuvo el grado de *Juris Doctor* de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Del historial profesional del nominado se desprende que para el año 1994, fue Asesor Legal de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. Posteriormente, para el año 1996, laboró como Asesor Auxiliar III en la Oficina de Asuntos Legislativos de la Fortaleza. Ese mismo año comenzó a laborar como Asesor Legal y Director de la Oficina Legal de la Comisión Industrial de Puerto Rico. Desde el 2000 y hasta el presente ocupa el cargo de Fiscal Auxiliar II, obteniendo una renominación a dicho cargo en el año 2012.

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO

La Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, historial personal y profesional, análisis financiero, evaluación psicológica e investigación de campo.

(a) Análisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Lcdo. Ángel L. García Rodríguez. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al licenciado García Rodríguez ocupar los cargos de Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales y de Fiscal Auxiliar IV. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del nominado.

(b) Evaluación Psicológica:

El licenciado García Rodríguez fue objeto de una evaluación psicológica por parte de la psiquiatra contratada para esos propósitos por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos. A raíz de esa evaluación se concluyó que el designado posee la capacidad psicológica para ejercer los cargos a los que ha sido nominado y no arroja impedimento alguno para recomendar de forma favorable la confirmación a los mismos.

(c) Investigación de Campo:

La investigación de campo realizada en torno a las nominaciones del Lcdo. Ángel García Rodríguez, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, y referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal.

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistados varios funcionarios de la Rama Judicial y del Departamento de Justicia, a saber:

- Hon. Nerisvel C. Durán Guzmán, Jueza Superior
- Hon. Joie-Lin Laó Meléndez, Jueza Superior
- Hon. Alexandra Rivera Sáez, Jueza Superior
- Fiscal Jessika Correa González
- Fiscal Lizette Sánchez Vázquez
- Fiscal Melissa Vázquez Sandoval

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar las nominaciones del Lcdo. Ángel L. García Rodríguez como Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales y como Fiscal Auxiliar IV, en ascenso.

III. CONCLUSIÓN

La trayectoria profesional y académica que demuestra el expediente del Lcdo. Ángel L. García Rodríguez demuestra tener un total compromiso con la justicia, el servicio público y la sociedad en general. La Comisión reconoce la labor del designado, quién demostró ser una persona íntegra, prudente, justa y con sumo interés por continuar sirviendo como funcionario del Departamento de Justicia.

El examen de sus calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos académicos, morales y profesionales para ejercer el cargo al cual se le designa como Fiscal Auxiliar IV, y, sobre todo, tiene total compromiso y responsabilidad con la justicia.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la confirmación del Lcdo. Ángel L. García Rodríguez como Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales y como Fiscal IV del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en ascenso.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos"

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, proponemos….

SRA. SOTO AGUILÚ: Señor Presidente, quisiera hacer unas expresiones en relación a este nombramiento.

SR. PRESIDENTE: Sí, señora. Adelante, compañera Soto Aguilú. Adelante. Compañera el designado tiene dos nombramientos.

SRA. SOTO AGUILÚ: Sí. Primero, quiero hacer expresiones para el récord legislativo y yo sé que él me está escuchando. Yo no sabía que él había sido nominado para dirigir el Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, pero es Fiscal nominado que también está siendo nominado para ascenso como Fiscal IV, fue el primer Fiscal en Puerto Rico ante quien yo litigué mi primer caso de asesinato como abogada litigante de defensa designada como abogada de oficio en la región judicial de Caguas.

Era un caso donde una fémina había asesinado a su pareja. No se trataba de un feminicidio, sino todo lo contrario. La capacidad de sensibilidad de dialogar del nominado, el amor hacia la defensa del Gobierno, la política pública y el respeto a la Policía de Puerto Rico en defensa de su investigación pericial, al igual que los miembros del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, donde él y yo tuvimos una aguerrida litigación pericial.

Me honra que sea él el nominado, porque el NIE a diferencia de cualquier otra entidad gubernamental, es una entidad compleja porque le corresponde el duro trabajo de promover el que en el Gobierno de Puerto Rico no exista corrupción a nivel gubernamental y trabajar con el crimen organizado.

Me consta la capacidad humana y profesional del nominado. Quiero desearle que goce de buena salud y quiero decirle que estaremos vigilantes que ante la confirmación del día de hoy tiene que garantizarle al pueblo de Puerto Rico que hemos confirmado al mejor talento posible ante corrupción gubernamental y al mejor paladín y portavoz en contra del crimen organizado en Puerto Rico. Así que Ángel, Dios te bendiga.

Esas son mis expresiones.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico….

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. Ah, perdón compañera sí, adelante compañera Santiago.

SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Nuestra experiencia con las actuaciones como Fiscal de Ángel García Rodríguez no son tan satisfactorias. Durante muchos años utilizó el poder del Estado,

abundantes recursos del pueblo de Puerto Rico para perseguir a jóvenes estudiantes para forzar transacciones judiciales de manera claramente reprochables, ha sido un instrumento de persecución, desde la Fiscalía.

El Partido Independentista le vota en contra.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico otorgue su consentimiento al nombramiento del licenciado Ángel L. García Rodríguez, como Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Ángel L. García Rodríguez, como Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Confirmado el licenciado Ángel L. García Rodríguez, como Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales.

Señor Portavoz, prosiga…

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico otorgue su consentimiento al nombramiento del licenciado Ángel L. García Rodríguez, como Fiscal IV del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en ascenso.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Ángel L. García Rodríguez, como Fiscal Auxiliar IV, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Confirmado el nombramiento del licenciado Ángel L. García Rodríguez, como Fiscal IV.

- - - -

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente, solicitamos levantar la Regla 47.8 del Reglamento del Senado de Puerto Rico y se le notifica a la señora Gobernadora de Puerto Rico todos los nombramientos aprobados el día de hoy.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.

- - - -

SR. TOLEDO LÓPEZ: Breve receso.

SR. PRESIDENTE: Vamos a decretar un breve receso para recibir a las personas que fueron confirmadas.

RECESO

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico…

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.

Señor Portavoz.

Vamos antes de comenzar, señor Portavoz, con un Pase de Lista. Tóquese el timbre, señor Sargento de Armas. Muy bien. Señora Secretaria, proceda con el Pase de Lista.

PASE DE LISTA

SRA. SECRETARIA: Senadora Álvarez Conde.

SRA ÁLVAREZ CONDE: Presente.

SRA. SECRETARIA: Senadora Barlucea Rodríguez.

SRA. BARLUCEA RODRÍGUEZ: Presente.

SRA. SECRETARIA: Senador Colón La Santa.

SR. COLÓN LA SANTA: Presente.

SRA. SECRETARIA: Senador Dalmau Santiago.
SR. DALMAU SANTIAGO: …
SRA. SECRETARIA: Senador González Costa.
SR. GONZÁLEZ COSTA: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senadora González Huertas.
SRA. GONZÁLEZ HUERTAS: …
SRA. SECRETARIA: Senador González López.
SR. GONZÁLEZ LÓPEZ: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senador Hernández Ortiz.
SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: …
SRA. SECRETARIA: Senadora Jiménez Santoni.
SRA. JIMÉNEZ SANTONI: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senador Matías Rosario.
SR. MATÍAS ROSARIO: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senador Molina Pérez.
SR. MOLINA PÉREZ: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senador Morales Rodríguez.
SR. MORALES RODRÍGUEZ: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senadora Moran Trinidad.
SRA. MORAN TRINIDAD: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senadora Padilla Alvelo.
SRA. PADILLA ALVELO: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senadora Pérez Soto.
SRA. PÉREZ SOTO: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senador Reyes Berrios.
SR. REYES BERRIOS: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senador Ríos Santiago.
SR. RÍOS SANTIAGO: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senadora Rodríguez Veve.
SRA. RODRÍGUEZ VEVE: …
SRA. SECRETARIA: Senadora Román Rodríguez.
SRA. ROMÁN RODRÍGUEZ: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senador Rosa Ramos.
SR. ROSA RAMOS: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senador Sánchez Álvarez.
SR. SÁNCHEZ ÁLVAREZ: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senadora Santiago Negrón.
SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senador Santiago Rivera.
SR. SANTIAGO RIVERA: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senador Santos Ortiz.
SR. SANTOS ORTIZ: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senadora Soto Aguilú.
SRA. SOTO AGUILÚ: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senadora Soto Tolentino.
SRA. SOTO TOLENTINO: Presente.

SRA. SECRETARIA: Senador Toledo López.
SR. TOLEDO LÓPEZ: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senador Dalmau Santiago.
SR. DALMAU SANTIAGO: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senadora González Huertas.
SRA. GONZÁLEZ HUERTAS: …
SRA. SECRETARIA: Senador Hernández Ortiz.
SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Presente.
SRA. SECRETARIA: Senadora Rodríguez Veve.
SRA. RODRÍGUEZ VEVE: Presente.
SRA. SECRETARIA: Señor Presidente.
SR. PRESIDENTE: Presente.

- - - -

SR. PRESIDENTE: Muy bien. Tenemos *quorum* para atender los asuntos que nos corresponde atender en este momento.

Señor Portavoz.
SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe sometido por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del honorable Jorge Rafael Rivera Rueda, para el cargo de Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones:

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 15, aprobadas el 16 de enero de 2025, vuestra Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento del Honorable Jorge Rafael Rivera Rueda como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

El pasado 2 de abril de 2025, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Honorable Juez Jorge Rafael Rivera Rueda como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

La ley 58 -2020, según enmendada, conocida como "Código Electoral de 2020" establece en su Artículo 3.7 que los Comisionados Electorales propietarios nombrarán un Presidente y un Alterno al Presidente conforme a esta Ley, quienes actuarán como representantes del interés público en la Comisión. Corresponderá al Comisionado Electoral del Partido Estatal de Mayoría, cuyo partido hubiere obtenido en la anterior Elección General la mayor cantidad de votos íntegros en la Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta, proponer a los restantes Comisionados propietarios el o los nombres de los candidatos a los cargos de Presidente y de Alterno al Presidente. Si al término de treinta (30) días naturales de haber surgido una vacante en el cargo de Presidente y/o del Alterno del Presidente no se lograra la unanimidad de los comisionados electorales propietarios para cubrir la vacante, entonces el Gobernador deberá hacer el nombramiento del o los candidatos para cubrir el o los cargos vacantes. El Gobernador deberá hacer estos nombramientos no más tarde

de los quince (15) días naturales a partir del vencimiento del término anterior. Tales nombramientos requerirán el consejo y consentimiento de dos terceras partes (2/3) del total de los miembros de ambas cámaras en la Asamblea Legislativa, no más tarde de los quince (15) días naturales a partir del recibo del o los nombramientos otorgados por el Gobernador, según corresponda.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Orden Administrativa 2025-06, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación del nominado.

I. HISTORIAL DEL NOMINADO

El Juez Jorge Rafael Rivera Rueda nació en el Municipio de Ponce. Actualmente reside en el municipio de Caguas.

Del historial educativo del nominado se desprende que, para el año 2001, obtuvo un Bachillerato en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. Asimismo, para el 2005 completó una Maestría en Finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Luego en el año 2009, completó el grado de *Juris Doctor* en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce.

El Juez Jorge Rivera Rueda comenzó su carrera y desarrollo profesional como pequeño/mediano comerciante y dueño de negocio en el municipio de Cidra en el año 2002. Se desempeño en dicha faceta empresarial durante más de 15 años, teniendo la oportunidad de poner en función y aplicar sus conocimientos y destrezas en el ámbito de la administración de empresas, campo en el cual comenzó su carrera educativa.

Cabe destacar que el nominado, mientras se desempeñaba como comerciante, culminó sus estudios postgraduados en el programa de Maestría, y posteriormente obtuvo el grado de *juris doctor*, juramentando como abogado agosto de 2010. En ese mismo año, comenzó a ejercer sus funciones en la práctica privada como abogado-notario en el Bufete Rodríguez-Acosta, en donde atendió asuntos de derecho de familia, sucesiones, laboral, contratos, daños y perjuicios y notarial, entre otros asuntos.

Además, el Juez Rivera Rueda se desempeñó como profesor en el *Huertas Junior College* de Caguas, ofreciendo cursos en el programa de grado asociado en Paralegal y grado asociado en el programa de Administración de Empresas, brindando varios cursos, entre ellos, Introducción al Derecho, Investigación Jurídica, Derecho de Familia, Procedimiento Criminal, Constitucional, Contabilidad Básica, Contabilidad Intermedia y Contabilidad de Costos.

Desde el año 2011 y hasta el 2012 laboró como asesor legislativo en la Oficina de Asesores Legislativos del Presidente del Senado, atendiendo asuntos relacionados a los procesos legislativos, evaluación y redacción de proyectos de ley, reglamentos, ordenes administrativas, investigación jurídica, procesos parlamentarios, entre otros asuntos.

Posterior a ello, desde finales del 2012 y hasta finales del 2016, el Juez Rivera Rueda trabajó como asesor legal de la división legal en la Oficina del Contralor Electoral (OCE). Tuvo la oportunidad profesional de formar parte del equipo de asesores legales de una entidad gubernamental de nueva creación, entidad gubernamental que tiene la facultad de fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico, de conformidad con lo establecido en la Ley 222-2011, según enmendada, mejor conocida como "Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico". Como asesor de la división legal de la OCE, formó parte del grupo de trabajo que tuvo la encomienda de crear y redactar la reglamentación interna para las operaciones administrativas de la OCE, así como los reglamentos aplicables a los comités de campaña, comités de acción política, aspirantes, candidatos, funcionarios electos, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, para hacer cumplir la función fiscalizadora de dicha agencia.

Además, el Juez Rivera Rueda redactaba las cartas circulares, boletines administrativos, órdenes administrativas y otras comunicaciones, relacionadas con las operaciones internas y externas de la OCE, incluyendo la redacción de los contratos de servicios. A esos fines, participaba activamente en cursos continuos de capacitación en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, Oficina de Ética Gubernamental y en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, entre otras, a los fines de conocer todos los asuntos relacionados con contratación gubernamental.

A su vez, representaba a la OCE en las vistas administrativas de las multas impuestas a las personas o entidades que fiscaliza la agencia por incumplimientos con la Ley 222, *supra,* y/o sus reglamentos. También, fue miembro de la Junta de Subastas; y recurso/conferenciante de la agencia para brindar los seminarios de orientación a los comités de campaña, comités de acción política, aspirantes, candidatos, funcionarios electos, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, sobre los aspectos más importantes de la referida Ley 222.

Ciertamente, mientras rindió funciones en la OCE, el Juez Rivera Rueda tuvo la oportunidad de conocer las operaciones internas y administrativas de una agencia, desde su creación y desarrollo, hasta lograr que toda la estructura organizacional de la entidad operara eficientemente.

Posterior a ello, desde el año 2017 y hasta el 2020, el Juez Rivera Rueda se desempeñó como subdirector de la Oficina del Asesores del Presidente del Senado de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Como parte de sus funciones, atendía los asuntos administrativos del personal asignado a dicha Oficina, redactaba los reglamentos internos, órdenes administrativas, boletines administrativos, redacción de proyectos de ley, resoluciones e investigación jurídica de los asuntos de interés.

Posteriormente, a finales del año 2020, fue designado y confirmado como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, siendo asignado a la Región Judicial de Ponce. Fungió como Juez de una sala civil (sala civil-contenciosa), atendiendo asuntos relacionados en materia de sucesiones, contratos, daños y perjuicios, recursos extraordinarios, laboral, hipotecario, liquidación de sociedad de gananciales, cobro de dinero, desahucio, entre otros. Además, y con relación a las funciones relacionadas a la Comisión Estatal de Elecciones, fue asignado como Presidente de la Comisión Local del precinto 63 del municipio de Juana Diaz, atendiendo los asuntos electorales y funciones delegadas como presidente de dicho precinto.

En febrero de 2024, el Juez Rivera Rueda fue trasladado a la región judicial de Caguas, atendiendo asuntos en materia de sucesiones, contratos, daños y perjuicios, recursos extraordinarios, laboral, hipotecario, liquidación de sociedad de gananciales, cobro de dinero, desahucio, entre otros. Además, fue asignado como presidente de la Comisión Local del precinto 81 del municipio de Aguas Buenas, ejerciendo sus funciones y desempeñándose como presidente de dicho precinto en las pasadas elecciones de noviembre de 2024.

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO

La Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e investigación de campo.

(a) Análisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Hon. Juez Rivera Rueda, quien sometió evidencia de su Informe de Divulgación Financiera de la Rama Judicial. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Hon. Juez Jorge Rivera Rueda, ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

(b) Investigación de Campo:

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Hon. Juez Jorge Rivera Rueda, cubrió diversas áreas, a saber, entrevista con el nominado, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal y Federal.

III. CONCLUSIÓN

Luego de realizar una evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial académico y profesional del nominado demostró la capacidad, dedicación y compromiso de éste en su desempeño en la Rama Judicial, y su experiencia en atender asuntos electorales.

El examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos constitucionales, académicos y de carácter moral para ejercer el cargo al que se le designa y tiene total compromiso y responsabilidad con la Rama Judicial.

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Honorable Jorge Rafael Rivera Rueda como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos"

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico otorgue el consentimiento al nombramiento del honorable Jorge Rafael Rivera Rueda, como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

SRA. SOTO AGUILÚ: Señor Presidente.

SR. GONZÁLEZ COSTA: Señor Presidente.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Vamos a tomar nota. Sé que hay varios compañeros, denme una oportunidad. La primera que se levantó fue la compañera Soto Aguilú, el compañero Adrián González, el compañero portavoz Hernández.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Muchas gracias.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Compañero Toledo López.

SR. MORALES RODRÍGUEZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Senador Oscar Morales, Juan Oscar Morales. Muy bien. Este servidor cerrará el debate.

Corresponde el primer turno a la señora senadora Soto Aguilú.

SRA. SOTO AGUILÚ: Gracias, señor Presidente.

Yo creo que este es uno de los nombramientos que más importancia y trascendencia publicitaria va a tener durante este cuatrienio Puerto Rico, y es porque precisamente desde que se aprobó en el año 2020 la Ley 58, que es la que crea el Código Electoral de Puerto Rico, hemos tenido que atravesar…

SR. PRESIDENTE: Tengo una senadora en el uso de la palabra. Le voy a pedir a los compañeros que, por favor, permitan a la compañera que pueda expresarse sin dificultad.

SRA. SOTO AGUILÚ: Se lo agradezco, señor Presidente, porque voy a hablar a nombre del pueblo de Puerto Rico y voy a hablar a nombre de todos los electores.

SR. PRESIDENTE: Cómo no. Gracias a los compañeros. Senadora, adelante.

SRA. SOTO AGUILÚ: En el año 2020 se aprobó la Ley 58 que es el nuevo Código Electoral de Puerto Rico y tras múltiples sombras y cortinas de humo sobre los procesos electorales en Puerto Rico y la pureza y la voluntad electoral, uno de los traspiés más fuertes que nos encontramos fueron las Elecciones Generales del pasado 5 de noviembre del 2020. Donde teniendo una Presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, en el caso mío particular como *rookie* candidata por primera vez en mi vida como Senadora Por Acumulación a mí no se me certificó hasta el 30 de diciembre de 2024. Así que voy a hablar como electora más que como senadora.

Nadie merece atravesar por un proceso electoral donde la Constitución de Puerto Rico dice claramente en su Artículo I, Sección 1, que: "el poder político emana del pueblo y se ejercerá conforme a su voluntad". Si yo voté el 5 de noviembre, yo no puedo esperar al 30 de diciembre para saber cuáles son mis resultados.

El Artículo II de la Sección 2 de la Constitución de Puerto Rico dice que: "Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo, secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral." Muchas personas nos hemos preguntado, ¿qué finalmente significa coacción? Pues a veces la coacción es tácita, a veces la coacción no es algo fáctico que tú puedas palpar. La coacción es una voluntad forzada que genera una cadena de eventos como la incertidumbre en los resultados electorales.

Hoy tenemos ante nuestra consideración la designación del nombramiento del licenciado Jorge Rivera Rueda, ponceño de nacimiento, cagüeño por domicilio. Tiene un Bachillerato en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. Tiene una Maestría en Finanzas de la Universidad Interamericana. Tiene un *Juris Doctor* de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Ha sido miembro de los asesores del Presidente en la Asamblea Legislativa en el Senado, también ha sido asesor legislativo.

Por lo tanto, por la poca experiencia que tengo como Senadora aquí, estoy más que clara que conoce la celeridad que tiene que haber por medio de un asesor legislativo en tomar decisiones, redactar, cambiar y sobre todo dialogar. Esas son características que se aprenden en la práctica y así es como yo he visto a todos los asesores legislativos desde que entré a esta honrosa Asamblea Legislativa a trabajar en todas las delegaciones. Ellos son los héroes sin rostro que hacen que las cosas se muevan aquí.

¿Por qué estoy diciendo esto? Yo personalmente no conozco al licenciado Jorge Rivera Rueda, más allá de saber que es PNP de pura cepa. Pero sí le voy a decir algo al licenciado Rivera Rueda como advertencia, por eso quise mi turno.

Cuando en el 1977 se aprobó el nombre de lo que es la Comisión Estatal de Elecciones no es una agencia de Gobierno, pero tiene características estructurales como tal y era la entidad más respetada sobre los derechos democráticos de los puertorriqueños. Con el paso de los cuatrienios hemos visto cómo los vaivenes de personas que no saben sostener su postura, ser ágiles en las tomas de decisiones, tener capacidad de diálogo, saber redactar inmediatamente, ponen en jaque en incertidumbre a todos los electorales. No nos pasó nada más en el 5 de noviembre de 2024, nos han pasado en elecciones anteriores también.

Así que la advertencia al nominado es la siguiente. El Artículo 3.8 de la Ley 58-2020 que es el Artículo que define y cataloga todos los deberes ministeriales de un Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dice claramente que: "el Presidente va a supervisar todos los servicios, procesos, eventos, de forma absoluta, con pureza e imparcialidad, que va a hacer cumplir la Constitución de Puerto Rico y los Estados Unidos".

Al nominado le digo que no va a haber primaria, que no va a haber Elección General que él logrando las dos terceras (2/3) partes de este Senado y sea confirmado, yo seré un águila vigilante de que usted no repita los mismos errores de Presidentes anteriores. El electorado de Puerto Rico jamás merece estar cautivo de la incertidumbre, la incompetencia, la falta de tecnología, la falta de organización, planificación y sobre todo voluntad.

Porque allí había más de un millón de personas sin rostro que estaban esperando una respuesta y lo único que veíamos era conferencia de prensa tras conferencia de prensa de una Presidenta que no sabía tomar decisiones. No importa si es PNP o no, porque los votos no tienen colores. Esa es la institución más pura, debajo de la iglesia, que puede tener una democracia, uno decide si se afilia o no, uno decide si participa o no.

Así que aunque yo sea miembro del Partido Nuevo Progresista no me va a temblar el pulso públicamente de fiscalizar a la Comisión Estatal de Elecciones. Porque no se trata del impasse de los Comisionados, no se trata de que ellos en el referéndum no se pongan de acuerdo, es que el Presidente tiene que trabajar con agilidad la toma de decisiones mediante resoluciones, tiene que publicarlas, el pueblo tiene que estar informado.

El error más grande que ha tenido la Comisión Estatal de Elecciones es saber ser un prístino comunicador de prensa para el pueblo, al punto que el pueblo entiende que son los partidos políticos los que son la Comisión Estatal de Elecciones, cuando son menos participantes y facilitadores.

Por eso hoy hablo con fogosidad sobre la gran responsabilidad que tiene el Licenciado ante esta nueva encomienda. Pero también voy a hablar de la responsabilidad que debe tener un Presidente Alterno, hay que ser doblemente más ágil que el Presidente, porque no esperamos menos. Esto no se trata de hablar de refritos de nombramientos. Esto no se trata de si usted vino con un nombramiento que fue retirado.

Esto se trata de que ustedes han sido convocados a la exigencia de los tiempos en crisis que nos encontramos, que al pueblo hay que devolverle la confianza en una institución que está marcada y plasmada de partidos no inscritos, de lobos solitarios, de partidos fantasiosos y de la raíz de la democracia, que se llama el Partido Nuevo Progresista.

Así que tenemos que honrar lo que somos y atemperar nuestra voluntad a los tiempos. La exigencia mayor que le hago al nominado es que se acuerde de mis palabras hoy, porque no hablo como senadora, hablo como "Pablo pueblo". Si los TALIS eran difíciles, pero le daban certeza al pueblo en menos de 48 horas, no entiendo cómo es posible que, con maquinaria, con tecnología haya que esperar meses para saber los resultados electorales en Puerto Rico y sobre todo que certifiquen a los candidatos.

Y con estas palabras voy a concluir, señor nominado, porque con alta probabilidad no me voy a poder reunir con usted. Yo era practicante de la abogacía en la práctica privada y el 5 de noviembre, antes, ya yo me estaba preparando en mi firma como única practicante para no coger nuevos casos, porque yo añoraba salir electa y porque yo esperaba que los resultados antes del 10 de noviembre yo iba a estar certificada.

A mí me tuvieron en la agonía hasta el 30 de diciembre, sin yo poder coger un nuevo caso nuevo, porque inmediatamente que yo hiciera eso yo me estaba comprometiendo para el año que viene a hacer unas representaciones que por disposición de ley ya yo no iba a poder hacer. Y yo soy una

sola persona que se vio afectada por este proceso económicamente y por la torpeza de la Comisión Estatal de Elecciones, que no permitiré que jamás vuelva a pasar.

Así que no le hablo con rudeza, le hablo con firmeza. Tiene que devolverle la honorabilidad a la Comisión Estatal de Elecciones, tiene que devolverle al pueblo la confianza que hemos perdido sobre cómo se dan las elecciones en Puerto Rico, y tiene que devolverle a la gente el ánimo de participar, porque mientras más se dilata un resultado menos participación electoral vamos a tener.

Se quejan tanto de que el Registro Electoral hay tantas personas activas, pero no participan. Pues si no nos dan certeza, ¿para qué tú quieres que yo participe? Por eso es que es tan importante que este nombramiento no se tome livianamente, pero que una vez se confirme sepa que hoy usted regresa a su casa con una carga más grande, que es la de los electores que aún sin ser conocidos por usted hemos puesto nuestra esperanza que cualquier otro proceso electoral en Puerto Rico será de alta calidad.

Esas son mis expresiones, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera Soto Aguilú.

Senador Adrián González, le toca a usted.

SR. GONZÁLEZ COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.

El nombramiento que está ante nuestra consideración es uno muy particular, llega al Senado por vía de excepciones. No se trata de un nombramiento ordinario que por Constitución o por ley requiera obligatoriamente consejo y consentimiento del Senado, todo lo contrario. Este nombramiento debería o debió haber sido aprobado en la Comisión Estatal de Elecciones que no es una agencia de Gobierno. Eso hay que subrayarlo con el marcador más fuerte que tengamos. La Comisión Estatal de Elecciones no es del gabinete del Gobernador o Gobernadora, no es una agencia de Gobierno, es un ente que por su diseño debería ser autónomo de las otras Ramas de Gobierno, y por eso su particularidad.

Lo ideal y yo formé parte de esa mesa, la portavoz formó parte de esa mesa, el señor Presidente formó parte de esa mesa de los Comisionados Electorales que la regla es que las decisiones se tomen por consenso y que el Presidente entra como carácter supletorio ante la falta de consenso de los Comisionados Electorales sobre cualquier tema electoral. Pero en la medida que no se alcanza ese consenso, algún ente tiene que intervenir.

En el caso de escoger un Presidente, en muy pocas ocasiones ha entrado la Legislatura y por eso por ser día de sesión se tiene que aprobar en ambos Cuerpos por dos terceras (⅔) partes de la totalidad de quienes los componen. Así llega este nombramiento a nuestros escritorios y ante nuestra consideración por vía de excepción. Yo no conozco al nominado a presidir ni a la nominada a ser Presidenta Alterna, no voy a entrar en los méritos de su capacidad para presidir o no presidir la Comisión Estatal de Elecciones, pero este nombramiento no debió llegar aquí.

El Gobierno o el PNP, porque la primera fase del nombramiento es que el Presidente del Partido envía a través de su Comisionado una lista a ser considerada por los Comisionados y en ausencia de ese trámite político partidista, entonces entran las Ramas políticas ya en función gubernamental a hablar sobre el nombramiento, que es la fase en la que estamos.

La Presidenta del PNP mandó un nombre que en el caso del Partido Independentista ya había sido rechazado tres veces, distintas ocasiones que fue considerado y la nominada Presidenta Alterna dos veces, no iba a haber consenso, fue un poco forzar, un poco bastante forzar que llegara hasta aquí y no es lo deseable.

La senadora que me precede, que me presidió tampoco conoce al nominado, solo sabe que refiriéndose a un juez, solo sabe que es un PNP de pura cepa. Todo el mundo tiene derecho a tener una ideología política, incluso a aquellos que se les prohíbe manifestarlo públicamente. Todos

sabemos los vínculos que pueden existir, incluso en nombramientos como este. Agradecemos la sinceridad de la senadora Soto Aguilú al admitir que, aunque no lo conoce, sabe que es un PNP de pura cepa, refiriéndose a un Juez Superior.

Yo no tengo, repito, nada que decir sobre los méritos. Mis abuelos eran PNP de pura cepa por parte de padre. Eso no es un defecto. Pero este no es ni mi abuelo ni mi abuela eran Presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que lo que está pasando aquí debe ser un emplazamiento a que como la Comisión Estatal de Elecciones no es una agencia de Gobierno el nominado hoy, futuro confirmado, tiene que portarse a la altura como si se tratara de un estrado en el Tribunal Superior y ser imparcial, sobre todo por lo que acaba de pasar aquí. Tiene que alejarse más que nunca de comportarse como un PNP de pura cepa, porque de eso tuvimos cinco (5) años, desde, un poco más, desde los pasados Presidentes admitido por la senadora que me precedió también los tildó a los dos Presidentes anteriores y las sombras que arrojaron sus ejecutorias, admitiendo que también eran PNP de pura cepa.

De eso no se trata la Comisión Estatal de Elecciones, aquí habemos muchos que pasamos por ahí porque se trata de la voluntad del electorado PNP, del electorado Popular, del electorado del PIP, del electorado del Partido que se inscriba, de los que no tienen partido y hoy ocupan escaños, aunque sea PNP de pura cepa su función a partir de hoy es por lo menos no lucir como un PNP de pura cepa y resolver conforme a la ley y al Código Electoral respetando la voluntad del electorado, que es lo que vamos a esperar todas y todos los que estamos en este Recinto y los que están afuera de este Recinto.

Que fue un mes de agonía para muchas personas, un mes del escrutinio más largo adjudicable a muchísimos factores, pero ciertamente a factores administrativos hubo expresiones por parte de todos los partidos, incluyendo el de hoy Mayoría de la dilación innecesaria. Y la muestra fue la Senadora PNP de pura cepa que me precedió en el debate, adjudicable a muchísimos factores y esos son los retos que van a enfrentar tanto el Presidente que se estrena como la Presidenta Alterna.

Pero reiteramos, el historial de la Comisión Estatal de Elecciones desde antes que se llamara así, las únicas manchas que ha tenido, manchas que han afectado al PNP han sido precisamente cuando los organismos que la dirigen dejan, se separan del interés público, se separan de la voluntad democrática, se separan de la voluntad del electorado para convertirse en seguidores de sus partidos de pura cepa. Y todos los partidos han sido víctimas en algún momento de cuando los organismos electorales se han separado de esa transparencia e imparcialidad y la balanza se ha inclinado hacia una visión muy particular político partidista.

Nosotros le vamos a votar en contra al nombramiento sobre todo después de las expresiones de la senadora Soto Aguilú, sin embargo, deseándole mucho éxito a ambos. Todos queremos un mejor sistema electoral. Todos queremos que la Comisión Estatal de Elecciones recupere su buena fama. Todos queremos que la Comisión Estatal de Elecciones recupere el prestigio que tenía fuera de Puerto Rico. Pero más que el prestigio que pueda tener en cualquier país, la confianza del electorado puertorriqueño que ha venido muy lacerada en los pasados dos eventos electorales.

No estamos haciendo señalamientos de ningún tipo, pero ciertamente el país necesita recuperar la confianza en sus instituciones, particularmente en la Comisión Estatal de Elecciones que reitero no es una agencia de Gobierno, implantando política pública del Gobierno entrante. La Comisión Estatal de Elecciones tiene una sola función respetar y garantizar el derecho al sufragio de las/los puertorriqueños. Esa es la única función, solamente dos agencias que garantizan derechos, el Departamento de Educación y la Comisión Estatal de Elecciones. Tristemente contra la politización del Departamento muy poco se puede hacer. Pero la Comisión Estatal de Elecciones no puede estar politizada, va a estar dirigida por un PNP de pura cepa, pero que va a estar vigilado no solamente por

los otros partidos sobre todo los que están representados allí, sino por el país sobre todo después del debate que se ha dado aquí en la tarde de hoy.

Son nuestras palabras. Mucho éxito a los nominados, porque su éxito será el éxito del proceso electoral y, por supuesto, que contarán con la cooperación del Comisionado Electoral y la Comisionada Electoral Alterna del Partido Independentista Puertorriqueño.

Son nuestras palabras, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Senador, señor portavoz Javier Hernández.

SR. HERNÁNDEZ ORTIZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En la tarde de hoy se traen estos nombramientos para Presidente y Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, ambos nombramientos, ambas personas van a dirigir este ente electoral del país que por los pasados años ha estado lleno de controversias y sinsabores, precisamente por actos y en ocasiones por inacciones de quienes dirigen este aparato electoral.

Como mínimo, compañeros y compañeras, debimos todos tener la oportunidad de examinar a estos dos nominados en un proceso participativo como lo es la vista pública, donde todas las delegaciones de todos los partidos que representan realmente al país en este Senado tuvieran la oportunidad de hacerles preguntas a los nominados, para ver específicamente cuál es el plan que tienen ambos una vez asuman la posición de Presidente y Presidenta Alterna de este ente electoral.

De hecho, escuchando las ponencias que me precedieron, preguntaba yo si no era importante por todas las situaciones que hemos vivido los compañeros y compañeras y que ha vivido el país, si no era importante saber el plan específico de ambos Presidente como Presidenta Alterna de cuál sería el plan para evitar precisamente el vivir las circunstancias que vivió el país en la elección anterior.

Yo tuve la oportunidad de revisar ambos informes, tienen, el de la Presidenta Alterna tiene dos páginas y el del Presidente de la Comisión tiene tres. ¿Pero saben qué? En ninguno, en ninguno de los dos informes había un plan definido de qué se va a hacer para evitar vivir las circunstancias que vivimos en noviembre. Todo lo que se ha presentado aquí, los nominados no presentaron ningún plan. Así que estamos haciendo un voto a la suerte del país.

Estas dos designaciones, compañeros y compañeras, todos sabemos que no son nuevas. De hecho, en el pasado, específicamente en la Decimonovena Asamblea Legislativa, ambos nombramientos habían sido enviados. En el caso de la designada a Presidenta Alterna, incluso fue derrotada en la Cámara de Representantes. Estos dos nombramientos, dos nombramientos de los cuales no hubo consenso, aún cuando históricamente ese siempre ha sido lo que se ha buscado desde la Comisión Estatal de Elecciones. Estos dos nombramientos se hacen sin el consenso de los partidos.

Ante ello y ante todas las circunstancias que hemos planteado y hemos vertido en nuestro turno, señor Presidente, nuestra Delegación del Partido Popular Democrático votará en contra de ambos nombramientos para dirigir la Comisión Estatal de Elecciones.

Esas son nuestras palabras, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias al compañero Portavoz.

Le corresponde el turno al señor senador Toledo López. Adelante, señor Senador.

SR. TOLEDO LÓPEZ: Gracias, señor Presidente.

El Juez Jorge Rivera Rueda yo no tengo la más mínima duda que tiene una trayectoria admirable en el servicio público y tiene un récord intachable no solamente de vida personal, sino también de vida profesional. Un jíbaro como todos nosotros de Ponce, estudiante de la Universidad de Puerto Rico, estudió Contabilidad e inmediatamente comenzó su vida profesional, montando un negocio propio, como mucha gente aquí en Puerto Rico que busca prosperar. Siguió estudios en Finanzas, naturalmente completó su *Juris Doctor* en la Pontificia Universidad Católica, ejerció en la práctica privada, fue profesor y su récord profesional nos deja ver que se ha involucrado en el sector

público no solamente aquí en esta Asamblea como asesor legislativo cubriendo temas muy variados, sino también como Asesor Legal de la Oficina del Contralor Electoral.

Lo que quiere decir que no estamos hablando de una persona ajena al trabajo para el que está llamado. No es una persona ajena al trabajo que va a ejercer. Además de crear y redactar la reglamentación interna para la operación administrativa de la Oficina del Contralor Electoral, también trabajó con reglamentos aplicables a los comités de campaña, a los comités de acción política, reglamentos aplicables a candidatos y candidatas, funcionarios electos, partidos políticos, entre otros.

Lo que quiere decir que trabajó directamente en el diseño y desarrollo de toda esa función fiscalizadora, que naturalmente tiene que conocer para ejercer el trabajo para el que ahora está llamado. Vuelve a la agencia legislativa, perdón, a la Rama Legislativa posteriormente y en el 2020 es nombrado Juez Superior. Ahí trabajó en una Sala Civil contenciosa y durante ese tiempo también es asignado Presidente de la Comisión local del Precinto 63 del Municipio de Juana Díaz para atender asuntos electorales como Juez.

En el año 2024 lo trasladan a la Región Judicial de Caguas, donde otra vez es designado Presidente de la Comisión local, en esta ocasión del Precinto 81 del Municipio de Aguas Buenas para ejercer deberes y funciones presidiendo la Comisión local durante los procesos electorales.

Es de fácil corroboración que en el proceso de evaluación que hizo la Comisión de Evaluación Judicial obtuvo *flying color*, eso en español quiere decir que salió bien. Y además de eso, hay que recalcar para aquellos que cuestionan la integridad de una persona, cuya integridad no es cuestionable, que en los criterios de evaluación sobre integridad que aparecen en esa misma evaluación obtuvo el máximo nivel de cinco (5), la escala más alta de evaluación.

Dicen que "la ley es razón libre de pasiones", y eso lo dijo Aristóteles. La ley es clara en establecer cuál es el procedimiento para nosotros seleccionar al Presidente o Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y todos ustedes se imaginarán que Nicolás Maduro no es elegible para eso, tampoco lo es Díaz Canel, mucho menos Daniel Ortega, no lo son.

Lo que quiere decir que tengo que escoger a alguien del terruño, y quién mejor que alguien que además de tener la integridad, la capacidad profesional, también tiene la experiencia dentro de ese mismo lugar que va a presidir. Trabajó en la redacción de esos mismos instrumentos que va a implementar. El problema es, para beneficio de todas y todos y de estos puertorriqueños y puertorriqueñas que me escuchan, que la ley dice que si los Comisionados Electorales no se ponen de acuerdo en cuanto a quién va a presidir la Comisión.

Porque sepan todos que esto es un voto unánime. Esta decisión pasa a la Rama Ejecutiva para que haga un nombramiento y tiene que ser aprobado por dos terceras (2/3) partes de la Legislatura. La ley es razón libre de pasión. No se equivoque. Este Senado lo que está haciendo es implementando la ley que está vigente en este momento. No estamos haciendo nada distinto. Y lo estamos haciendo con un hombre que está cualificado profesional y personalmente para hacerlo.

Oponerse por oponerse es la costumbre de algunos. Oponerse por oponerse es lo que típicamente ocurre. Y a mí me sorprenden las palabras del compañero de la Minoría Independentista, cuando dice que a voz de la compañera Soto Aguilú ha decidido votar en contra. Como si no le fuera a votar en contra desde antes. Porque es que mi compañera Roxanna Soto Aguilú ha tenido el poder de cambiar la mente de un compañero del Partido Independentista, que aparentemente iba a votarle a favor a este nombramiento hasta tres (3) o cuatro (4) minutos antes de su alocución. Le iba a votar en contra porque quiere y está en todo su derecho de hacerlo y le respeto ese derecho. Lo respeto como respeto el derecho de cada compañero y compañera de la Minoría de votarle en contra al nombramiento porque les da la gana. Pero díganlo, díganlo así.

Porque integridad no le falta al nominado, capacidad no le falta al nominado, experiencia no le falta al nominado, relación con la Comisión Estatal de Elecciones claramente no le falta al nominado. Puertorriqueño, ciudadano americano es. Por lo tanto, tiene las cualificaciones necesarias para ejercer el puesto para el cual fue nominado y claramente la sobrepasa, probablemente la sobrepasa más que muchos de los que estamos parados aquí en este Hemiciclo pasando juicio sobre sus cualificaciones.

Y eso tiene que quedar claro, porque muchas veces queremos pasar juicio sobre la capacidad y la integridad de las personas, cuando probablemente nosotros no pasaríamos ese mismo crisol. Y es fácil llenarse la boca, votar en contra porque me da la gana es legítimo, pero dígalo, dígalo de esa forma y cuando tenga razones para hacerlo también dígalo.

Yo le aseguro, le aseguro que tres punto dos (3.2) millones de puertorriqueños dependen de la decisión que nosotros vamos a hacer ahora, aunque no todos son electores. Y que los puertorriqueños y las puertorriqueñas no solamente los que corrimos para algún escaño pasamos las vicisitudes de la elección pasada, todos los que estamos aquí pasamos por eso, todos vivimos esa experiencia y todavía no ha pasado tiempo suficiente como para que esa llaga quisquillosa se nos haya quitado.

Estamos buscando una mejor Comisión. Estamos buscando un mejor lugar para que estas decisiones en las que se ensalza la democracia de Puerto Rico se puedan tomar con personas capacitadas para hacerlo. Y todos sabemos -como el compañero muy bien dijo- que ellos allá en la Comisión donde la ley establece que la decisión se toma en primer orden, de por sí no iban a ponerse de acuerdo porque ya ellos iban listos a votarle en contra, no importa qué.

Y podíamos estar años en esta, conseguimos, identificamos y convencimos a un juez del calibre del Juez Jorge Rivera Rueda y aquí en este Senado lo vamos a confirmar no porque nos da la gana, sino porque tiene las cualificaciones, tiene las capacidades, tiene la preparación y claramente está dispuesto para hacer el trabajo. Por esa razón es que le vamos a votar a favor.

Esas son mis palabras, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Senador Morales.

SR. MORALES RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente y demás compañeros del Senado.

La Comisión Estatal de Elecciones en el pasado ha sido una de esas pocas instituciones donde la ciudadanía ha depositado la confianza en esa institución, gracias a que ha tenido buenos Presidentes, como el Juez Melecio y otros que podemos señalar. Y yo creo que ya es hora de que le devolvamos esa confianza al pueblo de Puerto Rico, mediante un nombramiento de excelencia, como estas dos personas, en especial a Rafael Rivera Rueda.

Los que estamos aquí no podemos olvidar de que estamos aquí cumpliendo con lo que establece el Código Electoral que en ausencia de consenso en la Comisión tiene que venir al Legislativo. No es un capricho que estemos aquí evaluando estos nombramientos porque a nosotros nos da la gana. Entonces, hay compañeros que olvidan que el pasado cuatrienio se sometieron cinco (5) nombres, cinco (5), pero todos los rechazaron. Recuerden que estas son las personas que en contra de todo y a favor de nada.

La única manera que ellos pudieran estar votando a favor de un nominado para la Presidencia de la Comisión es si nosotros designamos a Elvis Amoroso, que es el que dirige los procesos electorales allá en Venezuela, yo creo que es la única manera que los independentistas pudieran votar a favor de ese nominado, pero ya sabemos las razones, Amoroso, según tiene el apellido así es, amoroso.

Entonces yo los escucho preocupados porque Roxanna, la compañera Soto Aguilú dijo o dejó de decir. Lo que pasa que no son consistentes, prohibido olvidar. Ustedes se acuerdan cuando el

Partido Popular enmendó la Ley Electoral para nombrar nada más y nada menos que a la Comisionada Alterna del Partido Popular como la Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y no hubo preocupación porque era Popular y porque venía de las filas del Partido Popular.

¿Los amigos independentistas saben qué? Le votaron a favor a ese nombramiento. No había preocupación alguna. Ahora sí hay preocupación. Esa es la doble vara que tienen. Así de hipócritas son. Vienen aquí y hablan. Ah, que son PNP, que es Popular. Pero cuando Liza García salió de la fila del Comisionado Electoral del PPD ellos le votaron a favor. Ahí no había preocupación alguna. ¡Qué cosa, ah! Así es la vida.

Hoy nosotros tenemos con este voto que vamos a estar brindándole al señor Juez Rivera Rueda, nosotros vamos a garantizar de que la Comisión vuelva a las manos que tiene que estar, manos de que no volvamos al pasado, no volvamos a lo que ocurrió en el 2024 que fue una mala experiencia. Y yo creo que no esperaría menos, de los populares yo hubiese esperado que tuvieran la misma consideración que tuvieron en el pasado.

Entonces mencionan de que estos son candidatos reciclados. La verdad es una y no olvidemos nunca los hechos. La señora, la licenciada Irizarry y Rivera Rueda, Tatito Hernández cuando fue Presidente de la Cámara despachó, descargó el nombramiento de Irizarry en cinco (5) minutos. Le llegó la nominación del señor Gobernador y le dio de aquellas pataletas que le daban, bajó el nombramiento en contra, no fue ni tan siquiera evaluado.

Este Senado ha sido responsable y hay un informe que algunos no lo quieran leer, pues eso es su problema que no lo quieren leer, no quieren ver la realidad. Por eso andan perdidos siempre en el espacio porque ni eso hacen ni leen. Mire, tienen más experiencias que otros que estuvieron en otras administraciones, 23 años en el servicio público Rivera Rueda en diferentes posiciones, estuvo aquí en el Senado, estuvo en la empresa privada, intachable resumé, tiene más experiencia que otros que están por aquí, léanlo, lean el informe. Usted dijo que tenía tres (3) páginas, léalo rapidito, en diez (10) minutos usted lo lee y puede comprobar que es una persona capacitada y con experiencia.

Fue Presidente de dos Comisiones, una en Juana Díaz y el cuatrienio pasado estuvo en Aguas Buenas. Y busquen las decisiones del Juez a ver si hay algo que manche su reputación y su experiencia laboral. Ninguna. Una persona justa, eso lo dicen los datos. Pero aquí no importa si nominamos a uno, a dos, a tres. ¿Ustedes saben qué? Si nominamos a mil, a mil los populares y los independentistas le votan en contra. No le importa. No le importa.

Ustedes los han escuchado quejándose del Código Electoral. ¿Se acuerdan? Nosotros firmamos unos acuerdos con ellos el pasado cuatrienio, Thomas Rivera Schatz estuvo ahí, y después se echaron pa'atrás, dieron ese riversazo que siempre están acostumbrados a dar. Entonces después vamos a quejarnos, porque lo de ellos es la queja. Pero tuvieron la oportunidad los populares de enmendar aquel Código Electoral que tanto criticaban, pudimos haber nombrado a aquel Presidente de la Comisión y no lo hicimos. Ustedes. ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es la queja?'

Y qué bueno que le desean lo mejor a Rivera Rueda. Yo también le deseo lo mejor. Yo espero, yo espero que el desempeño del Juez Rivera Rueda en la Comisión Estatal de Elecciones sea el mejor. Ustedes saben que yo trabajé allí en la Comisión Estatal de Elecciones y nosotros -vuelvo y repito, no me voy a cansar de decirlo- tenemos que devolverle el brillo que siempre había tenido la Comisión Estatal de Elecciones.

Y en la Comisión Estatal de Elecciones, para que sepan, allí trabajan PNP, populares e independentistas, los conozco, gente muy comprometida, gente muy responsable, muy seria, pero necesitamos una persona que dirija los destinos y que tome la decisión que tenga que tomar en el momento que las tiene que tomar. Lamentablemente ese no fue la experiencia con la señora, la

licenciada Padilla, al cual le agradecemos que haya estado en ese puesto de manera interina, yo sé que no es fácil, pero lamentablemente no pudo tener un buen desempeño desde la Comisión Estatal de Elecciones.

Y si nosotros aspiramos a tener democracia como lo hablamos en un sinnúmero de ocasiones, pues este es el momento, el momento de devolverle a la Comisión su brillo. Y yo creo que es responsabilidad de todos y de todas de que nosotros emitamos un voto hoy responsable aquí en el Senado de Puerto Rico, votando por estas dos personas. El tiempo dirá, ustedes van a tener allí su representación y ustedes conocen muy bien el funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones.

Pero lo que ocurrió en el 2024 difícil, muchos se encargaron aquí de desprestigiar la Comisión Estatal de Elecciones y tal vez por eso no hubo más jueces disponibles, haciéndose disponibles para presidir la Comisión Estatal de Elecciones, porque ustedes mismos se encargaron de eso. Era una agenda lo que había allí en la Comisión de desprestigiar los procesos y de desprestigiar a los empleados PNP, populares, independentistas, de todos los partidos, porque la Comisión, vuelvo y repito no trata solamente del PNP, aquí hay gente que trata de decir que la Comisión es del PNP, no aquí hay representación en cada oficina y ustedes lo saben decir lo contrario es faltarle a la verdad. Allí hay balance político en todas las oficinas, desde la seguridad hasta la presidencia.

Entonces hablan de que esta decisión era del Ejecutivo, entonces yo recordaba cuando había los revoluces de las elecciones, y le señalaban a Pedro Pierluisi, eso es problema de Pedro Pierluisi, mira el revolú que tiene la Comisión Estatal de Elecciones. Pero, ven acá si ahorita yo escuché que eso no era parte del Ejecutivo, que esa era una oficina totalmente aparte, segregada, que nada tenía que ver con el Ejecutivo. Tenemos que ser consistentes cuando hablemos y decir las cosas como son.

Así que, compañeros y compañeras, yo les invito hoy a que hagamos un voto a favor de la democracia, poniendo dos (2) personas que cuentan con las capacidades, cuentan con la experiencia y tienen el interés de dirigir los destinos de la Comisión Estatal de Elecciones para garantizarles que en las próximas elecciones cada voto que se emita es un voto que se va a contabilizar tal y como lo hizo la intensión del elector, y que lo que ocurrió lo otra vez en el 2024 que lo decía la compañera, no fue hasta el 30 de diciembre que ella supo que se iba a sentar aquí con nosotros, esas son las cosas que no deben ocurrir. Para que eso no ocurra, es bien fácil compañeros y compañeras vamos a darle un voto a Rivera Rueda y a la licenciada Irizarry.

Esa son mis palabras.

SR. PRESIDENTE: Senadora Rodríguez Veve.

SRA. RODRÍGUEZ VEVE: Muchas gracias, señor Presidente.

Mientras hoy discutimos el nombramiento del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene ante su consideración un caso presentado por Proyecto Dignidad contra la Comisión Estatal de Elecciones, en el que planteamos como institución política la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones del Código Electoral vigente, que entendemos viola el principio de igualdad electoral tratando de forma desigual a todos los partidos que tienen franquicia electoral, disponiéndose que ciertos partidos con franquicia electoral podrán participar de la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones y por lo tanto, de la toma de decisiones, mientras que otros partidos, aunque también tiene franquicia electoral no podrán participar del día a día de la toma de la Comisión Estatal de Elecciones. Y ese es el caso de Proyecto Dignidad, que ha quedado relegado por disposiciones del Código Electoral de participar en igualdad de condiciones y por lo tanto, de representar en igualdad de condiciones a los constituyentes y a los electores, a quienes nosotros representamos ante la Comisión Estatal de Elecciones.

Es nuestra postura, que limitar y tratar de manera desigual la representación de Proyecto Dignidad en la estructura de la Comisión, como ya dije, violenta de principios de igualdad electoral.

Y en esta ocasión debo decir, tenemos ante nuestra consideración un vivo ejemplo de las implicaciones y de las consecuencias de estas disposiciones inconstitucionales. Lo acabamos de experimentar precisamente con lo atinente al nombramiento de la Presidencia de la Comisión. Proyecto Dignidad no pudo participar en la discusión en la que sí participaron los demás Comisionados Electorales y que estuvo discutiendo los candidatos.

Ahora no habiéndose logrado un consenso en la Comisión, tenemos ante a consideración del Senado ese nombramiento. Dejo esto para récord, para hacer constar mi voto en contra del nominado por estas circunstancias, porque entendemos que Proyecto Dignidad ha quedado relegado del proceso cabal de este asunto y obviamente habiendo un caso presentado por nuestra institución ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y estamos pendiente a este caso de dilucidación, es nuestra postura que en esta ocasión emitiremos un voto en contra.

Gracias, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Voy a pedirle a la compañera Vicepresidenta que presida para cerrar el debate.

- - - -

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Marissa Jiménez Santoni, Segunda Vicepresidenta.

- - - -

SR. RIVERA SCHATZ: Esta bien, gracias.

SEGUNDA VICEPRESIDENTA: Señor Presidente.

SR. RIVERA SCHATZ: Buenas tardes, compañeros y compañeras.

Hoy ante nuestra consideración los nombramientos del Presidente en propiedad Jorge Rivera Rueda y de la Presidenta Alterna, Cyndia Irizarry para la Comisión Estatal de Elecciones, Cyndia Irizarry para la Comisión Estatal de Elecciones, y yo quisiera antes de entrar en detalles sobre la consideración de estos nombramientos, plantear lo siguiente. Yo escuché al compañero del Partido Independentista y a otros compañeros decir que tanto el juez Rueda como, Rivera Rueda como la distinguida juez designada para la Presidencia Alterna, pues ya habían sido rechazado por los Comisionados Electorales de los partidos políticos.

Si esa fuera la norma, entonces no hubiesen postulado a Rubén Berríos cinco (5) veces, lo rechazaron la primera (1ra.), la segunda (2da.), la tercera (3ra.), la cuarta (4ta.) y lo volvieron a postular en la quinta (5ta.) y Juan Dalmau en la primera (1ra.), la segunda (2da.), la tercera (3ra.), y le la vamos a dar cuarta (4ta.) también. Así que si el criterio es ese, tomen nota para que se lo apliquen allá en el Partido Independentista.

El Gobernador previo Pedro Pierluisi, intentó ante la ausencia de consenso en los Comisionados intentó que se cubriera la vacante de la Presidencia y en la Legislatura pasada donde había legisladores de varios partidos políticos, no se logró el consenso, tampoco luego de la Comisión Estatal de Elecciones. Y, es importante que se ponga en perspectiva lo siguiente, miren, el Código Electoral originalmente hace muchos años, solamente exigía que fueran los Comisionados Electorales los que decidieran si finalmente había Presidente o no, no llegaba a la Legislatura y nadie más y en ausencia de consenso de los Comisionados, se quedaba el Vicepresidente en funciones, por unos términos que establecía la Ley.

Posteriormente se enmienda y en el 2011, se mueve -¿verdad?- el tema para que en ausencia de los Comisionados llegara hasta la Asamblea Legislativa, pero se requería dos terceras (2\3) partes, dos terceras (2\3) partes de la Asamblea Legislativa. Y qué quiere decir eso compañeros. Que ese

diseño del Código Electoral en el 2011 pretendía que dentro de esas dos terceras partes (2\3), hubiera votos de la Minoría, porque no han sido tantas las ocasiones en las que ha aplicado la Ley de Minoría y que un solo partido tenga dos terceras (2\3) partes.

Así es que el Partido Nuevo Progresista en el 2011, siguiendo la tradición del consenso trató de que con dos terceras partes (2\3), que obviamente hubiese incluido senadores de minoría, se seleccionaran en ausencia de consenso en los Comisionados Electorales ante la Asamblea Legislativa.

Pero, ¿qué pasó en el 2013? El Partido Popular enmendó el Código Electoral para que fuera mayoría simple y entonces designaron a la que había sido Comisionada Alterna y Vicepresidenta del Partido Popular, con mayoría simple, esa es la historia, esa es la historia en términos de cómo se selecciona un Presidente. El cuatrienio pasado, como les dije el Gobernador sometió varios nombramientos y no tan solo no los atendieron en la Comisión ni aquí, sino que fueron al tribunal para impugnar que el Tribunal Supremo decidiera, en ausencia de la Comisión y Legislatura, quién iba a presidir la Comisión Estatal de Elecciones, porque el Código Electoral del 2020, que tanta gente critica o que alguna gente critica provocaba tres (3) escenarios donde se intentaba lograr el mayor consenso y la mayor transparencia posible, pero aun así, algunos compañeros de la minoría lo criticaban y hacían señalamientos contra la manera de seleccionar al Presidente.

Y entonces, luego del 2020, de esa Asamblea Legislativa y de todos los discursos que hubo, pues entonces el Código Electoral vigente establece que son dos terceras (2\3), partes y adivinen qué, el PNP tiene dos terceras (2\3), partes diecinueve (19) senadores y están aquí listos para votar y entonces, ¿van a culpar al PNP? No, no, no. El pueblo de Puerto Rico nos eligió y quizás algunos compañeros se irritaron un poco con el discurso de mi compañera Soto Aguilú, porque dijo que el Juez era un PNP de pura cepa, bueno, a mí no me irritó eso. Pero hablando de pura cepa, en la campaña pasada vimos cómo se transformaba un independentista de pura cepa, alegado, a esconder la independencia, a esconder los vínculos con Nicolás Maduro y con todos los dictadores y a quererse vender como más americano y más administrador de la Colonia del mundo. Para que ustedes vean -¿verdad?- como son las cosas.

Así es que, sobre si debe comportarse como un Juez Superior, que fue uno de los planteamientos que hizo mi compañero del Partido Independentista, bueno, pues claro por eso es que el Código Electoral pide que sea un juez, porque además de los rigores del Código Electoral, los rigores de su cargo le exigen un comportamiento y ni el nominado a Presidente en propiedad Rivera Rueda ni la nominada a Presidenta Alterna han tenido querellas ni señalamientos ni manchas de ninguna clase. De hecho, el compañero del Partido Independentista dijo que el manejo del Código Electoral tiene manchas que afectaron al PNP. Bueno, yo no sé -¿verdad?- cómo está su campo visual, pero en el 2016, en el 2020 y en el 2024 ganó el Partido Nuevo Progresista.

Sobre si la Comisión Estatal de Elecciones es politizada, pues claro que sí, si la definición de lo que es la Comisión es los Partidos Políticos allí representados lástima que no lo fuera, pues claro que está politizada y cada Comisionado Electoral tiene que representar los intereses de su Partido y en aras de proteger el interés público, en ausencia de consenso entre los partidos políticos pues el Presidente decide si algún Comisionado o parte afectada por las atenciones del Presidente, está inconforme pues puede ir a la Rama Judicial para impugnarlo, ya ha ocurrido en múltiples ocasiones. Así que tiene más que espacio para revisarse cualquier determinación que sea prudente así hacerlo.

Escuché a mi compañero del Partido Popular decir que en los informes no hay un plan definido de ninguno de los nominados. Pues claro que no. Los informes de los nominados no son para eso. No hay un informe que diga cuál es el plan del nominado, ni uno ni ese ni ninguno, porque no es para eso. Ahí se establece la trayectoria profesional, la revisión que hubo de documentación, de credenciales -¿verdad?- de investigación de campo que se hace y se somete al Pleno.

Así que por supuesto que no hay un plan definido ahí, pero con todos los defectos y virtudes que pueda tener el Código Electoral y con todos los defectos y virtudes que pueda tener el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que alguna gente le señala, yo le doy gracias a Dios que nuestra Comisión Estatal de Elecciones no se comporta como el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, esos ladrones, esos malditos comunistas ladrones, se robaron una elección del pueblo de Venezuela descaradamente, yo no escuché un solo Independentista levantar la voz, es más, aquí le votaron en contra a una Resolución para censurar el secuestro de una líder de oposición.

Así que los ladrones de Nicolás Maduro aquí no están y por si fuera poco, por si fuera poco, el Tribunal Supremo de Venezuela adivinen qué, dijo que estaba todo perfectamente bien, imagínense ustedes si es un dictador narcotraficante, criminal, asesino y maldito como Nicolás Maduro que no tiene …, los matan aquí pueden protestar, aquí los comunistas, los anticapitalistas y to' esos rebeldes sin causa pueden gritar, porque la ciudadanía americana los protege, la ciudadanía americana los defiende y no permite abusos contra nadie. Y esa es la diferencia entre una patria nueva que alguna gente promovía y una patria libre, justa y democrática como es nuestra Nación de los Estados Unidos de América y modelo como que es Puerto Rico. Esa es la diferencia.

Así es que mientras aquí estamos discutiendo este asunto, en la Cámara también lo están haciendo, así que hoy todo parece indicar que vamos a complacer a la honorable Jueza Jessica Padilla de que regrese al Estrado, para que vean todos los buenos propósitos que tiene este asunto, ella se quería ir, hoy se va, hoy o en los próximos días.

Así es que desde siempre el Código Electoral ha establecido formas para escoger los Presidentes, el PNP nunca ha obtenido ventaja, ha procurado que sea transparente, más de dos terceras (2\3), partes para que haya participación amplia, siempre el PNP ha sido así, ese es nuestro récord, el Partido Popular no pude decir eso y el Partido Independentista pues nunca ha tenido un *break* y no creo que lo vayan a tener, así que no podrán plantearlo. Y yo les tengo que decir, que yo conozco al Juez Rivera Rueda y a la dama que también está siendo nominada y yo estoy completamente convencido que si algún candidato del PNP o el PNP tiene un planteamiento en el cual no tuvieras la razón, yo les aseguro a ustedes que tranquilamente le quitaba la razón al Partido Nuevo Progresista, sin ningún tipo de problema. Si un Partido de la oposición tuviera razón tranquilamente le daría la razón, porque es un hombre íntegro y cabal, una persona decente, trabajadora, de familia, que por razón de que hoy viste una toga, pues tiene que acogerse a eso que ellos llaman la Dignidad del Silencio y que no puede entonces defenderse de los ataques políticos que le hacen, pero aquí ninguno de la oposición, ninguno pudo traer un solo señalamiento ético, profesional, moral y de ninguna índole contra ninguno de los dos (2) nominados, ¿por qué? Porque no existen.

Y a los compañeros que tienen sillas en la Comisión Estatal de Elecciones que son el Partido Independentista y el Partido Popular, pues sus respectivos presidentes le dieron instrucciones a su Comisionado cómo votar, en contra y a los senadores también le dijeron lo mismo. Entonces vienen aquí como que si no, hubiésemos hecho una evaluación profunda del …, pamplinas, hubiesen votado como les dijo el presidente y Comisionado inconsecuente de Estados Unidos, Pablo José Hernández, fue lo que les dijo en el caso de Salud y fue lo que les dijo en otras cosas.

Así es que nosotros, la Delegación nuestra no por lo que dicen, sino por lo que hace el día que un nominado llegue aquí y no tenga las credenciales, nosotros le votamos en contra, sea el que sea, por más PNP, por más simpático, por más formidable que pudiera parecer, mis compañeros y compañeras del Senado, si hay un nominado de la presente Gobernadora o de cualquiera otro, como en el pasado ocurrió no le votamos a favor y le decimos con mucho respeto, retírelo o lo traemos y lo atendemos. Porque después de todo alguna gente quiere demonizar los Partidos Políticos, alguna gente quiere demonizar los procesos políticos, pero los Partidos Políticos son instrumentos que crea la propia

gente, que crea el pueblo. Don Luis Ferré cuando fundó mi Partido, lo fundó porque entendía que las cosas tenían que cambiar en Puerto Rico y se enfrentó a un Partido Popular que tenía hegemonía política y dominaba en todo y participó en una consulta plebiscitaria y no tenía posibilidades y luego de perder el plebiscito pues, fundó el PNP y la gente creía que no tenía probabilidades, la oposición política y se alzó con una gran victoria en el 68 y hoy por hoy somos el Partido Político más grande y el Movimiento Ideológico más fuerte en Puerto Rico.

Así es que la consideración del Código Electoral que conversaba ahorita con el compañero Juan Dalmau, José Luis Dalmau nosotros no tenemos problema en revisar las enmiendas que aprobamos en el cuatrienio pasado, son buenas, los que no las quisieron aprobar fue el Partido Popular en la Cámara, tratamos de hacerlo, fue el Partido Popular que no quiso.

Así que cuando se atienda el Código Electoral, pues por supuesto todos van a tener oportunidad de participar y las enmiendas que sean buenas, vengan del Partido Independentista, de Proyecto Dignidad o de cualquier otro Partido, bueno pues también. Y sobre el caso que está pendiente del Proyecto Dignidad, bueno ya no prevalecieron, ya han perdido ese caso, no es que el PNP tenga nada que ver con eso es que ya perdieron en las Elecciones y perdieron el caso y nosotros, pues no nos oponemos a que el Tribunal Supremo resuelva como lo entienda y si decide el Tribunal Supremo darle una silla pues allí en la Comisión bueno, y si no decide hacerlo, pues también. Aquí somos diecinueve (19), todos los que estamos aquí le dimos una nueva mayoría nos las dieron a nosotros, al Partido Nuevo Progresista y la dio el pueblo de Puerto Rico y nosotros honrando esa confianza y agradecidos por esa confianza, trabajamos con total transparencia y procuramos que en los procesos todo el mundo tenga la participación y la compañera del Proyecto Dignidad dijo que no tuvieron oportunidad en la Comisión Estatal de Elecciones, pero aquí la tuvieron, aquí la tuvieron y en la Cámara también. ¡Ah! que son uno solo, bueno eso fue el pueblo, de Puerto Rico.

Y nosotros en el caso de Proyecto Dignidad, no hemos tenido ningún problema en reconocerle las aportaciones que ha hecho aquí la compañera, compartimos coautorías con muchos proyectos -¿verdad?- y yo le agradezco eso mucho a ella, cosa que no le reconoció el presidente de su Partido el otro día cuando habló del Proyecto Libertad Religiosa, que se atribuyó él, ese proyecto ni siquiera tuvo la gentileza de reconocerle a la compañera que era coautora de esa medida.

Así que cuando quieran hablar de la historia de los Partidos Políticos, me dicen dónde y cuándo con mucho gusto y cuando quieran -¿verdad?- discutir temas electorales, también con mucho gusto nos dicen dónde y cuándo y sin lugar a dudas muy pronto vamos a atender enmiendas al Código Electoral, teniendo un nuevo Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, una nueva Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones y el mejor ánimo para discutir que el elector puertorriqueño, como dijo mi compañera Soto Aguilú.

El Código Electoral del 2020 eliminó el protagonismo de los Partidos y se los dio al ciudadano y diversificó todos los procedimientos al punto de que eran muchísimas más las opciones para el elector poder votar, voto ausente, voto adelantado, entre muchas otras cosas, para de esa manera darle la comodidad al elector en los procesos preleccionarios, preprimarista y obviamente en las primarias y en las Elecciones. Y ese debe ser el norte que cada elector y cada uno de nosotros elector sienta la tranquilidad y confianza de que el voto que emitió va a ser contado tal cual fue emitido y si la mayoría pertenece a otro Partido, perfecto, porque cada senador que hay aquí representa un Partido Político, excepto el compañero independiente que también tiene unos electores que le dieron su voto y se validaron, se sostuvieron.

Así que aspiremos a que la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico no se parezca nunca jamás al Consejo Nacional de Electores de Venezuela, aspiremos el Tribunal Supremo de Puerto Rico

nos parezca nunca al Tribunal Supremo de Venezuela y aspiremos que en Puerto Rico no haya nunca jamás un maldito dictador, delincuente, criminal y narcotraficante como Nicolás Maduro.

Son mis palabras señora Presidente.

SEGUNDA VICEPRESIDENTA: Gracias, Presidente.

- - - -

Ocupa la Presidencia el señor Thomas Rivera Schatz.

- - - -

SR. MORALES RODRÍGUEZ: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor….

SR. MORALES RODRÍGUEZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se levante la Sección 22.2 del Reglamento del Senado y se apruebe para continuar los trabajos hasta luego de las seis de la tarde (6:00 p.m.).

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.

Señor Portavoz.

SR. MORALES RODRÍGUEZ: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto, no, no, tenemos el nombramiento.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico otorgue su consentimiento al nombramiento del honorable Juez Jorge Rafael Rivera Rueda como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del honorable Jorge Rafael Rivera Rueda como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Confirmado el Juez Jorge Rafael Rivera Rueda como nuevo Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

Notifíquese a la señora Gobernadora de Puerto Rico.

Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe sometido por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la honorable Cyndia Enid Irizarry Casiano, para el cargo de Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones:

“INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 15, aprobadas el 16 de enero de 2025, vuestra Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento de la Honorable Cyndia Enid Irizarry Casiano como Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones.

El pasado 2 de abril de 2025, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Honorable Jueza Cyndia Enid Irizarry Casiano como Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones.

La Ley 58 -2020, según enmendada, conocida como "Código Electoral de 2020" establece en su Artículo 3.7 que los Comisionados Electorales propietarios nombrarán un Presidente y un Alterno al Presidente conforme a esta Ley, quienes actuarán como representantes del interés público en la Comisión. Corresponderá al Comisionado Electoral del Partido Estatal de Mayoría, cuyo partido hubiere obtenido en la anterior Elección General la mayor cantidad de votos íntegros en la Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta, proponer a los restantes Comisionados propietarios el o los nombres de los candidatos a los cargos de Presidente y de Alterno al Presidente. Si al término de treinta (30) días naturales de haber surgido una vacante en el cargo de Presidente y/o del Alterno del Presidente no se lograra la unanimidad de los comisionados electorales propietarios para cubrir la vacante, entonces el Gobernador deberá hacer el nombramiento del o los candidatos para cubrir el o los cargos vacantes. El Gobernador deberá hacer estos nombramientos no más tarde de los quince (15) días naturales a partir del vencimiento del término anterior. Tales nombramientos requerirán el consejo y consentimiento de dos terceras partes (2/3) del total de los miembros de ambas cámaras en la Asamblea Legislativa, no más tarde de los quince (15) días naturales a partir del recibo del o los nombramientos otorgados por el Gobernador, según corresponda.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Orden Administrativa 2025-06, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación de la nominada.

I. HISTORIAL DE LA NOMINADA

La Jueza Cyndia Irizarry Casiano nació en el Municipio de Mayagüez. Actualmente reside en el municipio de Arecibo.

Del historial educativo de la nominada se desprende que obtuvo un Bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Luego completó el grado de *Juris Doctor* en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce.

La Jueza Cyndia Enid Irizarry Casiano ha laborado en el servicio público por los pasados 29 años. Desde diciembre del año 2012 y hasta el presente ocupa el cargo de Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. Actualmente, preside la Sala Especializada en Violencia Doméstica de la Región de Arecibo. Además, es la Coordinadora de los Asuntos Municipales para toda la región. Labora también para el Instituto de Estudios Judiciales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como conferenciante en academias para entrenar jueces de Latinoamérica en temas de violencia doméstica. Por otro lado, la Jueza ha dirigido múltiples agencias en el gobierno central, tales como la Oficina De Servicios con Antelación al Juicio, la Administración de Instituciones Juveniles y la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera

A su vez, la jueza Irizarry Casiano ha laborado en procesos electorales durante los pasados 12 años ha presidido las Juntas Locales de Hatillo, Morovis y Ciales.

II. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA

La Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e investigación de campo.

(a) Análisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado realizó un análisis de los documentos financieros sometidos por la Hon. Juez Irizarry Casiano, quien sometió evidencia de su Informe de Divulgación Financiera de la Rama

Judicial. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Hon. Juez Cyndia Irizarry Casiano, ocupar el cargo de Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones.

(b) Investigación de Campo:

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Hon. Jueza Cyndia Irizarry Casiano, cubrió diversas áreas, a saber, entrevista con la nominada, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal y Federal.

III. CONCLUSIÓN

Luego de realizar una evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial académico y profesional de la nominada demostró la capacidad, dedicación y compromiso de ésta en su desempeño en la Rama Judicial, y su experiencia en atender asuntos electorales.

El examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que la nominada cumple con todos los requisitos constitucionales, académicos y de carácter moral para ejercer el cargo al que se le designa y tiene total compromiso y responsabilidad con la Rama Judicial.

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Honorable Cyndia Enid Irizarry Casiano como Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos"

SRA. SOTO AGUILÚ: Señor Presidente, para una autoexpresión.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Tengo la compañera Soto Aguilú. Adelante compañera.

SRA. SOTO AGUILÚ: Una de las cosas que siempre se dice en el servicio público cuando una mujer va a dirigir trabajos, es que se molestan de que es abogada. Si entramos en la palestra política, ¡ah! es que es abogada, pues yo voy a hablar un poco sobre [Cyntia] Cyndia Enid Irizarry Casiano, mayagüezana de origen, arecibeña por adopción, litigante criminalista, fervorosa por dirigir la Sala Especializa de Violencia Doméstica, en el Centro Judicial de Arecibo, una de las regiones judiciales más violentas que hay contra la mujer, contra la familia y la niñez. Pero, como siempre se molestan además de ser abogadas o que vengan de la Rama Judicial, ella ha sido por doce (12) años consecutivos Presidente de Comisión Local Electoral, tanto para las Locales Electorales de Hatillo, Morovis y Ciales, mayormente de ese trinomio popular, de alcaldías populares, de legisladores municipales populares.

Pero voy a hablar de ella en el sentido de que si ustedes van y leen los titulares de las decisiones judiciales que ella ha tomado, más allá de haber sido Directora de Instituciones Juveniles, más allá de ella haber sido Directora de la Junta Reglamentadora Lechera de Puerto Rico, más allá de ella haber sido Directora de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, es una mujer que toma decisiones al momento.

Así que yo voy a dedicar mis minutos a hablar de la importancia de la toma de decisiones en los momentos que hay que tomarlos. Las Salas Especializadas de Violencia Doméstica en Puerto Rico

fueron originadas por la Rama Judicial, por la rampante necesidad de resolver la diatriba de buscarle protecciones a las desventajadas y unas de las primeras juezas que puso la casa en orden en una de las regiones judiciales más violentas fue la jueza Irizarry Casiano.

Así que es una mujer disciplinada, respetada, laboriosa, pero que toma decisiones al momento y eso es lo que se necesita en la Comisión Estatal de Elecciones. Ustedes saben por qué y voy a contextualizar. Hay muchos empleados en la Comisión Estatal de Elecciones que no tienen igual paga por igual trabajo, vuelvo y repito, hay empleados en la Comisión Estatal de Elecciones que siguen trabajando sin igual paga sin igual trabajo. A los Partidos Políticos se le exige tener un ejército electoral de funcionarios que no cobran, que son voluntarios y el pueblo de Puerto Rico les impone la responsabilidad digna de darme los resultados electorales sin paga.

El Partido Nuevo Progresista ha tenido que llevarse a las espaldas los votos del PIP, por no tener ejército electoral de voluntarios, de Proyecto Dignidad, que nunca tuvo ejército electoral en los colegios electorales a nivel nacional, pero tiene sillas en ambas Asambleas Legislativas a nivel nacional. También lo hizo con el extinto Movimiento Victoria Ciudadana, que son los que siempre se quejaban, pero fue gracias al PNP, porque hubo Colegios Electorales en Puerto Rico dentro del cien (100) por treinta y cinco (35), que ni tan siquiera el Partido Popular Democrático en las Elecciones del 2024 tenía funcionarios electorales, pero es muy fácil venir aquí a criticar que quieren nominar a penepés para dirigir los trabajos de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿dónde les queda a ustedes el reclamo de la libertad de expresión? ¿Dónde hoy les queda a ustedes la minoría opositora el derecho a la libertad de asociación y conciencia? No, es que eso depende, si usted es legislador, pero si usted va a trabajar en la Comisión Estatal de Elecciones, usted no puede votar, usted no puede decir de qué partido es ni usted no puede tener una inclinación política partidista. Mentira, aquí se habla mucho y respeto a las sillas y la toma de decisiones, pero no los he visto en la calle ni en la Comisión Estatal de Elecciones velando por igual paga, por igual trabajo por los empleados de la Comisión, ni un tajo han da'o.

Pero yo sigo hablando de la Jueza Irizarry Casiano, porque si algo le encanta a las mujeres trabajadoras en Puerto Rico es aceptar el reto. Cuando nos subestiman o cuando simplemente utilizan nuestras expresiones para justificar sus subterfugios de cómo votar.

Me encanta que digan que yo soy la responsable ahora de que le van a votar en contra al nombramiento por mis expresiones, porque eso significa entonces que no tienen criterio propio. Así que la Jueza sí va a tener mi voto, y como ya he dicho y lo reitero, antes de hacer estas expresiones fui donde ella y la miré a los ojos, la bendije y le dije que gozara de buena salud, pero que el pueblo de Puerto Rico necesitaba que se le devolviera respeto, transparencia y confiabilidad a la Comisión Estatal de Elecciones y me encanta que haya una mujer liderando también los trabajos de la Comisión Estatal de Elecciones, porque indistintamente del asunto general o genérico me gusta que haya participación femenina en la toma de decisiones y me gusta que tenga experiencia previa en procesos electorales, porque la cercanía más pura a una controversia electoral usted la va a encontrar en una Comisión local donde tiene que haber balance partidista, donde quien preside la Comisión Electoral tiene que ser Juez y sobre todo, tiene que tener el aval de todos los Partidos Políticos que constituyen esa demarcación electoral. Y la Jueza Irizarry Casiano, por doce años consecutivos ha sido Presidenta de Comisión Local, algo le tiene que decir a usted sobre Derecho electoral.

Así que aquí no vinimos a poner personas que no saben de procesos electorales, no vinimos a poner personas que no saben tomar decisiones ni tampoco vinimos a poner personas que no conocen el Estado de Derecho, comenzando por la Constitución y eso es lo que necesita la Comisión, enderezarse, ser confiable y ese es el voto de confianza que dentro de mis expresiones, para aquellos que le vayan a votar en contra, si hubiese sido del Partido Electoral de ustedes les hubiesen conseguido

miles, pero miles de bondades para el nombramiento. Pero como es un nombramiento que baja por el Partido Nuevo Progresista no es bueno.

Entonces ustedes tienen que reformularse, ¿cuál es el mensaje que le quieren llevar a la ciudadanía? Porque el Partido Nuevo Progresista los barrió, no fue que ganó, no fue que participó, no es un casi, casi ganador, los barrió y eso nos da el derecho de a nombre de la Gobernadora de Puerto Rico, ella nominara a quién ella le venga en gana para que Presida la Comisión Estatal de Elecciones a nivel oficial y alterno, pero a nosotros los diecinueve (19) nos corresponde decir: ¿ese nombramiento la persona tiene peritaje, tiene conocimiento, tiene experiencia, está dotado con las características humanas necesarias para dialogar de forma multipartita? Ambos lo tienen, porque ambos han trabajado como presidentes de comisiones locales electorales. Miren no se sientan mal porque yo hable de la Regla 19 aquí. Tienen que trabajar con esa realidad estos cuatro (4) años y con la calidad de trabajo que aquí cada uno de los penepés trajo.

Así que no me resta más que decir que para mí es un privilegio que una mujer abogada, jueza, Presidenta de Comisión Local y sobre todo del área oeste de Puerto Rico, tenga la oportunidad de estar en el área metropolitana tomando decisiones a nombre del electorado puertorriqueño. Así que Dios bendiga a la Jueza Irizarry Casiano.

Esas son mis expresiones, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico otorgue su consentimiento al nombramiento de Cyndia E. Irizarry Casiano como Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la honorable Cyndia Enid Irizarry Casiano como Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no.

Confirmado el nombramiento de Cyndia Enid Irizarry Casiano como Presidenta Alterna de la Comisión Estatal de Elecciones.

Notifíquese a la señora Gobernadora de Puerto Rico.

- - - -

SR. MATÍAS ROSARIO: Breve receso.

SR. PRESIDENTE: Breve receso.

RECESO

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.

Señor Portavoz.

SR. MATÍAS ROSARIO: Para regresar al turno de Informes Positivos.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas:

De la Comisión de Salud, dos informes proponiendo la aprobación de los P. de la C. 396 y 419, sin enmiendas.

SR. MATÍAS ROSARIO: Para que se reciban y se incluyan en el Calendario.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.
SR. MATÍAS ROSARIO: Turno de Mociones.
SR. PRESIDENTE: Adelante.

MOCIONES

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para que se releve a la Comisión de Asuntos Internos a considerar la Resolución del Senado 122 y para que se proceda al descargue y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.
SR. MATÍAS ROSARIO: Para continuar con la discusión del Calendario.
SR. PRESIDENTE: Adelante.
SR. MATÍAS ROSARIO: Lectura.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 122, la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos:

"RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento con el "Reglamento para la Protección de los Menores en el Deporte: Principios para la Participación Deportiva en las Categorías Menores", Reglamento Núm. 9179 del 16 de junio de 2020, por parte de las asociaciones, federaciones, clubes, equipos, grupos recreativos y deportivos, ligas, corporaciones y otras entidades similares que se dediquen a desarrollar u ofrecer servicios y actividades recreativas y deportivas de categorías menores dirigidas a niños, niñas y jóvenes entre las edades de cinco (5) a dieciocho (18) años; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Estudios concluyen que la práctica excesiva de cualquier deporte aumenta la probabilidad de que los niños y los jóvenes sufran lesiones en los huesos, músculos o tendones. Además, puede causar agotamiento o un "burnout", lo cual puede manifestarse con dolores crónicos en los músculos o coyunturas, cambios de personalidad, aumento en la frecuencia cardiaca, fatiga, falta de entusiasmo sobre las prácticas o competencias o dificultad de para completar rutinas comunes. Véase *"Overuse Injuries, Overtraining, and Burnout in Child and Adolescent Athletes"*, American Academy of Pediatrics, Volume 119, Issue 6, June 2007.[26]

[26]https://publications.aap.org/pediatrics/article/119/6/1242/70751/Overuse-Injuries-Overtraining-and-Burnout-in-Child?searchresult=1

Ante esta realidad, un setenta por ciento (70%) de los jóvenes atletas dejan de practicar deportes a los trece (13) años. Por eso, los especialistas en pediatría recomiendan, entre otras cosas, que los jóvenes tengan al menos tres (3) meses al año de descanso y entre uno (1) a dos (2) días durante la semana. Esto, en busca de reducir las lesiones por la práctica excesiva del deporte lo cual se estima que es la razón para alrededor del cincuenta por ciento (50%) de las lesiones. Véase *"Sports Specialization and Intensive Training in Young Athletes"*, American Academy of Pediatrics, Volume 138, Issue 3, September 2016.[27]

Puerto Rico siempre se ha destacado en los deportes. Atletas como Roberto Clemente, Juan "Igor" González, Roberto Alomar, Iván Rodríguez, José Juan (JJ) Barea, José "Piculín" Ortiz, Carlos Arroyo, Tito Trinidad, Héctor "El Macho" Camacho, Miguel Cotto, Amanda Serrano, Gigi Fernández, Mónica Puig, Jazmine Quinn-Camacho, entre otros, han cautivado la atención de los puertorriqueños con sus hazañas deportivas. Ello, ha motivado a miles de niños y jóvenes a considerar los deportes como una alternativa de desarrollo y posterior sustento.

Llanamente, todo asunto que genera interés de gran parte de la población crea en su entorno oportunidades de negocios y los deportes no son la excepción. Desde finales del Siglo XIX se han desarrollado ligas profesionales de la gran mayoría de los deportes. Ahora bien, aunque los deportes profesionales generan ingresos billonarios, la realidad es que solo menos del uno por ciento (1%) de los atletas llega a participar en tales niveles. Véase *"Sports Specialization and Intensive Training in Young Athletes"*, American Academy of Pediatrics, Volume 138, Issue 3, September 2016. Es decir, las oportunidades de desarrollar negocios a nivel profesional son bien limitadas lo que ha llevado a quienes buscan generar ingresos en el deporte a mirar a las categorías menores.

En años recientes, se han proliferado clubes privados, entidades dedicadas al "coaching" o "clínicas" y eventos deportivos dirigidos a niños entre las edades de cinco (5) a dieciocho (18) años. Esto, se suma a las ligas escolares públicas y privadas, las ligas promovidas por las diferentes federaciones deportivas y otras que históricamente han promovido el desarrollo del deporte en las categorías menores.

Sin duda el sistema capitalista en el que vivimos promueve y permite el desarrollo del comercio en toda actividad que nos rodea. Empero, tenemos el deber de procurar que la actividad comercial que se desarrolle no sea a expensas de los más vulnerables, en este caso, los niños y jóvenes que motivados por su amor al deporte participan de los deportes.

Con la preocupación del impacto de la proliferación de estas modalidades de promoción del deporte en niños y jóvenes, la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta Núm. 30-2018. Esta resolución requirió al Departamento de Recreación y Deportes ("DRD") desarrollar reglamentación para procurar el bienestar de los que participan en las categorías menores.

A tenor con la referida encomienda, el DRD promovió el "Reglamento para la Protección de los Menores en el Deporte: Principios para la Participación Deportiva en las Categorías Menores", Reglamento Núm. 9179 del 16 de junio de 2020. Este reglamento aplica a de las asociaciones, federaciones, clubes, equipos, grupos recreativos y deportivos, ligas, corporaciones y otras entidades similares que se dediquen a desarrollar u ofrecer servicios y actividades recreativas y deportivas de categorías menores dirigidas a los niños, niñas y jóvenes entre las edades de cinco (5) a dieciocho (18) años. Este reglamento establece los derechos de estos atletas, las reglas bajo las cuales deben desarrollarse sus entrenamientos, juegos y eventos, entre otras.

A pesar de las medidas tomadas por la Asamblea Legislativa y el DRD, continuamos escuchando quejas sobre prácticas que no se ajustan a las prácticas recomendadas para proteger el

[27] http://publications.aap.org/pediatrics/article-pdf/138/3/e20162148/1344770/peds_20162148.pdf

bienestar y salud de los niños y jóvenes atletas. Por tal motivo, el Senado de Puerto Rico entiende necesario realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento con las disposiciones del Reglamento Núm. 9179. Esto permitirá determinar si es necesaria la aprobación de legislación adicional, así como cualquier otra gestión que sea necesaria de la Rama Legislativa para proteger a los niños y jóvenes atletas de Puerto Rico.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.– Se ordena a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento con el "Reglamento para la Protección de los Menores en el Deporte: Principios para la Participación Deportiva en las Categorías Menores", Reglamento Núm. 9179 del 16 de junio de 2020, por parte de las asociaciones, federaciones, clubes, equipos, grupos recreativos y deportivos, ligas, corporaciones y otras entidades similares que se dediquen a desarrollar u ofrecer servicios y actividades recreativas y deportivas de categorías menores dirigidas a niños, niñas y jóvenes entre las edades de cinco (5) a dieciocho (18) años.

Sección 2.– La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, así como las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de estudio, en un término de noventa (90) días contados a partir de la aprobación de esta Resolución.

Sección 3. – Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 396 de la Comisión de Salud, sin enmiendas:

"LEY

Para enmendar los Artículos 2, 4, 5 y 6, y añadir un nuevo Artículo 13, y reenumerar los siguientes artículos de la Ley 168-2018, según enmendada, conocida como la "Ley para el Uso de la Telemedicina y la Telesalud en Puerto Rico"; para enmendar los Artículos 2, 4 y 5 de la Ley 48-2020, según enmendada, conocida como la "Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico"; a los fines de establecer que cualquier médico o profesional de la salud con licencia vigente en Puerto Rico no requerirá una certificación para ejercer la Telemedicina, la Telesalud ni las profesiones afines a la Ciberterapia; para ordenar al Departamento de Salud y demás organismos rectores, la enmienda de los reglamentos correspondientes; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar un acceso oportuno y eficiente a los servicios de salud. La evolución tecnológica ha transformado significativamente la prestación de estos servicios, consolidando la Telemedicina, la Telesalud y la Ciberterapia como herramientas innovadoras, y esenciales para mejorar la accesibilidad, eficiencia y continuidad del cuidado médico en Puerto Rico. En este contexto, se hace imperativo enmendar la Ley 168-2018, según enmendada, conocida como la "Ley para el Uso de la Telemedicina y la Telesalud en Puerto Rico" (en adelante, "Ley 168-2018") y la Ley para Regular la Ciberterapia de Puerto Rico (en adelante, "Ley 48-2020"), con el propósito de eliminar barreras regulatorias innecesarias que obstaculizan su implementación plena.

Tanto la Telemedicina, la Telesalud y la Ciberterapia, juegan un papel clave al facilitar la comunicación efectiva entre pacientes y proveedores de salud, optimizando la eficiencia de los servicios y reduciendo las desigualdades en el acceso a la atención médica. En el caso de la Telemedicina, un ejemplo de ello es el modelo de atención centrado en el paciente, conocido como "*Patient-Centered Medical Home*", el cual enfatiza la coordinación y continuidad del cuidado médico, asegurando un servicio integral, accesible y de calidad. Asimismo, el concepto de "Hospital sin Paredes" representa una alternativa innovadora para ampliar la prestación de servicios de salud sin depender exclusivamente de la infraestructura física tradicional. En este sentido, la integración de tecnologías digitales permite llevar la atención médica a comunidades vulnerables y a poblaciones con limitaciones de movilidad, facilitando el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de manera remota, sin comprometer la calidad del servicio.

Actualmente, la Ley 168-2018 exige que los médicos y otros profesionales de la salud, debidamente autorizados a ejercer en Puerto Rico, obtengan una certificación adicional para la práctica de la Telemedicina y Telesalud, a pesar de contar con las licencias válidas otorgadas por los organismos reguladores pertinentes. Por su parte, la Ley 48-2020, le impone a los profesionales debidamente licenciados y autorizados en Puerto Rico en disciplinas como: fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla-lenguaje, psicología, consejería, trabajador social, consejería en rehabilitación y terapia educativa, la obligación de obtener una certificación particular para ejercer la ciberterapia. Esta duplicidad de requisitos impone trabas innecesarias a la adopción y práctica de estas modalidades, limitando el acceso de los pacientes a servicios médicos más eficientes y accesibles.

Por ello, esta legislación dispone que cualquier médico o profesional de la salud con licencia vigente en Puerto Rico, según corresponda, podrá ejercer la Telemedicina, la Telesalud y/o la Ciberterapia sin necesidad de una certificación adicional. Además, se ordena al Departamento de Salud y demás organismos rectores, la revisión y enmienda de los reglamentos aplicables para armonizarlos con esta disposición, eliminando obstáculos administrativos innecesarios y promoviendo el uso efectivo de estas tecnologías en beneficio de la ciudadanía.

A través de esta Ley, el Gobierno de Puerto Rico reafirma su compromiso con la modernización del sistema de salud, eliminando barreras burocráticas que limitan el acceso a los servicios médicos y fomentando el uso de tecnologías innovadoras para garantizar una atención médica accesible, eficiente y de calidad.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 168-2018, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 2.- Definiciones.

Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado y alcance que para cada uno se exprese, excepto cuando del texto claramente se indique un significado diferente:

(a) …

(b) "Certificación", significa la certificación para autorizar la práctica de la medicina, a través de la telemedicina o la telesalud, en Puerto Rico. Esta certificación se les proveerá a aquellos profesionales médicos y aquellos profesionales de la salud con licencias vigentes en la jurisdicción federal. Los médicos y profesionales de la salud debidamente autorizados a ejercer su práctica en Puerto Rico no requerirán obtener esta certificación para practicar la Telemedicina o Telesalud en la Isla.

(c) …

…

(e) "Telemedicina", es la práctica de la medicina a distancia incorporando tanto el diagnóstico, el tratamiento y la educación médica mediante el uso de recursos tecnológicos para optimizar los servicios de atención en salud. Los mismos deben incluir, pero sin limitarse, servicios complementarios e instantáneos a la atención de un especialista; diagnósticos inmediatos por parte de un médico especialista en un área o región determinada; educación remota de alumnos de las escuelas de enfermería, profesionales de la salud y medicina; servicios de archivo digital de exámenes radiológicos, ecografías, emergencias médicas y otros. En el caso de Centros de Rehabilitación, Centros Pediátricos y Centros de Autismo del Departamento de Salud, se incluirá para fines de Telemedicina a terapistas físicos, terapistas ocupacionales, terapistas y patólogos del habla y lenguaje, conforme a la reglamentación establecida por la Junta de Licenciamiento.

La práctica de la Telemedicina debe tomar en consideración aquellos aspectos según definidos por el "Center for Medicare Services" (CMS, por sus siglas en inglés), a los fines de que las consultas efectuadas puedan ser consideradas para reembolso por "Medicare", "Medicaid" y otros planes médicos.

Además, a través de la Telemedicina el Gobierno de Puerto Rico fomentará la adopción de modelos innovadores, tales como el "Patient-Centered Medical Home"(PCMH, por sus siglas en inglés) y el concepto de "Hospital sin Paredes", entre otros enfoques salubristas, para optimizar la prestación de servicios de salud, mejorar la accesibilidad y fortalecer la continuidad del cuidado del paciente.

(f)…

(g)…"

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 168-2018, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 4. Deberes y Obligaciones de la Junta de Licenciamiento y de las Juntas de Examinadores y demás Organismos Rectores.

Los deberes y obligaciones de la Junta de Licenciamiento, las Juntas de Examinadores y demás Organismos Rectores serán:

1. Evaluar y fiscalizar la operación en Puerto Rico de los proveedores de servicios de Telemedicina y Telesalud, conforme a sus respectivas áreas de inherencia y regulación, según las distintas profesiones de salud que atienden.
2. Evaluar si la preparación de un médico o de un profesional de la salud autorizado a ejercer en la jurisdicción federal es la adecuada para recibir una certificación para la práctica de la Telemedicina o Telesalud en Puerto Rico, según sea el caso."

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 168-2018, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 5. – Certificación para la Práctica de Telemedicina o Telesalud.

A partir de la vigencia de esta Ley, todo médico o profesional de la salud autorizado a ejercer en Puerto Rico, podrá realizar sus consultas o proveer sus servicios por medio de tecnologías de telemedicina o telesalud en Puerto Rico, sin necesidad de obtener una Certificación adicional para dicha práctica. No obstante, los médicos o profesionales de la salud con licencias vigentes en la jurisdicción federal tendrán que solicitar la Certificación para la práctica de telemedicina o telesalud.

Todo médico o profesional de salud que no esté debidamente licenciado y autorizado a ejercer en la jurisdicción federal, no podrá recibir la Certificación para la práctica de la telemedicina o telesalud en la Isla."

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 168-2018, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 6. – Facilidades para la Práctica de Telemedicina.

En Puerto Rico se podrán establecer salas de telemedicina en todas las facilidades médicas, hospitales, oficinas médicas dedicadas a los servicios médicos, Centros de Rehabilitación, Centros Pediátricos y Centros de Autismo del Departamento de Salud debidamente autorizados por el Departamento de Educación y por el Departamento de Salud, según aplique.

(a) En el caso de entidades autorizadas por el Departamento de Salud de Puerto Rico para administrar facilidades hospitalarias, médicas primarias y de emergencias y Centros de Rehabilitación debidamente autorizados por el Departamento de Educación podrán utilizar libremente entre profesionales dentro de los límites geográficos de Puerto Rico, para realizar consultas mediante el uso de telemedicina a cualquier médico que disponga de una licencia válida ya activa para la práctica de la Medicina en Puerto Rico, o la Certificación para la práctica de la telemedicina en nuestra jurisdicción establecida al amparo de esta Ley.

(b) …"

Sección 5. Se añade un nuevo Artículo 13 a la Ley 168-2018, según enmendad, el cual se leerá como sigue:

"Artículo. 13. – Cubierta de Servicios de Salud.

Todo profesional licenciado autorizado a ejercer la telemedicina o la telesalud en Puerto Rico podrá facturar los servicios provistos, según establecido en virtud de esta Ley, a las compañías de seguro de salud y a la Administración de Seguros de Salud (ASES), quienes vendrán obligados a pagarla como si fuera un servicio prestado de forma presencial. A esos fines, las compañías de seguro de salud y ASES tendrán que proveerles a los médicos y profesionales de la salud, que así lo soliciten, los correspondientes códigos para la facturación por los servicios prestados por los medios aquí establecidos."

Sección 6.-Se reenumerarán los actuales artículos 13, 14, 15, 16, y 17, de la Ley 168-2018, según enmendada, como los artículos 14, 15, 16, 17 y 18, respectivamente.

Sección 7.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 48-2020, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 2.- Definiciones.

Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado y alcance que para cada uno se exprese, excepto cuando del texto claramente se indique un significado diferente:

(a) "Certificación" o "Certificación para la práctica de la Ciberterapia en Puerto Rico", significa la certificación para autorizar la ciberterapia en Puerto Rico. Esta certificación se les proveerá a aquellos profesionales debidamente licenciados y autorizados a practicar en la jurisdicción federal las siguientes disciplinas: fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla-lenguaje, psicología, consejería, trabajo social, consejería en rehabilitación y terapia educativa, conforme a la reglamentación establecida por aquellas juntas o autoridades que las regulan. Solo se le podrá emitir la presente certificación a los profesionales aquí referidos con licencias vigentes en la jurisdicción federal. Los profesionales debidamente autorizados a ejercer las referidas

disciplinas en Puerto Rico no requerirán obtener esta certificación para practicar la ciberterapia en la Isla.

(b) …

…

(f)…"

Sección 8.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 48-2020, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 4. — Deberes y obligaciones del Departamento.

Los deberes y obligaciones del Departamento serán:

(a) Evaluar y fiscalizar la operación en Puerto Rico de los proveedores de servicios de ciberterapias;

(b) Evaluar si la preparación del profesional licenciado en la jurisdicción federal en las disciplinas de fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla-lenguaje, psicología, consejería, trabajo social, consejería en rehabilitación y terapia educativa, es la adecuada para recibir una certificación para la práctica de la ciberterapia en Puerto Rico."

Sección 9.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 48-2020, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 5.-Certificación para la Práctica de la Ciberterapia en Puerto Rico.

A partir de la vigencia de esta Ley, todo profesional licenciado en la fisioterapia, terapia ocupacional terapia del habla-lenguaje, psicología, consejería, trabajo social, consejería en rehabilitación y terapia educativa en Puerto Rico, podrá realizar sus consultas a distancia por medios tecnológicos, tales como, teléfonos, video llamadas, aplicaciones o cualquier otra herramienta tecnológica al alcance, sin la necesidad de obtener la certificación para la práctica de la Ciberterapia descrita en este Artículo. No obstante, todo profesional al que se hace referencia en esta Ley y que esté debidamente licenciado y autorizado a ejercer en la jurisdicción federal tendrá que solicitar la Certificación para la Práctica de la Ciberterapia en Puerto Rico y que esta le sea concedida por el Departamento, conforme a los requisitos que, a tales efectos, se promulguen mediante reglamento. Todo profesional referido en esta Ley, que no esté debidamente licenciado y autorizado a ejercer en la jurisdicción federal, no podrá recibir la aludida certificación."

Sección 10.-Reglamentación.

Por la presente se ordena y faculta al Departamento de Salud, a la Junta de Licenciamiento y a la Junta Examinadora u Organismo Rector de cada profesión cubierta por esta Ley a adoptar e implementar las normas y reglamentos necesarios para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones, así como aquellos que sean requeridos para la más efectiva práctica de la Telemedicina y la Telesalud en Puerto Rico.

Sección 11.- Supremacía.

Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.

Sección 12.-Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo,

subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente.

Sección 13.-Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **Proyecto de la Cámara 396**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, **sin enmiendas.**

ALCANCE DE LA MEDIDA

El **Proyecto de la Cámara 396** propone enmendar los Artículos 2, 4, 5 y 6, y añadir un nuevo Artículo 13, y reenumerar los siguientes artículos de la Ley 168-2018, según enmendada, conocida como la "Ley para el Uso de la Telemedicina y la Telesalud en Puerto Rico"; para enmendar los Artículos 2, 4 y 5 de la Ley 48-2020, según enmendada, conocida como la "Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico"; a los fines de establecer que cualquier médico o profesional de la salud con licencia vigente en Puerto Rico no requerirá una certificación para ejercer la Telemedicina, la Telesalud ni las profesiones afines a la Ciberterapia; para ordenar al Departamento de Salud y demás organismos rectores, la enmienda de los reglamentos correspondientes; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la medida, la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar un acceso oportuno y eficiente a los servicios de salud. La evolución tecnológica ha transformado significativamente la prestación de estos servicios, consolidando la Telemedicina, la Telesalud y la Ciberterapia como herramientas innovadoras, y esenciales para mejorar la accesibilidad, eficiencia y continuidad del cuidado médico en Puerto Rico. En este contexto, se hace imperativo enmendar la Ley 168-2018, según enmendada, conocida como la "Ley para el Uso de la Telemedicina y la Telesalud en Puerto Rico" (en adelante, "Ley 168-2018") y la Ley para Regular la Ciberterapia de Puerto Rico (en adelante, "Ley 48-2020"), con el propósito de eliminar barreras regulatorias innecesarias que obstaculizan su implementación plena.

Destaca también la Exposición de Motivos, que tanto la Telemedicina, la Telesalud y la Ciberterapia, juegan un papel clave al facilitar la comunicación efectiva entre pacientes y proveedores de salud, optimizando la eficiencia de los servicios y reduciendo las desigualdades en el acceso a la atención médica, además de que la integración de tecnologías digitales permite llevar la atención médica a comunidades vulnerables y a poblaciones con limitaciones de movilidad, facilitando el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de manera remota, sin comprometer la calidad del servicio.

Actualmente, la Ley 168-2018 exige que los médicos y otros profesionales de la salud, debidamente autorizados a ejercer en Puerto Rico, obtengan una certificación adicional para la práctica de la Telemedicina y Telesalud, a pesar de contar con las licencias válidas otorgadas por los organismos reguladores pertinentes. Por su parte, la Ley 48-2020, le impone a los profesionales

debidamente licenciados y autorizados en Puerto Rico en disciplinas como: fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla-lenguaje, psicología, consejería, trabajador social, consejería en rehabilitación y terapia educativa, la obligación de obtener una certificación particular para ejercer la ciberterapia. Esta duplicidad de requisitos impone trabas innecesarias a la adopción y práctica de estas modalidades, limitando el acceso de los pacientes a servicios médicos más eficientes y accesibles.

Buscando solucionar esta situación, esta pieza legislativa propone que cualquier médico o profesional de la salud con licencia vigente en Puerto Rico, según corresponda, pueda ejercer la Telemedicina, la Telesalud y/o la Ciberterapia sin necesidad de una certificación adicional. Además, ordena al Departamento de Salud y demás organismos rectores, revisar y enmendar los reglamentos aplicables para armonizarlos con esta disposición, eliminando obstáculos administrativos innecesarios y promoviendo el uso efectivo de estas tecnologías en beneficio de la ciudadanía.

ALCANCE DEL INFORME

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del presente Proyecto, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico evaluó el Memorial Explicativo remitido por el Departamento de Salud el cual resulta relevante al proceso de análisis de la medida ante nos. Cabe destacar, que el Memorial utilizado fue remitido a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Asimismo, examinamos los memoriales remitidos por la Asociación Médica de Puerto Rico y la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, los cuales se expresaron en torno al P. del S. 415, medida homóloga presentada ante el Senado de Puerto Rico. Finalmente, examinamos el Informe Positivo y el Entirillado Electrónico cursado por el Cuerpo Hermano sobre la medida.

Resaltamos, que la presente pieza legislativa es un proyecto de Administración, por lo que el asunto atendido forma parte del Programa de Gobierno propuesto por la Gobernadora y avalado por el Pueblo de Puerto Rico.

A continuación, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios esbozados por las diferentes agencias y entidades consultadas durante el proceso de evaluación de la medida en referencia.

Departamento de Salud

Luego de examinar la pieza legislativa de referencia**, el Departamento de Salud** presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Secretario, Víctor Ramos Otero, expresando su endoso a favor de la aprobación de la medida.

El Departamento de Salud resaltó ser la única entidad cuya obligación ineludible es garantizar la salud de toda la población, siendo responsable de la regulación de la política pública del Gobierno de Puerto Rico en relación con los asuntos de salud integral en la Isla. Enfatizó, que esta labor no se limita a la intervención a través de la implementación de políticas públicas, sino que también abarca un enfoque preventivo al examinar los factores que constituyen los determinantes sociales de la salud, los cuales influyen en el desarrollo de dichas políticas. Desde esta óptica, reconoce y defiende la salud como un derecho fundamental de todos los individuos en todas las dimensiones que abarca.

En cuanto al Proyecto, destacó que representa un avance significativo hacia la modernización del sistema de salud en Puerto Rico al eliminar barreras regulatorias, se espera una mayor adopción de tecnologías digitales, lo que puede mejorar la eficiencia y el acceso a la atención médica. Considera, que la eliminación de requisitos de certificación adicionales facilitará el acceso a servicios médicos para los pacientes, especialmente en áreas rurales o comunidades vulnerables, donde la atención médica puede ser limitada.

Basado en lo anterior, el Departamento de Salud expuso que la pieza legislativa representa una iniciativa fundamental con el potencial de revolucionar la provisión de servicios de salud en Puerto Rico. Asimismo, es de la opinión que al promover el uso de Telemedicina y Ciberterapia, se pretende aumentar la accesibilidad, la calidad y la continuidad de la atención médica, lo que resultará en beneficios para una amplia porción de la población.

Asociación Médica de Puerto Rico

Esta Ilustre Comisión tuvo la oportunidad de examinar los comentarios remitidos por la **Asociación Médica de Puerto Rico** quien presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Presidente, Yussef Galib-Frangie Fiol, expresando un firme endoso a favor de la aprobación de la medida, al considerar que facilita el ejercicio de la telemedicina y la ciber-terapia en nuestra isla. En un contexto donde el acceso a servicios médicos es vital, esta medida representa un paso crucial hacia la modernización y mejora en la atención sanitaria de nuestro pueblo.

La Asociación Médica enumeró las razones que, a su entender, justifican la aprobación de esta pieza legislativa:

1. Facilitación del Acceso a la Atención Médica: Puerto Rico enfrenta un reto significativo en la disponibilidad de profesionales de la salud. La escasez de médicos, especialmente en áreas rurales y desatendidas, limita el acceso a atención médica oportuna para muchos ciudadanos. Al eliminar la necesidad de certificaciones adicionales para ejercer telemedicina y ciber-terapia, se facilitará que más profesionales puedan ofrecer sus servicios de manera inmediata y efectiva, asegurando que las personas reciban la atención que necesitan sin demoras innecesarias.
2. Adaptación a las Nuevas Realidades Sanitarias: La pandemia del COVID-19 subrayó la necesidad de servicios de salud flexibles y accesibles. La telemedicina se ha establecido como una herramienta clave para mantener la continuidad de la atención. Al permitir que cualquier médico con licencia vigente en Puerto Rico ofrezca estos servicios, garantizamos que nuestra infraestructura de salud esté mejor preparada para enfrentar futuros desafíos y emergencias sanitarias.
3. Mejora en la Calidad de Vida: La salud mental y el bienestar son igualmente importantes en el contexto de la ciber-terapia. Al permitir que más profesionales se integren en este ámbito, se pueden ofrecer servicios de salud mental de manera más accesible, lo que contribuye a una mejor calidad de vida para los puertorriqueños. La eliminación de barreras regulatorias permitirá que más personas accedan a la ayuda que necesitan, especialmente en un momento en el que la salud mental se ha vuelto una prioridad.
4. Regulación y Supervisión Adecuada: Este proyecto también establece un marco para que el Departamento de Salud y otros organismos reguladores actualicen los reglamentos necesarios. Esto asegura que, aunque se eliminen ciertas barreras, se mantenga un estándar de calidad y seguridad en la prestación de servicios de salud, protegiendo a la población y garantizando la integridad del ejercicio profesional.

La Asociación Médica concluyó sus comentarios reiterando que el proyecto representa una oportunidad invaluable para fortalecer nuestro sistema de salud. Añadió, que al facilitar el acceso a la telemedicina y la ciber-terapia, estaríamos, no solo respondiendo a una necesidad urgente, sino también adaptándonos a un futuro donde la tecnología y la salud se entrelazan de manera insoslayable.

Asociación de Hospitales de Puerto Rico

La **Asociación de Hospitales de Puerto Rico** cursó sus comentarios a esta Distinguida Comisión, representados por su Director Ejecutivo, Jaime Plá Cortés, expresando su firme apoyo a la aprobación de esta piza legislativa.

La Asociación expuso, que esta iniciativa no solo representa un avance significativo hacia la modernización del sistema de salud en la isla, eliminando barreras burocráticas innecesarias que han limitado el acceso a servicios médicos esenciales, sino que también constituye una herramienta clave para retener y atraer talento médico en Puerto Rico. Es de la opinión que, al simplificar los requisitos para la práctica de estas modalidades, el proyecto permite a los profesionales ampliar su alcance y flexibilidad, incentivándolos a permanecer y desarrollar sus carreras en nuestro sistema de salud.

Indicó, que actualmente, la Ley 168-2018 exige que los profesionales obtengan una certificación adicional para practicar la Telemedicina y Telesalud, a pesar de contar con licencias vigentes otorgadas por los organismos reguladores correspondientes. De manera similar, la Ley 48-2020 impone requisitos duplicativos para disciplinas como fisioterapia, psicología y trabajo social, entre otras. En cuanto a esto, considera que estas exigencias no solo representan un obstáculo administrativo que desincentiva la adopción de tecnologías innovadoras, sino que también contribuyen a la fuga de profesionales que buscan entornos con menos trabas regulatorias para ejercer. Añadió,

que la eliminación de estos trámites redundantes es fundamental para crear un marco más atractivo que retenga a nuestros médicos, terapeutas y especialistas, permitiéndoles expandir sus prácticas sin cargas burocráticas injustificadas.

La Asociación de Hospitales señaló, además, que estos profesionales ya han demostrado su competencia a través de los procesos de licenciamiento existentes, por lo que esta medida ofrece a los profesionales nuevas oportunidades de crecimiento y colaboración, factores clave para su permanencia en el sistema local.

No obstante, enfatizó, que materializar plenamente estos beneficios, es imprescindible garantizar que las aseguradoras cubran de forma consistente estos servicios y en igualdad de condiciones que las consultas presenciales. Destacó, que la certidumbre en la remuneración es esencial tanto para la sostenibilidad financiera de las instituciones como para la estabilidad laboral de los profesionales.

Concluyó, resaltando que la aprobación de esta medida, no solo modernizará nuestro sistema de salud, sino que sentará las bases para un entorno más favorable al talento médico, donde los profesionales puedan desarrollarse sin limitaciones innecesarias.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobierno certifica que el **P. de la C. 396** no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La tecnología juega un papel crucial en la salud de los puertorriqueños al mejorar el diagnóstico, tratamiento, acceso a servicios y la calidad de vida de los pacientes, permitiendo diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos, así como la Telesalud y Telemedicina para comunidades remotas.

La Telesalud consiste en el uso de las tecnologías digitales de la información y la comunicación para acceder a servicios de atención médica de forma remota y gestionar cuidados médicos a los pacientes. Por su parte, la Telemedicina es solo una parte de los servicios de Telesalud. Aunque la

Telemedicina se centra en la atención médica, la Telesalud utiliza la misma tecnología para proporcionar una mayor variedad de servicios de salud de una gama más amplia de proveedores.
Entre los beneficios se destacan:

- Mayor acceso a la atención, al permitir a las personas recibir atención médica desde cualquier lugar;
- Garantizar que los servicios se brinden con mayor facilidad o estén más al alcance de las personas con capacidades limitadas de movimiento, tiempo o transporte;
- Atención más segura, toda vez que ayuda a reducir la exposición al riesgo de contagio de enfermedades infecciosas, al permitir que los pacientes reciban atención médica sin tener que acudir a un centro de salud;
- Brindar servicios de atención médica primaria para muchas afecciones;
- Mejor gestión de enfermedades crónicas, a través de monitoreo remoto y consultas virtuales;
- Reducción de costos, al evitar desplazamientos y consultas innecesarias;
- Facilita la continuidad del cuidado, toda vez que le permite a los profesionales de la salud seguir el progreso de los pacientes entre consultas, lo que puede mejorar la calidad de la atención y la satisfacción del paciente;
- Mejorar la comunicación y la coordinación del cuidado médico entre los miembros de un equipo de atención médica y el paciente;
- Apoyo a la salud pública, ayudando a controlar epidemias, monitorear la salud de la población y responder a emergencias;
- Además, se puede ofrecer orientación nutricional para problemas de alimentación o peso, consejería en salud mental para ansiedad, depresión u otros problemas, entre otros.

A través de este Proyecto, se reafirma el compromiso con la modernización del sistema de salud, eliminando barreras burocráticas que limitan el acceso a los servicios médicos y fomentando el uso de tecnologías innovadoras para garantizar una atención médica accesible, eficiente y de calidad.

Además, se crean condiciones más atractivas que viabilicen la retención de nuestros médicos, terapeutas y especialistas.

A raíz de lo anterior, esta Ilustre Comisión coincide con lo propuesto en la presente pieza legislativa, toda vez que su aprobación constituye un avance en la modernización de los procesos para facilitar que los pacientes puedan recibir servicios de Telemedicina, Telesalud y Ciberterapia, eliminando la duplicidad de requisitos y trabas innecesarias a la adopción y práctica de estas modalidades.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, luego de la consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe, **RECOMENDANDO LA APROBACIÓN** del **Proyecto de la Cámara 396 sin enmiendas.**

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Juan Oscar Morales
Presidente
Comisión de Salud”

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 419 y se da cuenta del Informe de la Comisión de Salud, sin enmiendas:

"LEY

Para crear la "Ley para la Orientación sobre los Beneficios del Ácido Fólico", a los fines de que el Departamento de Salud en colaboración con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, implementen una campaña educativa sobre la importancia del consumo de ácido fólico, elaboren material informativo y lo distribuyan en consultorios de ginecología y obstetricia en todo Puerto Rico, dirigido a mujeres embarazadas o en edad reproductiva; ordenar la facultad de reglamentación; establecer sanciones por incumplimiento; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ácido fólico es una vitamina del complejo B esencial para la prevención de defectos congénitos graves en el cerebro y la médula espinal, conocidos como defectos del tubo neural. Su consumo antes del embarazo y durante las primeras semanas de gestación puede marcar la diferencia entre el nacimiento de un bebé sano y la aparición de anomalías como la espina bífida y la anencefalia.

Los defectos del tubo neural son las malformaciones congénitas más comunes del sistema nervioso central. La espina bífida se produce cuando la médula espinal y la columna vertebral no se cierran completamente, mientras que la anencefalia ocurre cuando el cerebro no se desarrolla adecuadamente. Estos defectos se originan en las primeras cuatro semanas del embarazo, a menudo antes de que la mujer sepa que está embarazada. Por esta razón, es fundamental que todas las mujeres en edad reproductiva consuman ácido fólico de forma regular, y no solo aquellas que planean concebir. Esta vitamina es esencial para el crecimiento y desarrollo saludable del bebé.

El riesgo de padecer estos defectos congénitos no distingue nivel socioeconómico ni origen. Sin embargo, su prevención es posible. Se ha demostrado que la ingesta diaria de al menos 400 microgramos (0.4 miligramos) de ácido fólico reduce entre un 50% y un 70% el riesgo de espina bífida. Una vez confirmado el embarazo, la cantidad recomendada debe aumentarse para satisfacer las crecientes necesidades del organismo materno y fetal. Además de su papel en la prevención de defectos congénitos, el ácido fólico desempeña funciones esenciales en el embarazo, como favorecer el desarrollo adecuado de la placenta y del feto, así como la producción de ADN, indispensable para la multiplicación celular. Una deficiencia de esta vitamina podría afectar la división celular, comprometiendo el desarrollo del bebé y la placenta.

La educación y orientación sobre este tema son fundamentales para la prevención de estos defectos. A través de esta Ley, esta Administración reafirma su compromiso con la salud y el desarrollo integral de los niños, promoviendo la información y el consumo de ácido fólico entre todas las mujeres en edad reproductiva, con el objetivo de reducir la incidencia de defectos congénitos como la espina bífida y la anencefalia.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Título.

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como "Ley para la Orientación sobre los Beneficios del Ácido Fólico".

Artículo 2.-Definiciones.

Para propósitos de esta Ley, las siguientes palabras y frases tendrán el significado que se señala a continuación:

(a) "Ginecólogos y obstetras": significa todo profesional de la medicina debidamente autorizado por la legislación y reglamentación aplicable para ejercer la ginecología o la obstetricia en Puerto Rico.

(b) "Material informativo": significa cualquier folleto, panfleto, video, hoja suelta, enlace digital código de respuesta rápida (QR Code) u otro recurso que detalle los beneficios comprobados del consumo de ácido fólico.

(c) "Medio de comunicación": significa todo mecanismo que pueda ser utilizado para la difusión de información, incluyendo, pero sin limitarse a, radio, televisión, videograbaciones, periódicos de publicación diaria, semanal o mensual, revistas, folletos, carteles, redes sociales, páginas "web" gubernamentales y plataformas comunitarias, entre otros.

Artículo 3.-Implementación y cumplimiento.

(a) El Departamento de Salud y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, llevarán a cabo, de manera anual, una campaña informativa a través de los medios de comunicación de Puerto Rico para orientar y educar a las mujeres sobre la importancia del consumo de ácido fólico.

(b) Toda oficina de ginecología u obstetricia que brinde atención a mujeres embarazadas o en edad reproductiva deberá proporcionar, de manera gratuita, el material informativo suministrado por el Departamento de Salud y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Dicho material destacará los beneficios del consumo diario de ácido fólico para el desarrollo del infante y la prevención de enfermedades congénitas. Además, cada institución obligada por esta Ley deberá mantener un registro en el que la receptora del material informativo confirme, mediante su firma, haberlo recibido.

(c) El Departamento de Salud con la colaboración de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, dentro del término de noventa (90) días a partir de la vigencia de esta Ley, prepararán y pondrán a disposición de las oficinas de ginecólogos y obstetras material informativo que ilustre cabalmente los beneficios ácido fólico. Dicho material deberá estar disponible en todas las oficinas regionales del Departamento de Salud y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Será responsabilidad de los representantes de las entidades obligadas por esta Ley recoger el material informativo en las oficinas regionales del Departamento de Salud.

(d) Las oficinas de ginecólogos y obstetras deberán comenzar a distribuir el material informativo dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la aprobación de esta Ley. Asimismo, deberán implementar y mantener el registro mencionado en el inciso (b) de este artículo.

Artículo 4.-Reglamentación.

Se ordena y faculta al Departamento de Salud a aprobar toda regla, reglamento, carta circular o norma que sea necesaria para asegurar el más fiel cumplimiento con las disposiciones de esta Ley. En estas, se incluirá, pero no se limitará, a establecer métricas para que el Departamento de Salud y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres evalúen el impacto de la campaña, mediante indicadores de distribución, acceso y conocimiento del público meta.

Artículo 5.-Penalidades.

El Departamento de Salud podrá imponer multas de hasta quinientos dólares ($500.00) por el incumplimiento con las disposiciones de esta Ley o cualquier reglamento aprobado para asegurar su más fiel cumplimiento. En ningún caso, la multa será inferior a cien dólares ($100.00).

Artículo 6.-Vigencia.
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **Proyecto de la Cámara 419**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, **sin enmiendas.**

ALCANCE DE LA MEDIDA

El **Proyecto de la Cámara 419** propone crear la "Ley para la Orientación sobre los Beneficios del Ácido Fólico", a los fines de que el Departamento de Salud en colaboración con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, implementen una campaña educativa sobre la importancia del consumo de ácido fólico, elaboren material informativo y lo distribuyan en consultorios de ginecología y obstetricia en todo Puerto Rico, dirigido a mujeres embarazadas o en edad reproductiva; ordenar la facultad de reglamentación; establecer sanciones por incumplimiento; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la medida, el ácido fólico es una vitamina del complejo B esencial para la prevención de defectos congénitos graves en el cerebro y la médula espinal, conocidos como defectos del tubo neural. Su consumo antes del embarazo y durante las primeras semanas de gestación puede marcar la diferencia entre el nacimiento de un bebé sano y la aparición de anomalías como la espina bífida y la anencefalia.

Los defectos del tubo neural son las malformaciones congénitas más comunes del sistema nervioso central. La espina bífida se produce cuando la médula espinal y la columna vertebral no se cierran completamente, mientras que la anencefalia ocurre cuando el cerebro no se desarrolla adecuadamente. Estos defectos se originan en las primeras cuatro semanas del embarazo, a menudo antes de que la mujer sepa que está embarazada. Por esta razón, es fundamental que todas las mujeres en edad reproductiva consuman ácido fólico de forma regular, y no solo aquellas que planean concebir. Esta vitamina es esencial para el crecimiento y desarrollo saludable del bebé.

Destaca también la Exposición de Motivos, que el riesgo de padecer estos defectos congénitos no distingue nivel socioeconómico ni origen. Sin embargo, su prevención es posible. Se ha demostrado que la ingesta diaria de al menos 400 de ácido fólico reduce entre un 50% y un 70% el riesgo de espina bífida. Además de su papel en la prevención de defectos congénitos, el ácido fólico desempeña funciones esenciales en el embarazo, como favorecer el desarrollo adecuado de la placenta y del feto, así como la producción de ADN, indispensable para la multiplicación celular. Una deficiencia de esta vitamina podría afectar la división celular, comprometiendo el desarrollo del bebé y la placenta.

La educación y orientación sobre este tema son fundamentales para la prevención de estos defectos. A través de esta Ley, esta Administración reafirma su compromiso con la salud y el desarrollo integral de los niños, promoviendo la información y el consumo de ácido fólico entre todas las mujeres en edad reproductiva, con el objetivo de reducir la incidencia de defectos congénitos como la espina bífida y la anencefalia.

ALCANCE DEL INFORME

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del presente Proyecto, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico evaluó los Memoriales Explicativos remitidos por el Departamento de Salud y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, los cuales resultan relevantes al proceso de análisis de la medida ante nos. Cabe destacar, que los Memoriales utilizados fueron remitidos a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Asimismo, examinamos el Informe Positivo y el Entirillado Electrónico cursado por el Cuerpo Hermano sobre la medida.

Resaltamos, que la presente pieza legislativa es un proyecto de Administración, por lo que el asunto atendido forma parte del Programa de Gobierno propuesto por la Gobernadora y avalado por el Pueblo de Puerto Rico.

A continuación, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios esbozados por las diferentes agencias y entidades consultadas durante el proceso de evaluación de la medida en referencia.

Departamento de Salud

Luego de examinar la pieza legislativa de referencia**, el Departamento de Salud** presentó su Memorial Explicativo por conducto de su Secretario, Víctor Ramos Otero, expresando su endoso a favor de la aprobación de la medida.

El Departamento de Salud destacó ser la única entidad cuya obligación ineludible es garantizar la salud de toda la población, siendo responsable de la regulación de la política pública del Gobierno de Puerto Rico en relación con los asuntos de salud integral en la Isla. Indicó que esta labor no se limita a la intervención a través de la implementación de políticas públicas, sino que también abarca un enfoque preventivo al examinar los factores que constituyen los determinantes sociales de la salud, los cuales influyen en el desarrollo de dichas políticas. Desde esta óptica, reconoce y defiende la salud como un derecho fundamental de todos los individuos en todas las dimensiones que abarca.

Subrayó, que medida propuesta sugiere la creación de la "Ley para la Orientación sobre los Beneficios del Ácido Fólico" y adecuadamente se definen términos clave para su aplicación, tales como "ginecólogos y obstetras" y "material informativo".

En el aspecto sustantivo, esbozó, que el ácido fólico es indudablemente esencial para el desarrollo del feto y la prevención de malformaciones congénitas. Recalcó, que la legislación se fundamenta en la evidencia científica que acentúa la importancia de su ingesta adecuada, lo que, a su vez, refleja un enfoque proactivo hacia la salud pública.

El Departamento de Salud es de la opinión que este proyecto evidencia el compromiso del Gobierno de Puerto Rico con la salud de las mujeres y el bienestar infantil. Comentó, además, que a través de campañas educativas y la provisión de recursos informativos, se pretende empoderar a las mujeres para que tomen decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

No obstante, advirtió, que, aunque la legislación proporciona un marco definido para la educación y la difusión de información, su eficacia dependerá de la colaboración activa entre el Departamento de Salud y las oficinas de ginecología y obstetricia. Añadió, que la capacidad de estas entidades para cumplir con las normativas legales, así como la disposición de las mujeres para recibir y actuar según la información ofrecida, serán factores cruciales.

Tras un análisis exhaustivo de la medida en su totalidad, el Departamento de Salud manifestó que el P. de la C. 419 constituye un avance significativo dirigido a mejorar la salud reproductiva en Puerto Rico, enfocándose en la prevención de defectos congénitos a través de la educación y el acceso

a información sobre el ácido fólico. Destacó, que la implementación efectiva de esta legislación podría generar un impacto positivo en la salud de las generaciones futuras. Por lo tanto, se comprometió a llevar a cabo la implementación adecuada de esta medida una vez que se convierta en ley.

Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM)

Esta Ilustre Comisión tuvo la oportunidad de examinar los comentarios presentados por la **Oficina de la Procuradora de la Mujer** quien presentó su Memorial Explicativo expresando un firme endoso a favor de cualquier política pública del Gobierno de Puerto Rico que promueva la salud de todas las mujeres en cualquiera de sus etapas, en lo pertinente, en la edad reproductiva. Además, reconoció el esfuerzo loable de esta Asamblea Legislativa en su compromiso con la salud y el desarrollo integral de los niños a través de la promoción de la información y el consumo de ácido fólico.

La OPM reconoció el impacto positivo que tienen las campañas educativas como herramienta preventiva para evitar defectos congénitos y que el consumo adecuado de ácido fólico, antes y durante las primeras etapas del embarazo, puede prevenir hasta un 70% de los defectos del tubo neural. Asimismo, considera que esta información debe estar disponible para todas las mujeres, independientemente de su trasfondo socioeconómico o ubicación geográfica, y su diseminación debe ser parte de una política pública.

En atención a lo anterior, la OPM detalló ciertos aspectos que consideran pertinentes:

- El "material informativo" que propone la medida en su Artículo 2(b), deberá incorporar un lenguaje claro, inclusivo y culturalmente sensible, reconociendo las diversas realidades de las mujeres en Puerto Rico, en donde se tenga en consideración, la población de adolescentes, mujeres de comunidades rurales, y aquellas con barreras de acceso a servicios de salud.
- Que la OPM sea considerada como entidad colaboradora del Departamento de Salud en el diseño y distribución de la campaña educativa, a fin de garantizar que se atiendan adecuadamente los aspectos de equidad y accesibilidad.
- Que se considere la distribución digital del material informativo a través de redes sociales, páginas "web" gubernamentales y plataformas comunitarias, facilitando así su acceso a mujeres jóvenes y poblaciones conectadas digitalmente.
- Que se incorpore en la medida la obligatoriedad de establecer métricas para que el Departamento de Salud y sus entidades colaboradoras evalúen el impacto de la campaña, mediante indicadores de distribución, acceso y conocimiento del público meta.

Concluyó la OPM, reiterando su aval a la pieza legislativa objeto de evaluación con las recomendaciones expresadas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobierno certifica que el **P. de la C. 419** no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Uno de los actos más importantes que puede hacer una mujer para ayudar a prevenir deformaciones congénitas graves en su bebé es consumir suficiente ácido fólico todos los días, especialmente antes de la concepción y durante la primera etapa del embarazo. Los estudios

consistentemente han demostrado que esto reduce significativamente el riesgo de que un bebé tenga defectos del tubo neural.

A raíz de lo anterior, esta Ilustre Comisión coincide con lo propuesto en la presente pieza legislativa, toda vez que del análisis llevado a cabo se desprende que su finalidad es la implementación de una campaña educativa sobre la importancia del consumo de ácido fólico, lo que resultaría en la reducción de la incidencia de defectos congénitos como la espina bífida y la anencefalia. Además, se reafirma el compromiso de la presente Administración con la salud y el desarrollo integral de los niños.

En cuanto a las enmiendas propuestas por la Oficina de la Procuradora de la Mujer, las mismas fueron previamente atendidas en la Cámara de Representantes y forman parte del texto del proyecto.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, luego de la consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe, **RECOMENDANDO LA APROBACIÓN** del **Proyecto de la Cámara 419 sin enmiendas.**

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Juan Oscar Morales
Presidente
Comisión de Salud"

- - - -

SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del Senado 122, titulada:

"Para ordenar a la Comisión Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento con el "Reglamento para la Protección de los Menores en el Deporte: Principios para la Participación Deportiva en las Categorías Menores", Reglamento Núm. 9179 del 16 de junio de 2020, por parte de las asociaciones, federaciones, clubes, equipos, grupos recreativos y deportivos, ligas, corporaciones y otras entidades similares que se dediquen a desarrollar u ofrecer servicios y actividades recreativas y deportivas de categorías menores dirigidas a niños, niñas y jóvenes entre las edades de cinco (5) a dieciocho (18) años; y para otros fines relacionados."

SR. MATÍAS ROSARIO: Para que se apruebe la medida.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 122, sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.

SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 396, titulado:

"Para enmendar los Artículos 2, 4, 5 y 6, y añadir un nuevo Artículo 13, y reenumerar los siguientes artículos de la Ley 168-2018, según enmendada, conocida como la "Ley para el Uso de la Telemedicina y la Telesalud en Puerto Rico"; para enmendar los Artículos 2, 4 y 5 de la Ley 48-2020, según enmendada, conocida como la "Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico"; a los fines de establecer que cualquier médico o profesional de la salud con licencia vigente en Puerto Rico no requerirá una certificación para ejercer la Telemedicina, la Telesalud ni las profesiones afines a la Ciberterapia; para ordenar al Departamento de Salud y demás organismos rectores, la enmienda de los reglamentos correspondientes; y para otros fines relacionados."

SR. MATÍAS ROSARIO: Para que se apruebe la medida.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 396, sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 419, titulada:

"Para crear la "Ley para la Orientación sobre los Beneficios del Ácido Fólico", a los fines de que el Departamento de Salud en colaboración con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, implementen una campaña educativa sobre la importancia del consumo de ácido fólico, elaboren material informativo y lo distribuyan en consultorios de ginecología y obstetricia en todo Puerto Rico, dirigido a mujeres embarazadas o en edad reproductiva; ordenar la facultad de reglamentación; establecer sanciones por incumplimiento; y para otros fines relacionados."

SR. MATÍAS ROSARIO: Para que se apruebe la medida.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 419, sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.

- - - -

SR. MATÍAS ROSARIO: Breve receso.

SR. PRESIDENTE: Breve receso.

RECESO

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.

Señor Portavoz.

SR. MATÍAS ROSARIO: Regresar al turno de Informes Positivos.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas:

De la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, dos segundos informes proponiendo la aprobación de los P. del S. 59 y 60, con enmiendas según el entrillado electrónico que los acompañan.

SR. MATÍAS ROSARIO: Para que se reciban y se incluyan en el Calendario.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.
SR. MATÍAS ROSARIO: Para iniciar con la Lectura y el Calendario.
SR. PRESIDENTE: Adelante.

CALENDARIO DE LECTURA

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 59 y se da cuenta de un Segundo Informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

"LEY

Para enmendar el Artículo 58, derogar el actual Artículo 59 y sustituirlo por uno nuevo, y enmendar el Artículo 60 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", a los fines de establecer la obligación de los notarios de informar los testimonios en el índice mensual, eliminando así el requisito de la inscripción en el Registro de Testimonios; enmendar los Artículos 2 y 4 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, a los fines de eliminar el Registro de Testimonios; establecer disposiciones transitorias; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestra jurisdicción, la función notarial requiere el ejercicio de diversos actos jurídicos ~~requieren~~ *que exigen* testimonios juramentados o affidávits para su perfección, los cuales sirven como documentos dinámicos con un propósito específico. Estos testimonios son esenciales para evidenciar formalmente un acto o acuerdo, y los notarios que los autorizan suelen numerarlos secuencialmente, según lo requiere la Ley, y están obligados a registrarlos manualmente en un Registro de Testimonios.El objetivo original de este registro era mantener un control detallado de los testimonios autorizados y garantizar la correcta recaudación de los derechos establecidos por la Ley. Sin embargo, con el tiempo, se introdujo la obligación para los notarios de presentar un informe mensual ante la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), el cual incluye la misma información contenida en el Registro de Testimonios, como el número, la fecha, el otorgante y una breve descripción del objeto del testimonio.

De otra parte, la promulgación de la Ley 8-2012, que enmendó la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, incorporó una disposición relevante: el sello de la Sociedad para la Asistencia Legal deberá constar de dos estampillas con numeración idéntica. El recibo se coloca en el testimonio o *affidávit*

~~affidáv it~~, mientras que el original se fija en el margen del Registro de Testimonios, asegurando que el affidávit cuente con el sello de Asistencia Legal en su cara, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales.

En este contexto, resulta innecesario y obsoleto mantener un Registro de Testimonios manuscrito, dado que los notarios ya deben presentar informes mensuales a la ODIN con la misma información, y los derechos legales se recaudan a través del sello que aparece en el propio documento. Esta duplicación de esfuerzos genera una carga administrativa que no tiene justificación.

Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa considera pertinente enmendar la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", así como la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, para eliminar la obligación de los notarios de mantener un Registro de Testimonios manuscrito, estableciendo en su lugar la obligación de informar los testimonios en un índice mensual. Esta modificación modernizaría los procedimientos notariales y eliminaría una carga innecesaria en el sistema.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. – Se enmienda el Artículo 58 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artículo 58.- Numeración

Los testimonios llevarán una numeración sucesiva y continua y serán encabezados por el número que les corresponda, que será correlativo al **[de la inscripción en el Registro que más adelante se establece]** *número que se establezca en el índice mensual requerido por el Artículo 12 de esta Ley."*

Sección 2. – Se deroga el actual Artículo 59 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", y se sustituye por un nuevo Artículo 59, para que lea como sigue:

"Artículo 59.- Testimonios- Obligación de informar

Los notarios notificarán mensualmente a la Oficina de Inspección de Notarías, ya sea en formato electrónico o en papel, aquellos testimonios en que intervengan al remitir el índice mensual requerido por el Artículo 12 de esta Ley. En dicho índice, se incluirá el número del testimonio, la fecha, nombre de los otorgantes y una breve descripción del objeto del testimonio, así como una certificación de haber cancelado los correspondientes sellos para la Sociedad para la Asistencia Legal, que incluirá la numeración de éstos.

El notario podrá efectuar el pago de los derechos correspondientes al sello de la Sociedad para la Asistencia Legal por vía electrónica, de conformidad con el procedimiento que establezca el Secretario de Hacienda en coordinación con el Juez Presidente del Tribunal Supremo o la persona en quien éste delegue. El Secretario de Hacienda establecerá los mecanismos alternos a la obligación de adherir y cancelar sellos, de conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley 85-2009, según enmendada, conocida como "Ley de Certificados y Comprobantes Electrónicos"."

Sección 3. – Se enmienda el Artículo 60 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artículo 60.- Nulidad

Será nulo el testimonio no incluido en el índice, o el que no lleve la firma del notario autorizante, o que no se haya **[inscrito en el Registro de Testimonios]** *informado en el índice mensual requerido en el Artículo 12 de esta Ley, o el que no lleve cancelado el sello a favor*

de la Sociedad para la Asistencia Legal, según requerido en la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada."

Sección 4. – Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 2.- Sello de la Sociedad para la Asistencia Legal – Fijación y Cancelación, obligación del notario

"El sello de la Sociedad para Asistencia Legal constará de dos estampillas con enumeración idéntica*, siendo una de éstas el recibo*. El notario adherirá **[una de las estampillas al margen de la nota correspondiente a cada testimonio o affidávit incluida en su Registro y cancelará la misma con su sello notarial o con una marca clara y visible. Además, adherirá]** en el affidávit o testimonio *el original de* la **[otra]** estampilla de la Sociedad para Asistencia Legal y cancelará la misma con su sello notarial o con una marca clara y visible. *El notario podrá conservar el sello identificado como recibo en sus archivos.* El notario podrá realizar el pago de los derechos correspondientes al sello por la vía electrónica, según el procedimiento que apruebe por reglamento el Secretario de Hacienda en consulta con la Sociedad para la Asistencia Legal.

El notario podrá utilizar el sello de la Sociedad para la Asistencia Legal adquirido por vía electrónica, de conformidad con el procedimiento que establezca el Secretario de Hacienda en coordinación con el Juez Presidente del Tribunal Supremo o la persona en quien éste delegue. El Secretario de Hacienda establecerá los mecanismos alternos a la obligación de adherir y cancelar sellos, conforme a las disposiciones de la Ley 85-2009, según enmendada, conocida como "Ley de Certificados y Comprobantes Electrónicos"."

Sección 5. – Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 4.- Venta y Administración

(a) …

(b) …

Disponiéndose, además que será obligación de la Sociedad tener disponible las estampillas de la Sociedad que los notarios cancelarán **[simultáneamente en su Registro de Testimonios]** *en el testimonio o affidávit que autoricen*. El Departamento de Hacienda rendirá trimestralmente un informe a la Sociedad donde reflejará de forma fiel y exacta el movimiento de estampillas vendidas y aquellas disponibles para la venta, a los fines de que éstos mantengan constancia de la cantidad y disponibilidad de las estampillas de la Sociedad que los notarios cancelarán **[simultáneamente en su Registro de Testimonios]** *en los testimonios o affidávits que autoricen*.

(c) …

(d) …"

Sección 6.- Los testimonios autorizados antes de la vigencia de esta Ley deberán ingresarse en el Registro de Testimonios, según ordenado por Ley. Todo testimonio autorizado luego de la vigencia de esta Ley, será incluido en el informe mensual radicado por los notarios ante la ODIN. Será responsabilidad de los notarios mantener copia de este informe, de manera que pueda corroborar la autorización de cualquier testimonio. De igual forma, se reafirma que cualquier testimonio que no tenga cancelado en su faz el original del sello a favor de la Sociedad para la Asistencia Legal carecerá de toda validez jurídica.

La Oficina de Inspección de Notarías establecerá un procedimiento ordenado para recibir y custodiar los Registros de Testimonios que se elimina en esta Ley.

Sección 7.- El Tribunal Supremo de Puerto Rico, a través de la Oficina de Inspección de Notarías, atemperará los reglamentos, instrucciones generales y cualquier otro documento a las disposiciones de esta Ley, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación de esta Ley, y orientará a los notarios sobre las disposiciones de la misma.

Sección 8. -Esta Ley comenzará a regir el 1 de enero de 2026."

"SEGUNDO INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **P. del S. 59**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 59 tiene como propósito enmendar el Artículo 58, derogar el actual Artículo 59 y sustituirlo por uno nuevo, y enmendar el Artículo 60 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", a los fines de establecer la obligación de los notarios de informar los testimonios en el índice mensual, eliminando así el requisito de la inscripción en el Registro de Testimonios; enmendar los Artículos 2 y 4 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, a los fines de eliminar el Registro de Testimonios; establecer disposiciones transitorias; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como, "Ley Notarial de Puerto Rico", requiere actualmente que los notarios anoten cada testimonio en un Registro de Testimonios. El objetivo original de este registro era mantener un control detallado de los testimonios autorizados y garantizar la correcta recaudación de los derechos establecidos por la Ley. Sin embargo, con el tiempo, se estableció la obligación de rendir un índice mensual a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), el cual contiene la misma información que el registro manuscrito.

Como muy bien expone la parte expositiva, resulta innecesario y obsoleto mantener un Registro de Testimonios manuscrito, dado que los notarios deben presentar informes mensuales con la misma información a la ODIN. Así como, los derechos legales que se recaudan a través del sello de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), que aparece en el propio documento conforme establece la Ley 8-2012. La duplicidad de estos procedimientos ha generado una carga administrativa innecesaria para los notarios sin aportar beneficios adicionales al sistema notarial.

Así las cosas, el P. del S. 59 propone:

- Eliminar el Registro de Testimonios y establecer la obligación de incluir los testimonios en el índice mensual.
- Permitir la notificación electrónica de los testimonios por parte de los notarios.
- Modificar el proceso de cancelación del sello de la Sociedad para la Asistencia Legal, permitiendo su pago electrónico conforme a los procedimientos que establezca el Secretario de Hacienda en coordinación con la Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico o quien esta delegue.

En fin, estas enmiendas buscan agilizar y modernizar el sistema notarial en Puerto Rico, eliminando redundancias y facilitando el cumplimiento de las obligaciones notariales mediante herramientas digitales.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 59, solicitó comentarios a las siguientes entidades, Oficina de Inspección de Notarías, Asociación de Abogados de Puerto Rico, Colegio de Abogados de Puerto Rico y las diversas escuelas de derecho. Al momento de la redacción de este Informe solo se ha recibido el Memorial Explicativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en conjunto al Instituto del Notariado Puertorriqueño, el cual se expone a continuación.

Colegio de Abogados y Abogadas del Puerto Rico y del Instituto del Notariado Puertorriqueño

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y el Instituto del Notariado Puertorriqueño respaldan la aprobación del P. del S. 59, al considerar que la eliminación del Registro de Testimonios y su sustitución por el índice mensual de SIGNO moderniza la práctica notarial. No obstante, señalaron que la medida debe garantizar que el nuevo sistema cumpla con los requisitos de la Ley Notarial y su Reglamento.

En este sentido, señalaron que:

> La medida presentada es una que, positivamente, atempera la práctica notarial a los tiempos modernos de la digitalización de procesos, así como la simplificación de los procesos y ejecutorias personalísimas de los notarios y notarias en Puerto Rico. Sin embargo, el proyecto debe asegurar que los cambios en SIGNO sean suficientes para que realmente el índice mensual sustituya el Registro de Testimonios, y se pueda dar cumplimiento a la Ley Notarial y su Reglamento en cuanto a la información que deba entrarse al firmar un testimonio o affidavit. Hay que tener en cuenta que no se trata de una simple lista de testimonios, sino del registro de acciones legales recogidas en documentos auténticos que hacen fé pública. *Building Maintenance Services v. Hato Rey Executive Building*, 109 DPR 656 (1980).[28]

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.0007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como, "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, certifica que el P. del S. 59, no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La aprobación del P. del S. 59 responde a la necesidad de modernizar la práctica notarial en Puerto Rico, eliminando procesos redundantes y facilitando la fiscalización electrónica de los testimonios sin menoscabo de la transparencia y legalidad del sistema.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobación del **P. del S. 59, con las enmiendas** incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

[28] Véase, memorial del Colegio de Abogados de Puerto Rico del 7 de marzo de 2025

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Thomas Rivera Schatz
Presidente de la Comisión de Innovación,
Reforma y Nombramientos
del Senado de Puerto Rico"

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 60, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:

LEY

Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 75-1987 *de 2 de julio de 1987*, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico," a los fines de rectificar la información que debe contener la Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con lo establecido en la Sección 17 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico, ningún proyecto de ley puede abordar más de un asunto y este debe estar claramente reflejado en su título. Esta disposición constitucional busca evitar que se incluyan en las leyes asuntos irrelevantes o no relacionados con el propósito principal de la legislación.

La Ley 52-2022, conocida como la "Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico,"entre otros asuntos,~~dispuso~~ *dispuso* un nuevo marco regulatorio en nuestro sistema contributivo para las empresas multinacionales reguladas por la Ley 154-2010, las cuales son clave para el desarrollo económico del país. No obstante, dicha legislación incluyó enmiendas a la Ley Núm. 75-1987 *de 2 de julio de 1987*, conocida como la "Ley Notarial de Puerto Rico," las cuales no guardan relación con las reformas esenciales realizados al sistema contributivo local, en lo referente a las empresas foráneas.

En este contexto, ~~nuestro Tribunal Supremo~~ *el tribunal de Primera Instancia de San Juan en el caso Asociación de Abogados de Puerto Rico v. el Gobierno de Puerto Rico, Civil Núm. SJ2022CV05905* interpretó la Ley 52-2022 y, como resultado, declaró nulo el Artículo 86 de dicha ley, el cual intentaba modificar la Ley Núm. 75-1987 *de 2 de julio de 1987*, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico." ~~Véase, *Asociación de Abogados de Puerto Rico v. Gobierno de Puerto Rico*, Civil Núm. SJ2022CV05905~~.

En atención a este hecho, esta pieza legislativa rectifica la información que debe contener la planilla informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles contenida en el Artículo 11 de la Ley Núm. 75-1987 *de 2 de julio de 1987*, restituyéndose al lenguaje vigente previo a la aprobación de la Ley 52-2022.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. – Se enmienda el Artículo 11 de la Ley *Núm.* 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 11.- Deberes del notario - Planilla informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles y solicitud de exención contributiva.

En el otorgamiento de escrituras de segregación, agrupación o traslación de dominio será obligación del transmitente o de quien segregue o agrupe cumplimentar y depositar en la oficina del notario autorizante la planilla informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles.

Dicha planilla incluirá la siguiente información:

1. Número, fecha de la escritura y negocio jurídico efectuado.
2. Nombre de los comparecientes, con especificación del carácter de su comparecencia y su número de seguro social.
3. Número de propiedad o catastro.

   El número catastral de la propiedad se tomará de la última notificación o recibo contributivo disponible expedido por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.

   [Se dispone que el] *El* Centro de Recaudación de Ingresos Municipales ofrecerá el número catastral o de codificación dentro de los próximos siete (7) días siguientes de ser solicitado. De no ser posible, deberá expedir una certificación negativa en la que se hagan constar las razones por las cuales no puede ofrecer el número solicitado. Esta certificación deberá remitirse al Secretario de Hacienda y al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales en unión a la planilla informativa.
4. Datos registrales del inmueble, incluyendo folio, **[toma,]** *tomo,* número de finca y pueblo.
5. Precio de *la tasación.* **[tasación, acompañado de la tasación realizada por un Evaluador Profesional Autorizado (EPA) con licencia vigente en Puerto Rico.]**
6. Tipo de escritura*,* de ser aplicable.
7. Tipo de propiedad **[y]**, su localización y dirección.

[8. Plano de mensura (plot plan).]

[9. Estudio de Título de la propiedad que se trate.]

… "

Sección 2.- Incompatibilidad.

Por la presente se deroga, o se entenderá enmendada, cualquier disposición de ley, artículo o sección de ley, órdenes administrativas, políticas, cartas circulares, reglamentos, reglas, cartas normativas, determinaciones administrativas y/o disposiciones aplicables que vayan en contra de las disposiciones de esta Ley.

Sección 3. –Vigencia

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

"SEGUNDO INFORME

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **P. del S. 60**, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 60 tiene como objetivo enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico" con el fin de rectificar la información que debe contener la Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles. Además, la medida restituye el lenguaje previo a las enmiendas realizadas en la Ley 52-2022.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 regula los deberes de los notarios en relación con la segregación, agrupación y traslado de bienes inmuebles. En el Artículo 11 de esta ley, se establece la obligación del transmitente o quien segregue o agrupe propiedades de cumplir con la entrega de una planilla informativa en la oficina del notario autorizante.

Conforme surge de la Exposición de Motivos de la medida, la Ley 52-2022, conocida como "Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico, incluyó enmiendas que modificaron varios aspectos de la Ley 75 de 2 de julio de 1987, incluyendo requisitos relacionados con las planillas informativas sobre bienes inmuebles, los cuales no guardan relación con las reformas esenciales realizadas al sistema contributivo local, en lo referente a las empresas foráneas. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia, al interpretar dicha ley, declaró nulas las enmiendas al Artículo 86 de la Ley 52-2022, que intentaban modificar la Ley Notarial de Puerto Rico. Este fallo evidenció la desconexión entre las reformas fiscales y las disposiciones notarialmente relevantes.

Por lo tanto, el P. del S. 60 propone la rectificación de estas enmiendas al restituir el lenguaje original del Artículo 11 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", especificando la información requerida en la planilla informativa.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 59, solicitó comentarios a las siguientes entidades, Oficina de Inspección de Notarías, Asociación de Abogados de Puerto Rico, Colegio de Abogados de Puerto Rico y las diversas escuelas de derecho. Al momento de la redacción de este Informe solo se ha recibido el Memorial Explicativo de la Oficina de Administración de los Tribunales, el cual se expone a continuación.

Oficina de Administración de los Tribunales

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) expresó que no tiene objeción al Proyecto del Senado 60, el cual restituye el lenguaje del Artículo 11 de la Ley Notarial de Puerto Rico a su versión anterior a la Ley 52-2022. Explicaron que la medida responde a la decisión del Tribunal de Primera Instancia, que declaró inconstitucional y nula la enmienda hecha por la Ley 52-2022 en el caso *Asociación de Abogados de Puerto Rico v. Gobierno de Puerto Rico*, Civil Núm. SJ20220V05905.

En este sentido, señalaron que:

"No tenemos objeción a las enmiendas propuestas al Artículo 11 de la Ley Notarial, tal y como están redactadas."[29]

[29] Véase, memorial de la Oficina de Administración de los Tribunales del 10 de marzo de 2025

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.0007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como, "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, certifica que el P. del S. 60, no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La aprobación del P. del S. 60 responde a la necesidad de corregir las enmiendas que fueron introducidas por la Ley 52-2022, y restituir el marco normativo original para las planillas informativas sobre la segregación, agrupación y traslado de bienes inmuebles. Esta medida asegura que los notarios puedan cumplir con sus obligaciones de forma coherente con las disposiciones legales vigentes y sin los obstáculos impuestos por las modificaciones no relacionadas con el sistema notarial.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobación del **P. del S. 60, con las enmiendas** incluidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,
(Fdo.)
Thomas Rivera Schatz
Presidente de la Comisión de Innovación,
Reforma y Nombramientos
del Senado de Puerto Rico"

- - - -

SR. MATÍAS ROSARIO: Para iniciar con la discusión del Calendario.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales, se anuncia el Proyecto del Senado 59 (Segundo Informe), titulado:

"Para enmendar el Artículo 58, derogar el actual Artículo 59 y sustituirlo por uno nuevo, y enmendar el Artículo 60 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", a los fines de establecer la obligación de los notarios de informar los testimonios en el índice mensual, eliminando así el requisito de la inscripción en el Registro de Testimonios; enmendar los Artículos 2 y 4 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, a los fines de eliminar el Registro de Testimonios; establecer disposiciones transitorias; y para otros fines relacionados."

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente la medida viene acompañada con enmiendas en el informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas contenida en el Segundo Informe Positivo del Proyecto del Senado 59, se aprueban.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean.

SR. PRESIDENTE: Adelante.

ENMIENDAS EN SALA

En el Decrétase

Página 2, línea 4,	después de "58.-" eliminar "Numeración"
Página 4, línea 4,	después de "60.-" añadir "Testimonio o declaración de autenticidad -"
Página 5, línea 11,	después de "4.-" añadir "Sello de la Sociedad para Asistencia Legal -"

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se acuerda.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 59, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.

SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.

- - - -

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 60 (Segundo Informe), titulado:

"Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 75-1987 *de 2 de julio de 1987*, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico," a los fines de rectificar la información que debe contener la Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles; y para otros fines relacionados."

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente la medida viene acompañada con enmiendas en el informe, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a la enmienda contenida en el Segundo Informe Positivo del Proyecto del Senado 60, se aprueban.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean.

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala.

ENMIENDAS EN SALA

En la Exposición de Motivos

Página 1, párrafo 2, línea 5,	después de "75" eliminar "-1987"
Página 2, párrafo 1, línea 4,	después de "75" eliminar "-1987"
Página 2, párrafo 2, línea 3,	después de "75" eliminar "-1987"

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 60, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobado.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, hay enmiendas en el informe al título, proponemos que se aprueben.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a la enmienda que contiene el informe sobre el título del Proyecto del Senado 60, se aprueban.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, hay enmienda en Sala al título, proponemos que se lea.

SR. PRESIDENTE: Adelante con la enmienda en Sala al título del Proyecto del Senado 60.

ENMIENDA EN SALA

En el Título

Línea 1, después de "75" eliminar "-1987"

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda en Sala al título.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba.

- - - -

SR. MATÍAS ROSARIO: Próximo asunto.

Señor Presidente, solicitamos un breve receso para conformar el Calendario de Votación del día.

SR. PRESIDENTE: Vamos a decretar un brece receso para conformar el Calendario de Votación Final.

RECESO

SR. MORALES RODRÍGUEZ: Señor Presidente, para que se conforme un Calendario de Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 14, Proyecto del Senado 17, Proyecto del Senado 59, Proyecto del Senado 60, Proyecto del Senado 68, Proyecto del Senado 74, Proyecto del Senado 79, Proyecto del Senado 82, Proyecto del Senado 88, Proyecto del Senado 149, Proyecto del Senado 164, Proyecto del Senado 211, Proyecto del Senado 329, Proyecto del Senado 372, Proyecto del Senado 413; Resolución Conjunta del Senado 1, Resolución Conjunta del Senado 14, Resolución Conjunta del Senado 16, Resolución Conjunta del Senado 32; Resolución del Senado 75, Resolución del Senado 77, Resolución del Senado 82, Resolución del Senado 122; Proyecto de la Cámara 396 y Proyecto de la Cámara 419.

Señor Presidente, para que la Votación Final se considere como el Pase de Lista para todos los fines legales pertinentes.

SR. PRESIDENTE: Votación.

SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Si algún senador o senadora quiere emitir algún voto explicativo o abstenerse este es el momento.

SR. PRESIDENTE: Señora Padilla Alvelo.

SRA. PADILLA ALVELO: Sí, es para voto explicativo a favor a la Resolución Conjunta del Senado 16. Para unirme al voto explicativo de la senadora Nitza Moran.

SR. PRESIDENTE: Cómo no. Senadora Nitza Moran.

SRA. MORAN TRINIDAD: Sí, para hacer un voto a favor de la Resolución Conjunta 16 con un voto explicativo.

SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.

SRA. SOTO TOLENTINO: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Senadora Soto Tolentino.

SRA. SOTO TOLENTINO: Para unirme al voto explicativo a favor de la Resolución Conjunta del Senado 16 de la senadora Nitza Moran.

SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Senadora Álvarez.

SR. PRESIDENTE: Senadora Álvarez.

SRA. ÁLVAREZ CONDE: Para dejar consignado que voy a hacer un voto explicativo en el Proyecto del Senado 82.

SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.

¿Algún otro compañero?

Ábrase la votación.

Todos los senadores han emitido su voto, señora Secretaria informe el resultado de la votación.

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:

P. del S. 14

"Para enmendar la Ley Núm. 81-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de insertar un nuevo Artículo 3.16 para prohibir a los Operadores, sus componentes o cualquier proveedor de servicio de estos, la recolección de información de las apuestas de los jugadores autorizados con el propósito de predecir la forma y manera en que estos apostarán; y para otros fines relacionados."

P. del S. 17

"Para enmendar los Artículos 3.4 y 5.3 e insertar los nuevos Artículos 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9 a la Ley 10-2017, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico", a los fines de conceder al Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), la facultad de emitir certificaciones para la inscripción en el Registro de la Propiedad y de transferir derechos o la titularidad de bienes inmuebles; crear un Fondo de Reinversión Social de Puerto Rico y definir sus funciones; además de establecer un proceso expedito de entrega de títulos de propiedad a familias de comunidades rezagadas de todo Puerto Rico, enfocar los esfuerzos para combatir la pobreza en todas sus dimensiones, fortalecer y alinear la estructura gubernamental en beneficio de las poblaciones vulnerables; transferir todos los activos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales a la Oficina de Desarrollo Socio Económico y Comunitario de Puerto Rico; derogar la Ley 271-2002, según enmendada, conocida como, "Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales"; y para otros fines relacionados."

P. del S. 59 (Segundo Informe)

"Para enmendar el Artículo 58, derogar el actual Artículo 59 y sustituirlo por uno nuevo, y enmendar el Artículo 60 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", a los fines de establecer la obligación de los notarios de informar los testimonios en el índice mensual, eliminando así el requisito de la inscripción en el Registro de Testimonios; enmendar los Artículos 2 y 4 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, a los fines de eliminar el Registro de Testimonios; establecer disposiciones transitorias; y para otros fines relacionados."

P. del S. 60 (Segundo Informe)

"Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico," a los fines de rectificar la información que debe contener la Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles; y para otros fines relacionados."

P. del S. 68

"Para crear "la Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico", crear la figura del Oficial de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico adscrito al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y establecer sus deberes; crear el Comité de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico y establecer sus deberes; ordenar al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) crear y desarrollar la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en relación con la implementación de la Inteligencia Artificial a través de las agencias e instrumentalidades gubernamentales; y para otros fines relacionados."

P. del S. 74

"Para añadir un nuevo sub-inciso (r) al inciso 4 del Artículo 1-B, y enmendar el inciso (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo"; a los fines de aumentar los beneficios de compensación por incapacidad transitoria (dietas) y autorizar al administrador para realizar ajustes por costo de vida para todos los pagos por incapacidad que permite la ley; y para otros fines relacionados."

P. del S. 79

"Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra", a los fines de cumplir con la política pública de centralizar los procesos de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos o la dependencia gubernamental que le sustituya; y para otros fines para relacionados."

P. del S. 82

"Para añadir un sub-inciso (d) al Inciso (13) del Artículo 1.4 de la Ley 82-2010, según enmendada, conocida como "Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico," con el objetivo de incorporar en la definición de Energía Renovable Alterna el uso de tecnologías a base de hidrógeno, en consonancia con el plan estratégico adoptado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos."

P. del S. 88

"Para enmendar el Artículo 1.03, añadir un nuevo Artículo 10.08, y reenumerar los actuales Artículos 10.08 al 10.13 como los Artículos 10.09 al 10.14, respectivamente, de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico"; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 170-2002, según enmendada; y derogar la Ley Núm. 240-2002, según enmendada, a los fines de consolidar las disposiciones relativas a la alfabetización en Braille de estudiantes ciegos y parcialmente ciegos, promoviendo su evaluación individual y asegurando la igualdad de oportunidades educativas; y para otros fines relacionados."

P. del S. 149

"Para enmendar el Artículo de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada", a los fines de ordenar a todos los establecimientos de cuidado de adultos mayores en Puerto Rico a que rindan ante el Departamento de la Familia, Oficina de Licenciamiento, sus planes de contingencia para lidiar con la temporada de huracanes y emergencias en o antes del primero (1) de mayo de cada año; y para otros fines relacionados."

P. del S. 164

"Para enmendar los Artículos 2, 3, 7, 9, 22, 33; derogar el actual Artículo 4 y renumerar los actuales artículos 5, 6 y 7 como los Artículos 4, 5 y 6; derogar el actual Artículo 8 y renumerar los actuales Artículos 9 al 56 como los Artículos 7 al 54 respectivamente de la Ley 135-2020, según enmendada, conocida como la "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico", a los fines de prescindir de la Junta de Directores; definir las funciones y establecer la facultad de reglamentación del Director Ejecutivo; y para otros fines relacionados."

P. del S. 211

"Para enmendar los artículos 8.030 y 8.070 de la Ley 194-2011, según enmendada, conocida como "Código de Seguros de Salud de Puerto Rico", con el propósito de reducir los periodos de espera que deben transcurrir con respecto a la persona cubierta o asegurado o a los patronos de PYMES o a los miembros de asociaciones bona fides, antes de que puedan ser elegibles a recibir ciertos beneficios bajo los términos del plan médico; disponer para que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico promulgue o enmiende las cartas normativas o los reglamentos que sean necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados."

P. del S. 329

"Para crear la "Ley de Uniformidad de Servicios Mediante Interface de Programación de Aplicaciones en el Gobierno de Puerto Rico", a los fines de establecer el marco regulatorio sobre el uso, desarrollo, adquisición y propiedad de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) en el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, con el propósito de garantizar la soberanía tecnológica, la interoperabilidad entre agencias, la protección de la información del gobierno y los contribuyentes, evitar la dependencia de proveedores externos, y crear un sistema único de identidad digital para los contribuyentes con el fin de eliminar la duplicidad de gestiones y uniformar los servicios gubernamentales mediante el uso de APIs; y para otros fines relacionados."

P. del S. 372

"Para añadir un nuevo inciso (w) en el Artículo 4 y reenumerar los actuales incisos (w) al (ii) como incisos (x) al (jj), respectivamente y enmendar el Artículo 53 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019", con el fin de aclarar quién es un licitador participante; y para otros fines."

P. del S. 413

"Para establecer la "Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional" y ordenar a la "Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRITS) la creación, implementación y mantenimiento de un expediente digital centralizado que contenga información sobre los servicios prestados por el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional a personas con diversidad funcional; establecer los deberes de las agencias concernidas; y para otros fines relacionados."

R. C. del S. 1

"Para ordenar al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), realizar un registro de todas las empresas o negocios que desarrollen lenguajes o códigos de Inteligencia Artificial en Puerto Rico; y para otros fines relacionados."

R. C. del S. 14

"Para modificar los límites territoriales de los municipios de Naranjito y Toa Alta, a los fines de extender la jurisdicción del Municipio de Naranjito a través de la transferencia de la totalidad del área que comprende el Parque Enrique Medina ubicado en el barrio Lomas de Naranjito en colindancia con el barrio Quebrada Arenas de Toa Alta, con Núm. de Catastro: 140-037-131-10; que se relocalice la línea divisoria entre los municipios de Naranjito y Toa Alta, para que el Puente Atirantado Jesús Izcoa Moure se ubique totalmente en la demarcación geográfica del Municipio de Naranjito; y para otros fines relacionados."

R. C. del S. 16

"Para ordenar a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) la creación e implementación de una aplicación basada en inteligencia artificial para el monitoreo de los procesos de subasta pública en Puerto Rico; garantizar la transparencia, la equidad y la prevención de prácticas deshonestas en dichos procesos; y para otros fines relacionados."

R. C. del S. 32

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a realizar un inventario y depuración de solares y fincas vacantes, con usufructo en abandono, sin propiedades enclavadas y con propiedades enclavadas, así como su digitalización para garantizar acceso a empleados gubernamentales y al público en general."

R. del S. 75

"Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre los

protocolos bancarios y medidas implementadas por las instituciones financieras en la Isla para prevenir la explotación financiera de los adultos mayores."

R. del S. 77

"Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre las razones por las cuales no se ha culminado la construcción de la carretera PR-385, conocida como el Desvío Sur, del Municipio de Peñuelas."

R. del S. 82

"Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las obras y del presupuesto asignado, al Centro de Trauma de Mayagüez."

R. del S. 122

"Para ordenar a la Comisión Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento con el "Reglamento para la Protección de los Menores en el Deporte: Principios para la Participación Deportiva en las Categorías Menores", Reglamento Núm. 9179 del 16 de junio de 2020, por parte de las asociaciones, federaciones, clubes, equipos, grupos recreativos y deportivos, ligas, corporaciones y otras entidades similares que se dediquen a desarrollar u ofrecer servicios y actividades recreativas y deportivas de categorías menores dirigidas a niños, niñas y jóvenes entre las edades de cinco (5) a dieciocho (18) años; y para otros fines relacionados."

P. de la C. 396

"Para enmendar los Artículos 2, 4, 5 y 6, y añadir un nuevo Artículo 13, y reenumerar los siguientes artículos de la Ley 168-2018, según enmendada, conocida como la "Ley para el Uso de la Telemedicina y la Telesalud en Puerto Rico"; para enmendar los Artículos 2, 4 y 5 de la Ley 48-2020, según enmendada, conocida como la "Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico"; a los fines de establecer que cualquier médico o profesional de la salud con licencia vigente en Puerto Rico no requerirá una certificación para ejercer la Telemedicina, la Telesalud ni las profesiones afines a la Ciberterapia; para ordenar al Departamento de Salud y demás organismos rectores, la enmienda de los reglamentos correspondientes; y para otros fines relacionados."

P. de la C. 419

"Para crear la "Ley para la Orientación sobre los Beneficios del Ácido Fólico", a los fines de que el Departamento de Salud en colaboración con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, implementen una campaña educativa sobre la importancia del consumo de ácido fólico, elaboren material informativo y lo distribuyan en consultorios de ginecología y obstetricia en todo Puerto Rico, dirigido a mujeres embarazadas o en edad reproductiva; ordenar la facultad de reglamentación; establecer sanciones por incumplimiento; y para otros fines relacionados."

VOTACIÓN

Los Proyectos del Senado 14, 59 (Segundo Informe), 60 (Segundo Informe), 74, 88, 164, 329 y 413; las Resoluciones Conjuntas del Senado 14, 16 y 32; las Resoluciones del Senado 75, 77 y 122; y los

Proyectos de la Cámara 396 y 419 son considerados a Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Ada M. Álvarez Conde, Jamie Barlucea Rodríguez, Luis Daniel Colón La Santa, José Luis Dalmau Santiago, Adrián González Costa, Marially González Huertas, Héctor Gabriel González López, Luis Javier Hernández Ortiz, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Eliezer Molina Pérez, Juan Oscar Morales Rodríguez, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Brenda Pérez Soto, Wilmer Reyes Berríos, Carmelo J. Ríos Santiago, Joanne M. Rodríguez Veve, Karen Michelle Román Rodríguez, Jeison Rosa Ramos, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, María de L. Santiago Negrón, José A. Santiago Rivera, Rafael Santos Ortiz, Roxanna I. Soto Aguilú, Wanda M. Soto Tolentino, Ángel Toledo López y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Total 28

VOTOS NEGATIVOS

Total 0

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

El Proyecto del Senado 82 es considerado a Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Ada M. Álvarez Conde, Jamie Barlucea Rodríguez, Luis Daniel Colón La Santa, José Luis Dalmau Santiago, Adrián González Costa, Marially González Huertas, Héctor Gabriel González López, Luis Javier Hernández Ortiz, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Juan Oscar Morales Rodríguez, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Brenda Pérez Soto, Wilmer Reyes Berríos, Carmelo J. Ríos Santiago, Joanne M. Rodríguez Veve, Karen Michelle Román Rodríguez, Jeison Rosa Ramos, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, María de L. Santiago Negrón, José A. Santiago Rivera, Rafael Santos Ortiz, Roxanna I. Soto Aguilú, Wanda M. Soto Tolentino, Ángel Toledo López y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Total 27

VOTOS NEGATIVOS

Senador:

Eliezer Molina Pérez.

Total 1

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

El Proyecto del Senado 149 es considerado a Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Ada M. Álvarez Conde, Jamie Barlucea Rodríguez, Luis Daniel Colón La Santa, José Luis Dalmau Santiago, Adrián González Costa, Marially González Huertas, Héctor Gabriel González López, Luis Javier Hernández Ortiz, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Eliezer Molina Pérez, Juan Oscar Morales Rodríguez, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Brenda Pérez Soto, Wilmer Reyes Berríos, Carmelo J. Ríos Santiago, Karen Michelle Román Rodríguez, Jeison Rosa Ramos, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, María de L. Santiago Negrón, José A. Santiago Rivera, Rafael Santos Ortiz, Roxanna I. Soto Aguilú, Wanda M. Soto Tolentino, Ángel Toledo López y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Total 27

VOTOS NEGATIVOS

Senadora:

Joanne M. Rodríguez Veve.

Total 1

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

El Proyecto del Senado 211 es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Ada M. Álvarez Conde, Jamie Barlucea Rodríguez, Luis Daniel Colón La Santa, José Luis Dalmau Santiago, Adrián González Costa, Héctor Gabriel González López, Luis Javier Hernández Ortiz, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Eliezer Molina Pérez, Juan Oscar Morales Rodríguez, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Brenda Pérez Soto, Wilmer Reyes Berríos, Carmelo J. Ríos Santiago, Joanne M. Rodríguez Veve, Karen Michelle Román Rodríguez, Jeison Rosa Ramos, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, María de L. Santiago Negrón, José A. Santiago Rivera, Rafael

Santos Ortiz, Roxanna I. Soto Aguilú, Wanda M. Soto Tolentino, Ángel Toledo López y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Total 27

VOTOS NEGATIVOS

Senadora:
Marially González Huertas.

Total 1

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

La Resolución del Senado 82 es considerada a Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Ada M. Álvarez Conde, Jamie Barlucea Rodríguez, Luis Daniel Colón La Santa, José Luis Dalmau Santiago, Adrián González Costa, Marially González Huertas, Héctor Gabriel González López, Luis Javier Hernández Ortiz, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Eliezer Molina Pérez, Juan Oscar Morales Rodríguez, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Brenda Pérez Soto, Wilmer Reyes Berríos, Carmelo J. Ríos Santiago, Joanne M. Rodríguez Veve, Karen Michelle Román Rodríguez, Jeison Rosa Ramos, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, María de L. Santiago Negrón, José A. Santiago Rivera, Rafael Santos Ortiz, Wanda M. Soto Tolentino, Ángel Toledo López y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Total 27

VOTOS NEGATIVOS

Senadora:
Roxanna I. Soto Aguilú.

Total 1

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

El Proyecto del Senado 68 es considerado a Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Ada M. Álvarez Conde, Jamie Barlucea Rodríguez, Luis Daniel Colón La Santa, José Luis Dalmau Santiago, Marially González Huertas, Héctor Gabriel González López, Luis Javier Hernández Ortiz, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Eliezer Molina Pérez, Juan Oscar Morales Rodríguez, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Brenda Pérez Soto, Wilmer Reyes Berríos, Carmelo J. Ríos Santiago, Joanne M. Rodríguez Veve, Karen Michelle Román Rodríguez, Jeison Rosa Ramos, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, José A. Santiago Rivera, Rafael Santos Ortiz, Roxanna I. Soto Aguilú, Wanda M. Soto Tolentino, Ángel Toledo López y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Total 26

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Adrián González Costa y María de L. Santiago Negrón.

Total 2

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

El Proyecto del Senado 372 es considerado a Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Ada M. Álvarez Conde, Jamie Barlucea Rodríguez, Luis Daniel Colón La Santa, José Luis Dalmau Santiago, Adrián González Costa, Héctor Gabriel González López, Luis Javier Hernández Ortiz, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Eliezer Molina Pérez, Juan Oscar Morales Rodríguez, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Brenda Pérez Soto, Wilmer Reyes Berríos, Carmelo J. Ríos Santiago, Karen Michelle Román Rodríguez, Jeison Rosa Ramos, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, María de L. Santiago Negrón, José A. Santiago Rivera, Rafael Santos Ortiz, Roxanna I. Soto Aguilú, Wanda M. Soto Tolentino, Ángel Toledo López y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Total 26

VOTOS NEGATIVOS

Senadoras:
Marially González Huertas y Joanne M. Rodríguez Veve.

Total..... 2

VOTOS ABSTENIDOS

Total..... 0

La Resolución Conjunta del Senado 1 es considerada a Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:
Ada M. Álvarez Conde, Jamie Barlucea Rodríguez, Luis Daniel Colón La Santa, José Luis Dalmau Santiago, Marially González Huertas, Héctor Gabriel González López, Luis Javier Hernández Ortiz, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Eliezer Molina Pérez, Juan Oscar Morales Rodríguez, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Brenda Pérez Soto, Wilmer Reyes Berríos, Carmelo J. Ríos Santiago, Karen Michelle Román Rodríguez, Jeison Rosa Ramos, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, José A. Santiago Rivera, Rafael Santos Ortiz, Roxanna I. Soto Aguilú, Wanda M. Soto Tolentino, Ángel Toledo López y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Total..... 25

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:
Adrián González Costa, Joanne M. Rodríguez Veve y María de L. Santiago Negrón.

Total..... 3

VOTOS ABSTENIDOS

Total..... 0

El Proyecto del Senado 79 es considerado a Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Jamie Barlucea Rodríguez, Luis Daniel Colón La Santa, Héctor Gabriel González López, Luis Javier Hernández Ortiz, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Juan Oscar Morales Rodríguez, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Brenda Pérez Soto, Wilmer Reyes Berríos, Carmelo J. Ríos Santiago, Joanne M. Rodríguez Veve, Karen Michelle Román Rodríguez, Jeison Rosa Ramos, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, Rafael Santos Ortiz, Roxanna I. Soto Aguilú, Wanda M. Soto Tolentino, Ángel Toledo López y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Total 21

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Ada M. Álvarez Conde, José Luis Dalmau Santiago, Adrián González Costa, Marially González Huertas, Eliezer Molina Pérez, María de L. Santiago Negrón y José A. Santiago Rivera.

Total 7

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

El Proyecto del Senado 17 es considerado a Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:

VOTOS AFIRMATIVOS

Senadores:

Jamie Barlucea Rodríguez, Luis Daniel Colón La Santa, Marially González Huertas, Héctor Gabriel González López, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Juan Oscar Morales Rodríguez, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Brenda Pérez Soto, Wilmer Reyes Berríos, Carmelo J. Ríos Santiago, Karen Michelle Román Rodríguez, Jeison Rosa Ramos, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, Rafael Santos Ortiz, Roxanna I. Soto Aguilú, Wanda M. Soto Tolentino, Ángel Toledo López y Thomas Rivera Schatz, Presidente.

Total 20

VOTOS NEGATIVOS

Senadores:

Ada M. Álvarez Conde, José Luis Dalmau Santiago, Adrián González Costa, Luis Javier Hernández Ortiz, Eliezer Molina Pérez, Joanne M. Rodríguez Veve, María de L. Santiago Negrón y José A. Santiago Rivera.

Total 8

VOTOS ABSTENIDOS

Total 0

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas.
Señor Portavoz.
SR. MATÍAS ROSARIO: Para regresar al turno de Mociones.

MOCIONES

Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame:

Moción 2025-458
Por el senador Santos Ortiz:

Para que el Senado de Puerto Rico reconozca y felicita a las secretarias y al personal administrativo del Área de Guayama de la Policía de Puerto Rico, con motivo de la semana de las secretarias y el personal administrativo.

Moción 2025-459
Por la senadora Pérez Soto:

Para que el Senado de Puerto Rico felicite a Némesis C. Ross Ayala, Aaron Ramos Torres, Abigail Serrano Rivera, Adanehery Morales Matos, Adianez García López, Adrián D. Reyes Negrón, Adrián González Laureano, Alana S. Rosa Díaz, Alexalys Vázquez Prunes, Alexander Vargas, Alia Z. Figueroa Marrero, Amalia Y. Escoriaza Gerena, Amanda Jiménez Piñeiro, Analiah E. Quiñonez Amador, Ariana Marrero Martínez, Aryam A. González Vázquez, Axiel Olivencia Vázquez, Brayden Cardona García, Brianna Ramos Brito, Bryan J. Otero, Carlos Y. Rivera Piñeiro, Carolina Latalladi Oliveras, Christopher Rivera Rosado, Cijdec Ramos Villanueva, Clarielys Pérez Gierbolini, Daniel Arroyo Vélez, Daniela Sai Rodríguez Collet, Darhek J. Vega Alicea, Dariana Castro Quezada, Dariel Sánchez Mulero, David Lizardi Mercado, David Rodríguez Pérez, Deniel Amezquita Marrero, Derick Figueroa Meléndez, Diego U. Avilés Jiménez, Dylan K. Torres Rodríguez, Dylan S. Rodríguez Álvarez, Eddriel N. Batista Rivera, Edrián O. Cruz Rivera, Eithan A. Pérez Maldonado, Elí S. Vega Portalatín, Eliel J. Rodríguez Ruiz, Eloise Ruiz Collazo, Emiliano M. Cortés Bermúdez, Emma S. González Vilá, Ethan N. Medina, Eunice M. Martínez Quiles, Fabian A. Pérez Ferrer, Gabriela M. Ruiz Santiago, Galeb Sandín Figueroa, Giansuel J. Vargas Pagán, Gina I. Padilla Villalobos, Giovaniel D. Feliciano López, Hadassah N. Acevedo Laboy, Ihan A. Díaz Rivera, Isaac Bosques Rodríguez, Isaac Y. Colón Rivera, Isabella R. González Ayala, Itzayana Castellano González, Izamar Bosques Santiago, Jackdiel O. Núñez Ayala, Jacob N. Maldonado García, Jahzeel M. Reyes Ortiz, Jariel J. Pomales Quiñones, Jasmine Concepción López, Jayden Torres Ruiz, Jayden Y. Serrano Román, Jaymarie Cardona Pagán, Jeiden C. Olavarría Beltrán, Jeriel Hernández Arroyo, Jeriel Pabón Santos, Jeriezel Morales Tirado, Jeslianis I. Medina Miranda, Jessiarys Ramos Chico, Jesús E. Vélez Vélez,

Joan García López, Joaneidy Vázquez Hurtado, Joendrick Ortiz Ayala, Johnuel Rodríguez Román, Jondriel E. Figueroa, Jongel X. Muñoz Avilés, Jorge Silvestry Colón, Josué E. Correa Correa, Josuel Torres Acevedo, Jothsiel Soto Pérez, Kailany Méndez Feliciano, Kaily V. Reyes Pérez, Kaleb Correa Serrano, Kaori Febres Corretjer, Kariengelys Z. Figueroa Vega, Karyna S. Vega Rodríguez, Keira I. Taveras Quiñones, Keisy C. Bonilla Cortés, Keliannys Meléndez Hernández, Kellian Z. Arias, Kenahy Dávila Pabón, Kenay J. Rodríguez López, Kerianys S. Ruiz Colón, Kevin R. Méndez Bernard, Keydan García Maldonado, Keyleb A. Marrero Vázquez, Laylah K. González Torres, Layzan J. Figueroa Oterom, Leandro Rodríguez Rojas, Luis A. Sostre Arroyo, Luna M. Rodríguez Ramos, Marcos Vega Burgos, Mariangely Torres Pujols, Marinelys Cordero Rivera, Mathew A. Molina Feliciano, Matthew Vélez Román, Maxuel L. Feliciano, Miguel A. Miranda Ríos, Miguel A. Olavarría Ríos, Mileiny N. Rodríguez Rivera, Milena N. Cruz Delgado, Mirelys P. Delgado Marchand, Mizael Aguado Collet, Moisés Hernández Hernández, Nahiara Cruz Reyes, Naishla Z. Pérez Aguilar, Natanael González Sánchez, Nayla Vélez Ruiz, Nymzaidelis Álvarez La Torre, Onix Cajigas Guzmán, Orielis González Soto, Paulette Irizarry Rodríguez, Rubiellys A. Villanueva Caballero, Ryan J. Ramos Matta, Samira J. Cristóbal Feliciano, Sebastián A. Cabiya Aulet, Sebastián J. Hernández Ortiz, Sebastián Rivera Mestre, Shadday A. Quiñonez Cruz, Shayla Ramos Hernández, Sophia I. Rodríguez Reyes, Surelys Rivera Ponce, Yadiel Z. Marrero Bandas, Yalibeth Filiberty, Yanciel O. Vázquez Pagán, Yarielis Z. Rodríguez Morales, Yekxiel Rivera Robles, Yerik O. Rodríguez Tomassini, Ynuel E. Domena Sosa, Yoandiel Y. Pérez Torres, Yureisy Vázquez Rivera y Zabdiel E. Ayala Rosario, estudiantes ganadores de las olimpiadas municipales de matemáticas de la Región Educativa de Arecibo.

Moción 2025-460
Por la senadora Pérez Soto:

Para que el Senado de Puerto Rico felicite a Adianes Vera Soto, Adienel Ríos Rodríguez, Adrián X. Correa Atiles, Adriana J. López Cardona, Adriana Soto González, Adriana Taíz García Delgado, Alanis X. González Soto, Alejandra C. Vargas Ocasio, Alexander Vargas Valle, Aliah I. López Venes, Alondra Vargas Vélez, Amaiah Candelaria Serrano, Amanda García Matos, Amanda López Alicea, Amanda S. López Ruíz, Amanda Vázquez Torres, Amaris B. Vázquez Correa, André O. Aquino Novoa, Aneidimar Santiago Ríos, Ángel Ortiz Reyes, Angélica Maldonado Vázquez, Angelys Ayala Nazario, Aniez Ortiz Rodríguez, Ariana A. Román Aldahondo, Arianna Aguilar Rodríguez, Audrey Lagos Ruíz, Aurelie J. Núñez Meléndez, Aurieliz Acevedo Rodríguez, Aziel I. Márquez Colón, Bianca Z. Rozo Ramírez, Caleb J. Centeno Alicea, Caleb Romero Mercado, Camila A. Cardalda Delgado, Camila Rodríguez García, Camila Z. Hernández Torres, Carlos Polanco Torres, Carolina Reyes Bonilla, Christian Josué Molina Torres, Cristianis Nieves González, Cristina S. Rodríguez Cornier, Daliana Vargas Soto, Daliz Capella Rodríguez, Daniel José Serrano Sánchez, Daniela Marrero Cordero, Daniela Santiago Calderón, Daniella I. Rodríguez Lugo, Danielys López Acevedo, Dariana Vélez Rivera, Darianis Zulay Avilés Ortíz, Darnell E. Rodríguez Ruíz, Dellia Rivera Claudio, Denzel Santiago Jiménez, Derihell Rivera Rivera, Diego A. Díaz Álvarez, Diego A. Gutiérrez Álvarez, Diego Lara Medina, Dylan Santiago Vélez, Edjaelis Hernández Feliciano, Edrick Rivera Torres, Eduardo A. Rodríguez Denis, Eduardo Valentín Soto, Eliannies Z. Correa Rodríguez, Erica A. Montes Ramos, Evaluna Pérez Colón, Ezequiel C. De Jesús Despiau, Fabián González Soto, Fabián Lugo García, Gabriel J. Marengo Rivera, Gabriela Hernández Colón, Génesis M. Torres Guindín, Héctor A. Cruz Lugo, Higmarie Torres Manzano, Ian Díaz Rivera, Ingrid N. Rodríguez Velázquez,

Irielys Rice Roque, Isaac E. Beaudry Galarza, Isabela Reyes Joseph, Itza Palomera Padró, Jacey A. Arias Rivera, Jaicob Vélez Rivera, Jaime Rivera Armstrong, Jainel Flores Echevestre, Jalexis Z. Feliciano Rivera, Jan C. Ortíz Rodríguez, Janai Rijos Reyes, Janiel A. Fonseca Maldonado, Jareily W. Camerón Pastrana, Jasleen Pérez Rivera, Jatcirys Velázquez Vélez, Jatniel Ocaña Medina, Javier Feliciano Aponte, Jaydiel Vélez Crespo, Jeidimar Arbelo Santiago, Jelix M. Serrano González, Jeriel Rosario Molina, Jesaed Rosado López, Jetzel Gracia Rodríguez, Joan Yadiel Santiago Atiles, Joanelys N. Marcial Mercado, Joaniel E. Torres Rivera, Jomirka Rosario Inoa, Jonnalys López Serrano, Jorge A. Rodríguez Torres, José Y. López Pérez, Kamila A. García Colón, Kamila E. Cortés Robles, Kamila M. López Cruz, Karelis Colón Rodríguez, Karelys D. Maldonado Ortiz, Karla Rivera Pérez, Karymar Vionette Estremera Álvarez, Kassandra Pérez Gerena, Keilisha Muñiz Beltrán, Kendrick E. Mojica Mantilla, Keniel Fonseca Maldonado, Keniel N. Adorno Galarza, Keniel Padilla Mercado, Kevin D. Varela Ruiz, Laury Torres Cruz, Leeangelyz Guzmán Rosario, Leslie A. Acevedo González, Leydianis Silén Cintrón, Liann Victoria Reyes Pagán, Lissuette Y. García Rodríguez, Lorainne A. Santiago Santana, Luis A. Cruz Montijo, Lyanedzi Álvarez Cortés, Magdalys Estremera Pérez, Maia Torres Pacheco, Mainelis Mendoza, Marcos Márquez Colón, Mariana M. Allende De Jesús, Mariled González Mercado, Mariolis Enid Negrón Ramos, Meylani Z. Álvarez Cortes, Mia C. Rivera Chaves, Mia I. Bermúdez Montoyo, Mia I. Vega Vega, Miah Sofía Pérez Ojeda, Miatanairy Quiñones Alonzo, Migdalia Pérez Martínez, Myaisabella Santiago Calderón, Naomy Ortíz Reyes, Natalia Vega Ríos, Natasha Ruíz Pérez, Nathalie Ortíz Pérez, Naylise Natal Rivera, Néstor Acosta Torres, Nyah Flores Román, Oscar Y. Cortés Iglesias, Osmar Pérez De Jesús, Paola S. Torres Adames, Rebeca C. Martínez Medina, Ryan Rivera Cepero, Samuel Acevedo González, Sara Cortés Reyes, Sebastián Colón De Jesús, Sebastián Correa López, Sebastián G. Colón García, Sebastián Santiago Santana, Sebastián Vélez Pérez, Shanaika Bravo Serrano, Shaniel J.C. Gutiérrez Samlal, Soelis Cruz Valentín, Sofía Román López, Thais M. Serrano Reyes, Uziel Arroyo Fajardo, Valentina Faria Melero, Valeria S. Amador Cabrera, Valeria S. Hernández Rivera, Valeria Z. Rodríguez Lugo, Vanelys K. González Candelaria, Xavier Rodríguez Ramos, Yadiel A. Feliciano Ríos, Yadiel José Pérez Ríos, Yadieris E. López Pérez, Yamil Santiago Ortíz, Yangedriel K. Delgado Martínez, Yarielis Rodríguez Serrano, Yarielyz Z. Rodríguez, Yavieliz A. Concepción Mercano, Yenuel A. Rivera Santos, Yinay Cruz Santiago, Zachiel Nicole Olivo Mojica y Zaymar D. Concepción Duprey, estudiantes de la Escuela Superior Abelardo Martínez Otero del Municipio de Arecibo, por motivo de haber sido seleccionado en el Cuadro de Honor.

Moción 2025-461
Por el senador González López:

Para que el Senado de Puerto Rico felicite y reconozca a Angelo Delgado Soriano, Aura G. Román González, Diego Cruz Rosa, Eluney Hernández Cabán, Ethan Mendoza Cordero, Gustavo A. Pérez Guzmán, Haniel J. Torres Torres, Ianyahil González Crespo, Jahir E. Linares Rodríguez, Jezarela González González, Kelaiah A. Candelaria Soto, Keynalis E. Ruiz Serrano, Kiarelis Oquendo Feliciano, Nicolás Z. Hernández Rivera, Noah M. Torres Hernández, Victoria Rodríguez Vega, Zev Velázquez Borges, con motivo de ser seleccionados al Cuadro de Honor de la Escuela Pedro Amador de Camuy.

Moción 2025-462
Por el senador Ríos Santiago:

Para que el Senado de Puerto Rico felicite a Orlando "Landy" Pantojas, con motivo de su extraordinario liderazgo al frente del Equipo Colegial Adianez, el cual se proclamó campeón del Top Ranked Buzzer Beater Tournament.

Moción 2025-463
Por el senador Ríos Santiago:

Para que el Senado de Puerto Rico felicite a Aramis Santos Albizu, por su valiosa participación en el baloncesto escolar y su nominación al premio de Jugador del Año.

Moción 2025-464
Por el senador Ríos Santiago:

Para que el Senado de Puerto Rico felicite y reconozca a la Puerto Rico Association of Realtors, con motivo de Semana del Hogar Puertorriqueño, en virtud de su destacada labor en la promoción del derecho a una vivienda digna.

Moción 2025-465
Por el senador Ríos Santiago:

Para que el Senado de Puerto Rico reconozca a Amanda Rodríguez Oyola, Augusto A. Gómez Martinez, Dylan A. Webster Santini, Héctor G. González Sánchez del Campo, Jaime A. Braña Gómez, Janeishka Pérez, Kebdiel M. Buil Martínez, Lorenzo A. Vázquez Cruz, Luna Rodríguez Pagán, Paulo J. Taveras Cuevas, Rafael Torres Vélez, Sebastian D. Beardsley Feliciano y Yessiel Colón Díaz con motivo de su valiosa contribución a la prevención del acoso escolar en Puerto Rico.

Moción 2025-466
Por el senador Hernández Ortiz:

Para que el Senado de Puerto Rico reconozca al Equipo de Baloncesto Senior Femenino de la Escuela Ramón Power y Giralt de Las Piedras, Puerto Rico, con motivo de su campeonato nacional del Torneo Buzzer Beater 2025.

SR. MATÍAS ROSARIO: Para aprobar las Mociones de la 2025-458 a la 466.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.
SR. MATÍAS ROSARIO: Para unir al senador Reyes Berríos a las Mociones 453, 454, 455 y 456.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.
SR. MATÍAS ROSARIO: Para unir a este servidor a las Mociones contenidas en el Anejo A.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.
SR. MORALES RODRÍGUEZ: Señor Presidente, para presentar una Moción de…
SR. PRESIDENTE: Senador Juan Oscar Morales.

SR. MORALES RODRÍGUEZ: Gracias, señor Presidente. Para presentar una Moción de condolencias a los familiares de quien en vida fuera Raymond Rosario Maisonet, empleado del Departamento de la Vivienda que lamentablemente falleció en el día de hoy.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. MATÍAS ROSARIO: Para unirme…

SR. PRESIDENTE: Para unir a la Delegación del Partido Nuevo Progresista.

SR. MATÍAS ROSARIO: Exacto, correcto.

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.

SR. MATÍAS ROSARIO: Señor Presidente.

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.

SR. MATÍAS ROSARIO: Para recesar los trabajos del Senado de Puerto Rico hasta el jueves, 10 de abril de 2025 a las once de la mañana (11:00 a.m.).

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a lo que plantea nuestro compañero Portavoz, el Senado de Puerto Rico recesa sus labores hoy lunes, 7 de abril a las seis y treinta y siete de la tarde (6:37 p.m.) hasta el próximo jueves, 10 de abril a las once de la mañana (11:00 a.m.).

Receso.

INDICE DE MEDIDAS
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DÍA
7 DE ABRIL DE 2025

MEDIDAS **PÁGINA**

P. del S. 59 .....2133 – 2134
P. del S. 68 .....2134 – 2139
P. del S. 82 .....2139 – 2144
P. del S. 88 2144
P. del S. 211 .....2144 – 2145
P. del S. 329 .....2145 – 2148
P. del S. 372 .....2148 – 2149
P. del S. 413 2149
R. C. del S. 1 .....2149 – 2152
R. C. del S. 14 .....2152 – 2153
R. C. del S. 16 .....2153 – 2154
R. C. del S. 16 (rec.).....2154
R. del S. 77.....2155
P. del S. 14 .....2155 – 2156
P. del S. 17 .....2156 – 2161
P. del S. 74 2161
P. del S. 79 .....2161 – 2162
P. del S. 149 .....2162 – 2164
P. del S. 164 2164
P. del S. 430 .....2164 – 2165
R. C. del S. 32 .....2165 – 2166
Primer Informe Parcial de la R. del S. 17 .....2166 – 2168
Primer Informe Parcial de la R. del S. 22 .....2168 – 2173
Informe Final de la R. del S. 40 .....2173 – 2177
R. del S. 75.....2177 – 2178

MEDIDAS **PÁGINA**

R. del S. 82 2178
Nombramiento de la Dra. Yolanda Varela Rosa ..... 2179 – 2182
Nombramiento de la Hon. Glorianne Marie Lotti Rodríguez ..... 2182 – 2184
Nombramiento del Lcdo. Marcus Ramsey Torres Skerret ..... 2184 – 2186
Nombramiento del Lcdo. Ángel L. García Rodríguez ..... 2186 – 2190
Nombramiento del Hon. Jorge Rafael Rivera Rueda ..... 2192 – 2209
Nombramiento de la Hon. Cyndia Enid Irizarry Casiano ..... 2209 – 2213
R. del S. 122 2231
P. de la C. 396 2232
P. de la C. 419 2232
P. del S. 59 (Segundo Informe) ..... 2241 – 2242
P. del S. 60 (Segundo Informe) ..... 2242 – 2243